

Los días de llamas de la revolución

Violencia y política
en la retaguardia
republicana
de Zaragoza
durante la guerra civil



José Luis Ledesma

José Luis Ledesma Vera (Soria, 1973), historiador, estudió en la Universidad de Zaragoza, donde fue Premio Extraordinario de Licenciatura y becario de investigación. Ha sido investigador invitado en la Universidad de La Sorbona-París IV y en la *London School of Economics and Political Sciences* (LSE) de Londres, y actualmente ultima su tesis doctoral sobre la violencia en la zona republicana durante la guerra civil en el *Istituto Universitario Europeo* (Floren-
cia, Italia). Además del presente trabajo, que está originado en su memoria de licenciatura (1999), cuenta con una quincena de artículos en obras colectivas y periódicas, colabora en varias revistas especializadas –entre ellas *Histoire et Sociétés* y *Spagna Contemporanea*– y es coautor de *Republica y republicanos en Zaragoza* (2004) y coeditor de *Políticas y culturas de la violencia en España* (2004).

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en:
<https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2485>



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative Commons que determina lo siguiente:

- **BY (Reconocimiento):** Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
- **NC (No comercial):** La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
- **ND (Sin obras derivadas):** La autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Los días de llamas de la revolución

Violencia y política en la retaguardia republicana de
Zaragoza durante la Guerra Civil

José Luis Ledesma

COLECCIÓN ESTUDIOS

HISTORIA

Los días de llamas de la revolución

Violencia y política en la retaguardia
republicana de Zaragoza durante la Guerra Civil



José Luis Ledesma



Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C)
Excma. Diputación de Zaragoza

Zaragoza, 2003

PUBLICACIÓN NÚMERO 2.402

DE LA

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)

PLAZA DE ESPAÑA, 2 • 50071 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Tff. [34] 976 28 88 78/79 • FAX [34] 976 28 88 69

ifc@dpz.es

<http://ifc.dpz.es>

FICHA CATALOGRÁFICA

LEDESMA, José Luis

Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la Guerra Civil / José Luis Ledesma.- Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2003.

364 p. ; 21 cm

ISBN: 84-7820-715-5

1. Aragón-Historia-Guerra Civil, 1936-1939 - I. Institución «Fernando el Católico», ed.

© José Luis Ledesma

© De la presente edición, Institución «Fernando el Católico».

© De las fotografías de las páginas 293 y 294, Agustí Centelles, VEGAP, Zaragoza, 2003.

I.S.B.N.: 84-7820-715-5

DEPOSITO LEGAL: Z-211/2004

PREIMPRESIÓN: Ebrolibro. Zaragoza.

IMPRESIÓN: SDAD. COOP. LIBRERÍA GENERAL, ZARAGOZA

IMPRESO EN ESPAÑA-UNIÓN EUROPEA.

A Anita Vera y Artemio Ledesma, mis padres.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	11
SIGLAS	15
INTRODUCCIÓN	17
<i>Objetivos y fuentes</i>	29

I

DÍAS DE LLAMAS: SUBLEVACIÓN, GUERRA Y REVOLUCIÓN EN ZARAGOZA	45
<i>El asalto a la República y el inicio de la guerra en la provincia</i>	46
<i>Asalto al orden social o el ocre amanecer de la revolución</i>	59

II

LOS ORÍGENES Y GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA..	83
<i>El alcance y geografía de la persecución</i>	83
<i>Sublevados y milicianos: una violencia importada</i> ..	91
<i>Las fuentes locales de la violencia: conflicto rural y fractura social</i>	108

III

MOMENTOS Y MECANISMOS DE LA PERSECUCIÓN.....	129
<i>Tiempo de violencia o el ruidoso verano del 36 (guerra, atomización del poder y «terror caliente»)</i>	131
<i>El mundo trastornado: la vivencia de la violencia</i> ..	145

<i>La represión y la lucha por el control del poder (otoño 1936- primavera 1937).....</i>	161
Consejo de Aragón, orden público y justicia popular.....	165
Las sombras en el orden de la retaguardia	192
<i>Los cambios del verano del 37 y sus consecuencias</i>	206
El cambio de sentido de la violencia	207
La ofensiva de Belchite y el postrer rebrote de la represión.....	223
IV	
LOS ROSTROS DE LA REPRESIÓN.....	235
<i>Milicianos y pañuelos rojos</i>	235
<i>Razones y blancos de la persecución. La violencia anticlerical.....</i>	244
<i>Los perfiles de las víctimas.....</i>	269
EPÍLOGO: AÑOS DE HUMO	295
CONCLUSIONES	305
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	313
ANEXOS	335
APÉNDICE	347

MUNICIPIOS DE ZARAGOZA EN ZONA REPUBLICANA

0 10 20 Kilómetros

PARTIDO JUDICIAL DE BELCHITE
 PARTIDO JUDICIAL DE CARIÑENA
 PARTIDO JUDICIAL DE CASPE
 PARTIDO JUDICIAL DE PINA
 PARTIDO JUDICIAL DE ZARAGOZA



PRESENTACIÓN

Presentar un libro sobre la guerra civil española de 1936-1939 supone, bien mirado, un arduo ejercicio a mitad de camino entre lo obvio y lo obsesivo. Arduo puesto que no es tarea fácil justificar ante el avezado lector la aparición de otro estudio —y van miles— sobre la latitud de nuestro pasado que más juicios, «guerras de palabras» y ríos de tinta ha originado. Obsesivo ya que, por eso mismo, de tal modo podría calificarse el reiterado regreso a un periodo del que, en principio, parecería estar todo dicho. Y obvio porque, como muestra la recurrente aparición en la arena pública y cultural de la guerra, ésta parece pervivir de alguna manera, a pesar de todo, viva y enigmática en nuestra memoria colectiva.

Uno de los más reputados observadores de las revoluciones del siglo XIX, el célebre escritor francés Victor Hugo, dejó anotado en sus *Diarios* que «las revoluciones, como los volcanes, tienen sus *días de llamas* y sus *años de humo*». Desde ese punto de vista, este trabajo —presentado originalmente como Memoria de Licenciatura en la Universidad de Zaragoza en noviembre de 1999— aborda precisamente una de las facetas de la contienda más presentes y espinosas en la discusión pública y en ese recuerdo colectivo: la violencia política que la acompañó en las dos retaguardias en general, y en este caso en la republicana en particular. Es decir, trata de escribir la historia provincial de esas «llamas», de ese «incendio» simbólico —y en ocasiones real— declarado en el dramático estío de 1936, la historia de sus orígenes, rostros, cadencias, consecuencias políticas y memoria.

El texto está estructurado de acuerdo con esos puntos y, en la medida de lo posible, de forma circular. Se parte de una introducción al uso en las monografías especializadas en la que se intenta apuntar el insuficiente conocimiento del

tema, la pertinencia historiográfica del trabajo y algunos de sus presupuestos epistemológicos. Seguimos con un capítulo inicial en el que se narran los primeros pasos y momentos de esos «días de llamas». Se retrocede en el segundo para, tras aportar un balance cuantitativo de la violencia revolucionaria en la zona, aproximarnos a los orígenes de estos hechos buceando en la situación política y social anterior al 18 de julio. Recuperamos la perspectiva diacrónica en el tercero, capítulo central y más amplio, en el que se ensaya una periodización del fenómeno represivo desde el punto de vista de las luchas por el control del orden revolucionario y del poder que había tras el mismo. Se vuelve a un acercamiento sincrónico en el capítulo cuarto al tratar de indagar en los perfiles de los protagonistas y víctimas de la represión. Y llegamos al final de nuestro trayecto, en un nuevo pero ahora necesariamente fugaz viaje por el paso del tiempo, al abochar en el epílogo los perfiles de esos «años de humo» y de rememoración del «terror rojo» cuyo lastre parece ha pesado hasta hoy mismo de alguna manera —conectando con los argumentos de la introducción— en la comprensión rigurosa de esa violencia y de la contienda. De algún modo este trabajo persigue las sombras de esa tormenta iniciada en 1936. Sombras de víctimas y verdugos alcanzados por el violento rayo de la guerra, pues esas sombras tienen también nombre e historia...

También lo tiene este estudio, aunque si está firmado por una sola persona, todo en él —excepto la responsabilidad en sus errores y carencias— es un trayecto colectivo en el que el autor nunca estuvo solo. La entrada me la sugirió, y para él debe ir el primer y mayor agradecimiento por su dirección y confianza, Julián Casanova, paciente guía y amigo durante todo el camino. Él mismo, Ángela Cenarro y Miguel Á. Ruiz Carnicer evaluaron la «Tesina» origen de este trabajo e hicieron valiosos comentarios que aquí han sido tenidos en cuenta. Paciente fue asimismo la Institución «Fernando el Católico», cuya beca de investigación me permitió sufragar los gastos de esta aventura durante un año, aunque después

me beneficié de una beca F.P.I. del Ministerio de Educación y Cultura que me ha vinculado al Depto. de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. De los componentes de éste he recibido una completa formación académica, y algunos de ellos, como Ignacio Peiró, Inma Blasco y Pedro Rújula, me han brindado además su amistad, apoyo y tiempo para leer y comentar distintas partes del trabajo, algo que también ha hecho después Javier Rodrigo. Con Ester Casanova, compañera de equipo y temática «represora», he podido debatir problemáticas comunes. En Madrid tuve la ocasión de conversar con Julio Aróstegui, Javier Cervera y Eduardo González Calleja, quien además me obsequió con numerosos textos sobre violencia política e incontables consejos y facilidades. Mi agradecimiento alcanza asimismo, por su ayuda, a Jesús Sáiz, Elena Val y Pablo Lagartos. A los que me obsequiaron con su hospitalidad en Barcelona, Salamanca o Madrid, sobre todo Jesús Fuentes, huésped y más que un amigo durante un largo verano en la capital. A todas aquellas personas que, en Caspe, Pina y tantos otros pueblos, me proporcionaron y ayudaron a buscar datos y testimonios orales. Y de forma muy especial, a aquellos mayores que me abrieron las puertas de sus casas y de sus memorias para compartir conmigo un pasado recordado con dolor y, en ocasiones, con lágrimas en los ojos. Por último, sin mis hermanos Javier y Ana Rosa y sin Elena, que además se batieron con cada página del trabajo, éste nunca habría llegado a su meta, y sin mis padres ni siquiera hubiera echado a andar, y por tanto a ellos va dedicado.

SIGLAS

AASM:	Archivo de la Agrupación Socialista Madrileña (FPI)
AGCS:	Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca
AGMA:	Archivo General Militar de Ávila
AH:	Archivo Histórico (FPI)
AHN:	Archivo Histórico Nacional de Madrid
AHPZ:	Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
AP:	Acción Popular
BOA:	<i>Boletín Oficial de Aragón</i>
BOCA:	<i>Boletín Oficial Consejo Regional de Defensa de Aragón</i>
CEDA:	Confederación Española de Derechas Autónomas
CG:	Causa General (AHN)
CGG:	Cuartel General del Generalísimo (AGMA)
CNT:	Confederación Nacional del Trabajo
COCI:	Cámara Oficial de Comercio e Industria
CR:	Comité Regional
DR:	Documentación Roja (AGMA)
ER:	Esquerra Republicana
FAI:	Federación Anarquista Ibérica
FCE:	Fondo de Cultura Económica
FE:	Falange Española y de las JONS
FPI:	Fundación Pablo Iglesias de Madrid
IR:	Izquierda Republicana

IRA:	Instituto de Reforma Agraria
IRYDA:	Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario
JJLL:	Juventudes Libertarias
JSU:	Juventudes Socialistas Unificadas
OO. VV.:	Oficios Varios
OP:	Orden Público
PCE:	Partido Comunista de España
POUM:	Partido Obrero de Unificación Marxista
PS:	Sección Político-Social (AGCS)
PSOE:	Partido Socialista Obrero Español
PSUC:	Partido Socialista Unificado de Cataluña
UGT:	Unión General de Trabajadores
UR:	Unión Republicana

INTRODUCCIÓN

Ya a la altura del verano de 1938, cuando el fragor de los combates acababa de abandonar definitivamente tierras aragonesas, Alcalá Zamora encontraba desde el exilio que «se ha escrito mucho, acaso demasiado, sobre España a partir de la guerra civil, y a propósito de dicha contienda. Pero la mayoría de esos trabajos han sido redactados por partidarios resueltos de uno u otro bando y, naturalmente, la pasión y la finalidad de propaganda prevalecen sobre la imparcialidad informativa». Algo que significativamente ejemplificaba con *La justice du «Frente Popular»*, una severa diatriba contra el «terror rojo» desencadenado en la retaguardia republicana desde julio de 1936. Su conclusión, a partir de ese panorama, era que el estudio serio de lo que estaba sucediendo «no es la misión del jurista —en su caso— de hoy, sino la del historiador de mañana».¹

Seis décadas después de aquellas palabras y del final de esa guerra, la represión —una de las cuestiones que más indeleblemente se fijó en la memoria colectiva de la contienda— es tal vez, sin embargo, el mejor ejemplo de esa misión pendiente. La profunda herida abierta en los sentimientos y conciencias por tan luctuosos hechos, así como la manipulación de éstos por el franquismo, contribuyeron a que perdu-

¹ Niceto Alcalá Zamora, «Justicia penal de guerra civil», en *Ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional*, Ediciones de la Revista de Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1944, pp. 253-294 (los entrecomillados, en pp. 253 y 254). De *La justice du «Frente Popular»* (Les Éditions de France, París, 1937, firmada por «trois députés aux Cortès» de la Lliga), hay también, pese a aparecer con autores diferentes, ediciones castellana (Juan de Castilla, *La justicia revolucionaria en España*, Ed. Difusión, Buenos Aires, 1937) e inglesa (Berryer, *Revolutionary Justice in Spain*, Burns Oates & Washbourne Ltd., Londres, 1937?), que es la que se ha podido consultar aquí.

raran las viejas explicaciones difundidas por los contendientes dificultando de este modo la comprensión rigurosa del fenómeno. Todavía no es infrecuente oír, sobre todo en el medio rural, que «de eso no hay que hablar», «mejor no remover esos años» o «por qué andar a vueltas con esto». Y no falta quien se lo haya tomado al pie de la letra. Hoy los escritos con referencias y alusiones al tema, directas o indirectas, llenan y curvan ya las estanterías. Sin embargo, una de las cuestiones de más difícil respuesta planteadas a trece historiadores por un diario madrileño con ocasión del sexagésimo aniversario del inicio de la guerra resultó ser «¿por qué se desató tanta violencia durante los primeros meses?». Y, más recientemente, un exitoso libro sobre el tema todavía debe comenzar planteándose «¿cómo fue posible tanta crueldad, tanta muerte?»; para, acto seguido, tener que refutar las manidas y recurrentes tesis basadas en el supuesto fondo de violencia y enfrentamiento de los españoles y en nuestro presunto carácter inherentemente agresivo y tendente a la «escisión exclusivista».²

No cabe duda, en efecto, de que este es un tema abonado para el mito, como la mayoría de los fenómenos de violencia en su perspectiva social e histórica. En las sociedades occidentales de fin de siglo como la nuestra, la violencia —algo de lo que todo el mundo habla pero que apenas se percibe a diario más allá de la televisión— adquiere una dosis de

² Santos Juliá (coord.), Julián Casanova, Josep M^a Solé i Sabaté, Joan Villarroja, Francisco Moreno, *Víctimas de la guerra civil*, Temas de Hoy, Madrid, 1999, pp. 11-13. Luis Romero *et al.*, dossier «60 años de la guerra civil española», *El País*, 14-7-1996. Dos ejemplos, entre otros muchos, de obras referidas al marco zaragozano que rehuyen expresamente el tema de la represión, en las historias locales de dos localidades que la sufrieron ampliamente en bandos distintos: Vicente Juste Moles, *Historia de Maella*, Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 1995, y Octavio Sierra Sangüesa, *Historia oral de Ejea*, Impr. Arilla, Ejea, 1982. El temor o rechazo de los contemporáneos a hablar aún hoy de la represión es resaltado para una localidad aragonesa, desde la antropología social, por el reciente estudio de M^a Alexia Sanz, *Ojos Negros. La memoria de un pueblo*, I.E.T., Teruel, 2000.

curiosa irrealidad que dificulta su comprensión como fenómeno histórico o social. La condena de la violencia por parte del pensamiento liberal, en tanto que anomalía y retrógrada antítesis de la «fuerza moral» del progreso, y su marginalización «en aras de una aséptica normalidad» no facilitan tampoco las cosas. De ahí que la mayoría de la gente tenga «una morbosa fascinación por la violencia» y se sienta «a la vez repelida y atraída por ella.» Y de ahí, asimismo, las tradicionales interpretaciones que, ante hechos de esta naturaleza, se contentan con considerarlos actos marginales y aislados —y por tanto acientíficos e irracionales—, residuos atávicos propios de culturas o grupos insuficientemente tocados por el áureo manto de la civilización. O que, simplemente, los atribuyen a grupos e individuos psicóticos, «anormales», diferentes o «fanáticos». Siempre «otros», en todo caso, con lo que se les excluye del resto del «nosotros», se soslaya nuestra propia «susceptibilidad frente a las presiones situacionales motivadoras de una conducta desagradable» y se obvia su carácter socio-histórico. La guerra —o su estudio más allá de lo epifenoménico—, en tanto que manifestación violenta por antonomasia y de gran extensión a lo largo de la historia, resultaría desde esa perspectiva quizá el mejor ejemplo.³

Pero cuando de lo que hablamos es de la violencia que acompañó a la revolución en la retaguardia republicana

³ Eric J. Hobsbawm, *Revolucionarios. Ensayos contemporáneos*, Ariel, Barcelona, 1978, pp. 294-296; Elliot Aronson, *El animal social. Introducción a la psicología social*, Alianza, Madrid, 1992, pp. 26-28 (la cita en p. 27); Gabriele Ranzato, «Évidence et invisibilité des guerres civiles», en Jean-Clément Martin (coord.), *La guerre civile, entre Histoire et Mémoire*, Ouest Éditions, Nantes, 1995, p. 24; Gaston Bouthoul, *El fenómeno guerra*, Plaza & Janés, Barcelona, 1971, pp. 14-26 y 39. La denuncia clásica —aunque apenas pase de ello— de la falta de teorización sobre las guerras civiles, y de lo que éstas tienen aún de tabú, es Roman Schnur, «Zur Theorie des Bürgerkrieges. Bemerkungen über einen vernachlässigten Gegenstand», *Der Staat*, 19, 3 (1980), pp. 341-365. Lo de la fascinación y repulsión por la violencia procede de Sidney Tarrow, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, Madrid, 1997, p. 184, y la cita anterior de Michel Maffesoli, *Essais sur la violence banale et fondatrice*, Librairie des Méridiens, París, 1984, p. 15.

durante la guerra de 1936-1939, a todas esas dificultades generales se unen los mitos, anatemas y falsificaciones surgidas de la propia contienda y de cuatro décadas de publicística franquista sobre un asunto tan llamado a legitimaciones y tergiversaciones. Mitos como el de la «marea revolucionaria» y espontánea del pueblo en armas, la «justicia instintiva» o los famosos «incontrolados». Anatemas como el del terror congénito a toda revolución y a todo movimiento obrero o los desórdenes, violencia general y matanzas indiscriminadas de las «turbas» y «hordas rojas». Y falsificaciones como la imbricación de esta represión con la supuesta violencia de los meses del Frente Popular o la citada excepcionalidad y propensión hispánica a la violencia. En el caso de Aragón, la nómina se completaría con las tesis sobre el caos de los primeros meses, la responsabilidad del «anárquico» y dictatorial Consejo de Aragón o las «monstruosidades» cometidas por los anarquistas. Mitos y tesis que fueron usados ampliamente por el franquismo y que, en todo caso, han tenido amplio eco en la literatura sobre la guerra civil y han perdurado durante décadas en la sociedad española —como se ha podido comprobar en los testimonios orales recogidos—, pero que tienen su origen en los propios años del conflicto.⁴

Sea como fuere, el resultado de todo ello sería, al menos hasta fechas muy recientes, un conocimiento sesgado e insuficiente de la violencia política desencadenada, máxime en el

⁴ Enrique Ucelay da Cal, «Ideas preconcebidas y estereotipos en las interpretaciones de la guerra civil española: el dorso de la solidaridad», *Historia Social*, 6 (1990), pp. 23-43 (especialmente pp. 23-24). Como botón de muestra, la prensa del Consejo de Aragón hablaba ya de la represión en términos de «masas que se desbordan en plena revolución», «el impulso revolucionario, desatado a veces como una catarata» o la «lógica manifestación de los instintos de defensa de un pueblo»: *Boletín del Consejo de Aragón*, 4-12-1936 y 21-12-1936 y *Nuevo Aragón*, 18-7-1937. Una prueba del amplio eco de estas visiones, que alcanzan incluso a premios Nobel, en el uso del mito de la propensión violenta y excepcionalidad hispánicas por Camilo J. Cela en su novela *San Camilo 1936* (1969). Para un juicio crítico de ese mito, Julio Aróstegui, «Conflicto social e ideología de la violencia, 1917-1936», en J. L. Delgado (ed.), *España, 1898-1936: Estructuras y cambio*, Universidad Complutense, Madrid, 1984, pp. 309-343.

caso de la retaguardia republicana, durante la guerra civil. Algo que sin duda tiene que ver con el hecho de que, definido por la discordia fratricida y la sangre vertida —lo más arduamente desterrable de la memoria colectiva—, resulta un tema especialmente vidrioso, con muchas y difícilmente soslayables legitimaciones y lecturas ideológicas que en nada favorecerían su estudio riguroso; su estudio y, por tanto, la superación de esa visión «impresionista» del tema descrita hace ya tiempo como parcial, partidista y «hecha de exclamaciones y de adjetivos» más que de juicios y datos contrastados.⁵ A nuestro entender, sin embargo, los jalones en ese itinerario de superación historiográfica —y con ellos sus carencias y retrasos— tendrían su origen en última instancia en las propias circunstancias por las que ha atravesado la sociedad española desde el conflicto bélico de 1936.⁶

Resulta obvio que ni el franquismo ni por supuesto la propia guerra civil eran el mejor momento para avanzar de manera significativa en el conocimiento de un asunto que no dejó de ser recordado y manipulado durante cuatro décadas al servicio del discurso de los vencedores. El opresivo ambiente cultural reinante y las carencias de una historiografía para la que el siglo XX era un desierto inexplorado harían el resto. Desierto en el que sólo cabían martirologios, hiperbólicas cifras de víctimas «nacionales», duras requisitorias en

⁵ Josep Termes, prólogo a Josep M^a Solé i Sabaté y Joan Villarroja, *La represió a la guerra i a la postguerra a la comarca del Maresme (1936-1945)*, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1983, p. 7; Alberto Reig Tapia, *Violencia y terror. Estudios sobre la Guerra Civil española*, Akal, Madrid, 1990, pp. 11-12, y *Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu*, Alianza, Madrid, 1999, pp. 38, 327 y 345-346. Una conclusión similar aplicada a otro fenómeno de represión «revolucionaria», en Claude Petitfrère, «La Vendée en l'an II: défaite et répression», *Annales Historiques de la Révolution Française*, 300, 2 (1995), esp. pp. 184-185.

⁶ Hemos esbozado esta argumentación, junto a un seguimiento del camino recorrido por el estudio e historiografía de este tema, en «La represión en el Aragón republicano durante la guerra civil y su estudio: el caso de la provincia de Zaragoza», *Actas de las I Jornadas «Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI»*, I.C.E.-Universidad de Zaragoza (en prensa).

términos de «dominación roja», «hordas marxistas» y «terror comunista» y truculentos relatos más cercanos a la pura propaganda que a nada que se pareciera a la historia. Un panorama que ni siquiera podría modificar sustancialmente el estudio de Montero Moreno sobre la represión anticlerical, apoyado por vez primera en un trabajo documental serio, pero permeado por resabios martiriales y por los mitos de la cruzada y la violencia premeditada. Como en todo lo que tuviera que ver con los años treinta, había que ir fuera, en busca de hispanistas como Thomas, Jackson, Broué y Témime, R. Carr o Payne, para encontrar unas obras que —aunque trabadas por tópicos y un enfoque generalista y a menudo estrechamente político— presentaban en los años sesenta unas primeras estimaciones del alcance de la represión y, sobre todo, aportaban unas propuestas metodológicas con pretensiones de objetividad que suponían una alternativa a la cultivada en el interior del país.⁷

Sólo con el otoño del franquismo llegaría desde su seno una respuesta a esa alternativa y a la propia modernización de la sociedad española. Ambas hacían ya insostenible la vie-

⁷ Julián Casanova, «Narración, síntesis y primado de la política: el legado de la historiografía angloamericana sobre la España contemporánea», *Revista de Historia Jerónimo Zurita*, 71 (1995), pp. 237-251. Cfr. obras como Hugh Thomas, *Historia de la Guerra Civil española*, Grijalbo, Barcelona, 1976, 2 vols.; Gabriel Jackson, *La República española y la guerra civil*, Crítica, Barcelona, 1976; Pierre Broué y Émile Témime, *La revolución y la guerra de España*, FCE, México, 1977, 2 vols.; Raymond Carr, *España 1808-1939*, Ariel, Barcelona, 1969 (1966); Stanley G. Payne, *The Spanish Revolution*, W. W. Norton & Co., Nueva York, 1970 (edic. cast. en Argos, Barcelona, 1977). La obra de Montero Moreno es *Historia de la persecución religiosa en España. 1936-1939*, BAC, Madrid, 1998 (1961) y algunos ejemplos de obras de la posguerra Enrique Esperabé de Arteaga, *La Guerra de Reconquista Española que ha salvado a Europa y el criminal comunismo*, C. Bermejo impresor, Madrid, 1940; Joaquín Arrarás (dir. liter.), *Historia de la Cruzada Española*, Edic. Españolas, Madrid, 1939-1944; *La dominación roja en España. Causa General instruida por el Ministerio Fiscal*, Publicaciones Españolas, Madrid, 1961 (4ª edic.) o, para el concreto caso de esta provincia, Sebastián Cirac, *Los héroes y mártires de Caspe*, Imp. Octavio y Félez, Zaragoza, 1939, y Fermín Morales, *Caspe combatiente, cautivo y mutilado*, La Tipográfica, Caspe, 1940.

ja propaganda, y una línea historiográfica más «moderna» vino a intentar suavizar la dicotomía vencedores/vencidos para asegurarle al régimen un más amplio apoyo social. De ahí la conocida obra *Pérdidas de guerra*, de R. Salas Larrazábal, jalón ineludible en los estudios sobre el tema que ofrecía —bien que con una metodología ampliamente contestada— la primera contabilización seria de las víctimas en cada provincia. No obstante, tras sus pretensiones positivistas de objetividad y reparto de culpas había, en primer lugar, una velada minimización de la represión franquista, mientras que la republicana era vista como «inundatoria», homogénea, «cartesiana y universal», indiscriminada y «perfectamente orquestada y dirigida»: «era —concluye— la lógica implacable de los periodos revolucionarios». Y había, sobre todo, un trabajo que apenas supera lo cuantitativo y que se limita a largas series de frías cifras que no dicen nada de los rostros, vidas y muertes que se esconden tras ellas.⁸

Desde entonces, y más en concreto desde finales de los ochenta, el panorama historiográfico sobre la represión en la retaguardia republicana ha experimentado un considerable avance del que este trabajo es evidentemente deudor. Y es obvio que el régimen democrático que ha sucedido a la dictadura y la democratización de los departamentos universitarios han tenido no poco que ver con ello. Así, hoy contamos ya con monografías que, a partir de la obra pionera sobre la

⁸ *Pérdidas de guerra*, Planeta, Barcelona, 1977 (citas en pp. 381-382), y «La represión en territorio republicano», *Aportes. Revista de Historia Contemporánea*, 8 (1988), pp. 53-64 (cita sobre la lógica implacable en p. 53). Otros títulos más recientes de esta línea historiográfica son Ricardo de la Cierva —su principal y más prolífico adalid—, *España en guerra. Persecución, represión y cruzada*, Arc-Fénix, Madrid, 1997; o Rafael Casas de la Vega, *El terror. Madrid 1936*, Fénix, Toledo, 1994. Las insuficiencias y presupuestos de esta historiografía fueron objeto de un detenido análisis por parte de A. Reig Tapia en *Ideología e Historia: sobre la represión franquista y la Guerra Civil*, Akal, Madrid, 1986. Cfr. Paul Preston, «Guerra de palabras: los historiadores ante la guerra civil española», en P. Preston (comp.), *Revolución y guerra en España, 1931-1939*, Alianza, Madrid, 1986, pp. 17-20, y Paloma Aguilar, *Memoria y olvido de la Guerra Civil española*, Alianza, Madrid, 1996, pp. 108-112.

retaguardia catalana de Solé i Sabaté y Villarroya, abarcan buena parte de la geografía de lo que fue la zona republicana, y a ellas se añaden numerosas historias provinciales y locales de la guerra que contienen capítulos sobre el particular o los estudios generales referidos a temas como la justicia popular o la represión económica. Mucho se ha avanzado sin duda aquí, como en otros temas, con la utilización de la lente local y regional, y de hecho no parece casual que ya haya podido aparecer el primer intento riguroso de síntesis de un tema tan arduo como relevante.⁹

Ahora bien, si importantes son estos trabajos en su doble dimensión cuantitativa —su ingente número, por un lado, y su rigor empírico en el necesario recuento de víctimas, por el otro—, no siempre cabe decir lo mismo de sus resultados cualitativos e interpretativos. En no pocas ocasiones son textos en los que prima lo descriptivo —la represión comarca

⁹ S. Juliá, (coord.), *Víctimas de la guerra civil*, obra que evidentemente llega mucho más lejos que el intento de Ángel D. Martín Rubio, *Paz, piedad, perdón... y verdad*, Fénix, Toledo, 1997. Algunos de los estudios sectoriales que pueden citarse aquí, sin ánimo de exhaustividad, son Josep M. Solé i Sabaté y Joan Villarroya, *La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939)*, L'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989; Miguel Ors Montenegro, *La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1939)*, Inst. Juan Gil-Albert, Alicante, 1994; Jaume Barrull, *Violència popular i justícia revolucionària. El Tribunal Popular de Lleida (1936-1937)*, Pagès, Lérida, 1995; Angel D. Martín Rubio, *La Represión Roja en Badajoz*, Barbarroja, Madrid, 1995; Vicente Gabarda, *La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936-1939*, Alfons el Magnànim, Valencia, 1996; Manuel Ortiz Heras, *Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete, 1936-1950*, Siglo XXI, Madrid, 1996; Rafael Quirosa-Cheyrouze, *Represión en la retaguardia republicana. Almería, 1936-39*, Librería Universitaria, Almería, 1997; Francisco Moreno, *La guerra civil en Córdoba (1936-1939)*, Alpuerto, Madrid, 1985; Francisco Cobo Romero, *La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950)*, Diputación Provincial de Jaén, 1993; Carmen González, *Guerra Civil en Murcia. Un análisis sobre el poder y los comportamientos colectivos*, Universidad de Murcia, 1999; Glicerio Sánchez Recio, *Justicia y Guerra en España. Los Tribunales Populares (1936-1939)*, Instituto "Juan Gil-Albert", Alicante, 1991, y *La República contra los rebeldes y desafectos. La represión económica durante la guerra civil*, Universidad de Alicante, 1991. Para el resto de títulos regionales y locales usados, véase la bibliografía de este trabajo.

por comarca o incluso pueblo a pueblo—, cuando no un vasto uso de cifras, tablas y gráficas que resultan abrumadoras si no se ligan a un esquema interpretativo riguroso. Esquema que, cuando existe, con frecuencia se basa en las diferencias entre la represión republicana y la de los sublevados, de acuerdo con un modelo elaborado por autores como A. Reig Tapia. Según tal modelo, la represión de los sublevados sería ofensiva frente a un régimen legítimo, premeditada y metódica, amparada y dirigida desde el todopoderoso «Nuevo Estado», «estructural» en su proyecto político y prolongada con intensidad hasta bien entrada la posguerra. Frente a ella, la republicana se definiría como «defensiva», espontánea, fruto de la desorganización inicial, coyuntural y marginal respecto a un Estado que busca reducirla. Diferencias que son por otra parte incuestionables y que sólo pueden ignorar quienes insisten en exculpar y olvidar antes que en conocer. Sin embargo, se trata a la postre de un modelo creado para la represión franquista —a la que se adapta mejor— y que, llevado a sus últimas consecuencias, deja a la de los republicanos en un limbo de «espontáneos» orígenes y actores «incontrolados». En otras palabras, desconocidos. Por último, estos estudios siguen yendo a la zaga de los referidos a la represión de los insurgentes y, en todo caso, no plantean marcos interpretativos globales ni emparentados con alguna teoría general de la violencia.¹⁰

¹⁰ Algo denunciado por Julio Aróstegui en el nº 13 de *Ayer* (1994), dedicado a «Violencia y política en España», p. 15. La aplicación a la represión franquista de un esquema teórico —el del carácter fascista del franquismo—, en Julián Casanova *et al.*, *El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)*, Siglo XXI, Madrid, 1992. Las diferencias entre las dos represiones, por ejemplo, en A. Reig Tapia, *Violencia y terror*, pp. 14-19; y recientemente, Francisco Moreno, «El terrible secreto del franquismo», *La Aventura de la Historia*, 3 (enero 1999), pp. 12-25. Estas diferencias cualitativas sustanciales ya fueron sugeridas por los contemporáneos: Manuel Azaña, *La velada en Benicarló. Diálogo de la guerra de España*, Castalia, Madrid, 1974, pp. 79-80; Joan Peiró, *Perill a la rereguarda*, Edicions Llibertat, Mataró, 1936, pp. 64-65; «Testimonio de Dionisio Ridruejo», en R. de la Cierva, *España en guerra*, pp. 161-168; *Solidaridad Obrera*, 8-1-1938. Claro que no falta quien todavía recurre

La explicación de esas «insuficiencias» —insólitas en un tema de tal relevancia y en un periodo tan estudiado— no parece cuestión baladí, aunque con toda seguridad proviene de la experiencia histórica del franquismo y de la transición a la democracia. De algún modo, la represión republicana compartiría con la franquista la postergación y silencio que se aplicó a los episodios más sangrantes e hirientes del pasado reciente como parte de la estrategia consensual sobre la que se edificó la transición.¹¹ Y después, cuando fue retirándose ese manto velador, las miradas apuntarían de forma preferente a la violencia de los insurgentes, esa que había sido silenciada y ocultada durante cuatro décadas tras la machacona insistencia en la del enemigo «rojo». Dicho de otra manera, al hartazgo de esa imagen anatemizadora y maniquea sucedería, en una especie de ley de compensación historiográfica, una mayor inclinación hacia las sombras y sótanos del franquismo, por un lado, y hacia los planos «constructivos» —*v.gr.* las colectivizaciones— de la revolución por el otro. Por último, llegados al punto de abordar la represión republicana, su tratamiento se vería condicionado por las visiones predominantes hasta la fecha. Décadas atrás, las historias de los hispanistas habían debido buscar una forzosa ecuanimidad ante los serviles panfletos que dominaban bibliotecas y medios oficiales en la España de la dictadura. Del mismo modo, la primera de las tareas debía ser ahora refutar las aberrantes tesis —de tanto éxito mediático en el tardofranquismo y la transición— del «todos fueron iguales», tesis cuya respuesta natural parecía ser el resalte de las diferencias cuantitativas y sobre todo cualitativas entre una y otra violencia.

como esquema al de las «masas iracundas», «las más abyectas pasiones y bajos instintos del hombre» y «elementos analfabetos o incontrolados, exaltados... por el alcohol» para explicar la represión «roja»: Antonio Bermúdez, *República y guerra civil. Manzanares 1931-1939*, Diputación de Ciudad Real, 1992.

¹¹ Ángela Cenarro, «Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del 'Nuevo Estado'», *Historia Social*, 30 (1998), pp. 7-8, y P. Aguilar, *Memoria y olvido*, pp. 358-361.

Los casos aragonés en general, y zaragozano en particular, resultan una buena muestra de lo arriba argumentado. Frente a los solventes estudios disponibles acerca de la represión de los insurgentes de una parte, y sobre la experiencia revolucionaria y colectivizadora en la retaguardia republicana de otra, la carencia de monografías dedicadas a la violencia republicana limitaba el conocimiento de este tema a algunas escasas y dispersas aproximaciones. Aproximaciones entre las que, desde luego, destacan los trabajos de J. Casanova sobre el Aragón republicano y el anarquismo durante la guerra civil, en los que, estando entonces casi todo por hacer, presentaba los primeros datos y las primeras propuestas interpretativas contrastadas encaminadas a rescatar el tema del mito y a buscar su dimensión social e histórica. Junto a ello, y junto a las páginas dedicadas al tema en algunos estudios locales y sectoriales, la producción sobre el tema se completaba con los sucintos textos del eclesiástico Ángel D. Martín Rubio, primeros en abordarlo desde el marco provincial zaragozano y desde las principales fuentes documentales; pero también desde presupuestos más que discutibles que van desde la metodología a la consabida hegemonía de las cifras y lo descriptivo, pasando por conclusiones y tópicos tras los que, en última instancia, hay un apenas disimulado afán condenatorio.¹² Reducido bagaje historiográfico, en todo

¹² Remito, para esto y para un más amplio seguimiento de la producción sobre la represión republicana en la provincia de Zaragoza, a nuestro citado trabajo «La represión en el Aragón republicano». Los textos a los que se hace referencia son Julián Casanova, *Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938*, Siglo XXI, Madrid, 1985; Caspe, 1936-1938. *Conflictos políticos y transformaciones sociales durante la guerra civil*, Grupo Cultural Caspolino, Zaragoza, 1984, y *De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939)*, Crítica, Barcelona, 1997. De A. D. Martín Rubio, «La represión republicana en Zaragoza», *Razón Española*, 69 (enero 1995), pp. 45-62; «Aproximación a la represión republicana en la batalla de Belchite», en Capitán De Diego *et al.*, *¡Belchite!*, TARFE, Oviedo, 1996, pp. 131-187; Paz, *piedad, perdón*, pp. 97-110; y «La persecución religiosa en la provincia de Zaragoza durante la Guerra Civil», *Aragonia Sacra*, 9 (1994), pp. 55-64. Otros títulos útiles para el marco aragonés, M^a Pilar Salomón, «La crítica moral al orden social: la persistencia del anticlericalismo en la sociedad espa-

caso, ante el que una monografía parecía quedar debidamente justificada.¹³

Desde ese punto de vista, lo que aquí se presenta es un estudio de la violencia revolucionaria desencadenada en la retaguardia republicana desde julio de 1936 aplicado a un marco concreto y reducido como es la provincia de Zaragoza y, más en concreto, sus comarcas que quedaron en la llamada «zona roja».¹⁴ La elección de un ámbito reducido planteaba la posibilidad de estudiar en detalle la compleja realidad de la represión, de insertarla en su tejido social específico y de discernir los concretos mecanismos, protagonistas, ritmos, orígenes, móviles y consecuencias del fenómeno represivo en las relaciones sociales y de poder de las comunidades afectadas.¹⁵ Máxime cuando, sobre todo en las primeras semanas de la contienda —a la sazón las más sangrientas—, el derrumbamiento del aparato estatal y la consiguiente

ñola (1900-1939)», Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza, 1996, 2 vols, especialmente vol. 1, pp. 422-437 [*Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movilización política (1900-1939)*, P.U.Z., Zaragoza, en prensa], y sobre todo la sólida monografía de Esther Casanova, «Teruel, 1936-1938. La violencia contra el orden social durante la guerra civil», Memoria de Licenciatura, Universidad de Zaragoza, 1999. Para la represión insurgente, J. Casanova *et al.*, *El pasado oculto*, y Julia Cifuentes y Pilar Maluenda, *El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-39)*, Inst. Fernando el Católico, Zaragoza, 1995.

¹³ Dos avances de ese estudio monográfico, en José Luis Ledesma, «Sublevados, milicianos, misioneros y pañuelos rojos. La represión en la retaguardia republicana del Bajo Aragón zaragozano durante la Guerra Civil», en P. Rújula, I. Peiró (coords.), *La Historia Local en la España Contemporánea. Estudios y reflexiones desde Aragón*, L'Avenç, Barcelona, 1999, pp. 319-340, y «Asalto al pasado y revolución. La represión republicana en la provincia de Zaragoza durante la guerra civil», *Rolde. Revista de Cultura Aragonesa*, 88-89 (1999), pp. 5-19.

¹⁴ En concreto 44 municipios que suponían el partido judicial de Caspe, la casi totalidad de los de Pina y Belchite, además de cuatro localidades del de Cariñena y una del de Zaragoza. Ver anexo nº 1.

¹⁵ Lo cual no quiere decir que con la lente local todo sean facilidades y ventajas. Ya hace unos años, J. Casanova avisaba de que la historia local, en otros casos modelo superador de determinados análisis, entra en el tema de la represión «roja» en Aragón «en una fase oscura y con muchos problemas»: *Anarquismo y revolución*, p. 159. Para un ejemplo de la preocupación por lo local y los poderes locales en el estudio de otro fenómeno revolucionario, véase Roger Dupuy (dir.), *Pouvoir local et Révolution*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1995.

atomización política harían de cada comarca y aun de cada pueblo territorios semi-autónomos que, dirigidos por comités locales o por las milicias, quedarían temporalmente abandonados a su suerte. Era en muchos aspectos, pues, una historia local. A ello se suma la importancia de la zona estudiada, en la que cabe encontrar, entre otras cosas, célebres columnas milicianas como las de Durruti y Ortiz, batallas míticas como la de Belchite o el núcleo más poblado de la zona republicana de la región y capital del Consejo de Aragón: Caspe. Además de, como veremos, uno de los mayores impactos relativos de la represión en toda la retaguardia republicana. Un espacio relevante, en suma, dentro del de por sí privilegiado marco que para la guerra civil representa la región aragonesa.

OBJETIVOS Y FUENTES

El primer objetivo del trabajo sería, por tanto, una completa y exhaustiva cuantificación de las víctimas de esa represión así como la elaboración de un listado de éstas para su informatización y tratamiento estadístico que incluya variables como la edad, domicilio, profesión o filiación política de los fallecidos, o la fecha, lugar y otros datos de la muerte.¹⁶ En ese obituario —paso previo macabro aunque imprescindible en todo estudio sobre la represión—, hemos incluido a todos los habitantes de la provincia fallecidos, según las fuentes, por represión política en la zona republicana. Entre ellos, de acuerdo con la mayoría de los estudios sectoriales sobre el tema, no incluimos a los «desaparecidos» de los que no hay más datos, ni los casos de fallecidos por enfermedades en cárceles y campos de trabajo y por intentar desertar a la zona franquista, ni por supuesto a los muertos

¹⁶ Listado que puede consultarse en el trabajo académico origen de este estudio: «La violencia revolucionaria en la retaguardia republicana de Zaragoza (1936-1938)», Memoria de Licenciatura, Universidad de Zaragoza, 1999, pp. 267-319.

en acción de guerra.¹⁷ En cambio sí comprendemos aquí a los fusilados en cautiverio, de igual manera que los casos de muerte «al desertar» que esconden en realidad ejecuciones de soldados tras llegar al frente informes condenatorios desde la retaguardia.

Por otra parte, el criterio de organización y localización de las víctimas no es el de su lugar de muerte sino, con muy contadas excepciones, el de su domicilio. Ello quiere decir, en relación con el cómputo del victimario, que no se incluyen en él las víctimas fallecidas en la provincia provenientes de otras regiones, mientras que sí son contabilizados los zaragozanos muertos fuera de su provincia. Las razones de esta elección son varias. En primer lugar, dado el carácter de las fuentes, los óbitos de los vecinos de cada localidad aparecen consignados con mayor rigor y exactitud que los de los forasteros, los cuales a menudo no son registrados en el lugar de fallecimiento sino sólo en el de origen por sus familiares. En segundo término, y por lo mismo, este criterio parece el más adecuado para la tarea colectiva de balance global de la represión en todo el país. Por último, todos los indicios inducen a pensar que la mayoría de los fusilados lejos de sus hogares lo fueron por causas, circunstancias o denuncias que apuntan a sus lugares de origen antes que a los de su muerte y, en todo caso, el impacto socio-político es mucho menor en los segundos que en los primeros.¹⁸

¹⁷ Los mayores problemas se encuentran en este punto, sobre todo en las localidades tomadas por el Ejército Popular en la ofensiva del verano de 1937 (Quinto, Mediana, Codo y Belchite). En estos casos las fuentes impiden diferenciar con un mínimo de seguridad los muertos en el combate y en los intentos de «rotura del cerco» de aquellos que fueron fusilados al entrar las tropas republicanas, por lo que se debe extremar la cautela y el uso de fuentes alternativas.

¹⁸ De nuevo el caso de la represión a partir de la ofensiva de Belchite sirve aquí como el mejor ejemplo. Por una parte, hay noticias de numerosos fusilamientos de oficiales militares capturados —al menos varias decenas— sobre todo en Belchite y Quinto, pero las fuentes zaragozanas no dan cuenta de ninguno que no sea de esa provincia, con lo que se hace inviable un balance global sin consultar las fuentes de otras regiones. Y por otro lado, buena parte de los fusilados zaragozanos a consecuencia de esa batalla son soldados provinien-

La fuente principal de que nos hemos servido en la elaboración de esa relación de víctimas es la «Causa General Informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en Zona roja, desde el 18 de julio de 1936 hasta la Liberación», un valiosísimo acervo documental para el estudio de la guerra elaborado a instancias de las autoridades franquistas por un decreto del Ministerio de Justicia del 26 de abril de 1940. Instruida por el Tribunal Supremo, a la información recogida se le dio forma de sumario judicial, uno para cada provincia y dividido en once capítulos o *piezas*. Cada una de ellas está formada por todo tipo de declaraciones, informes de autoridades y anexos de documentación republicana. Aunque casi todas recogen datos sobre la represión, la básica para ello es la pieza primera o «Principal». En ella encontramos para cada localidad tres relaciones o estadillos en las que aparecen los vecinos víctimas de la represión republicana (estado nº 1), los forasteros fusilados en el lugar (nº 2, aunque muy incompleto) y otras formas de violencia como actos anticlericales, requisas o encarcelamientos (nº 3). A ello se suma un ingente número de declaraciones de familiares de las víctimas y testigos, informes de las mismas elaborados por las comandancias de la Guardia Civil, Falange o los ayuntamientos, así como no pocas declaraciones de sospechosos encartados e informes sobre éstos.¹⁹ Ahora bien, la

tes de las comarcas que habían quedado en la zona «nacional» y su muerte no parece guardar relación alguna con la retaguardia republicana, sino más bien con denuncias realizadas por vecinos de esas comarcas. En suma, si los zaragozanos fusilados en otras provincias fueron 152, los de otras muertos en ésta suman al menos 72. La mayoría de los conocidos (60) provienen de pueblos del norte de Teruel, como los 15 vecinos de Mazaleón o los 9 de Monforte de Moyuela fusilados en grupo en Maella y Azuara, respectivamente. Por lo demás, este criterio de selección es también el usado por autores como Solé i Sabaté y Villarroya (*La repressió a la reraGuarda de Catalunya*).

¹⁹ Para el caso de Zaragoza, aparecen 1108 declaraciones de familiares de víctimas; 662, 47 y 14 informes de la Guardia Civil, Falange y autoridades locales, respectivamente, sobre aquéllas; 259 declaraciones de sospechosos y 372 informes sobre éstos. La «Causa General» de Zaragoza, constituida en septiembre de 1940, consta de ocho legajos o quince cajas, de las que siete pertenecen a la

«Causa General» también tiene sus límites. De acuerdo con su inicial afán justificatorio y propagandístico, a menudo hincha el victimario recogiendo indistintamente no sólo a los fusilados sino también a los muertos en combate y bombardeos o por enfermedades y a los desaparecidos. Del mismo modo, no son extrañas las repeticiones, pues las víctimas pueden aparecer consignadas en su lugar de origen y en el de su fallecimiento, e incluso en un tercero.²⁰ La consecuencia más evidente de todo ello es que peca mucho antes por exceso que por defecto, y por tanto debe ser depurada y cruzada con otras fuentes.

Entre esas otras fuentes destacan los Registros Civiles-Sección Tercera o de Defunciones.²¹ En términos generales no es tan completa pues, al menos en esta provincia, suma un número inferior de víctimas que la Causa, ofrece menos datos y más dudas sobre los inscritos y el carácter de su muerte, y a menudo los recoge en localidades distintas a donde vivían. Con todo, es una fuente de consulta indispen-

pieza primera. Datos, oficios, diligencias, providencias, etc. sobre su instrucción, en Archivo Histórico Nacional, Causa General (en adelante AHN, CG), legs. 1423 (1) y 1430 (1).

²⁰ Caso del guardia civil José Marrufo Domingo, que aparece como víctima en Bujaraloz (en cuyo puesto servía), Caspe (donde fue detenido) y en La Almolza (lugar de su fusilamiento). Las diferentes piezas de la «Causa» son: Principal; Alzamiento Nacional; Cárceles y sacas; Checas; Justicia roja; Prensa; Actuación de las autoridades gubernativas locales; Delitos contra la propiedad e informes de las cámaras de comercio e industria; Banca; Persecución religiosa; y Tesoro artístico y cultura roja. Cfr. G. Sánchez Recio y J. M. Santacreu, «La *Causa General*, fuente para el estudio de la rebelión y la guerra civil», *Arbor*, 491-492, t. cxxv (1986), pp. 217-230; y las colaboraciones de G. Sánchez Recio y Manuel Ortiz en I. Sánchez, M. Ortiz y D. Ruiz, coords., *España franquista. Causa General y actitudes sociales ante la Dictadura*, Universidad de Castilla La Mancha, 1993, pp. 23-28 y 29-52. Sobre las finalidades explícitas de la «Causa General», *La dominación roja en España*, pp. 7-9.

²¹ Hemos utilizado los registros de toda la provincia, aunque los de las comarcas que quedaron toda la guerra en el bando insurgente nos los proporcionaron Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, miembros del equipo de investigación que estudió la represión en el Aragón franquista. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento para ellas.

sable que completa a la Causa General y subsana los posibles errores y lagunas de ésta. Es por ello que hemos añadido los inscritos aquí pese a que no aparecieran en la Causa. Por lo demás, no es arriesgado concluir que el resultado del cruce de ambas fuentes es prácticamente definitivo.

Así las cosas, hemos utilizado el resto de las fuentes con carácter complementario, para confirmar o revisar unos datos y para adquirir otros; datos sobre las víctimas, las circunstancias de sus muertes o simplemente sobre la dimensión cuantitativa de la represión. No obstante, ante las menores garantías que ofrecen y al igual que otros estudiosos de la represión, no hemos integrado en el cómputo final las —escasas— víctimas que aparecen en ellas sin hacerlo en las dos anteriores.²² Las fuentes orales, por su parte, han resultado especialmente fructíferas a la hora de describir casos concretos e indagar en los perfiles de las víctimas y en las causas y circunstancias de sus muertes, a menudo ligadas al complejo universo de querellas, conflictos y relaciones personales de la vida comunitaria rural. Mas ello no puede hacer

²² Algunas de esas fuentes son las escasas alusiones halladas en la prensa, sobre todo en forma de esquelas y anuncios de misas de réquiem por las víctimas, por ejemplo en *El Noticiero* de los días 5-5-1938 (Caspé), 17-5-38 y 27-7-38 (La Almolda) o 8-9-38 (Gelsa); los informes encontrados en algunos ayuntamientos de la posguerra: por ejemplo, «Individuos que han sido baja en la nómina de combatientes y que fallecieron y desaparecieron en la defensa de Belchite» y una «Relación de personas que han muerto o desaparecido durante la última guerra civil, sin que conste en el Registro Civil» (1940): Archivo Municipal de Belchite, leg. 508-12; más, en leg. 32-1, 81-15 y 508-9 etc.; o las referencias aparecidas en la bibliografía que, con la excepción del citado martirologio de S. Cirac, son muy incompletas: *cfr.* J. L. Ledesma, «La represión en Aragón». El libro «Caídos por Dios y por España, 1936-1939» de Zaragoza (Santuario de la Gran Promesa de Valladolid) y las placas y monumentos a los caídos en iglesias y cementerios proporcionan listados de víctimas en los que, sin embargo, se confunden muertos en la retaguardia y en los frentes. Todavía están hoy en lugares como Aladrén, Azuara, Caspe, Chiprana, Fabara, Gelsa, Moneva, Nonaspe, Plasas, Sástago o Velilla. Menos información hay en la documentación republicana, salvo en excepciones como los sumarios del Tribunal Popular o las propuestas de incautación de tierras a fusilados: AHN, CG, leg. 1427, anexos 1/5 y 2/5, y Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca (en adelante AGCS).

obviar las limitaciones de estas fuentes en un asunto como éste que despierta todavía tantos resquemores, recuerdos soterrados y desazones en los que lo vivieron. Límites que empiezan por las negativas a hablar del tema o —cuando se habla— a grabar o publicar lo relatado, pero que atañen también a lo que se recuerda de unos hechos tan lejanos como después manipulados por los vencedores.²³

El resultado de la investigación en su dimensión cuantitativa, a partir de esas fuentes y con los criterios arriba descritos, ofrece un balance de 742 zaragozanos muertos por represión política en la retaguardia republicana. Aunque superior a la propuesta en su día por Salas Larrazábal, esta cifra reduce considerablemente las recogidas por la documentación franquista e incluso la de los primeros estudios serios que siguen más fielmente éstas.²⁴

No obstante, si el recuento parece paso imprescindible para un estudio de la represión, éste no puede quedarse en ese mero «contar muertos» y debe transitar las sendas de lo interpretativo. De hecho, de lo que se trata en este tipo de estudios no es tanto de saber si las víctimas fueron cien

²³ M^a Alexia Sanz, «El multiforme prisma de la memoria. Apuntes teóricos y metodológicos para su estudio», *Stvdium. Revista de Humanidades*, 5 (1998), p. 240, y Ronald Fraser, «Historia oral, historia social», *Historia Social*, 17 (1993), pp. 133. Para este mismo autor, esas fuentes sirven sobre todo para acercarse a ese «ambiente intangible» construido sobre elementos tan poco científicos pero humanos como las percepciones, y que en una época de agudo cambio social podía movilizar a la gente «corriente» y llevarla nada más y nada menos que a matar y a morir: *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española*, Crítica, Barcelona, 1979, vol. I, p. 25. Los datos sobre el más de medio centenar de entrevistas realizadas aparecen en el apartado «Fuentes» del presente trabajo.

²⁴ A. D. Martín Rubio, «La represión republicana en Zaragoza», pp. 45-62, y Paz, *piedad, perdón*, pp. 97-110, donde se contabilizan 819 y 839 víctimas, respectivamente. La cifra de Salas Larrazábal (657), en *Pérdidas de guerra*, pp. 283-288 y 362-364. A lo largo de su instrucción, la Causa General de Zaragoza ofrece como balance 887 víctimas y luego 974, aunque el definitivo es 1018 (AHN, CG, legs. 1423 (1) y 1911/2). Por su parte, las víctimas según el libro del Santuario de la Gran Promesa son 964.

arriba o cien abajo, sino de comprender el alcance y significado del fenómeno. Fenómeno, además, del que no pueden marginarse otras dimensiones —además de la represión «clásica»— como la represión «legal» de los Tribunales Populares, la ejercida contra los propios revolucionarios por otros sectores republicanos desde el estío de 1937 u otras, por más que sean más difíciles de estudiar. Y sobre todo, el asunto no puede ser inteligible en sí mismo, sino que debe analizarse inexcusablemente integrado en un contexto específico de conflicto social y lucha por el control del poder.

Para todo ello, es obvio, las fuentes debían ser otras. Y ahí debe citarse principalmente la amplia y rica documentación republicana del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, el Archivo General Militar de Ávila o la Fundación Pablo Iglesias de Madrid, así como la numerosa prensa editada en la zona republicana. Pero también se trata, de nuevo, de la Causa General, aunque en este caso del resto de las piezas; y ello no sólo por los informes de posguerra sobre esos particulares, sino también —y a menudo sobre todo— por los anexos de documentación republicana que las acompañan. En términos generales, estas piezas y anexos son sesgados e incompletos y, como denuncian los propios instructores de la Causa General zaragozana, en ellos faltan datos y documentación imprescindibles que, por el contrario, existen en la de otras provincias.²⁵ Pero constituyen una fuente fundamental para una aproximación a esos años y sobre todo para otras dimensiones de la política represiva, como los Tribunales Populares, las cárceles, las destrucciones y actos anticlericales o la represión económica.

No parece, sin embargo, que en el tema de la violencia republicana el problema sean las fuentes, sino más bien interpretar los datos de ellas extraídos. Ahora bien, ahí parecen surgir los problemas, a juzgar como vimos por las caren-

²⁵ Esa carencia, por ejemplo respecto a la actuación de los Tribunales Populares, es apuntada amargamente en la propia Causa (leg. 1913/1).

cias de algunos de los textos dedicados al tema. Y a juzgar, también, por los resultados generales de las historias consagradas a otros fenómenos de violencia revolucionaria como los que acompañaron a la Revolución rusa y a la derrota del Eje en la II Guerra Mundial —periodos, además, que han generado toneladas de estudios—, en las que lo descriptivo, cuando no la mera condena, se impone de forma notable sobre lo analítico e interpretativo.²⁶ Con todo, quizá el caso más significativo sea el de la Revolución francesa, pues no deja de ser significativo que, entre los cientos de títulos surgidos alrededor de su Bicentenario, ningún trabajo aborde de forma monográfica y rigurosa —abstracción hecha, por tanto, de la prolífica y recurrente historiografía «ultra» contrarrevolucionaria— un tema tan central de la misma como la violencia popular y el «terror» vividos durante sus diferentes etapas entre 1789 y 1795. Algo que aboca a que todavía hoy haya que contentarse, frente al detalladísimo tratamiento del resto de dimensiones de la «Gran Revolución», con textos canónicos de la historiografía «revolucionaria» clásica, algunas historias locales y contadas aproximaciones generales que, otro dato a tener en cuenta, proceden a menudo de allende las fronteras francesas.²⁷ La conclusión que se impone, y a la

²⁶ Sobre las depuraciones en la Francia de la Liberación, por ejemplo, ningún estudio riguroso ha sucedido a los que las abordaron desde lo narrativo o cuantitativo: *Vid.* Henry Rousso *et al.*, «L'épuration en France à la Libération», *Vingtième Siècle*, 33 (1992); y, como mejor título para el marco europeo, Klaus Henke y Hans Woller (eds.), *Politische Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg*, Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich, 1991. Hemos elaborado una primera aproximación al tema en «Los fuegos de la Liberación: la represión de los colaboracionistas en Francia a finales de la II Guerra Mundial», *Studium. Revista de Humanidades* (Teruel), 8 (2001) (en prensa).

²⁷ *Cfr.*, aunque la lista no puede ser completa, Georges Lefebvre, *La grande peur de 1789*, A. Colin, París, 1988 (1932); George Rudé, *La foule dans la Révolution française*, Maspéro, París, 1982 (1959); Richard Cobb, *Les Armées révolutionnaires: instrument de la Terreur dans les départements*, Mouton & Co, París, 1961-1963, 2 vols.; Colin Lucas, *The Structure of the Terror. The Example of Javogues and the Loire*, Oxford U.P., 1973; Martyn Lyons, *Revolution in Toulouse, an essay on provincial terrorism*, University of Durham, Las Vegas, 1978; Claude

que ya se apuntó, parece evidente: las dificultades para comprender el significado profundo de los fenómenos de violencia desde la perspectiva histórica, al menos cuando los mismos vienen acompañados por un proceso revolucionario como el abierto en España en las «jornadas de julio» de 1936.

Pese a la escasa atención que en términos generales se le ha otorgado en la historiografía española —algo sorprendente en un país cuya historia reciente está jalonada de tales episodios—, la reiteración de las manifestaciones de violencia política hace del estudio de ésta una necesidad. Si bien es evidente la historicidad de su ejercicio y de sus funciones según cada contexto, la violencia se muestra como una constante en todas las sociedades históricas desde que éstas se dotaron de estructuras de dominación más o menos complejas, sobre todo el Estado. Por ello, y aunque conviene estar alerta frente al peligro de convertirla en una categoría cajón de sastre vacía de contenido por su reiteración, parece asumido que se trata de «un tema social y, por ende, historiográfico de indudable importancia». No en vano, como apuntalara Ch. Tilly, «el carácter de la violencia colectiva en un momento dado es uno de los mejores indicadores que tenemos de lo que está sucediendo en la vida política de un país». No puede sorprender, por tanto, que sea precisamente la falta de referentes teóricos y conceptuales de la violencia política lo que haya sido aducido como responsable de que

Lefort *et al.*, «La Terreur», *Passé Présent*, 2 (1983); Keith M. Baker (ed.), *The Terror*, Pergamon, N. York, 1994. Para un primer acercamiento al tema puede acudirse a Albert Soboul, «Violence collective et rapports sociaux. Les foules révolutionnaires (1789-1795)», *La révolution française*, Éd. Sociales, París, 1982, pp. 563-582; Philippe Goujard, «La violence et la Terreur» y Paolo Viola, «Violence révolutionnaire ou violence du peuple en révolution?», en A. de Baecque (comp.), *Recherches sur la Révolution*, La Découverte, París, 1991, pp. 87-94 y 95-102; y Jacques Solé, *La révolution en questions*, Seuil, París, 1988, pp. 83-108 y 169-205. Véase también Jean-Clément Martin, *Révolution et Contre-révolution en France, 1789-1989. Les rouages de l'histoire*, P. U. de Rennes, 1996, y *Contre-Révolution, Révolution et Nation en France. 1789-1799*, Seuil, París, 1998, y por supuesto la debatida postura «revisionista» de François Furet, *Penser la Révolution française*, Gallimard, París, 1978.

el estudio de la represión durante la guerra civil amenace con convertirse en «una mera descripción de crueldades o en un ‘contar muertos’».²⁸

Siendo así, apoyarse en una teoría general de la violencia podría ayudar a la comprensión de estos fenómenos. Aquí surgen los problemas. En primer lugar porque, pese a las aproximaciones al fenómeno desde diversas corrientes y ciencias sociales, «aún no existe una teoría sociológica plausible sobre la violencia política en términos generales.» Y en segundo término, debido a que los científicos sociales que han abordado su estudio ni siquiera se ponen de acuerdo en algo tan básico como su definición. En realidad, tras el tenaz e ingente uso de esta categoría no habría sino una «generalidad engañosa» nacida del cruce de disciplinas y discursos antagónicos y de las divergentes nociones y valoraciones del fenómeno violento según la determinada representación de lo social de cada observador. «Por eso la palabra violencia significa todo y al mismo tiempo nunca la misma cosa. De ahí su aparente polisemia.»²⁹ Concepto proteico donde los haya, la violencia aparece así como una hidra de tantos brazos como posibles definiciones y de tan difícil estudio como teorización.

²⁸ J. Aróstegui, «Violencia y política en España», citas en pp. 13 y 15; y Charles Tilly, «Collective Violence in European Perspective», en I. K. Feierabend et al. (eds.), *Anger, Violence and Politics: Theories and Research*, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.), 1972, p. 342. Sobre el sobreuso del concepto violencia, Yves Michaud, *Violencia y política*, Ruedo Ibérico, Madrid, 1982, pp. 7-20, y la violencia como constante histórica en Eduardo González Calleja, «La definición y la caracterización de la violencia desde el punto de vista de las ciencias sociales», *Actas del Seminario Internacional «Orígenes, tipos y manifestaciones de la agresividad y la violencia»*, Junta de Extremadura, Cáceres, 1999 (pp. 109-128), a completar con las reflexiones de M. Maffesoli, *Essais sur la violence*, v.gr. pp. 12-14.

²⁹ *Ibidem*, p. 7, e Y. Michaud, *Violencia y política*, citas en pp. 8-9. Cfr. Ignacio Sotelo, «Violencia y modernidad. Prolegómenos a una reflexión sobre la violencia política», *Claves de razón práctica*, 1 (abril 1990), pp. 47-53; o los excelentes trabajos de E. González Calleja, «La definición y la caracterización de la violencia», y «Qué es y qué no es violencia en política. Consideraciones teóricas en torno al conflicto social violento», J. Barrull y C. Mir, coords., *Violència política i ruptura social a Espanya, 1936-1945*, Universitat de Lleida, Lérida, 1994, pp. 29-66 (la primera cita, en p. 65).

La indiscutible complejidad del asunto, sin embargo, no puede ni debe abocarnos a ignorar los debates que el tema ha prodigado en las ciencias sociales a lo largo del convulso y «violento» siglo XX. Debates que pueden proporcionar caminos y concepciones orientativas útiles y, sobre todo, mostrar sendas y tesis que, en todo caso, no ofrecen siempre la misma aplicabilidad al estudio socio-histórico de la violencia política. Ahí tendrían cabida las tesis de lo que Goldstone denominara primera generación de teóricos de la revolución, nacida con el siglo y decisivamente influída por planteamientos de sesgo psicologista sobre la acción «irracional» y la violencia de las «masas» (Le Bon, Ortega, Sorokin, Brinton); las «teorías de la desintegración» vinculadas al funcionalismo parsoniano, por un lado, y las de la «privación relativa» o «agregado psicológico» (Gurr), por otro, que pese a sus diferencias comparten un «modelo volcánico» y durkheimiano en el que la violencia se relaciona con comportamientos antisociales y anómicos.³⁰

Y tiene cabida, sobre todo, el modelo «político» y de «elección racional» de una tercera generación de estudiosos que se centran en las condiciones y procesos de «movilización de recursos» políticos y organizativos para la acción colectiva, y para los que «la violencia es el rostro más visible» de la mis-

³⁰ Cfr. *ibidem*; Theda Skocpol, *Los Estados y las revoluciones sociales: un análisis comparado de Francia, Rusia y China*, F.C.E., México, 1984, pp. 19-82; Rod Aya, «Reconsideración de las teorías de la revolución», *Zona Abierta*, 36-37 (1985), pp. 1-80 (de donde lo de modelo «volcánico»); Manuel Pérez Ledesma, «Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos sociales, teoría e historia)», en *Zona Abierta*, 69 (1994), pp. 51-120; J. Aróstegui, «Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia», *Ayer*, 13 (1994), pp. 17-55, y sobre todo Jack A. Goldstone, «Theories of Revolution: The Third Generation», *World Politics*, 32 (1980), pp. 425-453. Para Ted Gurr, la violencia aparece en situaciones de «una discrepancia percibida entre las expectativas deseadas por los hombres y sus posibilidades reales», pues la consecuencia de esa «privación relativa» es «una disposición hacia la acción agresiva [...] llamada descontento o cólera»: *Why Men Rebel?*, Princeton U. P., Princeton, 1971, p. 319.

ma. De acuerdo con Ch. Tilly —su principal valedor—, en el centro de la explicación de la acción y la violencia colectivas deben situarse el conflicto político y la lucha por el poder, con sus actores, estructuras socio-políticas y estatales, intereses compartidos, recursos para la movilización y oportunidades históricas concretas. Al «politizarlas», lo que se hace también es racionalizarlas, y la violencia pasa así a ser considerada como un medio más de hacer política —aunque no institucionalizado— en el marco de grupos sociales en conflicto compitiendo por el poder. Dicho en otras palabras, «en vez de ser una respuesta directa a las dificultades, la anomia o el cambio rápido, la violencia colectiva es un subproducto de la lucha por el poder y de su represión». Porque, pese a las interpretaciones de los que tratan la violencia y la conflictividad «como si sucediesen fuera de la política normal, o incluso contra la política normal», lo cierto sería que «violencia y poder aparecen absolutamente conectados».³¹

Desde posiciones más o menos cercanas a ese modelo, entendemos aquí la violencia como una acción colectiva y multiforme, mucho menos una anomalía irracional que un

³¹ Lo que por supuesto no quiere decir confundidos: «el poder es la categoría genérica de la que la violencia es un caso específico» (I. Sotelo, «Violencia y modernidad», p. 48). Charles Tilly, Louise Tilly y Richard Tilly, *El siglo rebelde, 1830-1930*, P.U.Z., Zaragoza, 1997 (citas en pp. 291 y 279); Ch. Tilly, «Collective Violence in European Perspective», pp. 342-351; *Las revoluciones europeas, 1492-1992*, Crítica, Barcelona, 1995, pp. 41-75. El modelo de movilización, en su *From Mobilization to Revolution*, Ramdom House, Nueva York, 1978, pp. 52-55, y luego desarrollado en los capítulos 3 y 4. Otros partícipes de estas tesis son Tarrow, Jenkins o MacCarthy y Zald. Del primero, puede verse en castellano su importante *El poder en movimiento* arriba citado y de cuya p. 184 proviene lo del rostro visible de la acción colectiva. Del segundo, revisando los planteamientos de los otros dos, «La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales», en *Zona Abierta*, 69 (1994), pp. 5-49. Tres sugerentes matizaciones al modelo de Tilly, en Th. Skocpol, *Los estados y las revoluciones*, pp. 42-43, Y. Michaud, *Violencia y política*, p. 15, a completar con Michel Foucault, *Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión*, Siglo XXI, Madrid, 1994. Y William H. Sewell, «Three Temporalities: Toward an Eventful Sociology», in Terrence J. McDonald (ed.), *The Historic Turn in the Human Sciences*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1996, pp. 245-280, esp. pp. 251-4.

recurso presente en todos los conflictos sociales y políticos; originada al plantearse la resolución no pautada de un conflicto del que sería efecto y síntoma; e inextricablemente unida a las estructuras y procesos políticos, las respuestas y acciones del poder y a las luchas por la distribución de éste entre grupos políticos y clases sociales desde el plano local al estatal. Si, como señalara Wright Mills, «toda política es lucha por el poder, y si la forma última del poder es la violencia», no se trataría entonces en el tema que nos ocupa de actos desviados con una mera función destructiva de lo social ni de respuestas mecánicas y accesorias a un descontento o conflicto, sino que «la violencia no deja de jugar un cierto rol en la vida societaria». Como tampoco conviene desecharlos como aberrantes, regodearse en lo que tuvieron de «espantoso holocausto», «paroxismo» y «furor homicida» o recurrir a las manidas tesis sobre la violencia consustancial a toda revolución —tan revitalizadas últimamente para explicar el terror durante la Revolución francesa.³² Antes bien, la represión republicana debe analizarse en su relación con la guerra, la revolución social y la lucha por su control político, con la atomización local del poder y con los concretos marcos rurales y sus específicas problemáticas. De hecho, se ha escrito que «el contexto lo es todo en el análisis de la violencia política» y, siendo así, el objeto de estudio no sería tanto el propio hecho violento —en este caso la represión— cuanto las circunstancias que lo

³² François Furet y Denis Richet, *La revolución francesa*, Rialp, Madrid, 1988, y sobre todo por la corriente «ultra» a la que se aludió más arriba: v.gr. Frédéric Bluche, *Septembre 1792. Logiques d'un massacre*, R. Laffont, París, 1986; Reynal Sécher, *Le génocide franco-français. La Vendée Vengée*, P.U.F., París, 1986; o Alain Gérard, «Par principe d'humanité...» *La Terreur et la Vendée*, Fayard, París, 1999. Cfr. Cl. Petitfrère, «La Vendée en l'an II», *art. cit.*, Lo de holocausto, paroxismo y furor es de Guy Hermet, en el dossier «La guerre d'Espagne: révolution et dictature» de *L'Histoire*, 200 (junio 1996), p. 28, y en *La guerre d'Espagne*, Seuil, París, 1996 (1989), pp. 126-136. Lo de no desechar lo violento y/o aberrante, en Bruce Lincoln, «Revolutionary exhumations in Spain. July 1936», *Comparative Studies in Society and History*, 27, 2 (1985), p. 246 (versión cast. en *Historia Social*, 35 (1999), pp. 101-118) y M. Maffesoli, *Essais sur la violence*, p. 12, de donde también proviene la cita sobre el rol social de la violencia.

han posibilitado, su integración en una estrategia de poder o sus consecuencias en un marco socio-histórico determinado.³³

Partiendo de esos presupuestos, e integrando en la medida de lo posible las referencias a otros contextos de violencia revolucionaria, lo que se propone aquí es, por tanto, acercarse desde el marco de la historia local a un tema que ha sido calificado en más de una ocasión de «punto de referencia principal» o de «tema más importante de la guerra». En tanto que suceso extraordinario y no pautado, «el complejo asunto de la represión» sería uno de esos ocasionales «momentos de erupción» que registra la historia, excelentes vías de acceso a conflictos, rasgos de comportamiento y formas de las relaciones sociales que en circunstancias menos traumáticas difícilmente aflorarían. Como lo que se ha dado en llamar la «línea de ruptura» o de fractura social que se abrió en la sociedad de los años treinta. En todo caso, resulta una cuestión fundamental, pese a los voceros del olvido, para comprender la hondura y trascendencia de la guerra civil, uno de cuyos mayores síntomas es precisamente esa «guerra en las retaguardias» que llamamos represión.³⁴ Por último, puede resultar

³³ E. González Calleja, «Qué es y qué no es violencia», pp. 29-30, y la cita, de Paul Wilkinson, en Noel O'Sullivan (ed.), *Terrorismo, ideología y revolución*, Alianza, Madrid, 1987, p. 256. Opuesta al modelo inspirado en Tilly estaría la elaborada tesis de Hannah Arendt, para quien, a partir de la experiencia de los totalitarismos del siglo XX y de las revoluciones sociales modernas, la violencia no está ligada a la política y al poder sino que se sitúa precisamente en un estadio prepolítico y en la negación del poder: *Sobre la revolución*, Alianza, Madrid, 1988, y *Du mensonge à la violence*, Calmann-Lévy, París, 1972, pp. 143-57.

³⁴ J. Aróstegui, «Los componentes sociales y políticos», en Manuel Tuñón de Lara et al., *La guerra civil española 50 años después*, Labor, Barcelona, 1986, pp. 113-114. E. J. Hobsbawm, «De la historia social a la historia de la sociedad», *Historia Social*, 10 (1991), pp. 5-26. Las citas sobre la importancia del tema, en E. Ucelay da Cal, «Ideas preconcebidas y estereotipos...», p. 25; José M. Cuenca Toribio, *La guerra civil de 1936*, Espasa-Calpe, Madrid, 1986, p. 235. Acerca de otros fenómenos equiparables, y para añadir a las referencias ya citadas, se ha consultado también E. H. Carr, *La Revolución Bolchevique (1917-1923)*, Alianza, Madrid, 1973 (1950); Charles Bettelheim, *Les luttes de classes en URSS. 1ère période 1917-1923*, Seuil/Maspéro, París, 1974 (Siglo XXI, Madrid, 1976); Jacques

asimismo una modesta atalaya desde la que observar temas de permanente actualidad como los comportamientos de los individuos y colectivos ante situaciones críticas. Situaciones como una guerra y una revolución, cuando los límites de la vida y la muerte están, siquiera por un corto verano, borrados por la tormenta.

Baynac *et al.*, *El terror bajo Lenin*, Tusquets, Barcelona, 1978; y Nicolas Werth, «Un État contre son peuple. Violences, répressions, terreurs en Union soviétique», en el contestado S. Courtois *et al.*, *Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression*, R. Laffont, París, 1997, pp. 53-379 (Planeta-Espasa, Barcelona-Madrid, 1998). Por lo demás, la comparación con las represiones en la Francia y la Rusia revolucionarias no es caprichosa, habida cuenta que no sólo se trata de los casos más conocidos, sino que entre los propios revolucionarios españoles de 1936 abundan las alusiones a ambos precedentes. Sin ir más lejos, el presidente del Consejo de Aragón (1936-1937) afirmaba sin ambagues que «si Francia triunfó en sus principios revolucionarios fue porque [...] el pueblo, cual torrente que no halla dique a su paso, practicó su justicia, una justicia seca, árida, pero justicia fuerte y viril»; y acto seguido se preguntaba si «la magnífica página que escribió el pueblo ruso al libertarse para siempre de la tiranía y la opresión hubiera sido posible sin los torrentes de sangre que le dieron colorido ideológico»: *Texto taquigráfico del discurso pronunciado...*, Nuevo Aragón, Caspe, 1937, p. 9.

I

DÍAS DE LLAMAS: SUBLEVACIÓN, GUERRA Y REVOLUCIÓN EN ZARAGOZA

1936: es verano en Caspe y, lánguida, la ciudad parece reposar. La sobremesa se alarga y un sol de justicia y plumizo cae, implacable, sobre el Bajo Aragón. Pero hoy, como en los días pasados, tampoco dormirá nadie la siesta. Una tormenta parece haberse desatado en las calles a juzgar por el griterío que sube desde las huertas. Numerosos chicos se unen curiosos a la multitud que, expectante, se agolpa frente al Ayuntamiento. Al balcón salen varios hombres, caspolinos y forasteros, uno de ellos atado, visiblemente angustiado y, según parece, sangrando. Es el comandante retirado Antonio Guiu Guiral, que es «exhibido» a «la masa inmundada, babosa, que abajo lo esperaba como tigres hambrientos». La ceremonia es rápida: uno de los de arriba increpa a la muchedumbre que decida la suerte del detenido, y entre los gritos y silbidos que responden, se eleva el grito «¡que lo maten!». De forma inmediata, el militar es bajado a la plaza y, rodeado por hombres armados y por una multitud vociferante, conducido hasta el cementerio en un «martirio» de empujones, golpes y pinchazos que dura casi una hora. Allí, bajo el mismo sol de julio, caerá sobre él una justicia fundida en el plomo de las balas mientras, todavía en la plaza, los chicos se preguntan aún qué está pasando y por qué...¹

¹ Testimonios orales de Agustín Vicente, Caspe, 24-1-1998; D. P. C., Zaragoza, 19-1-1998; Antonio Gambau, Caspe, 18-3-1999; José Gavín, Caspe, 19-3-1999; y Rogelio Maza, Caspe, 20-3-1999. F. Morales, *Caspe combatiente, cautivo y mutilado*, pp. 71-77, cáustica narración del episodio (cita en p. 74). Más datos y parecidas descripciones en S. Cirac, *Los héroes y mártires de Caspe*, pp. 134-136; y AHN, CG, legs. 1423(1), 1424(2) y 1429(1), con informes especiales,

Lo que sucedía era que en aquel verano había llegado al campo zaragozano una imprevista y poderosa tormenta. Ella lo trastornaría todo y precipitaría a las páginas de la historia a gente común, nombres que quizá nunca habrían tenido lugar en ellas de no haber aparecido en los listados de «caídos por Dios y por la Patria» o en las relaciones de «rojos» sospechosos de sus muertes. Rostros anónimos que, como sus antepasados, vivían en un mundo rural cruzado de solidaridades verticales y subordinaciones, de consensos y conflictos y de relaciones personales. Pero ese mundo se vería profundamente convulsionado, durante unos días de llamas, por la doble marea que significó la llegada conjunta de la guerra y la revolución.

EL ASALTO A LA REPÚBLICA Y EL INICIO DE LA GUERRA EN LA PROVINCIA

El comienzo de esta historia se sitúa el 18 de julio de ese 1936 con el levantamiento de buena parte del ejército español contra el régimen republicano. Ese golpe militar, temido por unos y ansiado por otros al menos desde las elecciones de febrero, no logró el triunfo previsto, pues sus planes se vieron frustrados por la derrota de los insurgentes en la mayoría de las grandes ciudades. El resultado, tras unos días en los que todo sucedía de forma tan confusa como acelerada, fue la división del país en dos zonas y, como pronto comenzó a quedar patente, el inicio de una guerra civil de imprevisibles consecuencias e incierto desenlace. El golpe no acabó por tanto con el Estado republicano pero, al ocasionar

debido a que esa muerte fue elegida «el hecho más destacado» de la provincia. Ello le llevará a aparecer junto a los «elegidos» de otras provincias en *La dominación roja en España*, p. 69. A. Guiu, retirado acogiéndose a la Ley Azaña, notorio derechista y gran propietario, había tenido varios conflictos con los campesinos por su negativa a aplicar las leyes sociales de la República con sus trabajadores y con los de la Sociedad de Regantes que presidía; en julio del 36 dirigió la defensa de Caspe contra los milicianos desde la muerte del capitán de la Guardia Civil Negrete.

una profunda fractura en el ejército y en las fuerzas de seguridad, le abocó a un casi completo colapso, a un «estado de subversión generalizada» que acabó con las instituciones republicanas y abrió la posibilidad de un proceso revolucionario súbito y violento. Ahí radicaría la paradoja; «la revolución real es la respuesta a una contrarrevolución emprendida frente a una revolución supuesta». Un *putsch* militar destinado a frenar radicalmente las aspiraciones democratizadoras y revolucionarias del momento tuvo el efecto de desencadenar precisamente una revolución que, de otro modo, probablemente nunca hubiera llegado.²

Durante los primeros días, no obstante, nada parecía indicar que fuera a llegar a la provincia de Zaragoza, máxime después de que el general jefe de la V División Militar, Cabanellas, se sumara a la sublevación militar con todas sus tropas y ésta comenzara a extenderse por toda la provincia. El relato de los hechos es ya sobradamente conocido: tras una jornada plena de vacilaciones, noticias confusas y esperas, la sublevación tiene lugar en la capital de la provincia la noche del sábado 18 de julio, y se confirma a la madrugada siguiente con la aparición del estado de guerra firmado por el propio general. Rebelado el ejército y sumadas a éste las fuerzas de Asalto y de la Guardia Civil, poca resistencia podía oponer la población civil, incluida la encuadrada en la poderosa CNT zaragozana. Pese a los lamentos posteriores sobre su pasividad como causa del triunfo de la sublevación, la respuesta obrera no podía pasar en esas circunstancias de algunos tiroteos nocturnos en las barriadas obreras y de una huelga general revolucionaria que pronto sería descabezada y reprimida con contundencia.³

² Julián Casanova, «Rebelión y revolución», en *Víctimas de la guerra*, pp. 60-62, y Julio Aróstegui «Los componentes sociales», de cuya pág. 48 proviene la cita sobre la paradoja. El primer entrecomillado es de G. Sánchez Recio, *Justicia y guerra en España: los Tribunales Populares*.

³ Siguiendo las tantas veces citadas instrucciones de Mola del 31-5-1936 (Archivo General Militar de Ávila, en adelante AGMA, Documentación Nacional:

Habiendo triunfado en la capital, el golpe pronto pudo derramarse sin excesivos problemas por toda la provincia, donde se contaba con el Regimiento de Artillería de Calatayud y con los retenes y puestos de la Guardia Civil, rápida e incondicionalmente adheridos a la rebelión. Ellos se encargarían de cumplir las órdenes de los dirigentes de la sublevación respecto a destituciones de los ayuntamientos, nombramiento de nuevas gestoras municipales y detenciones inmediatas de dirigentes y activistas izquierdistas. Las resistencias, no podía ser de otro modo, fueron poco numerosas y aún menos efectivas, pero existieron y fueron de tres tipos. En unos casos fueron leves convocatorias de huelgas agrícolas. En otros se trató de débiles hostigamientos a las nuevas autoridades por partidas de izquierdistas que se habían echado al monte para evitar la represión de los sublevados; algunas de ellas, en ocasiones muy numerosas, lograrían tras no pocas penalidades alcanzar la zona republicana, engrosando allí milicias y batallones —como el llamado «Cinco Villas» por la procedencia de sus componentes— y contribuyendo con sus relatos y presiones a la radicalización de las posturas vindicativas.⁴ Por último, el tercer tipo de resistencias consistió en algunos choques armados dispersos por casi toda la geografía zaragozana que requirieron la intervención de «columnas de castigo» de militares, guardias civiles o falangistas para

armario 31, leg. 4, carpeta 8). Sobre la sublevación en la capital de la provincia, AHN, CG, leg. 1426, pieza 2^a, fs. 8-10 y 31-36; *Heraldo de Aragón*, 24-7-1936, 25-7-1936 y 18-7-1937; y *El Noticiero*, 23-7-36, en el que aparece el bando que declaraba el estado de guerra; José García Mercadal, *Frente y retaguardia*, Tip. La Académica, Zaragoza, 1937, pp. 131-151; Vicente Gracia, *Aragón, baluarte de España*, El Noticiero, Zaragoza, 1938, pp. 17-30 y 43-48; El Tebib Arrumi, *Soñaba el rojo con Zaragoza... Huesca... Teruel*, Edic. España, Madrid, 1940, pp. 15-33; J. Arrarás (dir. lit.), *Historia de la Cruzada Española*, IV, pp. 196-225; J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, pp. 80-89, aunque la más completa exposición está en J. Cifuentes y P. Maluenda, *El asalto a la República*, pp. 13-30.

⁴ Un ejemplo sería la expedición de unos doscientos huidos de Ejea que alcanzó la «zona roja» por Tardienta a principios de agosto del 36: Dionisio Lacasa, *Historia de un hombre de Cinco Villas*, Ed. Autor, Zaragoza, 1982, pp. 19-26.

ser «pacificados». La mayor parte de esas resistencias armadas se produjeron en pueblos de las comarcas de Cinco Villas y Borja, seguidas por las de Calatayud y Zaragoza; en suma, y no por casualidad, las de mayores índices de afiliación a sindicatos y partidos de izquierda. Sería el caso, por ejemplo, de Sos, Mallén, Gallur, Torres de Berrellén o Zuera, sólo sometidos por la fuerza de las armas y con un número variable de muertos en las luchas, anticipo de los que habrían de venir pronto por la represión de los sublevados.⁵

No obstante en algunos casos, casi todos de nuevo en las Cinco Villas, esas resistencias vinieron acompañadas por otro tipo de muertes. Así, en Farasdués, con las fuerzas de la Guardia Civil y Falange de Ejea entrando a tiros, dos de los izquierdistas que huían apuñalaron al juez municipal y antiguo alcalde al cruzárselo cuando éste iba a recibirlas. Mientras tanto, dos labradores de Pradilla de Ebro eran asesinados cuando se toparon en el campo con una partida de sesenta y cinco convecinos que huían hacia los montes de Zuera. Y por último, varios vecinos de Uncastillo que se escondían por los montes cercanos de la represión franquista matarían a un derechista de esa misma localidad y, días más tarde, a un falangista de Malpica Arba que servía de enlace a los sublevados. Antes de todo ello, sin embargo, durante los días en que los izquierdistas controlaron la

⁵ El estudio de esa represión ha sido elaborado en J. Casanova *et al.*, *El pasado oculto*, y en J. Cifuentes y P. Maluenda, *El asalto a la República*. Los tres tipos de resistencias, y un amplio desarrollo de las mismas y de la sublevación en la provincia, en *ibidem*, pp. 138-146. Para otros datos y referencias, véase AHN, CG, leg. 1423 (1), «Informe de Zaragoza. El Movimiento Nacional en la provincia», y los diversos informes por localidades de las piezas nº 2 y 7: legs. 1426 y 1429 (2); E. Colás y A. Pérez, *La gesta heroica de España. El movimiento patriótico en Aragón*, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1936, pp. 100-109; *Historia de la Cruzada*, IV, pp. 115 y 119; *Heraldo de Aragón*, 29 y 30-7-1936; y José Borrás, *Aragón en la revolución española*, César Vígara editor, Barcelona, 1983, pp. 107-112. Para los citados casos de Gallur y Zuera, M^a Ángeles Izquierdo *et al.*, *Me lo han contado y lo cuento. La guerra civil en Gallur*, Asoc. Avempace, Zaragoza, 1999, y D. Gómez Arque, *Zuera y el martirio de sus demócratas*, s. l., 1990, pp. 51-59.

situación en Luceni —sede de un importante sindicato cenetista creado alrededor de una industria azucarera— el farmacéutico derechista Leandro Jané fue tiroteado en la puerta de su casa, convirtiéndose así en la primera víctima de la violencia republicana de la provincia.⁶ Eran las primeras réplicas a la sangre que ya corría abundante a la sombra de la sublevación. Pero, como las otras formas de resistencia o como el potente obrerismo organizado zaragozano, de nada servían ante el poder de un aparato militar y de unas fuerzas del orden que, al menos en esta provincia, había conservado su unidad orgánica así como el monopolio de las armas.

Las comarcas orientales de la provincia no serían a este respecto, al menos en los primeros momentos, ninguna excepción. Incorporadas a la rebelión las comandancias y puestos de la Guardia Civil, no les cabía a los pueblos de esas zonas sino aceptar las destituciones de ayuntamientos y las detenciones, observar las idas y venidas de los guardias y, para los más comprometidos políticamente, huir al mas o al monte más cercano a la espera de tiempos mejores y de que la situación se aclarara. Porque aquellos eran días nerviosos en los que todo era confusión, viajes a las cabeceras comarcales en busca de instrucciones, reuniones al atardecer en cafés y casinos alrededor de los aparatos de radio y, como novela André Malraux en *L'Espoir*, teléfonos echando humo repartiendo órdenes y ávidos de noticias sobre lo que pasaba en cada pueblo. Sin un poder armado que se les opusiera, el estado de guerra fue fácilmente aplicado y los sublevados pronto contaron en principio con el dominio de toda la región. Pero la realidad era que ese dominio, indiscutible en

⁶ Sobre estas muertes, AHN, CG, leg. 1424 (1): rama de Luceni, leg. 1425 (1): ramas de Farasdués, Malpica Arba y Pradilla, leg. 1426: rama de Uncastillo, y leg. 1429 (1): pieza nº 7, fol. 159; *Heraldo de Aragón*, 30-7-1936; *El Noticiero*, 19-7-1938, y la *Historia de la Cruzada*, p. 215. Si creemos a la Causa General, a una de las víctimas de Pradilla le abrieron el vientre en forma de cruz una vez muerto y le cortaron los genitales.

las zonas más cercanas a la capital y en otras localidades populosas, se hacía más precario —y aun irreal— a medida que nos alejamos de las mismas. No en balde, todo dependía de esa cercanía o lejanía, de la llegada o no de retenes sublevados, de la existencia o ausencia de puestos de guardias civiles y de la permanencia o marcha de éstos para concentrarse en las poblaciones más importantes. Las combinaciones de esas variables crearon diferentes situaciones que influirían decisivamente —y por ello nos detenemos en ellas— cuando poco después llegara desde el levante la revolución.

Es en el Campo de Belchite donde esas situaciones apuntan más meridianamente al éxito de la sublevación. Rápidamente «pacificada» a sangre y fuego la cabecera comarcal —los testimonios orales hablan de doscientos a trescientos fusilados en las primeras semanas, incluidas una treintena de mujeres—, su Guardia Civil y su importante contingente de falangistas pudieron comenzar pronto a recorrer la comarca para extender la rebelión. Tarea en la que les ayudarían, con una especie de división geográfica del trabajo, las guarniciones de Azuara y Herrera de los Navarros, aunque no por ello el *modus operandi* dejaba de ser básicamente siempre el mismo. Al paso de estas expediciones se declara el estado de guerra, gestoras derechistas sustituyen a los ayuntamientos frentepopulistas y se detiene a los izquierdistas que no han huido, mientras los montes y parideras se llenan de los que, más prudentes, como en Azuara o Letux, sí lo han hecho. Ahora bien, si el fondo y los resultados son semejantes en todos los casos, hay algunas diferencias en la forma y la actuación de los vecinos de cada lugar. Mientras en algunos pueblos la población no actúa de forma decisiva a favor ni en contra de esas expediciones, en otros falangistas locales o simplemente derechistas secundan explícitamente la sublevación colaborando con los retenes, dirigiendo la persecución de los militantes republicanos y sindicalistas o incluso, como

en Fuendetodos o Lagata, participando en los choques armados.⁷

Mucho menos claro se muestra el panorama en la Ribera Baja. En este caso, al contrario que en el anterior, las fuerzas de la Guardia Civil no sólo no pudieron exportar a los pueblos la sublevación, sino que, tras la inicial declaración del estado de guerra, debieron concentrarse en Zaragoza, dejando sin «asegurar» incluso la cabecera comarcal Pina de Ebro. Así las cosas, la rebelión militar, teóricamente extendida a toda la comarca, en realidad sólo se consolidó en la zona que circundaba a Quinto, cuyas fuerzas de orden público sí habían permanecido en su puesto. Ellas, junto al también nutrido núcleo falangista de Quinto —que había desempeñado un papel decisivo en la derrota de un asalto izquierdista al cuartel— y a una columna militar zaragozana, llevaron provisionalmente a algunas localidades próximas el «glorioso movimiento nacional», con su corolario de destituciones,

⁷ En la localidad natal de Goya los falangistas asaltaron el cuartel de la Guardia Civil, donde se habían refugiado no pocos ugetistas, alguno de los cuales sería allí mismo fusilado; y en Lagata, al entrar los sublevados, el jefe local de Falange obligó al pueblo a darles vivas y encabezó la búsqueda de los izquierdistas huidos. Otras localidades de este segundo grupo serían Codo, Azuara Plenas, Mediana de Aragón o, por supuesto, Belchite. En el primero se situarían Almonacid, Almochuel, Lécera, Moneva, Moyuela o Samper del Salz. *Cfr.* las ramas dedicadas a cada localidad en AHN, CG, leg. 1423 (2), y los informes de la pieza nº 7 (leg. 1429 (1)). También AHN, CG, leg. 1427 (1), anexo 2/5, sumario nº 11 de 1938 del Tribunal Popular de Caspe (Fuendetodos); AGCS, PS Barcelona, carpeta 397 (Lagata) y carpeta 839 (Codo); Archivo Municipal de Mediana, leg 5-6, Correspondencia 1938; *Cultura y Acción*, 18-2-1937 (Azuara); Ángel S. Tomás del Río, *La guerra civil en Plenas*, Asociación Cultural «Manuela Sancho», Plenas, 1991, pp. 15-19. Sobre los fusilados en Belchite, las fuentes republicanas coinciden con los siempre arriesgados testimonios orales y afirman que «durante el largo tiempo que Belchite ha estado dominado por los fascistas, se han cometido en el mismo más de trescientos asesinatos de vecinos del mismo pueblo» de izquierdas, incluidas «las quince o veinte muchachas, algunas menor de 17 años, que formaban en las filas de las Juventudes Socialistas» (AHN, CG, leg. 1427 (2), pieza nº 5, anexo 1/5: veredicto del juicio del Tribunal Popular contra Juliana Lizabe y otros, septiembre de 1937).

detenciones y huidas. Y de nuevo aquí constatamos la diferencia entre los pueblos donde los vecinos apenas participan y esos otros en los que esa participación existe, tanto a favor como en contra del golpe militar; como en Gelsa, donde incluso hay una escaramuza saldada con varias bajas y media docena de detenidos luego fusilados en Zaragoza. En el resto de la comarca, no obstante, prima la incertidumbre, la falta de actuaciones (reducidas a las breves y sangrientas estancias en Pina de dos columnas zaragozanas) y un vacío de poder que la dejaba durante la primera semana «a merced de las primeras fuerzas que llegasen.»⁸

Al Este de la provincia, la comarca de Caspe y los Monegros zaragozanos ofrecen quizá el mejor ejemplo de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos y del influjo que habrían de tener después. El relato es el de unos hechos repetidos de forma semejante por buena parte de la geografía española. El 20 de julio, lunes, el capitán de la comandancia de la Guardia Civil Negrete declara el estado de guerra en Caspe y empieza a organizar patrullas armadas con guardias y voluntarios, tal y como se venía previendo desde semanas atrás en las reuniones nocturnas del Círculo Católico caspolino. En los días siguientes destituye al Ayuntamiento del Frente Popular, sustituyéndolo por «personas de marcada significación derechista», y hay registros y clausuras de las sedes de partidos y sindicatos, detenciones y huidas al campo de izquierdistas y reclutamiento de todos los hombres bajo pena de muerte. A ello se sumará la concentración en Caspe de los cuarenta guardias de la comarca —puestos de Bujaraloz, Escatrón, Fabara, Maella y Sástago—, la organización de la defensa de la plaza y el reparto entre unos doscientos vecinos de

⁸ Juan Cuen, *Mis memorias*, Gráficas Minerva, Zaragoza, 1989, pp. 13-16 (Pina), y cita en p. 15. Los datos sobre los pueblos provienen de nuevo de AHN, CG, legs. 1425 (2) y 1429 (1), pieza nº 7. Para Gelsa, *El Noticiero*, 23-7-1936, y testimonio de Santiago Gonzalvo, Gelsa, 9-1-1999; y sobre Quinto, Archivo Municipal, Ayuntamiento de Quinto, Memoria 1938-48, p. 39.

las armas traídas de Zaragoza en un viaje relámpago. En ese viaje, además, había sido llevado preso el republicano caspolino Rafael Bosque, entonces gobernador civil de Asturias, que sería fusilado poco después, sumándose así a las otras cinco víctimas de Negrete y de sus fuerzas durante esos días. Se había abierto un infierno que abrasaría al país durante veinte meses.⁹

Consolidada la sublevación en Caspe, algunos de esos hechos se repetirán en Bujaraloz al paso de una expedición armada comandada por el propio Negrete. Pero sobre todo se registraron, y no sin dramatismo, en Maella, Fabara o La Almolda, en las que acompañó al paso de esa expedición una decidida movilización armada de la derecha local, con la subsiguiente marcha al monte o hacia la cercana Cataluña de los votantes de izquierdas. O en Escatrón, de la mano de una columna militar zaragozana que pernoctaba camino de Caspe, cuando los derechistas se pusieron a disposición de aquélla para las detenciones y «para ayudarles a esclarecer hechos y practicar registros domiciliarios en los centros extremistas». Por el contrario, sin esos apoyos foráneos y con los guardias en Caspe, en el resto de los pueblos la sublevación no se produciría, se esperaría acontecimientos —«permaneciendo todos los elementos de la localidad indecisos»— e incluso, como en Mequinenza, Nonaspe, Sástago o Cinco Olivas, la izquierda se hizo dueña de la situación y se crearon comités locales. Diferencia ésta que tendría acusadas repercusiones cuando llegaron los milicianos.¹⁰

⁹ AHN, CG, legs. 1424 (2), pieza 1 y 1429 (1), pieza 7; AGCS, PS Barcelona, carpeta 397: «Cómo se produjo el levantamiento fascista en Caspe», 25-1-1937; *Heraldo de Aragón*, 23 y 30-7-1936; S. Cirac, *Los héroes y mártires*, pp. 18-30; F. Morales, *Caspe*, pp. 16-23; *Historia de la cruzada española*, IV, pp. 220-222; y J. Casanova, *Caspe, 1936-1938*, pp. 33-40. La destitución del Ayuntamiento de Caspe por Negrete, en sus actas, Archivo Municipal de Caspe, legs. 3-3 y 32-4. Las víctimas, en el Registro Civil de Caspe, Sección Defunciones, tomo 61, julio de 1936.

¹⁰ AHN, CG, legs. 1424 (2), 1425 (2), y 1429 (1): pieza 7 (de donde proceden los dos entrecomillados); Archivo Municipal de Maella, legs. 1-4 y 1-5: informes personales de conducta (1939). Testimonios de José Cirac, Fabara,

Éstos, como se sabe, habían salido de Barcelona entre vítores y vivas a la revolución y se encaminaban, como rezaban las pintadas en autocares, trenes y coches, «a Zaragoza», donde iban «a afeitarse las barbas a Cabanellas». Vencida la rebelión en la ciudad condal, era el momento de dar vía libre al «entusiasmo antifascista del pueblo catalán, juntamente con el interés de esta región en apartar de sus campos el horror de la guerra», y por tanto de marchar «al encuentro de los enemigos seculares del progreso y de la libertad» para liberar la capital aragonesa. Pero, entusiasmos al margen, su conquista era también una auténtica obsesión y un reclamo movilizador, como lo era el propio grito «¡a Zaragoza!». A la postre nunca llegarían a ella, pero en su avance, y con el poder que en una coyuntura bélica confieren las armas, recuperaron para la causa republicana el partido judicial de Caspe y buena parte de los de Pina y Belchite, desarbolaron la rebelión e inauguraron un proceso, súbito y violento, de cambio social.¹¹

Aunque parece que ya desde dos días antes habían llegado algunos «grupos volantes de impacientes» —grupos de

21-5-1999; Pablo Arbona, Maella, 18-3-1999; María Montañés, Zaragoza, 16-2-1998; y Jacinto Castelló, Mequinenza, 22-5-1999. Bautista Antorán, *Escatrón en el Señorío del Monasterio de Rueda*, Ayto. de Escatrón, 1997, p. 138, y Gastón Leval, *Colectividades libertarias en España*, Aguilera, Madrid, 1977, p. 174 (Bujaraloz).

¹¹ Sobre las columnas de milicianos que entraron en Aragón y su formación, *Nuevo Aragón*, 18-7-1937; José M. Martínez Bande, *La invasión de Aragón y el desembarco en Mallorca*, Edit. San Martín, Madrid, 1989, pp. 66-75; Ramón Salas Larrazábal, *Historia del Ejército Popular de la República*, Editora Nacional, Madrid, 1973, vol. I, pp. 325-333 y 991-999; Jacques de Gaule (seudónimo), *El frente de Aragón*, Círculo Amigos de la Historia, Madrid, 1973, pp. 83-116; y Pelai Pagès, *La Guerra Civil Espanyola a Catalunya (1936-1939)*, Els Llibres de la Frontera, Barcelona, 1997, pp. 55-64. Los entrecomillados proceden de AGCS, PS Aragón, carpeta 25: «Informe del Comité Regional del Frente Popular de Aragón al Pleno de Barbastro», 2-8-1937 (también en AGMA, arm. 47, leg. 72, carp. 1), fs. 4 ss; y de *Solidaridad Obrera*, 25-7-1936. Una descripción algo más pausada, en José M. Márquez y Juan J. Gallardo, *Ortiz. General sin Dios ni amo*, Hacer, Barcelona, 1999, pp. 109-111. Lo de la obsesión y el grito movilizador es de R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. I, pp. 160-161, y lo de las barbas de Cabanellas de José M^a Aroca, *Las tribus*, Acervo, Barcelona, 1972, p. 22.

defensa confederal de Sitges, Santa Coloma o el barcelonés barrio de Gracia—, la entrada de las milicias en la provincia se produciría a partir del día 24 de julio. Precisamente el día en que el diario cenetista *Solidaridad Obrera*, ante las noticias de la masiva represión en la capital aragonesa, pedía la aplicación del «ojo por ojo, diente por diente» y el fusilamiento de todos sus «fascistas». Esas milicias, aunque escasas y deslabazadamente organizadas, se encuadraban genéricamente en dos columnas. Por un lado, la columna comandada por Durruti y Pérez Farrás entraría por la carretera general de Barcelona-Lérida-Zaragoza ocupando Bujaraloz y La Almolda, más tarde Velilla de Ebro, Gelsa, Monegrillo, Farlete, etc., y finalmente, el 8 de agosto, Pina y Osera, donde queda frenado su avance a 30 kms. de Zaragoza. La otra columna principal, la de Ortiz, lo haría por el extremo sudoriental, apoderándose progresivamente de Sástago, La Zaida y de varias localidades turolenses, para resultar rechazada finalmente frente a Belchite y Quinto. En esa labor sería ayudada por la columna «Carod-Ferrer», que cubría su flanco sur y que a la postre se integraría en ella tras ocupar buena parte del Campo de Belchite.

Sin embargo, hasta ese rechazo en la línea de contención de los sublevados, en la que se estrellaron una y otra vez y acabaron asentándose, ambas columnas avanzaron sin grandes complicaciones. Frente a los cantos libertarios a la «proeza digna de ser cantada» y el «esfuerzo titánico» de los milicianos, el suyo fue en general un avance por pueblos de los que las fuerzas rebeldes habían debido retirarse y en los que a menudo se entraba sin disparar un solo tiro. Tiros y bajas hubo muchos cerca de Sástago, lugar en el que la columna de Ortiz chocó con un regimiento de caballería de Zaragoza que debió replegarse hacia Quinto. Los hubo también en Samper del Salz, donde una columna «itinerante» de falangistas y guardias civiles se vio sorprendida por la entrada de los milicianos. O también en Fuendetodos, cuando los defensores del lugar se refugiaron en la torre de la iglesia desde donde dispararon hasta ser reducidos. Pero, en la mayoría de

los casos, lo que las columnas encontraban al entrar era, como en Plenas, retenes sublevados y vecinos que se entregaban o huían en la dirección contraria, y otros que salían a recibirlos o se incorporaban a ellas desde mases y montes. O, como en Letux, calles semidesiertas y numerosos habitantes esperando en parideras y corrales de las afueras a que la situación se aclarara para decidir si volver o huir. No otra cosa se podía hacer ante fuerzas mayores en número y armadas; días o semanas más tarde, y aunque con protagonistas muy diferentes, la historia se repetía.¹²

La gran excepción a ese panorama será la toma de Caspe, la única que sobreviene tras una «batalla» entre milicianos y sublevados y hecho decisivo para la suerte de toda la zona. La lucha comenzó la tarde del mismo día 24, cuando algunos de los citados «grupos impacientes» que se dirigían a Zaragoza se desviaron hacia Caspe, pero sólo se consumó la toma de la plaza al día siguiente, añadidas a ellos fuerzas militares y milicianas —el propio Durruti inclusive— y artillería de la guarnición de Lérida. E incluso los combates aún rebrotaron unas horas después, a la llegada de una columna militar zaragozana que intentaba auxiliar a los sublevados, y que en este caso fue rechazada a la entrada de la ciudad por las primeras fuerzas llegadas de la columna de Ortiz. Durante

¹² Los datos sobre el avance de las columnas y los pueblos están extraídos del AGMA, armario 10, leg. 448, carpeta 7; AHN, CG, legs. 1423 (2)-1425 (2) y 1429 (1); J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, p. 96.; y de las obras de Martínez Bande, Salas y de Gaule citadas en la nota anterior. Para dos casos concretos, Miguel Plou Gascón, *Historia de Letux*, Ayto. de Letux, 1989, pp. 340-341, y A. Tomás, *La Guerra Civil en Plenas*, pp. 19-22. Como ejemplos de tomas de pueblos, véase la narración de la de Maella en *Nuevo Aragón*, 18-7-37, Samper en *Heraldo de Aragón* del 11-8-1936, o las de Bujaraloz, Sástago y La Zaida en *Solidaridad Obrera*, 13-8-36 y 25-8-36, de donde procede el entrecomillado. Para esa última localidad, véase también Rafael Miralles, *Memorias de un comandante rojo*, San Martín, Madrid, 1975, pp. 56-58. Lo de los «grupos impacientes» es de A. Ortiz, en su citada biografía, pp. 111-112, pero su mejor descripción está en Miguel García, *Miguel García's Story*, Cienfuegos Press, Orkney, 1982, pp. 35-40, donde también hay una buena descripción de un ataque rechazado a Belchite.

todas esas luchas hubo una defensa tenaz por los sublevados, un gran gasto de municiones, combates intensos calle por calle y decenas de muertos. Tampoco faltaron episodios dramáticos, como los protagonizados por el capitán de la Guardia Civil quien, antes de caer muerto y loco de excitación, mató a varios caspolinos —además de a su segundo por censurárselo— y utilizó a varias mujeres e incluso a una niña como parapeto frente a las balas milicianas. Episodios que ya no se repetirán en el resto de la comarca pues, caída su capital, bastó a los columnistas con enviar algunos grupos armados al resto de los pueblos, a los que entrarían en los días siguientes sin más novedad.¹³

Pero novedad era, y mucho, para los que les vieron entrar. Alabados como «héroes homéricos» y providenciales libertadores del yugo fascista por unos, y temidos como terribles invasores forasteros por otros, lo cierto es que la llegada y entrada de estos milicianos armados, sucios y medio desnudos por las marchas y el calor, impresionó vivamente a los habitantes de estas comarcas y supuso un cambio súbito y violento de las tradicionales relaciones sociales. Porque con ellos no llegaban sólo la derrota de los «fascistas» y la guerra, sino que, como le decía uno de ellos a un entonces joven de 19 años, «traemos la revolución».¹⁴ En todo caso, con esas

¹³ La toma de Caspe, en AHN, CG, leg. 1424 (2), rama de Caspe; *Heraldo de Aragón*, 30-7-36, 2-8-1936 y 4-8-36; *Solidaridad Obrera*, 26 y 30-7-36, 3-9-36; Entrevistas a D. Gargallo, Caspe, 24-1-1998, y A. Gambau, 18-3-1999. F. Morales, *Caspe combatiente*, pp. 29-59; S. Cirac, *Héroes y mártires*, pp. 25-35; *Historia de la cruzada española*, IV, pp. 220-224; y sobre todo el relato de un protagonista en *Miguel García's Story*, pp. 37-40, y las recientes memorias de Agustín Camón, *Crónicas del 36*, Mira, Zaragoza, 2000, pp. 32-39. Sobre las brutalidades de Negrete y el episodio del parapeto humano (confirmado por todas las entrevistas orales) como desencadenantes de la violencia posterior, *Solidaridad Obrera*, 3-9-36, *Nuevo Aragón*, 22-4-37 y Rogelio Maza, *Caspe, julio de 1936. Mis recuerdos de una semana*, editado por el autor, Caspe, 1993, pp. 14-15. «La toma de Caspe» merecería incluso un poema de ese título a Manuel Altoaguirre, recogido en el *Romancero General de la Guerra de España*, Edics. Españolas, Valencia, 1937.

¹⁴ Testimonio de M. M., Zaragoza, 15-3-1998. Las referencias a esos sucios, inmorales y «extranjeros» invasores milicianos abundan en obras como F. Morales,

tomas y avances se fue formando en las primeras semanas el llamado frente de Aragón, definitivamente fijado en noviembre de ese mismo año, al menos hasta la ofensiva republicana del verano siguiente. Ese frente abarcaba un sinuoso trazado de norte a sur desde la Sierra de Alcubierre hasta el alto valle del Jiloca, pasando por los salientes de Quinto y Belchite, que quedarían en zona franquista hasta la citada ofensiva. A su levante un mundo parecía desmoronarse y otro amanecer sobre sus escombros, su sangre y sus cenizas.

ASAITO AL ORDEN SOCIAL O EL OCRE AMANECER DE LA REVOLUCIÓN

En efecto, ese nuevo mundo al que todos llamaban revolución y del que se decía que su epicentro ya no estaba como al principio en Barcelona, sino que «se esparce por los pueblecitos de la desolada campiña aragonesa», parecía querer definirse por la radical transformación del anterior. Los cambios eran demasiado patentes como para poder obviarlos y afectaban a todas las dimensiones de los pueblos, desde las relaciones sociales, económicas y políticas hasta los referentes simbólicos, pasando por la propia apariencia externa de las calles, improvisados escenarios durante unas semanas de la vida comunitaria en todas sus facetas. Incluida la muerte. Los omnipresentes fusiles y cartucheras, el continuo ir y venir de lujosos coches requisados y milicianos forasteros, los puños en alto y la ausencia o miedo de los ricos y derechistas recordaban a cada paso que algo había cambiado. Como lo recordaban los nuevos sonidos que dominaban los días: saludos revolucionarios, gritos repitiendo las iniciales de las sindicales y lemas contra curas y «fascistas», bandos del

Caspe combatiente, pp. 79-86; S. Cirac, *Héroes y mártires*, pp. 37-53; o la *Historia de la cruzada española*, IV, p. 224, aunque la mejor recreación es la de Susan F. Harding, *Remaking Ibieca. Rural life in Aragon under Franco*, University of North Carolina Press, Chapel Hill-London, 1984, pp. 61 y 76 (edic. castellana en Instituto Aragonés de Antropología, 1999). Lo de héroes homéricos, en *Solidaridad Obrera*, 30-8-36.

comité y disparos nocturnos que sustituían al secular tañido de las campanas. O incluso los nuevos colores que habían invadido las calles, como el azul de los monos milicianos y, sobre todo, el rojo de los trapos en los balcones y de los pañuelos al cuello, auténticos «signos de afirmación antifascista».¹⁵ Pero también había otros cambios que resultaban más palpables y que, en todo caso, tenían mayores y más inmediatas implicaciones. En Pina de Ebro, como en otros tantos lugares, con la llegada de los milicianos se inicia la «normalización de la vida» en la localidad. Inmediatamente se crea un comité de defensa —«de acuerdo con los que forman parte del que dirige la columna»— y un comité de abastecimiento, se incauta el Ayuntamiento y varias casas, así como los bienes y tierras de los «fascistas» para entregarlos a los campesinos, y se organiza el funcionamiento de pequeñas industrias como los molinos harineros; poco después, además, era creado un sindicato de la CNT e inaugurado un Ateneo de Cultura Popular.¹⁶

Sin embargo, si todo quería cambiar a la voz mágica de la revolución, no todos los cambios serían tan pacíficos. Muchos creían que la nueva sociedad precisaba «que inexorablemente desaparezca... todo lo viejo que hasta ayer fue eternidad pasada. Nada ha de salvarse»; y opinaban incluso que esa destrucción era no sólo necesaria sino también bella:

¹⁵ Trapos y pañuelos que encontramos en Caspe, Luesma, Belchite, Plasas, Pina, etc. nada más entrar los milicianos. También en Maella, donde «todos los balcones se llenaron de pañuelos y trapos blancos, mas dos horas después ya eran rojos»: *Nuevo Aragón*, 18-7-1937. O en La Zaida, donde significativamente obligaron al cura a ponerse un lazo de ese color en el brazo (*Heraldo de Aragón*, 2-8-1936). En no pocas ocasiones, no obstante, eran lucidos para salvar el cuello que cubrían. *Cfr.* Gamel Woolsey, *Málaga en llamas*, Temas de Hoy, Madrid, 1998, p. 70. La expresión «signos de afirmación antifascista», en M. Ors, *La represión de guerra y posguerra en Alicante*, p. 229. La cita inicial sobre la extensión de la revolución, en *Solidaridad Obrera*, 12-8-1936.

¹⁶ *Solidaridad Obrera*, 13-8-1936 y *El Frente*, 19-9-1936. Descripciones similares referidas a otros pueblos hay muchas, como la de Maella en *Nuevo Aragón*, 18-7-1937.

«prefiero el dulce sonido que produce el choque contra el pavimento de una iglesia por la cabeza de un santo, a la más armónica sonata de Beethoven».¹⁷ Y de hecho las primeras actuaciones de los milicianos apuntaron en todos los casos en esa precisa dirección.

Dirección por la que se llegaba por ejemplo a los famosos saqueos, pues, ya se sabía, «las turbas no llevan más consigna que la del pillaje». El asunto está capciosamente magnificado por las fuentes franquistas e incluso por la crítica de las organizaciones antifascistas no confederales, pues se equiparan los saqueos de la primera hora y las posteriores requisas e incautaciones de comités y milicias —con actores, orígenes y móviles diferentes—, lo que a menudo dificulta discernir cuándo se trata de una u otra cosa. No obstante, saqueos hubo en buen número y en buena parte de los pueblos en los primeros momentos al paso de las columnas. Sus objetivos eran las casas y mobiliario de los que se habían significado en la sublevación o habían huido, pero sobre todo sus tiendas y comercios. De este modo, el mismo día de la toma por los milicianos, en Farlete o Escatrón se tiraban por la ventana los muebles de las familias acomodadas, en Plenas se saqueaban las casas de los huidos de derechas y en Osera corrían la misma suerte dos tiendas de ultramarinos y tres casas que significativamente eran las del cura, el médico y el secretario del Ayuntamiento. Según los testigos, «resultaba chocante la prisa que se dieron en arrojar a la calle el mobiliario y ajuar de los que consideraban desafectos». Mientras, en Caspe, según un informe de su comité revolucionario fechado cuatro meses después, en los dos días que siguieron al combate sucedió lo mismo con dieciséis domicilios y tres comercios de tejidos. A la siempre difícil relación de campesinos con comerciantes —relación de deudas, dependencia y créditos usureros— se unía en los tres casos la participación activa de los segundos en la rebelión militar. Al parecer, todo

¹⁷ José Mavilla, «Rumbos nuevos», *Boletín del Consejo de Aragón*, 4-12-1936.

comenzó cuando un miliciano, al ver la miserable vestimenta de un campesino, forzó la entrada de una de las tiendas, cuyo dueño decían huido, y le dio un traje, lo que imitaron otros muchos y pronto se extendió como la espuma a los dos establecimientos vecinos. Como en Velilla de Ebro unos días después, los milicianos saqueaban y lo repartían entre los vecinos, como repartían el dinero, cuando no lo quemaban, pues «como ya no va a valer, lo mejor es quemarlo».¹⁸

Sin embargo, no serían esas las actuaciones más frecuentes ni tampoco las más significativas en cuanto al asalto al inmediato pasado. Otras acciones, igualmente tempranas y de un mayor y profundo sentido simbólico, desempeñaron más directamente ese papel. Pronto, normalmente el mismo día de la entrada de los columnistas, se procedió a las destrucciones o actos representativos de la caída de las viejas formas de poder social. El fuego, elemento purificador por excelencia, se encargaría en todos los casos de ello. Como en Maella, donde, según un relato sumamente revelador, «se ha quemado todo documento, todo comprobante, que del pasado pudiese hacer memoria, manchando con su recuerdo la nítida grandeza de la obra emprendida». De ese modo ardieron archivos parroquiales, registros civiles y de propiedad, protocolos notariales, listas de morosos y, en suma, toda cadena y referente que ligaran a un pasado con el que se quería hacer, como los campesinos franceses que quemaban castillos, libros y títulos feudales y derribaban estatuas reales en 1789, *tabula rasa*. Como entonces, y al igual que en tan-

¹⁸ Testimonio de A. Gambau, Caspe, 18-3-1999; R. Miralles, *Memorias de un comandante rojo*, pp. 48-49; y el citado informe, ubicado en AHN, CG, leg. 1429 (2): anexo 1/8. Para el resto de los pueblos se puede seguir, con las precauciones apuntadas, en la piezas nº 1 (legs. 1423 (2)-1426) y nº 7 y 8 (legs. 1429 (1 y 2)), del mismo fondo documental. Los datos del texto proceden de ahí y de B. Antorán, *Escatrón*, p. 138, y A. S. Tomás, *La Guerra Civil en Plenas*, p. 22, pero la cita del pillaje proviene de *Heraldo de Aragón*, 2-8-1936, mientras que lo de la prisa en arrojar ajuares y la frase de un miliciano sobre quemar el dinero es de A. Camón, *Crónicas del 36*, p. 41.

tas otras coyunturas semejantes, no se trataba de un mero destruir por destruir ni de un simple y llano «vandalismo». Era antes bien un ataque a las instituciones garantes del orden social, un asalto a las representaciones del poder sobre el que «se fundaba simbólicamente la Revolución» y, sobre todo, una batalla simbólica en la que el nuevo presente buscaba borrar las «impuras» huellas del pasado conquistando el espacio ritual. El *shock* que ocasionó en los vecinos que lo vieron confirmaría no sólo ese carácter simbólico sino también su funcionalidad y efectividad en aquellas circunstancias.¹⁹

Ahora bien, si de tabla rasa, afirmación revolucionaria y *shock* se trata, la persecución de los símbolos de la Iglesia es el caso por excelencia. Quizá no haya que dramatizar, habida cuenta de que en la mayoría de las ocasiones «no pasó de una simple hoguera junto a las iglesias». Pero las dimensiones e implicaciones de esa persecución resultan incuestionables. Todos los pueblos de la retaguardia zaragozana sin distinción experimentarán este tipo de acciones al alba de la revolución, incluidos aquellos —como Aguilón, Almochuel, Alborge, Monegrillo o La Zaida— donde no se registró después ningún fusilamiento. Y en todos se trata de la primera actuación de los que traían el sueño emancipatorio tras sus fusiles y pañuelos rojos. O de la única, como en Alborge, donde tras las consabidas quemas de imágenes y la designación de un comité, los milicianos se volvieron a Sástago y ya sólo regresaron esporádicamente en un pequeño grupo «de Investigación». La generalización del fenómeno hace pensar

¹⁹ El profundo significado de esos hechos, en Franz Borkenau, *El reñidero español*, Ruedo Ibérico, París, 1971, pp. 81-82; G. Woolsey, *Málaga en llamas*, pp. 57-59, y S. F. Harding, *Remaking Ibiaca*, p. 63 (de donde lo del *shock*). G. Lefebvre, *La Grande Peur de 1789*, y Claude Langlois, «Le Vandalisme», *L'Histoire*, 99 (avril 1987), pp. 8-14, de cuya p. 10 procede lo de la fundación simbólica. Para la significación simbólica del fuego, A. Soboul, «Violence collective et rapports sociaux», p. 579. El relato de Maella es del *Boletín de Información CNT-AIT-FAI*, 14-9-1936. En las diferentes ramas de la CG de Zaragoza, aparecen 14 casos de incendios de archivos parroquiales, 22 de archivos locales y 14 de archivos judiciales o registros civiles.

por tanto en una persecución obsesiva por parte de los que venían, pues son siempre ellos los que los llevan a cabo; junto a ellos, sólo excepcionalmente colabora algún izquierdista local, mientras que el común del vecindario se abstenía, miraba curioso o incluso, por ejemplo en Villar de los Navarros, Fayón o Farlete, era «obligado por las fuerzas rojas» a colaborar en el transporte de las imágenes hasta la pertinente hoguera en la plaza mayor.²⁰

Persecución obsesiva, por tanto, y tal vez acalorada, mas no irracional. A menudo sus ejecutores mostraban, como en Alforque, una orden firmada por algún jefe de columna o de sector que imponía la quema de santos e imágenes de la iglesia. En todo caso, el procedimiento era casi siempre el mismo. En Moyuela, aunque los ejemplos pueden multiplicarse, «el primer acto que realizaron [los revolucionarios] fue el saqueo de la casa del cura y [...] la quema de la Iglesia Parroquial y de las tres ermitas», además de las burlas y arrastre por las calles de todas sus imágenes hasta el río, donde arderían en una hoguera. Aquí, además, se suma a ello la profanación de varios cadáveres del cementerio y del panteón de la Iglesia, los cuales —sobre todo el del arzobispo Pedro Apaolaza— acabarían asimismo entre las llamas. No fue la norma pues, cuando tenían lugar —caso de Caspe, Codo, Escatrón, Fabara, Lécera, Letux, Monegrillo, Osera, Pina y Plenas—, el final de estas profanaciones solía ser esparcir los restos por el suelo, pisotearlos o llevarlos a una

²⁰ En Herrera de los Navarros, ante la oposición de los vecinos a esto último, la respuesta de los milicianos fue darles fuego en la propia iglesia. Lo de forzar a los milicianos se refiere a Farlete: CG, leg. 1425 (2). Según los informes de los ayuntamientos (estadillos nº 3) y de las parroquias (AHN, CG, piezas 1 y 10 de Zaragoza), en todos los pueblos hubo destrucciones de este tipo. Para el caso de Caspe, F. Morales, *Caspe combatiente*, pp. 79-86, y S. Cirac, *Héroes y mártires*, pp. 37-53. Los datos citados de los pueblos proceden de sus respectivas ramas en AHN, CG, pieza nº1, así como de su pieza nº 7, leg. 1429 (1), fs. 93-94 (Alborge). Y de la carta del presbítero de Cariñena a I. Bersabé, en Archivo Diocesano de Zaragoza, caja 3243-correspondencia, 1902-1919-1937. Lo de desdramatizar es de M. Ors, *La represión de guerra y posguerra en Alicante*, p. 25.

fosa común. Pero, como en Moyuela, algunos acabarían pasto de las llamas en Chiprana y Velilla de Ebro o decapitados en Fuendetodos.²¹ Era el acto supremo de asalto al orden pretérito, aquel en el que se atacaba a sus representantes incluso después de muertos.

Pero con profanaciones o sin ellas, eran las llamas las que acabarían con tanto «oscurantismo» y tanta representación del pasado. Relicarios, crucifijos, santorales, pequeñas imágenes o medallones de particulares, que éstos debían entregar si no querían ser vinculados a los «fascistas», estaban entre los combustibles de esos fuegos del estío revolucionario. Pero el preferido lo constituían, apiñados en informes montones, altares, cuadros, motivos de hornacinas y, sobre todo, imágenes de santos y vírgenes. Algunas pudieron salvarse de esas primeras llamas, aunque para alimentar otras posteriores, de menor valor simbólico pero más concreto: las de los hornos de herreros y panaderos en Samper del Salz, La Almolda o Bujaraloz; las de la calefacción y los guisos del comité en Villar de los Navarros; o las de unos improvisados «fuegos artificiales» en Pina, cuando un día de fiesta fue celebrado metiendo balas y explosivos en las imágenes para hacerlas explotar. Pero en la mayor parte de las ocasiones acabaron en la hoguera pública, a veces tras ser arrastradas por el piso, como en Nonaspe, «hasta que se desprendió la cabeza del tronco», tras practicar con ellas el tiro —Fabara— o, de forma más común, caso de Caspe, tras decapitarlas y «pinturrujearlas».²²

Y por supuesto, el fuego purificador alcanzó a las iglesias, esos lugares vedados a la vida diaria, espacio ceremonial de todos los grandes ritos de paso de la vida rural desde gene-

²¹ Siempre de acuerdo con las fuentes franquistas: *El Noticiero*, 25 y 29-3-1938; AHN, CG, pieza nº 10, leg. 1429 (2): Informe del Arzobispado de Zaragoza, 20-5-1941, ff. 19-61. La referencia a Alforque, en *ibidem*, leg. 1425 (2). Por su parte, los casos de «profanación», burlas y mofas de las imágenes son mucho más numerosos.

²² *El Noticiero*, 20-3-1938 (Caspe) y 10-9-1954 (Nonaspe); y Archivo Municipal de Fabara, leg. 42-18.

raciones atrás y que para muchos representaba mejor que nada el orden de siempre. En ninguno de los casos fueron completamente incendiadas, en muchos sólo lo fueron muy parcialmente y en algunos los vecinos supieron o pudieron conseguir que los milicianos —siempre ellos— no les aplicaran las llamas y se contentaran con la quema de las imágenes, tal como ocurrió en Almonacid, Fayón o Bujaraloz. De todos modos, el ataque directo al principal espacio referencial de la vida comunitaria representó siempre el mayor de los asaltos simbólicos al pasado. Mientras los niños asistían al evento «como a una fiesta, con las insignias rojinegras que nos daban los milicianos», y cantos, chistes y burlas acompañaban a estos actos, las fuentes hablan de la actitud entre temerosa e impresionada —de «cobardía» o «pasividad» habla la «Causa General»— de la mayoría de la población ante el fuego. Actitud que llevaría a que, en casos como Caspe, «la Iglesia Parroquial se quemó que nadie la apagó, hasta que quiso arder». Después, y como culminación de la misma secularización del otrora espacio sagrado, todas las iglesias cerrarían al culto, se verían despojadas de sus campanas y serían convertidas en mercados de abastos, almacenes, albergues y comedores para milicianos, refugios contra bombardeos, comedores, cárceles, talleres y garajes o, no sin su cierta carga simbólica, en salas de fiestas, cines y establos.²³

²³ *Cfr.* para una interpretación antropológica de estos actos Manuel Delgado, «Anticlericalismo, espacio y poder. La destrucción de los rituales católicos, 1931-1939», en R. Cruz (ed.), «El anticlericalismo», *Ayer*, 27 (1997), pp. 149-180. Por ejemplo, en Villar de los Navarros, Bujaraloz, Mediana o Escatrón la iglesia hizo de almacén; en Caspe, Mequinenza, Moneva y Lécera fue garaje y taller; en Sástago, Fuendetodos y Rodén sirvió de establo o cuadras; y en Lécera, Monegrillo, Pina y Escatrón fue sala de mítines, baile y cine. Los entrecomillados del final son de los testimonios de Aurora Cebollada, Zaragoza, 2-1-1999, y A. Gambau, Caspe, 12-12-1998. Respecto a las iglesias, aparecen 8 completamente destruidas, 11 «notablemente mutiladas», 4 «notablemente deterioradas» y 23 «deterioradas» (leg. 1429(2): pieza nº 10, fs. 5-7). *Cfr.* también leg. 1429 (2): pieza nº 11, fs. 9-14. El más impresionante es el caso de Caspe, con la Iglesia Parroquial incendiada, otras cinco saqueadas y profanadas sus imágenes, y esto mismo para cuatro capillas, seis ermitas y el convento de las Capuchinas, así como la destrucción de las capillas sitas en todas las calles (leg. 1424 (2): rama de Caspe, estado nº 3).

Por lo tanto, la explicación de estos hechos, llevados a cabo mayormente por los milicianos, no puede buscarse en «su afán de destrucción de todo aquello que significa orden y progreso, civilización y cultura,... borrando todo vestigio de idea religiosa». Más bien parece tratarse de un ataque menos a la religión que a una institución concreta, la Iglesia católica, alineada desde siempre con los ricos, los poderosos y con los contrarios a toda mejora social. Como viera Elias Canetti en un original ensayo, «la destrucción de imágenes que representan algo es la destrucción de una jerarquía que ya no se reconoce. Se atacan así las distancias habituales...» Por tanto estas acciones vendrían no a derruir el poder sagrado de los símbolos sagrados, sino antes bien a mostrar su mundanal vulnerabilidad ante los ataques infligidos.²⁴ Ataques, o más bien manifestaciones públicas de fuerza, de poder, frente al que había perdido de un plumazo la Iglesia. Con lo cual, a su vez, se mostraba que el orden que representaba no sólo era contingente y susceptible de desaparecer, sino que de hecho ya lo estaba haciendo. Porque, como las otras acciones ya vistas, también éstas estaban alimentadas por la confianza en la llegada de la revolución tras el derrumbe de lo viejo o, al menos, el de sus emblemas, baluartes y representantes.

Algunos de éstos no eran sin embargo inanimados, sino de carne y hueso, pero la persecución no por ello dejó de

²⁴ B. Lincoln, «Revolutionary exhumations in Spain», pp. 259-260, y Elias Canetti, *Masa y poder*, Alianza/Muchnik, Madrid, 1995 (1960), p. 14. La otra cita del texto procede del AHN, CG, leg. 1423 (1), «Informe de Zaragoza...», 31-12-1949, pero recoge una idea desarrollada ampliamente en los años siguientes, p. ej. en el capítulo que A. Montero Moreno dedica a lo que llama «el martirio de las cosas» (*Historia de la persecución religiosa*, pp. 627-653); en él encontramos asimismo datos sobre estas destrucciones en todo el país. *Cfr.*, desde posiciones cercanas, el relato testimonial de Luis Monreal y Tejada, *Arte y Guerra Civil*, La Val de Onsera, Angüés (Huesca), 1999. Para una visión de calidad del tema en el marco de la Revolución francesa ligada a lo que aquí se ha planteado, Michel Vovelle, *La Révolution contre l'Église. De la raison à l'Être suprême*, Complexe, París, 1988, pp. 67-100.

afectarles. Más al contrario, los actos más radicales en ese asalto simbólico al pasado y a las representaciones del poder serían precisamente la caza de los sublevados y «enemigos de clase», saldada con la vida de muchos de sus supuestos representantes y garantes. Para los que creían llegada la hora de la revolución, aquellos distaban de ser momentos de medida o abstracción y lo que se imponía era una concreta «tarea de depuración de la retaguardia» o, con patentes ecos de la retórica jacobina, una «limpieza necesaria en bien de la salud pública». Como narran dos autores libertarios hablando de Lécera, los milicianos llegaron, se encontraron con que algunos derechistas no habían huido «y pasó... lo inevitable. El pueblo hizo justicia».²⁵

Pero esa «justicia» de la primera hora, aunque diferente en los objetivos, los mecanismos y las implicaciones sociales y éticas de todo tipo, de alguna manera tenía también un significado y una función de tipo simbólico similar al de las manifestaciones arriba vistas. A ojos de los protagonistas de este proceso, acabar con los ricos, los curas y los derechistas y con todo lo que les simbolizaba a ellos y a su poder era acabar con la riqueza, la Iglesia o la reacción, fuentes de su miseria y de su secular marginación. Como en el caso del decapitado Luis XVI en el París de 1793, la sangre no corría tanto —o no sólo— por la realidad de su portador cuanto por su posición respecto al poder y al orden que sustentaba, y en todo caso su derramamiento representaba la más vigorosa manifestación de la ruptura con el pasado que se estaba llevando a cabo e incluso, por lo mismo, «el acta de fundación del nuevo régimen». No es de extrañar, por tanto, que entre las primeras víctimas abunden alcaldes, propietarios acomodados, dirigentes de sindicatos católicos y juntas de

²⁵ Agustín Souchy y Paul Folgare, *Colectivizaciones. La obra constructiva de la revolución española*, Fontamara, Barcelona, 1977, p. 227. Lo de tarea depuradora es de José Peirats, *Los anarquistas en la crisis política española*, Alfa, Buenos Aires, 1964, p. 121, mientras que lo de la limpieza necesaria es de *Solidaridad Obrera*, 6-9-1936.

regantes u otros puestos relevantes del mundo rural tradicional. En Pina, por ejemplo, el primer día mueren el registrador de la propiedad y un antiguo alcalde de derechas que además era uno de los mayores contribuyentes de la zona. En Caspe, nada más entrar, los milicianos fusilan antes que a nadie al alcalde del «Bienio Negro» y de la sublevación E. Arnaldos, sintomática primera víctima de la comarca. Y no lejos de allí, en Maella, entre las primeras seis víctimas figuran el notario, el secretario del Ayuntamiento y tres religiosos. Porque en efecto, aunque es algo sobre lo que volveremos más adelante, estos últimos aparecían como los referentes por antonomasia del mundo que se quería derribar y, por tanto, eran los primeros objetivos de los dardos represores.²⁶

Así pues, la represión venía acompañada de una fuerte carga simbólica. Y no sólo por el hecho de que sus objetivos fueran representantes del viejo orden que caía, sino porque la propia represión era el mejor signo visible de esa caída y del advenimiento de la sociedad ideal, al menos tal y como la presentaban sus ejecutores. Al sobrevenir de forma tan inesperada como traumática la soñada revolución, tomaba de pronto cuerpo y se recuperaba precipitadamente la vieja retórica revolucionaria del *destruam et aedificabo*, del dolor de todo parto y de la «pasión por la destrucción [que] es también una pasión creadora». Retórica que hablaba de la eliminación del elemento destructor —el opresor— para liberar por fin a la sociedad y según la cual la violencia era tan útil

²⁶ AHN, CG, pieza nº 1. Sobre la víctima de Caspe, S. Cirac indica que había estado detenido en los meses anteriores «acusado de propaganda del fascismo» (*Los héroes y mártires*). La referencia al simbolismo de la muerte en la Francia revolucionaria está extraída de A. Soboul, «Violence collective», esp. pp. 576-577; Ferenc Fehér, *La revolución congelada. Ensayo sobre el jacobinismo*, Siglo XXI, Madrid, 1989, p. 136; y Michael Walzer, *Régicide et Révolution. Le procès de Louis XVI*, Payot, París, 1989 (1974) (cita en p. 22), aunque estos dos últimos autores mantienen una relevante controversia, desde el ámbito de la filosofía política, sobre las implicaciones de ese proceso (recogida en *ibidem*, pp. 351-400).

para derribar el orden burgués como lo eran el ejército y las fuerzas policiales para mantenerlo. Además, a eso se añadiría que a lo largo de la historia habían apelado a ella todos los movimientos que rompían con el pasado: «al preconizar la violencia, preconizamos progreso, luz [...] Todos los trabajadores somos esclavos por la violencia y nos liberaremos por la violencia».²⁷ Pero la represión era también un símbolo en sí misma, como dramática e insoslayable puesta en evidencia de que la revolución estaba en marcha e iba en serio y de que un mundo nuevo venía a suceder al viejo orden social. Desde un ámbito y una lógica que iban más allá de la mera política para adentrarse en las representaciones de la misma en el imaginario colectivo, el momento se definía por la clara voluntad de fundamentar ese orden nuevo frente al anterior, y eso, como toda fundación, requería unas «víctimas propiciatorias» sobre las que sancionar la correspondiente «violencia fundadora» y la «purificación». Y desde ese punto de vista, la mejor garantía de ese paso de un mundo al otro era la sangre, la «sangre generosa de los revolucionarios» y la de las víctimas, la cual no «estaba tanto justificada por el interés de los verdugos, cuanto como simiente del mañana».²⁸

²⁷ *Cultura y Acción*, 9-6-1923 (días después del asesinato del cardenal de Zaragoza Juan Soldevila por el grupo de Durruti). Las célebres frases sobre destruir y construir (Proudhon) y la pasión destructora (Bakunin), en George Woodcock, *El anarquismo. Historia de las ideas y movimientos libertarios*, Ariel, Barcelona, 1979, pp. 15-16. Para un análisis de esa simbología y esa corriente del anarquismo, que sólo dejó de ser minoritaria en breves y concretos contextos, José Álvarez Junco, *La ideología política del anarquismo español (1868-1910)*, Siglo XXI, Madrid, 1991, pp. 483-510. Asimismo, aunque más confuso y con más tópicos, Walther Bernecker, «The Strategies of 'Direct Action' and Violence in Spanish Anarchism», en W. Mommsen y G. Hirschfeld (eds.), *Social Protest, Violence and Terror in the Nineteenth and Twentieth-century Europe*, pp. 88-111. Para los años de la II República, Antonio Fontecha, «Anarcosindicalismo y violencia: la 'gimnasia revolucionaria' para el pueblo», *Historia Contemporánea*, 11 (1994), pp. 153-179.

²⁸ Según expresión de J.-C. Martin, *Révolution et Contre-révolution en France*, p. 25. El estudio de la violencia revolucionaria desde el imaginario político, es una propuesta de Pierre Laborie, «Violence politique et imaginaire collectif: l'exemple de l'Épuration», en M. Bertrand et al., (comps.), *Violences et pouvoirs politiques*, P. U.

Simiente o no, esa sangre regó campos, calles y conciencias por la provincia desde finales de julio. Como en el «gran miedo» de 1789, las «masacres de septiembre» de 1792 o el Terror de 1793 y 1794 durante la Revolución francesa, o al igual que en la Rusia de 1918, de nuevo la violencia revolucionaria se asociaba al verano dando pábulo a un sinfín de metáforas sobre «terror caliente», llamas, cenizas o «fulgencias de incendio». Llamas y cenizas que, como hemos visto, no faltarán en esos primeros momentos de la revolución. Sea como fuere, lo relevante aquí es que a ésta la definían la descomposición de los anteriores centros del poder político y de sus aparatos represivos y la profunda alteración de las relaciones entre las fuerzas sociales; pero junto a ello, también, el desbordamiento, al menos en esos momentos iniciales, de las prácticas violentas y represivas.²⁹

Esas prácticas llegaron en principio desde fuera, de la mano y las armas de los milicianos, y del avance de éstos y de su entrada en los pueblos depende de forma inequívoca. Y viniendo como venían del Este, ello afectó en primer lugar a los pueblos de las comarcas de Caspe y de los Monegros zaragozanos. Como La Almolda, uno de los primeros en ser ocupados por las columnas, que registra las primeras muertes de lo que sería la zona republicana de la provincia de Zaragoza —sólo precedidas por las ya relatadas acaecidas en las comarcas que quedaron al otro lado del frente. Después

du Mirail, Toulouse, 1996, pp. 205-216, mientras que lo que la violencia tiene de «fundacional» es objeto de reflexión para M. Maffesoli, *Essais sur la violence*. Lo de víctimas propiciatorias y purificación procede, respectivamente, de René Girard, *La violencia y lo sagrado*, Anagrama, Barcelona, 1983, y Friedrich Heer, *Terror religioso, terror político*, Fontanella, Barcelona, 1965. Desde perspectivas diferentes, ambos bucean en los orígenes sagrados y religiosos que hay bajo toda forma de violencia, pero sus conclusiones no siempre parecen adecuarse a la perspectiva histórica.

²⁹ J. Aróstegui «Los componentes sociales», p. 49. Lo de fulgencias de incendio en *Nuevo Aragón*, 18-7-1937, y la comparación entre otros fenómenos de violencia «estival» en el clásico de Victor Serge, *El año I de la revolución rusa*, Siglo XXI, Madrid, 1972 (1930).

de unos meses anteriores «en los que el ambiente en el pueblo no era bueno entre republicanos, CNT y las derechas», el día 19 de julio la Guardia Civil de Bujaraloz había aparecido para imponer un nuevo ayuntamiento y declarar el estado de guerra, dejando la localidad bajo dominio de derechistas armados hasta la llegada de los milicianos. Antes, el día 21 el sindicato local de la CNT imponía la «huelga general revolucionaria» y el 22 un choque entre vecinos de derechas y cenetistas se saldaba con la muerte de uno de éstos y la huida del resto a una ermita de las afueras. El 25, al grito de «ya está aquí la libertad», hacia las cuatro de la tarde entraba un retén de la columna de Durruti, al parecer recibido con algunos tiros por «dieciséis fascistas al mando de un cacique». Inmediatamente detenidos y recluidos en una iglesia, cuatro de ellos fueron fusilados esa misma tarde, incluido el citado cacique, el ex-alcalde, juez municipal y diputado provincial por Renovación Española Emilio Villagrasa Samper. Tres días después, en un clima de tensión y discusiones entre los partidarios de la «moderación» y los de fusilar a todos los retenidos, el encierro acababa, pero si en el caso de seis de ellos era para ser liberados, otros catorce fueron subidos a un camión que en teoría les llevaba a la cárcel de Lérida y que no pasó de las tapias del cementerio de Bujaraloz. Allí murieron, como lo hicieron todavía otros seis convecinos suyos en las semanas siguientes en ese mismo cementerio, en el de Chiprana, en la carretera de Caspe o en la propia La Almolda; o como lo había hecho antes que nadie el día 24 de julio, en la misma Bujaraloz, el coadjutor de la parroquia, significativa primera víctima de la «zona roja» zaragozana.³⁰

³⁰ AHN, CG, legs. 1425 (2): pieza nº 1, rama de La Almolda; 1426: pieza nº 4, informe de la alcaldía de La Almolda, fs. 31-32, y leg. 1427 (1): pieza nº 5, anexo 2/5, causa 25-1937 del Tribunal Popular de Caspe, febrero de 1937. *El Noticiero*, 17-5-1938 y 24 y 27-7-1938; *Heraldo de Aragón*, 30-7-1936; *Solidaridad Obrera*, 31-7-1936 (cita sobre los fascistas y el cacique), y Francisco J. Gálvez, *En los Monegros La Almolda*, Grupo Cultural Caspolino-IFC, Caspe, 1998, pp. 135-141 (primer entrecomillado, en p. 134).

Como un amanecer, la revolución iba avanzando hacia el Oeste al paso de los milicianos, y con ella se extendía la represión. Sin embargo, el avance distó de ser siempre constante, y en ocasiones producía choques y retrocesos que no podían dejar de influir en la violencia que les acompañaba. En Pina de Ebro, por ejemplo, una de las dos cabeceras comarcales ganadas desde el principio para la causa antifascista, esos avances y retrocesos dejaron una fuerte impronta. Impronta, como en tantos otros sitios, en símbolos pasto de las llamas, que alcanzaron a los archivos parroquial, del Ayuntamiento, de los juzgados de instrucción, del registro de propiedad y de la notaría del partido, así como a la Iglesia parroquial, a tres ermitas y a dos capillas. Pero huella, también, en sangre. Primero el 26 de julio, a la llegada de uno de esos grupos volantes de milicianos «impacientes» que ya mencionamos arriba, primeros propagadores de la revolución ante unos pocos militantes que salieron a recibirles y ante una mayoría silenciosa perpleja ante los gritos de «ya no trabajaréis más». Ese mismo día debieron retirarse ante la llegada de una columna militar zaragozana, pero antes hubo tiempo para pedir a los «exaltados» de Pina una lista con «los más significados derechas», siete de los cuales «fueron ejecutados por un piquete que salió voluntario de dicha avanzadilla» en la pared de la Iglesia. Entre ellos, como vimos, el registrador de la propiedad y un antiguo alcalde acomodado, además de un hijo suyo que salió en su defensa o una mujer de Acción Católica y esposa del secretario de Pina que al parecer recibió a los milicianos al grito de «¡Viva Cristo Rey!». El primero, no obstante, y ante la ausencia del cura párroco —que como otros notables locales había huido a Zaragoza—, había sido de nuevo el coadjutor de la Iglesia, fusilado tras obligársele a dar varias vueltas por la plaza cantando canciones de misa y dejado en el centro de aquélla su cadáver. Después, tras unos días de dominio de los sublevados —que también dejaron su reguero de sangre y oprobio— y tras otros de incertidumbre en los que Pina fue tierra de nadie y muchos dormían en mases y fajinas, el 8 de agosto entraron

definitivamente fuerzas de la columna de Durruti y dos días después reaparecieron la persecución y los dedos locales acusadores. Siete fusilados en la semana siguiente y ocho más en los meses posteriores elevarían la cifra final hasta veintitrés víctimas.³¹

Pero si de víctimas se trata, Caspe encabeza de largo este luctuoso *ranking*. Liberada como vimos tras un duro y dramático combate en el que habían luchado junto a los sublevados gran número de habitantes, y con las calles invadidas de eufóricos vecinos y milicianos, éstos comienzan ese mismo día la búsqueda de los que les habían combatido y de los «fascistas». En esa búsqueda no faltaban los blancos, mas tampoco faltaron las voces denunciantes, los dedos acusadores que enviaban a la tumba ni una «chusma de hombres y mujeres» que acompañaba a las patrullas y las dirigía hacia los escondidos. Pronto comienzan las carreras, las detenciones y los agónicos desfiles de detenidos, manos en alto y ensordecidos por gritos e insultos, camino de la cárcel y el Ayuntamiento. Allí, un improvisado comité o «tribunal» compuesto por caspolinos y representantes de la columna de Ortiz —como Joaquín Ascaso— debía encargarse de juzgarles. Pero, en unos momentos de ánimos exaltados y fusiles a cada hombro, las posibles intenciones conmisericordias quedaban ahogadas por el ansia de vindicta y el afán de «limpieza» de la retaguardia por parte de algunos vecinos y milicianos. Ante tal presión ambiental, con una «muchedumbre que llena la plaza, grita, aplaude y se agita convulsa»³² insultando a los

³¹ Para los datos referidos, AHN, CG, leg. 1425 (2): pieza nº 1, rama de Pina, y leg. 1429 (1): pieza nº 7, f. 49; Archivo Parroquial de Pina: manuscrito sin título sobre cada muerte (s.d.); *El Noticiero*, 25-3-1938; E. Colás y A. Pérez, *La gesta heroica*, p. 109; E. Esperabé, *La Guerra de Reconquista*, p. 560; J. Arrarás (dir. lit.), *Historia de la Cruzada*, p. 224; J. Cuen, *Mis memorias*, pp. 14-16; y los testimonios de Marisa Lagunas (Zaragoza, 29-10-1998) y Jesús Salillas, Antonio P., Valentín Gayán y Cipriano M. (Pina, 26-7-1999).

³² S. Cirac, *Los héroes y mártires de Caspe*, p. 58, al igual que la cita anterior sobre la «chusma». Semejantes descripciones, si bien cargando las tintas en alusiones a «la caza del hombre», «el estallido brutal de [...] las masas que tienen

detenidos, y con milicianos impacientes cuyos gatillos se disparaban a veces antes de llegar con los detenidos al comité o que empezaban a represaliar por su cuenta, las sentencias sólo podían ser la libertad o la muerte. Y, quizá precisamente para que no se les fuera todavía más de las manos, en medio de unos acontecimientos que no pertenecían a nadie, en no pocas ocasiones la dictada era la segunda.

No parece que nadie pudiera controlarlo en esos primeros momentos. Ya durante el día de la entrada de los milicianos, la sangre comenzó a correr, con diez víctimas, y siguió haciéndolo en la semana siguiente hasta llegar a 55 a fines de julio, para seguir ya con ritmo decreciente hasta las 80 al término de 1936 y 91 al acabar la guerra. Pero de todos esos días destaca sobremanera el 26 de julio, cuyos 33 fusilados lo convierten en el más sanguinario de la guerra en toda la provincia. Después de una noche tensa, en la que pocos habían descansado pese a la virulencia de los días previos, la mañana devino tragedia con el fusilamiento de hasta 25 de los detenidos el día anterior por su participación en la rebelión. Un entonces joven militante libertario, al escuchar el estruendo de los disparos, corrió rápidamente hacia la Plaza del Ayuntamiento, y lo que vio a la izquierda de éste, en lo que desde 1939 es la Calle de los Mártires, le quedaría grabado indeleblemente en su retina: «el espectáculo que pudimos contemplar era dantesco. En un cantón de apenas tres metros de ancho, había los cuerpos de doce o trece fusilados amontonados unos sobre otros, [...] otros cinco esa tarde en la Ermita de Montserrat, y aún hubo más.» Del mismo modo, tampoco puede olvidar la respuesta de unos milicianos cuando les preguntó qué sucedía: «es la justicia del pueblo que se pone en marcha». La sangre de los «enemigos del progreso» corría y, de creer a la mayoría de los testimonios orales, no sólo metafóricamente, pues bajaba del citado cantón y pasa-

reconcentrado un odio de clases», o la «descarga de un odio satánico», en F. Morales, *Caspe combatiente*, pp. 55-100.

ba frente al Ayuntamiento hacia la Calle Mayor. Otro espectador de esos primeros días, impresionado por lo que estaba viviendo, afirmaba ufano que en la conciencia popular se había aferrado una idea, «la de que no ha de quedar con vida ni un fascista. Y las ejecuciones han sido aquí en Caspe numerosas, respondiendo a los imperativos de esa firme decisión popular [...] Nada de tribunal; justicia popular [...] Y del mismo pueblo, y de nuestras milicias, partieron varios tiros, que realizaron la dolorosa pero sana función depuradora».³³ Después, sobre todo tras la sonora y antes relatada muerte de A. Guiu Guiral, los ánimos se irían calmando, las denuncias se reducirían y las ejecuciones de agosto y septiembre, cada vez menos numerosas, se aplican sobre derechistas escondidos o que se van entregando. Mas no desaparecen completamente, al menos hasta unos meses más adelante. Algo que bien pudo comprobar Agustín Costa, quien tras un mes oculto declaraba que salía de su escondite «viendo que había pasado la furia que él imaginaba»; la aparición de su cadáver junto al cementerio a la madrugada siguiente parece indicar que se había equivocado.³⁴

Y es que, en Caspe o en cualquier otro pueblo zaragozano o español, aquellos no parecían momentos de confianza en el contrario, sino antes bien de temor, maniqueísmo y violencia. En primer lugar, porque aquello era una guerra,

³³ *Solidaridad Obrera*, 31-7-1936. Lo de la sangre que corría, en los testimonios de A. Vicente, Caspe, 24-1-1998; D. P. C., Zaragoza, 19-5-1998; José Gavín, Caspe, 19-3-1999; Rogelio Maza, Caspe, 20-3-1999; y Amalio Pérez, Caspe, 20-3-1999. El relato del joven testigo proviene por su parte de la entrevista a A. Gambau en Caspe, 18-3-1999, quien concluye con toda sinceridad que «aquello francamente me dolía, aunque al saber lo que pasaba en Zaragoza no me dolió tanto». Más datos sobre la represión en Caspe, la mejor conocida de la provincia, en *Heraldo de Aragón*, 4-8-1936 y 13-9-1936; *El Noticiero*, 5-5-1938; A. Gambau, «Caspe en la II República y la guerra civil» (inédito); y J. Casanova, *Caspe 1936-1938*, pp. 41-51, además evidentemente de AHN, CG, leg. 1424 (2), y de las dos obras citadas en la nota anterior.

³⁴ Declaración de A. Costa ante el «Grupo de Investigación y Vigilancia de la 2ª Columna en Caspe», Caspe, 28-8-1936, en AGCS, PS Barcelona, carpeta 839.

con el corolario de agresividad, menor valor de la vida y odio hacia el otro que todas ellas extienden hasta en el más corriente de los hombres. Y no sólo guerra sino, además, guerra civil, y por lo común ésta «no reconoce la existencia de no beligerantes, busca por todas partes, sin compasión, la fuerza viva de las clases enemigas», incrementa la violencia al desaparecer el criterio de su legitimidad estatal e incluso impele a los contendientes a «iniciativas que muestren que poseen el poder supremo sobre la vida y la muerte».³⁵ No lo era tampoco, en segundo lugar, porque de la mano de la guerra venía un profundo proceso revolucionario, y ya se sabe que «todas las auroras son rojas» y que en la labor de destrucción del mundo caduco no había lugar para la «tibieza», la clemencia o el humanitarismo, «que en estos momentos es de sí castrador». Antes bien, para muchos era la hora de la «santa ira popular», de la «justicia de desinfección» y de la «profilaxis social», la hora en definitiva de aprovechar la coyuntura abierta para liberarse por fin de todos los vínculos con el pasado. Porque, aunque «muchos lo rechazábamos», después de todo lo sucedido «¿cómo ibas a decir a los que tenían armas que trataran con dulzura a los fascistas?»³⁶ Y por

³⁵ Cfr. J.-C. Martin (dir.), *La guerre civile, entre Histoire et Mémoire* (cita en p. 12), y Gabriele Ranzato (dir.), *Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea*, Bollati Boringhieri, Turín, 1994, a completar con Peter Waldmann, «Sociedades en guerra civil: dinámicas innatas de la violencia desatada», *Sistema*, 132-133 (junio 1996), pp. 145-168, y, para el caso de la Francia revolucionaria, Claude Petitfrère, *La Vendée et les Vendéens*, Gallimard/Julliard, París, 1981, pp. 49-64, aunque el primer entrecomillado procede de V. Serge, *El año I de la revolución rusa*, p. 372. Sobre la influencia de la guerra en los hombres corrientes, Barbara Ehrenreich, *Le sacre de la guerre. Essai sur les passions du sang*, Calmann-Lévy, París, 1999, y el polémico Joanna Bourke, *An intimate history of killing: face to face killing in twentieth century warfare*, Granta Books, Londres, 1999, para quien la guerra transforma sin más a aquéllos en asesinos.

³⁶ Testimonio de Francisco Sanclemente, Cinco Olivas, 16-5-1999. El resto de los entrecomillados proceden por este orden de Diego Abad de Santillán, *El anarquismo y la revolución en España. Escritos 1930/1938*, Ayuso, Madrid, 1976, p. 357; *Fragua Social*, 22-8-1936; *Solidaridad Obrera*, 11-10-1936; J. Peiró, *Perill a la reraguarda*, p. 39; José Peirats, *La CNT en la revolución española*, Ruedo Ibérico, París, 1971, vol. II, p. 81, mientras que lo de la profilaxis social es del titular de *Solidaridad Obrera* del 30-8-1936.

fin, aunque ligado a lo anterior, la violencia también aparecía como signo —bien que radical— de afirmación antifascista, como medio de identificación social por mimetismo y por contraste con un «otro» sin el cual se podía caer en la sospecha de la debilidad. Y es que, desde ese punto de vista, no sería necesariamente algo desintegrador y «no social» sino, al menos en determinadas circunstancias, un factor —extraordinario quizá— de adhesión intracomunitaria, sociabilidad política y comunicación social.³⁷

Quizá, por tanto, la tibieza y la benignidad no tenían aquí siempre cabida, mas sí podían llegar a tenerla, aunque son excepción, casos que muestran todo lo contrario y que darán suficiente pábulo a acusaciones y anatemas que toman lógicamente la parte por el todo. Casos en los que la impaciencia podía más que cualquier otra consideración, como en la muerte de un fabarol detenido cuando huía hacia Fayón y fusilado en el propio campo, o como en la de dos caspolinos, uno de ellos fusilado en plena calle antes incluso de llegar al comité y el otro muerto al ser arrojado por la ventana de su casa. En otros, lo que domina es la falta de consideraciones humanitarias, que pudo acarrear desde el fusilamiento en Caspe de un herido sacado de la cama en la misma puerta del hospital, hasta la muerte de cinco octogenarios, de un matrimonio de Gelsa de Ebro de 72 y 69 años o la de un chico de 14 fusilado junto a sus padres y una hermana en Herrera de los Navarros. Y los hay, por último, en

³⁷ E. González Calleja, «La definición y la caracterización de la violencia», y Peter Calvert, *Análisis de la Revolución*, FCE, México, 1974, pp. 47 y 50-52, mientras que una sólida tesis opuesta está en Hannah Arendt, v.gr. *La condición humana*, Seix Barral, Barcelona, 1974, p. 45. Una crítica de las visiones de la violencia «desintegradora» y «anómica», en Y. Michaud, *Violencia y política*, pp. 165-188. Lo del mimetismo, en M. Ors, *La represión de guerra y posguerra en Alicante*, pp. 25-26. El papel de las identidades definidas contra un otro —étnicas, religiosas, nacionalistas o de clase— en las manifestaciones de terror y violencia colectiva, es algo que mereció una agria requisitoria del filósofo rumano E. M. Cioran en *Breviario de podredumbre*, Taurus, Madrid, 1983, pp. 19-21, y también lo ha tratado con agudeza Amin Maalouf en *Identidades asesinas*, Alianza, Madrid, 1999.

los que el signo parece definitivamente la crueldad. No cabe duda que las fuentes franquistas exageraron hasta la saciedad estos hechos y que en ningún caso se puede hablar de un uso sistemático de estas prácticas, y mucho menos de torturas, pero algunos ejemplos impiden pasar por alto ese componente cruel. Aunque hay en más lugares, y si bien éste es quizá el más extremo, el caso de Letux parece suficientemente esclarecedor. Entre sus quince víctimas, uno de ellos, anciano, es fusilado tras una detención de una semana en la que no se le daba comida ni agua; otro es arrastrado por la calle hasta el lugar de su muerte; a un tercero lo tiran agonizando por un barranco tras dispararle; y, por fin, las diez víctimas de una saca nocturna en diciembre del 36, una vez fusiladas junto al cementerio, son rematadas pasándoles por encima un camión y sus cuerpos son allí abandonados.³⁸

Precisamente ese abandono, o más bien la publicidad que daba a estos hechos el no esconderlos, no resultan ajenos al significado de esa sevicia y aun de la propia represión en general. Está claro que en ellas influirían decisivamente los ánimos vengativos por las bajas sufridas en los combates o por las abundantes noticias recibidas acerca de la represión militar en la otra zona, así como por las actividades «fascistas» de las propias víctimas. Era el mismo «veneno que flotaba en el aire [y] contaminaba» que recorría todo el país, «como un delirio contagioso que brota de la sangre derramada e infec-

³⁸ AHN, CG, leg. 1423 (2): rama de Letux, y leg. 1426: pieza nº 4, f. 22. Otros casos especialmente macabros serían la muerte de un maestro en Aladrén, al que remataron metiéndole una bayoneta por la boca (según testimonio del testigo Felipe Lafuente, Zaragoza, 15-11-1998), o la de P. Magallón, muy semejante a la de A. Guiu vista al principio de este capítulo. El resto de los casos reseñados provienen de los informes que se les dedica en varios lugares de la Causa General, además de los testimonios de A. Vicente, Caspe, 24-1-1998; José Gavín, Caspe, 19-3-1999, y E. G. G., Gelsa, 9-7-1999. Evidentemente hay un abismo entre ello y las alusiones de las fuentes franquistas respecto a que a las víctimas *normalmente* «se les crucificaba, se arrastraba por las calles, y [...] sufrían pinchazos y malos tratos de las turbas que así les atormentaban hasta darles muerte» (AHN, CG, leg. 1424 (2), rama de Caspe, fs. 125 y 130).

ta a todo el mundo con una odiosa locura»; la misma «embriaguez a la cual resulta imposible resistirse sin una entereza de ánimo que se me antoja excepcional, puesto que no la he encontrado en ninguna parte».³⁹ Pero a ello se añadía en última instancia lo que esos actos tenían de comunicación simbólica, de esa «exhibición inicial de crueldad» presente en toda forma de terror como medio de mantener la retaguardia segura. Del mismo modo, tampoco parece conveniente despreciar el elemento de miedo, fundamento último quizá del odio —que «es la otra cara del miedo»— e inseguridad que parecen inspirar algunos de estos luctuosos hechos. Porque, liberados de las exageraciones de la «vieja orquestación» que hacía de las revoluciones «el lugar privilegiado del miedo, de la locura colectiva y sangrienta», resulta sencillo, sin embargo, encontrar el temor al enemigo —escondido como quinta columna o peligrosamente cerca como ejército— en algunos momentos de violencia tan arquetípicos como el «gran pánico» de 1789, las matanzas de 1792, el «primer terror» de 1793, la Comuna de 1871 y la represión de la *txeca* rusa en 1918; o como, más cerca, en el Madrid asediado de noviembre de 1936. La retaguardia republicana aragonesa, con el frente a un paso e imposible de olvidar, y descrita por Azaña para el verano del 36 en clave de «gran confusión, voluntad excelente, miedo avasallador», no podía ser una excepción.⁴⁰

³⁹ G. Woolsey, *Málaga en llamas*, pp. 135-136, de donde también proviene la cita siguiente sobre la relación odio-medio (p. 134); y Simone Weil, «Carta a Georges Bernanos», en *Debats*, 54 (dic. 1995), p. 69: se trata de un sincero y agrio testimonio sobre su experiencia como miliciana en sectores como el de Pina, a partir de la cual afirma que, cuando ante esa embriaguez de la muerte «se siente un poco de asco, uno se lo calla y muy pronto ese asco se verá enterrado por el miedo a dar la impresión de que a uno le falta virilidad [...] Semejante atmósfera eclipsa pronto el objetivo mismo de la contienda.» (pp. 68-69).

⁴⁰ M. Azaña, *La velada en Benicarló*, p. 78. La relación entre guerra, miedo y represión, además de G. Lefebvre, *La Grande Peur de 1789*, en Michel Vovelle, *La mentalité révolutionnaire*, Mésidor/Éditions Sociales, París, 1985 (Crítica, Barcelona, 1989), pp. 57-64 y 84-85 (entrecomillado en p. 57); Albert Soboul, *Los sans-culottes. Movimiento popular y gobierno revolucionario*, Alianza,

En suma, el alba de la revolución trajo consigo muchos cambios. En un mundo rural al que éstos llegaban cadenciosa y sordamente, durante unos días o semanas de llamas esa quietud saltó por los aires con un estruendo que lo tiñó todo de frenesí, esperanzas y temores. Entre los protagonistas de aquel proceso abundan las alusiones al «ambiente impregnado de energía y dinamismo» y al «compás acelerado» con el cual «en quinde días [se] ha hecho más [...] que en veinte siglos». Y de todos esos cambios, uno de los más traumáticos era sin duda la acción depuradora que «limpió de fascistas» ese «Aragón en llamas». Perdido por el Estado el monopolio de la violencia, con milicias armadas por toda la región, y en plena guerra civil, se había iniciado un radical asalto al pasado y a sus símbolos y protagonistas similar al «huracán represivo» que recorría en esos momentos todo el país.⁴¹

Empero, y frente a una capciosa interpretación de gran arraigo, ese asalto y ese huracán no fueron una marea homogénea que se desbordara por igual independientemente de a quién afectaba, cuándo y dónde. Sabemos ya que, más allá de las descripciones y el relato, tuvieron una realidad y un alcance concretos y que su resultado fue la muerte de 742 zaragozanos en la retaguardia republicana. No obstante, si contentarse con tesis acientíficas o con la simple descripción ineludiblemente morbosa de los hechos resulta

Madrid, 1987 (1964), p. 154; V. Serge, *El año I de la revolución rusa*, pp. 332-373; y P. Waldmann, «Sociedades en guerra civil», p. 148. Para el caso español, P. Broué y É. Témime, *La revolución y la guerra de España*, p. 136, y para el Madrid de 1936 A. Reig Tapia, *Violencia y terror*, pp. 69-103. Una visión tradicional sobre la «saña vengativa y el miedo enloquecedor», en R. Salas, «Represión en territorio republicano», p. 55. Sobre la exhibición inicial de la crueldad, Peter Calvert, «El terror en la teoría de la revolución», en N. O'Sullivan (ed.), *Terrorismo, ideología y revolución*, pp. 47-67.

⁴¹ Rafael Abellá, *La vida cotidiana durante la guerra civil: la España republicana*, Planeta, Barcelona, 1975, p. 94. Los primeros entrecomillados proceden del *Boletín de Información CNT-AIT-FAI*, 14-9-1936 y se refieren a Maella, mientras que el de la limpieza de fascistas (*Solidaridad Obrera*, 12-8-1936) habla de la zona de Bujaraloz. Lo de Aragón en llamas está por último en el *Boletín del Consejo de Aragón*, 17-11-1936.

insuficiente, también lo es el mero recuento de muertos. Las cifras, importantes y significativas en sí mismas, esconden decisivos aspectos cualitativos y claves interpretativas imprescindibles para la comprensión del fenómeno. Comprensión que requiere profundizar más allá de mitos, reprobaciones y condenas y buscar elementos explicativos en terrenos aparentemente tan irracionales. Los orígenes, la geografía, las diferentes etapas, los rostros y la inserción del hecho represivo en su marco socio-político son algunos de los caminos que se pueden recorrer a ese respecto, y son los que aquí intentaremos transitar.



Milicianos, exultantes tras la toma de Caspe y mofándose de la imaginaria religiosa (25/7/1936): AHN, CG, leg. 1426, pieza 2.⁴

II

LOS ORÍGENES Y GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA

EL ALCANCE Y GEOGRAFÍA DE LA PERSECUCIÓN

Según las fuentes y los criterios metodológicos descritos, la represión republicana en la provincia de Zaragoza tendría como balance 742 víctimas. Puesto a su vez en relación con la población según el *Censo* de 1930 (535.816 habs.), ello supone un índice relativo de 1,4‰. De acuerdo con esos datos, Zaragoza sería una de las menos castigadas por esa represión en términos tanto absolutos como relativos. En el primero de los casos es la 23ª en número de víctimas, aunque de las restantes 27 a las que supera sólo ocho habían estado en la zona republicana, y aun la mayoría de ellas sólo breve y parcialmente. En el segundo, su índice de represión sería el 26º, sólo superado por seis de las provincias que estuvieron en todo o en parte bajo dominio republicano.¹

Ahora bien, esas cifras esconden una realidad muy diferente que parte del hecho de que la zona republicana zaragozana representó sólo una parte de la provincia. Una parte que comprendió en sus diferentes momentos 44 municipios —la mayoría en tres partidos judiciales— que comprendían 67.820 habitantes (12,66% del total provincial, o el 38,98% sin

¹ Para los datos de las otras provincias, nos hemos apoyado en los estudios provinciales y regionales citados en la cita nº 9 de la introducción de este trabajo y, cuando no los hay, en los datos aportados por Salas Larrazábal en *Pérdidas de guerra*, pp. 362 y 364. La mayor parte de esos datos aparecen resumidos en S. Juliá, coord., *Víctimas de la guerra civil*, p. 412, y en F. Moreno, «El terrible secreto del franquismo», p. 23.

la capital) y 4189,26 km² (el 24,36%). Ello supone, en primer lugar, una necesaria diferenciación de partida entre las víctimas de esos lugares, por un lado, y aquellas de las comarcas y localidades que nunca estuvieron en zona republicana —y que murieron en ella como veremos tras ser hechos prisioneros, etc.—, por otro. De este modo, frente a las 152 víctimas de este segundo grupo, las del primero serían 590, y son éstas las que habría que considerar para una caracterización ajustada del impacto de la violencia en la retaguardia republicana zaragozana. Así las cosas, y poniendo esa última cifra en relación con la de la población de esa retaguardia, el balance es muy otro. El índice de represión en esa zona asciende ahora al 8,7‰, que supera holgadamente los índices globales de todas las provincias republicanas y al que sólo parecen aproximarse los de Teruel (6,8‰) y Madrid (6,37‰). Muy lejos, en todo caso, de los más comunes en la España republicana, tales como el de Cataluña (2,9‰), el País Valenciano (2,49) Jaén (2,55) o Albacete (2,76), por no mencionar los de Almería y Murcia (1,02 y 1,15 respectivamente). Pero lejos también, aunque en este caso por debajo, del 11,25‰ de víctimas que registraría la represión protagonizada por los que estaban al otro lado de las trincheras zaragozanas.²

Tras las cifras generales, los datos desgajados por partidos judiciales muestran meridianamente, en primer lugar, la lógica mayor incidencia del fenómeno en aquellos —Caspe, Belchite, Pina y, en menor medida, Cariñena y Zaragoza— que estuvieron en zona «roja». En segundo lugar, el resultado

² Porcentaje elaborado a partir de J. Casanova *et al.*, *El pasado oculto*, p. 231. Los datos sobre la zona republicana zaragozana han sido elaborados a partir del *Censo de Población de 1930. Provincia de Zaragoza* (Archivo de la Delegación Provincial de Estadística de Zaragoza) y del *Nomenclátor de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y demás entidades de población de España... con referencia al 31 de diciembre de 1950. Provincia de Zaragoza*, Sucesores de Ribadenegra, Madrid, 1951?. Los 44 municipios de la zona «roja» de Zaragoza aparecen en el anexo nº 1 de este trabajo.

de relacionar esos datos con la población de cada partido judicial indica que, entre los tres más afectados, el orden que presentan en cuanto al alcance de la represión en términos absolutos no coincide, más bien al contrario, con el de su incidencia relativa. Si según esta variable la represión afectó a 6,78 de cada mil habitantes en el partido de Caspe y a 8,57 en el de Pina de Ebro, en Belchite ese índice alcanza el 8,99, cifra por cierto que difícilmente puede encontrarse en otras regiones de la España republicana y ante la que debe tenerse en cuenta además que algunos de sus pueblos no estuvieron en manos de los republicanos. Porque contando únicamente las víctimas y población de los municipios que sí lo estuvieron, la cifra de Belchite llega al 9,38‰ y la de Pina al 10,05‰.³ A partir de todo ello se puede además llegar a una última conclusión; y es que esa falta de relación directa entre la población de una zona y su represión no es una particularidad de esta provincia. De hecho, para no pocos de los autores que han estudiado el fenómeno en otras regiones, la represión tiene una mayor incidencia porcentual precisamente en las áreas rurales y menos pobladas, y es menor en las más populosas y urbanizadas.⁴ Algo que no puede dejar de tenerse en cuenta a la hora de interpretar los altos índices de la zona de que tratamos.

³ En Cataluña, por ejemplo, la comarca con un mayor índice represivo por cada mil habitantes -la tarraconense Tierra Alta, precisamente la colindante con la provincia de Zaragoza- alcanza el 10,6, pero se trata de una excepción pues ninguna de las otras 37 comarcas alcanza siquiera el 6‰ (J. M^a Solé y J. Villarroya, *La repressió a la reraguarda de Catalunya*, pp. 431-433). Mientras, en el País Valenciano el mayor índice comarcal es un 4,46‰ y en Almería 2,14 (V. Gabarda, *La represión en la retaguardia republicana*, p. 152; R. Quirosa, *Represión en la retaguardia republicana. Almería, 1936-39*, p. 72).

⁴ J. M^a Solé y J. Villarroya, *La repressió a la reraguarda*, pp. 335 y 341-344; F. Alía Miranda, *La guerra civil en retaguardia. Ciudad Real*, p. 214; V. Gabarda, *La represión en la retaguardia*, o M. Ortiz Heras, *Violencia política en la II República*, p. 80. Al contrario, M. Ors, R. Quirosa y C. González opinan a partir de los casos alicantino, almeriense y murciano, respectivamente, que se trata sobre todo de un fenómeno urbano.

Víctimas de la represión republicana por partidos judiciales:

Ateca	2	Ejea	40
Belchite	173	La Almunia	4
Borja	23	Pina	162
Calatayud	3	Sos	11
Cariñena	58	Tarazona	2
Caspe	193	Zaragoza	71
Daroca	0		

La visión del alcance de la represión debe atender por último a la geografía local de la misma. Porque, frente a las pasadas tesis «inundatorias» acerca de dicha violencia, esta perspectiva de análisis mostraría que no nos hallamos ante un fenómeno irracional, aislado de lo aprehensible científicamente y sólo abordable en términos morales —ni siquiera en una zona, como ésta, en la que el alcance de la represión resultó tan intenso. Desde ese punto de vista, sólo la aproximación a los marcos locales concretos parece poder dar todas las claves de ese alcance. Máxime cuando, durante las primeras semanas de la guerra —a la sazón las que acaparan la mayor parte de las muertes—, la completa fragmentación del poder había abandonado las riendas de lo público en los nuevos poderes locales que nacían al calor de la revolución.

En última instancia, es evidente que la significación de la geografía del hecho represivo radica en sus diferencias. Y no sólo porque en ocho de las 44 localidades zaragozanas que quedaron en zona «roja» no se registrara ninguna muerte, o porque apenas haya de uno a dos fallecidos en otras ocho, entre ellas poblaciones grandes y con un izquierdismo organizado como Mequinenza o Sástago. También por las divergencias que muestra la distribución espacial de las víctimas: 25 municipios cuentan con menos de diez fusilados, otros diez registran entre diez y veinte y los nueve res-

tantes superan la veintena. Divergencias, además, que de nuevo no se explican por la mayor o menor población de cada lugar, pues de hecho aumentan al poner en relación ésta con las cifras de represaliados. Es cierto que en términos absolutos las tres localidades con más habitantes de la zona —por este orden Caspe, Belchite y Maella— son además la primera, segunda y cuarta respectivamente en número de óbitos. Como también es cierto que siete de las ocho que se libraron enteramente del correr de la sangre están entre las quince menos pobladas. Pero siguiendo con el ejemplo arriba citado, Mequinenza y Sástago eran el cuarto y quinto núcleos más poblados de la zona y, sin embargo, son superados en óbitos por otros 28 y 31 respectivamente, a veces muchísimo menos populosos. En el extremo contrario, Aladrén y Luesma —cuarta y quinta localidades con menos población— cuentan nueve y dieciocho víctimas cada una y se colocan como primeras en índice de represión, índice que en el caso de la segunda llega hasta el 67,92‰. En resumen, la población guarda una cierta relación con el número de víctimas. Pero esa relación no se guarda respecto al impacto relativo de esa persecución, lo que abunda en el mencionado carácter rural de este fenómeno. Es evidente, por lo demás, que en el caso de las víctimas de las comarcas que quedaron en la zona de los sublevados estas consideraciones no tienen la misma validez.⁵

⁵ Los diez lugares con más víctimas son Caspe (91), Belchite (60), Gelsa (47), Maella (42), Azuara (29), Fabara (28), Herrera de los Navarros (27), La Almolda (25), Pina (23) y Leciñena (20), aunque considerando toda la provincia su capital se situaría entre ellas con 24 muertos. Por su parte, los mayores índices apuntan, tras las citadas Luesma y Aladrén, a Fuendetodos (23,74‰), Lagata (23,03‰), Gelsa (22,17‰), La Almolda (21,17‰), Osera de Ebro (20‰), Velilla de Ebro (16,5‰), Belchite (15,74‰) y Fabara (13,06‰). Hemos recogido la población, víctimas e índices de represión de todas las localidades en el anexo nº 2 de este trabajo.

Por último, y aunque aquí entrarían también ya otras variables de menos fácil elucidación, la diversa distribución geográfica de la represión se acentúa si analizamos ésta no tanto por el lugar de origen cuanto por el de la muerte de las víctimas. Porque, aunque pudiera parecer un matiz nimio, «la realidad demuestra que se dan importantes diferencias». Antes de nada, encontramos que 152 de los represaliados murieron fuera de los límites de la provincia.⁶ La ubicación de esas muertes es tan amplia como su tipología, pero es posible establecer algunas rápidas generalizaciones. La mayoría de ellas, hasta casi un centenar, se producen en las otras dos provincias aragonesas, principalmente en sus pueblos más cercanos a la de Zaragoza, aunque hay algunas divergencias entre uno y otro caso. Si en la de Teruel (30) se trata ante todo de vecinos de pueblos zaragozanos próximos «paseados» allí en grupos —como los 5 de Moyuela fusilados en Muniesa—, en la de Huesca (69) hablamos principalmente de presos hechos en los confines entre las dos provincias y la zona sublevada, en los frentes de Huesca y sobre todo en la batalla de Belchite, desde donde muchos fueron llevados a Castejón de Monegros y allí, en número de 48, ejecutados. Respecto a las demás muertes fuera de la provincia, en Cataluña se produjeron otras 39, gran parte de ellas, como las 19 de Lérida, aplicadas también sobre prisioneros de la ofensiva de 1937; nueve en Madrid (cuatro en las célebres sacas de Paracuellos del Jarama) o tres en Extremadura. Es evidente que algunas de esas muertes producidas fuera de la provincia —al menos una decena— no parecen tener ninguna relación con el lugar de origen de las víctimas, como los presos de Biota, Fuentes de Ebro o Luesia hechos prisioneros en los frentes oscenses, o como los hermanos Marco

⁶ Quizá haya que aclarar que, aunque esta última cifra coincida casualmente con la de las víctimas que provienen de las comarcas que no estuvieron en la zona republicana, se trata en realidad de dos cosas diferentes. La frase entrecorrida es de M. Ortiz Heras, *Violencia política en la II República*, pp. 90-91.

Cazcarra, de Zaragoza, precisamente dos de los que acabaron sus días en Paracuellos. Pero si creemos a las fuentes, en la mayoría de los casos hay tras la muerte una denuncia, un informe desfavorable, o incluso el propio disparo, provenientes de un convecino del fallecido.⁷

Por otra parte, y en este punto ya respecto a los que murieron dentro de la provincia, hay algunas diferencias en relación con su origen. En determinados lugares, como Aladrén, Lagata o Nonaspe, el número de esas muertes coincide con el de vecinos de esas localidades fusilados; en otras palabras, todos los ejecutados de ellas lo son en sus propios pueblos, sin que lo fuera además ningún forastero. Sin embargo, eso es la excepción. Por un lado, la concentración de la mayor parte de las ejecuciones en algunos lugares se muestra aquí más clara puesto que algunos de ellos suman a sus propias víctimas las de otros cercanos. El caso más claro es de nuevo Caspe, donde la cifra de fusilamientos se eleva al menos a 132 a costa de forasteros —26 de la propia comarca o una veintena de turolenses— cazados por los «grupos de investigación» caspolinos en sus excursiones nocturnas o, simplemente, llevados allí a morir por sus propios comités locales. Pero hay otros semejantes como Azuara, cerca de cuyo cementerio acaban expediciones de presos de Fuendetodos, Moneva, Moyuela, Plenas o la turolense Monforte de Moyuela; o como Lécera, Leciñena y Pina de Ebro, a las que también se lleva a fusilar a «fascistas» de otros pueblos próximos.⁸

En otras ocasiones, los casos anteriores se complican, pues los mismos lugares que acaparan fusilamientos de habi-

⁷ Caso, entre otros muchos, de los ocho asesinados en diferentes momentos en Barcelona, los tres fusilados en el frente de Badajoz o, como veremos, la inmensa mayoría de los prisioneros de la ofensiva de Belchite que fueron ejecutados. AHN, CG, legs. 1423-1426.

⁸ O como Bujaraloz, de la que sólo mueren cinco personas, pero que añade a ello el fusilamiento en su término de 34 forasteros, 17 de ellos de La Almolada.

tantes foráneos recurren al mismo método y envían a los suyos a otras partes. Es lo que vemos en Herrera de los Navarros, en la que encuentran la muerte la única víctima de Villar y las dieciocho de Luesma, mientras trece de las suyas mueren en la cercana Moyuela. También en esta última, donde además de los trece de Herrera aparecen los cadáveres de cinco azuarinos, cuando todas sus muertes tienen lugar en Azuara y en Muniesa (Teruel). O en Maella, que envió a las tapias del cementerio de Caspe a 13 de sus represaliados, mas tuvo que despachar por su parte un envío de 15 vecinos de la también turolense localidad de Mazaleón. Las razones de estos macabros intercambios de detenidos destinados a morir entre los diversos pueblos distan de resultar claras. Pero no parece que les sea ajeno el deseo de llevar a cabo esas muertes con una mayor discreción y anonimato. Anonimato que reducía la posibilidad de reacción por víctimas y familiares, difuminaba las responsabilidades en esos de fuera que se los llevaban en camiones y escondía una cierta sensación de culpa y de resistencia respecto a esas prácticas en el seno de las estructuras de la solidaridad comunitaria.⁹

Esbozados pues el alcance y la geografía de la represión, el estudio de ésta debe sin embargo ir más allá de ese nivel descriptivo e intentar profundizar en sus razones si se quiere avanzar en la comprensión del fenómeno. La puesta en relación de ese alcance y de esa diferente distribución geográfica con los orígenes de esa violencia parece, en ese sentido, una buena vía para interpretar ambos aspectos y, con ellos, esa propia represión.

⁹ Sobre esos intercambios en otras regiones, M. Ortiz Heras, *Violencia política en la II República*, pp. 83 y 90-92; F. Moreno, *La guerra civil en Córdoba*, p. 70; A. D. Martín Rubio, «Represión republicana en Badajoz», *Razón Española*, 67 (sept. 1994), p. 185; J. Daniel Simeón Riera, *Entre la rebelión y la tradición. Liria durant la República i la guerra civil (1931-1939)*, Diputació de Valencia, Valencia, 1993, pp. 208-210; C. González, *Guerra Civil en Murcia*, p. 158; y Encarna y Renato Simoni, *Cretas. La colectivización de un pueblo aragonés durante la guerra civil española, 1936-1937*, Centro de Estudios Bajoaragoneses, Alcañiz, 1984. Lo mismo en la Zaragoza de los sublevados, en J. Cifuentes y P. Maluenda, *El asalto a la República*, pp. 183.

SUBLEVADOS Y MILICIANOS: UNA VIOLENCIA IMPORTADA

«Salvo muy pocas excepciones, la guerra en una comarca apartada y atrasada viene siempre de fuera, es un regalo más del gobierno y la capital, una irrupción de lo moderno en el reino de la acronia; sin que nada nuevo haya ocurrido dentro de sus límites, de repente la comarca, una mañana de julio, se encuentra en guerra.» Juan Benet, *Herrumbrosas lanzas*.

El origen de la violencia desencadenada en la retaguardia aragonesa es algo más complejo que las tendenciosas tesis y mitos sobre complots «anarco-comunistas» y anarquía social prerrevolucionaria. Está claro, en primer lugar, que la fuente inmediata de esa violencia se encuentra en un factor exógeno como fue la llegada con las armas en la mano de las milicias catalanas y levantinas. Armas sin las cuales difícilmente se podía plantear siquiera el asalto a un cuartel de la Guardia Civil y, desde luego, mucho menos al orden social. Pero, a su vez, esto sólo sería posible a raíz de otro suceso foráneo y de ámbito nacional como fue la insurrección militar. Ello, por un lado, al suponer, donde no triunfó, un colapso de las fuerzas de orden público del Estado republicano y el trasvase del poder *de facto* a las múltiples organizaciones y grupos armados que la habían derrotado. Pero asimismo porque, al alzarse contra la legalidad republicana, el Ejército y los grupos sociales que lo secundaban se decantaban por una vía no pautada y abiertamente violenta de resolución de los conflictos del momento. Inaugurada esa vía, rotas por los insurgentes las normas del consenso social y puestas en el centro del espacio público las armas y la violencia represora —que utilizaron desde el principio—, ésta quedaba legitimada «desde arriba» como instrumento de definición del orden social y de lucha por el control del sistema político.

Que la violencia revolucionaria llegara a raíz de sucesos foráneos o que fuera motivada en última instancia por las fuerzas del poder, nada de ello tenía lugar por vez primera en la historia. Por un lado, los análisis antropológicos y sociológico-históricos sobre las revoluciones y los obstáculos y posi-

bilidades de movilización en las sociedades campesinas muestran que estas comunidades, pese a no ser necesaria e invariablemente apáticas ni impermeables, sí requerirían históricamente para su acción revolucionaria a gran escala un desencadenante y una dirección externos —el «factor unificador que le[s] faltaba». Ese detonante u «oportunidad», que se uniría a una «crisis de autoridad» previa relacionada con el impacto desestabilizador de la comercialización en el campo, provendría a menudo de crisis políticas agudas que debilitarían al poder y le despojarían de sus resortes administrativos y coactivos. Por ejemplo, precisamente, una guerra civil.¹⁰ Por su parte, los estudios sobre la acción colectiva han llegado por caminos diferentes a conclusiones semejantes al señalar que ésta no depende tanto de meros estados de descontento o concienciación revolucionaria cuanto de las posibilidades y recursos para la «movilización» frente al poder constituido. Baste recordar aquí la llamada «estructura de oportunidades políticas», la situación de «soberanía múltiple» o el énfasis en la organización, requisitos para esa acción colectiva de acuerdo con las tesis de autores como D. McAdam, S. Tarrow o Tilly.¹¹ Finalmente, tanto estos dos últimos como otros

¹⁰ Th. Skocpol, *Los estados y las revoluciones sociales*, v.gr. pp. 85 y 166, aunque es una cuestión también presente, con variantes, en Barrington Moore, *Los orígenes sociales de la democracia y de la dictadura*, Península, Barcelona, 1973, esp. pp. 367-389; Teodor Shanin, «El campesinado como factor político», en *La clase incómoda*, Alianza, Madrid, 1983, pp. 274-298 (cita en p. 294); Eric R. Wolf, *Las luchas campesinas del siglo XX*, Siglo XXI, México, 1979, pp. 393-409; Eric J. Hobsbawm, *Los campesinos y la política*, Anagrama, Barcelona, 1977, pp. 18-33; y Henry A. Landsberger, «Disturbios campesinos: temas y variaciones», *Rebelión campesina y cambio social*, Crítica, Barcelona, 1978, pp. 11-93. Para una aguda crítica a las visiones basadas en el inmovilismo y atraso del campesinado, Josep Fontana, «Los campesinos en la historia: reflexiones sobre un concepto y unos prejuicios», *Historia Social*, 28 (1997), pp. 3-11.

¹¹ Quizá en ningún otro lugar esté ello expuesto con más claridad que en S. Tarrow, *El poder en movimiento*, sobre todo pp. 147-178, 235-259 y 263-281, aunque sin duda el texto básico sigue siendo *From Mobilization to Revolution* de Ch. Tilly (pp. 100-102 y pássim). Lo de la estructura de oportunidades políticas es de Peter K. Eisinger, cit. en M. Pérez Ledesma, «Cuando lleguen los días de la cólera», p. 95, donde también se repasa sucintamente la interpretación de Doug McAdam.

estudiosos han resaltado también la relación directa entre los Estados —o sus fuerzas represivas— y la violencia. La historia de ésta en los tiempos modernos sería —algo ya visto por Weber— la de su progresivo acaparamiento y monopolización por parte de los Estados y la de su normativización a través de mecanismos de coerción cada vez más específicos y discriminatorios. Pero ello no significaría su desaparición, pues si aquéllos se sirven de ella sólo de forma marginal e implícita cuando gozan de una amplia legitimidad, la emplearían discrecionalmente al ver seriamente cuestionado su sistema de dominación, independientemente de que sus oponentes la utilizaran o no. De hecho esa sería la norma, pues la experiencia europea de las dos últimas centurias mostraría que la mayoría de los episodios de amplia violencia consisten en «la reacción vigorosa de un segundo grupo (a menudo de fuerzas represivas especializadas al servicio de los gobiernos) a la acción colectiva no violenta del primero». En otras palabras, y con menos rodeos, «son las mismas fuerzas represivas las iniciadoras y ejecutantes más coherentes de la violencia colectiva».¹²

Y eso, según las fuentes disponibles, y pese a todo lo que se ha dicho sobre la supuesta violencia revolucionaria previa,

¹² Ch. Tilly, *From Mobilization to Revolution*, y Ch. Tilly, L. Tilly y R. Tilly, *El siglo rebelde*, de cuyas pp. 177 y 325 proceden los dos entrecomillados. Parecidas conclusiones en P. Calvert, *Análisis de la Revolución*, pp. 38-45, y en la introducción y participación de Dick Geary en la obra por él compilada *Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914*, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1992 (v. gr. p. 181). Para una interesante aplicación al caso español de las tesis de Tilly, Rafael Cruz, «Crisis del Estado y acción colectiva en el periodo de entreguerras. 1917-1939», *Historia Social*, 15 (inv. 1993), pp. 119-136, y «La lógica de la guerra. Ejército, Estado y Revolución en la España Contemporánea», *Studia Historica-Historia Contemporánea*, vol. x-xi (1992-1993), pp. 207-222. Sobre la patrimonialización de la violencia por el Estado, en correspondencia con la atribución por las clases hegemónicas del poder de coacción económica, véase además Y. Michaud, *Violencia y política*; Anthony Giddens: «Estado y violencia», *Debats*, 4 (1982), pp. 81-87, y «Estados Nacionales y violencia», *Debats*, 14 (1985), pp. 89-101; Francisco Laporta, «Estado y violencia. Sugerencias para una toma de posición», *Sistema*, 38-39 (1980), p. 119; o el sugerente estudio desde la sociología jurídica de Eligio Resta, *La certeza y la esperanza. Ensayo sobre el derecho y la violencia*, Paidós, Barcelona, 1995.

es precisamente lo que sucedió en el verano de 1936. Parece indudable que los treinta eran años en los que la violencia había llegado a formar parte activa de la política, los conflictos sociales y, en suma, de los modelos de transformación social presentes en toda Europa en el periodo de entreguerras. La Gran Guerra, al socavar y cuestionar los equilibrios sociales y políticos, había acentuado sustancialmente los conflictos de clases e iniciado una movilización política sin precedentes. A esto vendría a añadirse el profundo impacto político de la Revolución rusa, una traumática crisis económica y la «obligada apertura» del viejo orden a la «política de masas». Así las cosas, ese orden y las clases que lo disfrutaban se vieron amenazados, y de esa amenaza —real o supuesta— surgieron posiciones polarizadas, ideologías de la violencia con gran eco y soluciones violentas como las practicadas en las dictaduras de los años veinte y, sobre todo, en Italia, Alemania y Austria.¹³

Lo anterior tendría una evidente aplicación en España, país en el que se sumaría, además, al tradicional empleo de la violencia como respuesta normal del Estado en la resolución de los conflictos sociales y políticos. Y la tendría, sobre todo, durante la II República, nacida en un ambiente de fiesta, movilización política y reivindicación de mejoras. Sin embargo, esas reformas, «blandas en la práctica aunque amenazadoras en principio» en aquel difícil contexto, no sólo no satisfi-

¹³ Véase Martin Kitchen, *El periodo de entreguerras en Europa*, Alianza, Madrid, 1992, y Mercedes Cabrera, Santos Juliá y Pablo Martín (comps.), *Europa en crisis, 1919-1939*, Edit. Pablo Iglesias, Madrid, 1991. Sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial, Gregory Luebbert, *Liberalismo, fascismo o socialdemocracia. Clases sociales y orígenes políticos de los regímenes de la Europa de entreguerras*, Pressas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997, pp. 337-339 y 344-345, y sobre todo Charles S. Maier, *La refundación de la Europa burguesa. Estabilización en Francia, Alemania e Italia en la década posterior a la I Guerra Mundial*, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1988; George L. Mosse, *Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars*, Oxford University Press, 1990. La extensión de las ideologías de la violencia, en J. Aróstegui, «Conflicto social e ideología de la violencia».

cieron a parte de los sectores que más esperaban de ellas —con el resultado de amplios niveles de protesta popular— sino que además presionaron lo suficiente a los grupos sociales tradicionalmente depositarios del poder como para que, a la postre, se decantaran por una salida drástica y violenta que acabara con todos esos peligros. Ello, la propia dinámica reformas/contrarreformas, la politización de la vida social y la «militarización de la política durante la II República» harían de ésta «una época de violencia política, con precedentes en nuestra historia anterior pero de rasgos indudablemente nuevos».¹⁴

Ahora bien, de ninguna manera parece que se pueda establecer una relación directa entre esa violencia política y su desenlace en forma de guerra civil, y mucho menos encontrar un «ambiente general prerrevolucionario» que hiciera fracasar a la República. Estas tesis, surgidas de los sectores que apoyaron la sublevación para justificar ésta y el régimen resultante, han tenido una larga vigencia y fueron utilizadas de forma menos grosera y con matices diversos por autores como R. Carr, R. A. H. Robinson, S. G. Payne o el propio Juan J. Linz. No obstante, si se cambia la óptica y no se ve en la guerra un final consecuencia del fracaso del periodo anterior, sino una radical ruptura con el mismo por parte de unos sectores sociales bien determinados, la naturaleza supuestamente determinante de la violencia política en el desencadenamiento de la contienda queda en entredicho. Por lo mismo, tampoco es fácil encontrar, más allá de mitos y condenas, ninguna relación causal entre esa tan traída y llevada violencia previa y la posterior represión republicana que, como han señalado los autores que la han estudiado,

¹⁴ J. Casanova, «España, 1931-1939: República, protesta social y revolución», en J. Valdeón *et al.*, *Revueltas y revoluciones en la historia*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994 (2ª ed.), pp. 135-150, donde aparece también la cita de R. Carr sobre las reformas blandas pero amenazadoras. El último entrecómido y lo de la militarización, en la introducción del mismo título de J. Aróstegui al nº 11 de *Historia Contemporánea* (1995), dedicado a «Teoría y práctica de la violencia política en la España de los años treinta» (pp. 13-27, cita en p. 14). Para el uso habitual de la violencia por el Estado español, pueden verse los textos de R. Cruz citados dos notas más arriba.

aparece en lugares sin antecedentes violentos en los años previos. Por lo tanto, habría que buscar sus orígenes en otra parte.¹⁵ Y el caso zaragozano no es aquí ninguna excepción.

Pese a las fantásticas afirmaciones del fiscal instructor de la «Causa General» de esta provincia sobre las cotidianas «explosiones de bombas» o los «intentos de incendios de Iglesias y conventos, [...] las colisiones entre los elementos revolucionarios y la fuerza pública y los atropellos que se cometían contra el derecho de propiedad y otros derechos fundamentales [que] estaban a la orden del día», lo cierto es que nada hacía presagiar en el campo zaragozano la ola depuradora que llegaría a los dos lados de las trincheras desde julio de 1936. Está claro que la provincia no era una balsa de aceite social y que a ella habían llegado la politización general de los años treinta —con todas las esperanzas y temores que la acompañaban—, los cambios y transformaciones que vivía la estructura económica y sus consiguientes efectos en las prácticas sociales y sindicales. Y tampoco se caracterizaba por su inmovilidad la agricultura, que estaba llevando a cabo un esfuerzo por aumentar los rendimientos, la superficie cultivable y la salida comercial de sus productos, así como por introducir nuevas técnicas, regadíos y cultivos intensivos (sobre todo la remolacha) que pasarían del 18,4% del producto agrario provincial en 1900 al 38,5% treinta años más tarde.¹⁶

¹⁵ J. Barrull, *Violència popular i justícia revolucionaria*, p. 113; Pedro Barruso, *Verano y revolución. La guerra civil en Gipuzkoa (julio-septiembre 1936)*, Haramburo, San Sebastián, 1996, pp. 42-48; M. Ors, *La represión de guerra y posguerra*; o M. Ortiz Heras, *Violencia política*, p. 75. Lo de fracaso o ruptura, en Santos Juliá, «El fracaso de la República», *Revista de Occidente*, 7-8 (1981), pp. 196-211. La tesis franquista de la violencia previa y la «revolución inminente» a la que el golpe militar se adelantaría, en J. Arrarás (dir.), *Historia de la Cruzada Española*, t. xxxvi, 329 ss., o Diego Sevilla Andrés, *Historia política de la Zona Roja*, Edit. Nacional, Madrid, 1954, pp. 221-229. Esas tesis fueron refutadas de forma definitiva por Herbert R. Southworth en *El mito de la cruzada de Franco*, Ruedo Ibérico, París, 1963, a completar con Ramiro Cebrián, «Violencia política y crisis democrática: España en 1936», *Revista de Estudios Políticos*, 6 (1978), pp. 81-115.

¹⁶ Luis Germán, «Aragón invertebrado: atraso económico y dualismo interno (1830-1930)», *Revista de Historia Económica*, 2 (1988), pp. 311-339, y «Uso del

Sin embargo, nada de ello obsta para que, con la importante excepción de la capital, siguiera siendo una provincia eminentemente rural y de una base agrícola cerealística, relativamente poco poblada y con amplios desequilibrios territoriales. La tasa de analfabetismo alcanzaba el 45,6% en la provincia, cerca de la mitad de la población activa se dedicaba al sector agrario y la industrialización era mínima fuera de la capital. Por ello mismo, uno de los aspectos más significativos de lo que venimos diciendo sería la distribución de la propiedad de la tierra. Porque, lejos de los niveles de concentración rústica de otras regiones del centro y sur que vivieron una gran conflictividad, en este caso se define por un meridiano dominio de la pequeña e ínfima propiedad —18,7 y 77,9% de los contribuyentes respectivamente, en total 96,6%— y por un alto reparto de la propiedad. Ello suponía bajos porcentajes de grandes latifundistas —aquí en su mayoría nobles absentistas— así como de jornaleros y campesinos sin tierras. A mayor abundamiento, y siempre excluyendo a la capital, las tasas de sindicación eran moderadas, a la hegemonía de la UGT frente a la CNT se unía la gran extensión en la provincia del sindicalismo católico y agrario y, por último, las candidaturas de derechas vencieron tanto en las elecciones de 1933 como en las de 1936.¹⁷

suelo y producción agraria en Aragón durante el primer tercio del siglo XX», *Cuadernos Aragoneses de Economía*, vol. 12 (1988), pp. 19-42. Para una muestra del no inmovilismo del sector agrario, J.I. Jiménez Blanco, «Introducción» a R. Garrabou, C. Barciela y J.I. Jiménez Blanco (eds.), *Historia agraria de la España contemporánea. 3. El fin de la agricultura tradicional (1900-1960)*, Crítica, Barcelona, 1986, pp. 9-141. Sobre los avances y límites del sector industrial, véase José A. Biescas, *El proceso de industrialización en la Región Aragonesa en el periodo 1900-1920*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1985. La cita inicial es de AHN, CG, leg. 1423 (1), «Informe de Zaragoza...», pero cabe encontrarlas parecidas en leg. 1426: pieza nº 6, fs. 6-12, y en Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, *Desarrollo industrial y mercantil en la provincia de Zaragoza: ejercicio 1936*, Edit. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1937, v. gr. p. 103.

¹⁷ Para los datos proporcionados, Luis Germán, *Aragón en la II República. Estructura económica y comportamiento político*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984, pp. 45-47, 89-90, 56 y 62. En la misma obra hay análisis de la

Bajo esos datos globales se esconden diferencias comarcales acusadas. De este modo, las comarcas de la Ribera del Jalón tienen más altas densidades demográficas, las de La Almunia y Cinco Villas registran mayores índices de concentración de la propiedad rústica y las tres citadas se colocan a la cabeza de la afiliación a los sindicatos de clase. Sin embargo, aunque convendrá recordarlas a la hora de explicar las muertes de los originarios de esas zonas, esas diferencias no modifican sustancialmente nuestra argumentación, pues se refieren siempre a comarcas que no quedaron en el bando republicano. Las que sí lo estuvieron no sólo confirman lo expuesto más arriba sino que son sus mejores exponentes. Así, las de Caspe, Belchite y Pina figuran entre las cinco con menor densidad de población y entre las de mayores tasas de analfabetismo de la provincia, y las dos primeras tienen dos de los seis menores índices de concentración rústica. Del mismo modo, las dos últimas están a la cola de la sindicación obrerista, la primera sólo es superada por Zaragoza en afiliados a sindicatos agrarios conservadores y, con la sola excepción del reñido triunfo en Caspe del Frente Popular, en las tres vencen siempre en 1933 y 1936 las candidaturas de derechas.¹⁸

estructura de la propiedad (pp. 47-71), la coyuntura socioeconómica de la etapa republicana (87-127), de los partidos y sindicatos aragoneses (pp. 129-206) y sobre todo de los resultados electorales de ese mismo periodo (207-364). Los datos de la afiliación de la UGT (19.634) y la CNT (4.615) en el campo zaragozano están recogidos en Santiago Castillo *et al.*, *Historia del socialismo en Aragón, PSOE-UGT (1879-1936)*, Facultad de CC. EE. y Empresariales, Zaragoza, 1979, pp. 137-138, y J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, pp. 26-27, donde se demuestra que en Aragón el anarcosindicalismo era un fenómeno urbano. Una visión más optimista sobre la extensión de la CNT en el agro aragonés, en Graham Kelsey, «Anarchism in Aragon during the Second Republic: the emergence of a mass movement», en M. Blinkhorn (ed.), *Spain in conflict, 1931-1939. Democracy and its enemies*, Sage Publications, Londres, 1986, pp. 60-82. Para el asociacionismo agrario y católico y las organizaciones derechistas es indispensable la tesis doctoral de Manuel Ardid Lorés, «La reacción conservadora en la provincia de Zaragoza bajo la Segunda República. Ideologías, organizaciones y práctica social», Universidad de Zaragoza, 1990, pp. 334-471 y 472-776 y 1037-1043.

¹⁸ *Ibidem*, p. 369; L. Germán, *Aragón en la II República*, pp. 41, 63, 46 y 336; S. Castillo *et al.*, *Historia del socialismo en Aragón*, pp. 137-138, y J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, pp. 26-27.

Tal como indican repetidamente los testimonios orales, y como hubieron de reconocer los llegados a hacer la revolución a pesar de sus cantos al afán liberador del pueblo aragonés, en esas comarcas orientales de Zaragoza «todo el mundo tiene un pedazo de tierra» y no había grandes latifundistas sino una propiedad muy repartida: «hasta los ricos eran gente que tenía que trabajar con sus manos», y «poco, pero todos tenían algo». De ahí «el escaso relieve que [tenía] el movimiento social», con contadas excepciones como Maella, Sástago o Mequinenza, en toda la zona.¹⁹

En esas circunstancias, no debe sorprender que no encontremos aquí el radicalismo, la extrema polarización social o mucho menos el amplio uso de la violencia en la acción colectiva que se ha visto para otras zonas del país durante la República. Porque, salvo contadas excepciones, el campo zaragozano no vive insurrecciones anarquistas, ni ocupaciones de tierras ni choques con la guardia civil y, además, esos pocos casos se producen precisamente en las comarcas más alejadas de lo que sería desde julio de 1936 la zona republicana. En efecto, las principales causas concretas de conflictividad en la provincia habrían sido, por un lado, las peticiones de aplicación de la Reforma Agraria y de la devolución de los comunales en zonas cerealícolas de gran concentración de la propiedad (Cinco Villas); y, por el otro, los deshaucios y revisión de arrendamientos rústicos en comarcas de alta acumulación de éstos como Zaragoza, Borja o la Ribera del Jalón. Consecuentemente, y aunque en ambos casos empezarían como peticiones tramitadas por cauces

¹⁹ La primera y última cita son respectivamente de *Solidaridad Obrera*, 25-8-1936, y *Nuevo Aragón*, 22-4-1937, mientras que las otras dos proceden de los testimonios de Ramón Rams, Fabara, 20-5-1999, y Santiago Gonzalvo, Gelsa, 9-1-1999, aunque podrían multiplicarse con los de otros pueblos. Algunos de los sindicatos que había en esa zona, además, eran de reciente creación y, como en La Zaida o Nonaspe, surgían para el trabajo en obras públicas o carreteras (AHN, CG, leg. 1429 (1), Informe de La Zaida, f. 97, y testimonio anónimo, Nonaspe, 21-5-1999).

legales, cuando la intransigencia y boicot de los grupos patronales desencadenaron los conflictos y éstos llegaron a ser violentos, esta violencia aparece en esas zonas. No es casualidad, por tanto, que los casos más sonados —pensemos en la insurrección de diciembre de 1933 o en las ocupaciones de ayuntamientos, cortes de carreteras y huelgas en octubre del 34— tuvieran lugar precisamente en esos puntos de la provincia.²⁰

Mientras tanto, en su levante estas actuaciones se reducían a dos postes de telégrafos serrados junto a Belchite y a una débil huelga en Caspe, saldada con la inmediata sustitución del consistorio de 1931 por uno de «designación gubernativa» que funcionaría hasta febrero del 36. Por lo demás, las fuentes consultadas dejan como balance de estos años escasísimos episodios de violencia política, episodios en los que sólo se derrama sangre en cuatro ocasiones. En el primero de ellos moría asesinado a manos de un derechista el alcalde de Letux y diputado provincial radical-socialista José Artigas, el 18 de agosto de 1932, tras varios meses en los que el nuevo párroco, «uno de esos curas con pistola», se había hecho el «líder de las derechas sin ninguna duda» y las había enfrentado a aquél. En Lagata, en segundo lugar, precisamente al volver de un acto en recuerdo del alcalde de Letux, varios jóvenes de izquierdas en rondalla se apostaron frente

²⁰ J. Cifuentes y P. Maluenda, *El asalto a la República*, pp. 160-168. Para la conflictividad en la capital, con algunas referencias a otras localidades, está el texto de Enrique Montañés, *Anarcosindicalismo y cambio político. Zaragoza, 1930-1936*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1989, y como obra más general sobre Aragón, Graham Kelsey, *Anarcosindicalismo y Estado en Aragón: 1930-1938*, Fundación S. Seguí, Madrid, 1994. El seguimiento en Aragón de los sucesos de diciembre del 33 puede verse en *Ibidem*, pp. 230-243, J. Casanova, *De la calle al frente*, pp. 118-121, y Luis Germán, *Aragón durante el siglo XX. Estudios urgentes*, Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza, 1998, pp. 113-119; mientras los de octubre del 34 están en *Ibidem*, 120-126, J. Borrás, *Aragón en la revolución*, pp. 62-64. Para ambos, también, *Heraldo de Aragón*, días 10, 13 27-12-1933 y 9 a 10-10-1934, y AHN, CG, leg. 1426 y 1429 (1): piezas nº 2 y 7, pássim. Las localidades más afectadas por esos hechos fueron Calatayud, Daroca, Zuera y Puendeluna en 1933, y Uncastillo, Tauste, Ejea, Mallén y Gallur en 1934.

a la casa del cura dedicándole insultos y canciones soeces y, cuando éste salió al balcón, le llovieron algunos disparos, resultando heridos él, su hermano y su madre, que moriría días después. En el Caspe de agosto de 1935, la historia se repetía: en la terraza de una plaza céntrica, el dirigente de la Agrupación Republicana local y alcalde hasta la destitución en octubre del año anterior, José Latorre, era abatido a causa de rivalidades políticas por un primo militante de la CEDA. Y, por último, el conserje del centro de la CEDA de Quinto acababa con la vida de un sereno del Ayuntamiento precisamente la noche anterior a las elecciones de febrero de 1936.²¹

Pese a las afirmaciones de la Cámara de Comercio zaragozana y de la prensa católica, y bien que los testimonios orales insistan en el «ambiente irrespirable» de aquellos meses, la victoria del Frente Popular en esas elecciones no supuso un cambio relevante en el paisaje que venimos describiendo. Con los movimientos socialista y cenetista en pleno proceso de reorganización y moderación táctica tras la represión sufrida por los hechos de 1933 y 1934; con unas autoridades más dialogantes; y con el proyecto de Reforma Agraria puesto en marcha, lo que hay más bien es reivindicaciones laborales y sindicales y confianza en la mediación gubernativa y en esa Reforma. Ésta, pese a todas las expectativas levantadas —era «el primer intento serio de reforma agraria [...] en la historia de España»—, sólo se había aplicado a cuatro localidades zaragozanas cuando estalló la guerra civil y no se habían asentado en las tierras afectadas más de

²¹ Sucesos extraídos de AHN, CG, leg. 1429 (1): pieza nº 7; Archivo Municipal de Quinto, leg. 12-1: Actas Ayuntamiento, 29-2-1936; *Heraldo de Aragón*, 20-8-1932, 22-8-1934 y 7-8-1935; y del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (desde ahora AHPZ), Sentencias de lo penal, 1930-1936 (que me ha proporcionado amablemente Eliseo Moreno). También aparecen en M. Plou, *Historia de Letux*, pp. 332-335; M^a P. Salomón, «La crítica moral al orden social: la persistencia del anticlericalismo», pp. 288 y 402-403; y los testimonios de A. Gambau, Caspe, 12-12-1998, José Sanz, Caspe, 20-3-1999, y M. Plou, Zaragoza, 13-4-1999 (de donde procede el entrecomillado).

546 campesinos. A pesar de ello, de la grave crisis económica, de la tenaz resistencia de las clases dominantes y de los preparativos de un golpe militar, ni la provincia ni Aragón destacan por su polarización social o por su conflictividad. Antes bien, ésta se reduce a huelgas por reclamaciones concretas y nada revolucionarias y a escasos conflictos puntuales en los que la violencia apenas aparece y, cuando lo hace, proviene de los sectores patronales. Es el caso de Alfajarín, Daroca y Malpica Arba. O el de Zuera, donde, en un roce entre socialistas y militantes de Acción Popular (CEDA), éstos disparan sobre aquéllos con el balance de un muerto, varios heridos y hasta sesenta detenidos. Sea como fuere, lo cierto es que, en conjunto, puede afirmarse que en la provincia de Zaragoza, como en las otras dos aragonesas, «la violencia no acompaña a las agitaciones campesinas en este periodo» y «el grado de conflictividad social distaba mucho de esa situación revolucionaria que tan ligeramente se supone».²²

Las comarcas que tras julio del 36 quedaron en zona republicana tampoco resultan aquí, durante los meses previos, una nota discordante. En su afán legitimador del golpe de julio, la «Causa General» buscaría en 1941 resaltar el estado de violencia y «malestar contra los propietarios y personas de orden en general, reinando por tal circunstancia el mayor desorden en todos los órganos de la vida» en todos los pueblos. Sin embargo, lo que se encuentra en los de la zona

²² J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, pp. 47-59 (las últimas citas, en pp. 55 y 116); J. Cifuentes y P. Maluenda, *El asalto a la República*, pp. 160-168; y parecidas conclusiones para Zaragoza ciudad, en E. Montañés, *Anarcosindicalismo y cambio político*, pp. 125-133. En la primera de las tres (p. 52) aparecen recogidos asimismo todos los conflictos de los que da cuenta la prensa. En la Causa General, aunque hay que tomarlo con reservas, aparecen además otros, como la muerte de un derechista de Uncastillo en junio o una refriega con varios heridos y un asalto a la farmacia de un militante católico en Ejea y Calatayud en mayo: estos casos y el de Zuera, en AHN, CG, leg. 1429 (1): pieza nº 7, informes de la Guardia Civil para cada pueblo (1941). La primera cita es del clásico estudio sobre *Reforma Agraria y revolución campesina en la España del siglo XX*, de Edward Malefakis (Ariel, Barcelona, 1971, p. 20).

aquí considerada no parece confirmar esas tesis. Además de la confusa muerte del juez municipal de Moneva —«cuyo hecho fue por asuntos políticosociales»— y de las roturaciones ilegales en ésta y en su vecina Moyuela, todo lo que el instructor de la «causa» es capaz de hallar se reduce a cantos revolucionarios e insultos a los derechistas durante las manifestaciones del 14 de abril y el primero de mayo en media docena de lugares, «coacciones» a trabajadores no sindicados en otros dos, un petardo junto a la casa de un derechista en Velilla de Ebro, cuatro «huelgas de trabajadores del campo que fueron solucionadas rápidamente y sin incidentes» (Bujaraloz, La Almolda, Herrera y Aguilón) y muy poco más. Por su parte, hasta en la mitad de los pueblos no se halla «ninguna incidencia». Es cierto que a lo anterior habría que sumar una huelga en pro de mejoras laborales en las industrias de Mequinenza y Sástago; o actos anticlericales esporádicos, como perturbar procesiones o actos litúrgicos, derribos de algunas cruces, capillas o pilares del *Via crucis* e insultos a los que iban a misa y a los sacerdotes.²³ Mas, con todo, nada confirma las tesis de la violencia del «Frente Popular» y, como incluso habrán de reconocer los vencedores de 1939, «las actuaciones revolucionarias inmediatas a la guerra fueron muy intensas, pero sin actos de violencia», y desde las elecciones de febrero hasta el 19 de julio «no se planteó [...] conflicto de ninguna clase, manteniéndose el orden público».

Caspe, ciudad que como vimos viviría desde julio la mayor represión de la Zaragoza republicana, parece a ese

²³ La huelga de Mequinenza y Sástago, en *Heraldo de Aragón*, 29-5-1936, 5 y 10-6-1936 y G. Kelsey, *Anarcosindicalismo y Estado*, pp. 353-354. Los actos anticlericales, en M^a P. Salomón, «La crítica moral al orden social», pp. 401-422 y el apéndice III.1 (pp. 676-715), donde están recogidos todos esos actos ocurridos en Aragón. Los de la «Causa», en leg. 1429 (1): pieza 7^a, informes para cada localidad, de los que proceden todos los entrecomillados. Además de los citados, sólo aparecen insultos a los miseros de Cinco Olivas, no dejar al cura llevar sus ornamentos en varios entierros (Mequinenza) y trabajos realizados en tierras sin petición de sus dueños y que se pretendían cobrar (Escatrón). Lo de Moneva, en *Diario de Aragón*, 2-5-1936.

respecto el mejor ejemplo. En esos meses hubo «tensión», para algunos «más sorda y rabiosa», pero no huelgas ni conflictos. Lo que sí había, en cambio, era posiciones moderadas y confianza en la negociación, cristalizada en las peticiones al Ayuntamiento de reparto de comunales y en la obtención de la cesión gratuita por el Conde de Sástago de 8.000 hectáreas de monte. Junto a ello, es cierto, se encuentran posturas claras y enfrentadas en lo político entre los perjudicados y los posibles beneficiados por las reformas —aunque tampoco ahí cabe hablar de una nítida y unívoca polarización, como demuestran los lamentos de *Solidaridad Obrera* ante la actitud hostil del alcalde frentepopulista de Caspe, precisamente la víspera del 18 de julio. Sea como fuere, en todo caso «nadie pensó en que habría muertes. La violencia la iniciaron los sublevados». De hecho, a lo anterior se añade que, tal y como se ha visto incluso para las regiones con más conflictividad del país, ésta ni siquiera fue mayor que en años anteriores. El problema era que, ahora, el sistema de dominación estaba amenazado, y eso es lo que daría un giro radical a los acontecimientos.²⁴

Ese giro, y por lo tanto lo que trajo a la provincia esa violencia que estaba lejos de formar parte de su práctica social y política, se inició como ya se apuntó el 18 de julio. Pero, en realidad, venía de más atrás. Al menos, desde el día en que quienes dieron ese paso y lo apoyaron decidieron darlo. Sin duda, la pérdida de las elecciones de 1936 fue un jalón decisivo en ese itinerario, así como la consiguiente salida del

²⁴ Eduardo Sevilla Guzmán, *La evolución del campesinado en España*, Península, Barcelona, 1979, p. 122. Para Caspe, J. Casanova, *Caspe, 1936-1938*, pp. 19-24. Las peticiones de comunales proceden de las Actas del Ayuntamiento del 26 de junio (Archivo Municipal de Caspe, leg. 32-4), mientras que las citas provienen de los testimonios de A. Vicente, Caspe, 24-1-1998, y José Sanz, Caspe, 20-3-1999. Por último, los dos entrecomillados finales del párrafo anterior están extraídos de AHN, CG, leg. 1429(2), pieza nº 10, «Informe del Arzobispado de Zaragoza...», fol. 60, y leg. 1429(1), pieza nº 7, informes sobre la situación socio-política de cada pueblo en enero-julio de 1936 (Guardia Civil, 1941).

poder político por parte de los grupos tradicionales y el inicio a escala nacional de unas reformas que hacían peligrar seriamente su posición social y económica. Porque sería eso, y no una hipotética revolución cuya supuesta amenaza ya había pasado, lo que induciría a esos grupos sociales y a su tradicional «salvador» y garante militar a dejar de lado la vía parlamentaria para lanzarse a una salida violenta. Salida que, como en los otros regímenes fascistas del momento, acabara expeditivamente con esos peligros y con sus enemigos, les devolviera el control absoluto del aparato estatal y, en suma, sacara al sistema, con «una forma menos peligrosa y permanente de protección», de la profunda crisis de dominación en que estaba inmerso.²⁵

Por lo tanto, la violencia no es causa de la guerra, sino manifestación y efecto. Manifestación de esa salida drástica y de la ostentosa y planificada voluntad represora de sus ejecutores. Y efecto, sobre todo, del fracaso relativo de ese golpe militar que, al rebelar a las fuerzas de seguridad contra el gobierno y dividir las en dos bandos, abría la única posibilidad de revolución existente en sociedades dotadas de modernos aparatos estatales de coerción. Porque, al no triunfar y devenir en guerra civil, ese fracaso ocasionó un «vacío en la cima del Estado», un colapso de sus medios coercitivos y una pérdida sin precedentes del monopolio en el uso de la violencia, que repartía el ejercicio de ésta entre el «hervidero de poderes» que sustituían al poder central. Era la «crisis de

²⁵ J. Casanova, en *El pasado oculto*, pp. 1-28, y Paul Preston, *Las derechas españolas en el siglo XX: autoritarismo, fascismo y golfismo*, Sistema, Madrid, 1986, de donde procede el entrecomillado (pp. 36-37). La aplicación de este esquema a Aragón, en la primera de las citadas, y en Ángela Cenarro, *Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997, pp. 30-36. También se ha usado aquí Mercedes Cabrera, *La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia, 1931-1936*, Siglo XXI, Madrid, 1983; Alejandro López López, *El boicot de la derecha a las reformas de la Segunda República*, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1984 y, para una elaborada interpretación similar, Reinhard Kühnl, *La República de Weimar*, Alfons el Magnànim, Valencia, 1991.

autoridad», la «oportunidad», la situación de «soberanía múltiple» requerida para la acción y la violencia colectivas, y precisamente la acusada intensidad de aquéllas en esta guerra civil traía aparejada la de éstas.²⁶ Pero esto, válido para toda la España republicana, lo era además especialmente para el caso de la retaguardia zaragozana y aragonesa. Porque aquí, con la línea del frente cercana y atravesando toda la región de norte a sur, las tres capitales administrativas ganadas por los militares insurrectos y con el territorio «invadido» por fuerzas milicianas catalanas y levantinas, esa desaparición del Estado y de sus mecanismos coercitivos, así como la dispersión del uso de la violencia en una miríada de «micropoderes», eran mayores que en otras regiones situadas retaguardia adentro. De ahí la notable diferencia en los índices represivos entre éstas y las comarcas aragonesas a las que llegó la tormenta revolucionaria.²⁷

Desde ese punto de vista, la represión que teñirá de sangre la retaguardia republicana zaragozana es una violencia exógena que llega importada desde fuera. En primer lugar porque, como hemos tratado de demostrar, no bebe de ninguna tradición de uso de esas prácticas en esta zona, ni siquiera en los conflictivos años republicanos. Exógena, tam-

²⁶ La relación entre el golpe y el desmoronamiento de la legalidad es algo sobre lo que ya trataron en su día P. Broué y P. Vilar en *Metodología histórica de la guerra y la revolución españolas*, Fontamara, Barcelona, 1982, pp. 25-46 y 86-98. El entrecomillado sobre el vacío estatal está tomado de J.-C. Martin, *Révolution et Contre-révolution en France, 1789-1989*, p. 107 y, aplicado al terror durante la Revolución francesa, alude a que hizo borrosas las nociones de legalidad o legitimidad, impidiendo la consolidación de políticas consensuadas y exacerbando la violencia. Lo de «hervidero de poderes» es una gráfica imagen usada en J. Casanova, *De la calle al frente*, p. 162, mientras que la rebelión del aparato coactivo como posibilidad revolucionaria está tomado de Peter Waldmann, «Estrategias estatales de coacción», *Sistema*, 65 (1985), p. 97.

²⁷ Incluidas zonas, como la Andalucía oriental, donde un movilizado campesinado sin tierras se había puesto al frente de los poderes revolucionarios para implantar el «orden social campesino» y eliminar a sus enemigos de clase: F. Cobo Romero, *La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén*, pp. 103-330.

bién, porque, pese a los apoyos con los que cuenta en estas comarcas, el golpe militar y la guerra que la desencadenan distan de limitarse a esta provincia y tienen sus orígenes inmediatos fuera de ella. Y de fuera vienen, asimismo, la revolución, las armas milicianas y la mayoría de los que las empuñan, primero en los frentes y luego también en la «limpieza» de la retaguardia. Es algo sobre lo que volveremos más adelante, pero las fuentes —aunque quizá en esto más que en cualquier cosa muestran sus carencias— no dejan duda respecto a los rostros de los protagonistas de esta violencia. De la misma manera que eran ellos los que quemaban las iglesias e imágenes religiosas, todos los indicios apuntan a que fueron los milicianos quienes llevaron el peso de la tarea depuradora. Durante las primeras semanas, ellos buscan a los insurgentes y a los curas, efectúan las detenciones y disparan los gatillos. Posteriormente, tras las «sacas», «paseos» y expediciones punitivas nocturnas a otros pueblos estarán sus comités de guerra y grupos más o menos «incontrolados» de milicianos, como las brigadas o «coches de la muerte» que operaban cerca de Caspe y Sástago o la «Banda Negra» —fuerza de choque móvil de la columna de Durruti— que lo hacía alrededor de Pina. Como se denunció a menudo, las columnas hicieron o deshicieron a su antojo en no pocos lugares durante varios meses y emplearon las armas —y por ende la violencia— como instrumento de control de la retaguardia y de la revolución en las zonas cercanas al frente en las que estuvieron instaladas. Del mismo modo, tampoco es fácil pasar por alto que sea en esas zonas en las que los episodios de violencia represora llegan más lejos en el tiempo, o que las localidades con mayores víctimas de esa violencia coincidan a menudo con aquellas donde los milicianos estaban instalados con comités de guerra y grupos de investigación.²⁸ Huelga decir, por último, que sin su avance y sin sus armas, lo que aquí narramos no habría sido posible.

²⁸ Como Leciñena, La Almolda, Gelsa o Herrera. O como Azuara, en la que en fecha tan tardía como junio de 1937 se denuncian los atropellos, arbi-

No es extraño, por tanto, que quedara en la memoria histórica de estas comarcas el convencimiento de que se trató de una «violencia exógena» o, en casos extremos, de que fuera el resultado de la invasión de esos extranjeros que hablaban en catalán.²⁹

LAS FUENTES LOCALES DE LA VIOLENCIA: CONFLICTO RURAL Y FRACTURA SOCIAL

La historia, sin embargo, no es tan sencilla. Visto el desencadenamiento de la violencia y su llegada a la provincia y esbozadas las razones de su intensidad, quedaría por explicar otras cosas. Las significativas diferencias en el alcance de esa represión —cuando la guerra y los milicianos habían llegado a todas partes por igual— y la elección de las víctimas concretas por parte de los que disparaban los gatillos son algunas de ellas. Y, en este punto, resulta ineludible considerar otras dos dimensiones, en absoluto ajenas entre sí, como son los específicos marcos locales y el papel desempeñado en este fenómeno por los habitantes de los pueblos que experimentaron la dramática llegada de la guerra y la revolución.

Respecto a lo segundo, ocurre que ni los milicianos entraron en todas las poblaciones disparando, ni tampoco es concebible creer que supieran por sí solos quiénes eran los derechistas y los que se habían sublevado o dónde se escondían los curas. Ahí entran en juego, por supuesto, los vecinos de estas comarcas o, al menos, esa parte de los mismos

triedades y persecuciones de un grupo de la Columna Carod: «Escrito del presidente del Sindicato de Oficios Varios de Azuara protestando... a la Ejecutiva Nacional del PSOE», en Fundación Pablo Iglesias de Madrid, Archivo Histórico (FPI-AH), caja 16, carpeta 20, fol. 17.

²⁹ Declaración de F. Morales en CG, leg. 1424(2), rama de Caspe. Lo de la violencia exógena proviene del testimonio de Domingo Gargallo (Caspe, 24-1-1998) quien también afirma, como muchos otros entrevistados, que la mayor parte de los que disparaban en las ejecuciones eran catalanes.

que colaboraron con los venidos de fuera y les proporcionaron las listas de los blancos de la «limpieza». Porque, rebatido ya de forma suficiente el mito del pueblo campesino que hace espontáneamente y por sí mismo la revolución y destruye el viejo orden, conviene recordar también que, iniciado ese proceso por otros, aquél no fue una mera y muda comparsa. Como veremos, no fueron todos, y el asunto tiene más que ver con una minoría que con la «chusma» y con un «espontáneo» «pueblo en armas». Pero, en todo caso, algunos tenían mucho que decir y, aprovechando la coyuntura, lo dijeron.

Íntimamente ligado a lo anterior, los marcos sociales y políticos de cada lugar vienen a completar y matizar las conclusiones a las que se llegó en el epígrafe precedente. Porque, si la represión en la provincia no fue la continuación de una supuesta violencia «revolucionaria» previa, y aunque es muy probable que nunca se hubiera desencadenado sin la sublevación militar, este detonante se alimentó necesariamente de un fondo local. Fondo sin el cual los movimientos de protesta popular acaban interpretados en términos de *tabula rasa* y agentes externos a los que la «turba» sigue engañada.³⁰ La ausencia de violencia colectiva, pese a que algunos confundan una cosa con otra, no implica por fuerza inexistencia de conflictividad, pues la primera no es sino una de las variadas salidas y manifestaciones —bien que la más llamativa— de la segunda. Y en el medio rural del interior peninsular quizá se expresara de otras formas. De hecho, siguiendo la misma argumentación, la propia presencia posterior de la represión durante la guerra indicaría su existencia previa, pues si cabe conflicto sin violencia, no hay ésta sin aquél.³¹

³⁰ George Rudé, *Revolución popular y conciencia de clase*, Crítica, Barcelona, 1981, p. 34, y del mismo autor *La multitud en la historia*, Siglo XXI, Madrid, 1989, pp. 252-253.

³¹ J. Aróstegui, «Violencia, sociedad y política», p. 29, y E. González Calleja, «La definición y la caracterización de la violencia».

Como se vio, cuando la represión llegó a la zona, no se extendió «inundatoria» por toda la retaguardia, sino que su geografía presenta notables diferencias locales. Tal como han destacado otros estudiosos de este fenómeno, en ese diverso alcance influirían circunstancias concretas como, por ejemplo, la presencia del clero, la cercanía de las columnas y los grupos «de investigación» y la mayor o menor distancia respecto a las fronteras y la zona «nacional» —es decir, lugares a los que huir. Mas, sobre todo, sus causas inmediatas estarían en el nivel de contestación y resistencias locales a la instauración del nuevo orden revolucionario impulsado por comités y milicias y, antes que nada, en el grado de apoyo civil a la sublevación militar. No es de extrañar, por tanto, que todas las localidades que se habían destacado en este último sentido —de acuerdo con lo visto en el capítulo precedente— estén entre las mayores afectadas por la represión de los revolucionarios; caso de Azuara, Herrera, Fuendetodos, Lagata, Gelsa de Ebro, La Almolda y, por supuesto, Quinto y Belchite. En el partido judicial de Caspe, en el que esto es quizá más claro, la sangre correrá sobre todo allí donde la derecha local se había puesto decididamente al lado de los militares y la Guardia Civil (Maella, Fabara y Escatrón); y, por supuesto, en Caspe, capital comarcal de la sublevación, testigo de la represión iniciada por ésta y protagonista del principal combate de la provincia en el avance miliciano. Por su parte, la menor violencia coincidirá perfectamente con los casos en los que nadie movió un dedo el 18 de julio e incluso la izquierda local tomó las riendas de la situación.³²

³² J. L. Ledesma, «Sublevados, milicianos, misiones y pañuelos rojos», pp. 319-340. Para otros estudios que explican las diferencias en el alcance de la represión con estos factores: J. M^a Solé y J. Villarroya, *La repressió a la rera-guarda de Catalunya*, p. 450; M. Ortiz Heras, *Violencia política en la II República*, p. 93, y E. Casanova, «Teruel, 1936-1938», pássim, que por otro lado son los que mejor se acercan a esta cuestión. Otros, a pesar de dedicar amplio espacio a ese alcance según comarcas y aun municipios, no logran superar lo descriptivo ni esclarecen convenientemente las razones de tales diferencias.

Ahora bien, este factor, como el de las resistencias locales a la revolución, remite a nuestro entender a una realidad más profunda como es el grado de fractura social entre los defensores locales del viejo orden y los que soñaban con cambiarlo desde años atrás. Desde ese punto de vista, el apoyo civil al «alzamiento nacional» agravaría esa fractura y radicalizaría las posiciones, pero no sería causa sino más bien efecto y manifestación del conflicto y de la existencia de una derecha local dispuesta a romper radicalmente con la República para resolverlo. En otras palabras, el golpe militar no crearía *ex novo* a los enemigos, sino que acabaría de definirlos en el marco de una conflictividad que con él iniciaba otros mecanismos de resolución pero que venía de atrás.³³

Venía, probablemente, de los cambios estructurales vividos a lo largo del primer tercio de siglo y que habían revisado la estructura de la propiedad creando nuevas formas de dependencia relacionadas con la necesidad de capital. Pero venía, sobre todo, del cambio en el poder local que había supuesto el advenimiento de la II República. Bien que sin los dramáticos caracteres de Andalucía, también aquí el campo albergaba condiciones de miseria y rencor hacia esos ricos que no hacían nada por mejorarlas. Desde hacía mucho tiempo, siempre había habido esas pocas familias o «casas» ricas que acaparaban las mejores tierras y «acampes», los molinos, las «fábricas» de aceite, la dirección de los sindicatos de regantes y el poder local, y que se aprovechaban de ello para imponer trabajo, votos, asistencia a misa e incluso relaciones vecinales al resto. Siempre, también, había existido una mayoría de propietarios ínfimos —hasta la mitad de la población agraria aragonesa— que, ante la exigüidad de sus tierras, debían ser además arrendatarios o medieros y buscar

³³ Situar el origen de la guerra civil y de la represión revolucionaria en esa conflictividad social agraria -antes que en la supuesta violencia política del periodo republicano- es la hipótesis nuclear del reciente trabajo de F. Cobo Romero, *Conflicto rural y violencia política*. Véase también a ese respecto el texto de M. Ortiz Heras citado en la nota anterior (*v. gr.* p. 90).

jornales, en condiciones a menudo vejatorias, para poder subsistir. Por lo mismo, nunca había faltado un gran número de campesinos inmersos en «la intrincada red de relaciones» creada por los arrendamientos, dependientes de esos ricos en lo económico, y por ende en lo político y social, y que «debían morir al palo con ellos».³⁴ Y en todo momento, por último, una Iglesia rectora de lo público y de lo privado había sancionado ideológicamente todo ese estado de cosas.

Sin embargo, en el marco de la politización general de los años treinta y de los intentos de reforma de un sistema en crisis, en algunos lugares lo anterior se hizo especialmente patente. Hasta aquí no llegaron la aplicación de la Reforma Agraria ni las ocupaciones de tierras, pero sí lo hicieron la movilización, esperanzas —y frustraciones— que acarreaban, la identificación de esa reforma con la propia República y los temores y hostilidad por ellas despertados entre los propietarios. Con los efectos de la crisis económica elevando el paro agrícola, recrudeciendo las condiciones de los arrendamientos y dificultando el diálogo social, y con las organizaciones políticas de izquierda —sobre todo las socialistas— apostando por la citada reforma, se fraguó una visible tensión por el control del poder local y las clases poseedoras se lanzaron a una campaña de exageración de los peligros que aquélla suponía. Trasuntos locales ambos, en definitiva, de lo que sucedía a nivel estatal. Por lo tanto, no se trataba sólo ni ante todo de una expresión de la miseria y el odio de clases, sino de una lucha por mantener y conquistar el poder político que podía redundar en una mejora de las condiciones del campesinado.

Ese era el caso, entre otros, de Pina de Ebro, donde el alcalde republicano se ganó la abierta hostilidad de la dere-

³⁴ La expresión está recogida de la entrevista con José Cirac, Fabara, 21-5-1999, aunque la mayoría de los otros testimonios hablan de lo mismo, y de ellos es deudor todo el párrafo. También de L. Germán, «Aragón invertebrado», pp. 311-339, y de M. Ardid, «La reacción conservadora», pp. 337-343 y 1009-1012, que firma el entrecorrido sobre las redes de arrendamientos y que subraya la complejidad e importancia historiográfica de éstos (pp. 956 ss).

cha local y de la docena de «casas ricas» al promover de forma decidida el reparto de las tierras comunales y otras obras sociales. Hostilidad que, no en vano, le llevaría a ser una de las primeras víctimas de la represión de los sublevados cuando tomaron Pina en 1938, a pesar de que durante la guerra no sólo fue marginado del poder local y de las actuaciones «revolucionarias», sino que se opuso —con riesgo para su vida, como veremos— al comité cenetista que las impulsó. Parecido sería lo que ocurriría —por ceñirnos sólo a las cabeceras comarcales de la zona y a sus alcaldes— en Belchite, donde desde ese cargo el socialista Mariano Castillo había llevado a cabo una serie de medidas —como impulsar el sindicato compesino de la UGT y su cooperativa de consumo o regular la ocupación por el mismo de la finca municipal «La Dehesa»— que despertaron la impenitente y unánime beligerancia de los sectores propietarios de una zona secularmente conservadora en sus comportamientos religiosos y políticos. Según los testimonios recabados, esa actitud agresiva «destrozó la convivencia» y alimentó el amplio secundamiento del «Movimiento» de julio de 1936, una de cuyas primeras manifestaciones fue, de nuevo, la «caza» y muerte del alcalde. Y, por supuesto, semejante fue el caso de Caspe, donde como hemos visto la primera autoridad local republicana no tuvo que esperar al estallido de la guerra para pagar con su vida la batería de actuaciones —algunas de ellas concebidas como «ataques» por la derecha local— que desplegara desde la alcaldía. Desde esa perspectiva, y vista la conflictividad como «la expresión de las tensiones en el momento de transición a la política democrática en el campo», en las zonas del interior peninsular «fue esta lucha política el origen esencial de conflictos muy similares a los de las zonas latifundistas».³⁵

³⁵ Aurora Bosch, «Nuevas perspectivas sobre la conflictividad rural en la Segunda República», *Historia Contemporánea*, 9 (1992), pp. 141-166 (citas en p. 143). La dificultad para el diálogo social, en Paul Preston, *La destrucción de la democracia en España. Reforma, reacción y revolución en la Segunda República*, Alianza, Madrid, 1987, p. 92. La campaña de exageración de la derecha y sus

Los posteriores apoyos a la sublevación militar serían la mejor prueba de que, pese a que no se manifestara con la misma intensidad que en el centro-sur, ese conflicto estaba presente. Y similar prueba sería la gran extensión del asociacionismo agrario y católico, que precisamente durante los años treinta pasó de un modelo tradicional y casi «folclórico» a otro más combativo concebido para crear un frente opuesto al socialismo y convertido en punto de referencia fundamental de la práctica política y social y de la vida económica de las localidades en las que apareció. Conviene tomar en consideración en este punto, además, que Caspe es durante la República el segundo partido judicial de toda la provincia en afiliación al sindicalismo agrario y que el de Belchite ocupa el mismo puesto en el porcentaje de pueblos con sedes locales de Acción Popular (13 de 16, sólo superado por Daroca). El otro partido que quedaría en su mayor parte en manos republicanas durante la guerra, el de Pina, había sido por su parte el segundo en el número de sentencias de revisiones de arrendamientos rústicos.³⁶ En todo caso, su traducción sería eso que hemos llamado variable fractura o división que alineaba en algunos lugares, de un lado, a los interesados en que nada cambiara —los «derechas»— y, del otro, a los partidarios del proyecto democratizador de la República o incluso de ir más allá de ésta. Mientras tanto, en otros lugares tal fractura no se abría o no lo hacía tan diáfananamente.

implicaciones fueron analizadas hace tiempo por el mismo Preston y Eduardo Sevilla-Guzmán, en «Dominación de clase y modos de cooptación del campesinado en España: La Segunda República», *Agricultura y Sociedad*, 3 (1977), pp. 147-165, sobre todo pp. 153-161, además de por M. Cabrera en *La patronal ante la II República*, pp. 152-191. El apoyo de los socialistas a la Reforma Agraria sirve a G. Luebbert para interpretar el apoyo del «campesinado familiar» a los regímenes fascistas de la Europa de entreguerras: *Liberalismo, fascismo o socialdemocracia*, v.gr. pp. 491-495. Véase también, para la movilización de masas de la derecha europea, la visión de amplio alcance de Michael Mann, «Orígenes de la diversidad de los movimientos de la clase europea en la Europa del siglo XX», *New Left Review* (edic. española), 0 (2000), pp. 47-96.

³⁶ M. Ardid, «La reacción conservadora», pp. 369, 754 y 961 y 967; el cambio del asociacionismo agrario, en pp. 353-471.

Diferencia ésta que tendría acusadas repercusiones cuando la guerra trajera la revolución y la represión.

A falta todavía de un estudio monográfico sobre la conflictividad social en el agro zaragozano durante la II República, las conclusiones sólo pueden ser provisionales. Sin embargo, no es fácil obviar algunos indicios que apuntan a que en algunos lugares las cosas no se estaban viviendo tan pausadamente como en otros. Y que se hacen significativos puestos en relación con el diferente alcance de la represión entre la veintena de localidades más afectadas —que resultan del cruce de las quince que más la sufren en términos absolutos, por un lado, y en términos relativos, por otro— y el resto.³⁷

De este modo, los ya vistos y contados episodios de violencia política durante esos años se producen en lugares —Caspe, Lagata, Letux o Quinto— que precisamente están entre los que en la guerra más sangre vieron correr. Más no es el único síntoma. Diecisiete de las diecinueve sentencias de lo penal por cuestiones político-sociales dictadas por la Audiencia de Zaragoza en estas comarcas corresponden también a esas veinte poblaciones más afectadas por la represión. Como les corresponden la gran mayoría de las manifestaciones de protesta anticlerical de los años republicanos, de las asociaciones católicas, de los sindicatos agrarios o de las secciones locales de Acción Popular. Y de la misma manera, ocho de los nueve municipios con mayor número de propietarios considerados expropiables por el Instituto de

³⁷ Esa delimitación de los lugares de mayor represión se ha elaborado de forma convencional y no persigue sino ser un indicador de lo que aquí se pretende demostrar. Esas localidades son Belchite, Azuara, Fuendetodos, Lagata, Letux y Plasas (partido judicial de Belchite); Aladrén, Herrera y Luesma (partido de Cariñena); Caspe, Maella y Fabara, (partido de Caspe), Gelsa, La Almolida, Osera, Pina, Quinto y Velilla (partido de Pina); y Leciñena (partido de Zaragoza). Para la conflictividad republicana en otra provincia aragonesa, véase José M^a Azpiroz, *Poder político y conflictividad social en Huesca durante la II República*, Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1993.

la Reforma Agraria y seis de los siete con sentencias de revisión de arrendamientos rústicos aparecen asimismo entre ellas.³⁸ En algunas, además, coinciden varios de esos síntomas. Así, las seis últimas están a su vez entre las ocho afectadas por el IRA, y en casi todas hay asociaciones agrarias, a veces más de una, y con un número de socios alto.³⁹ Por otra parte, y aunque aquí pisemos terrenos menos seguros, todas esas veinte localidades presentan un importante peso electoral de la derecha o, a lo sumo, una apurada victoria del Frente Popular en 1936. Ciertamente es que en varias poblaciones lo anterior se cumple sin que les corresponda una alta represión. Pero, en todo caso, ésta nunca es significativa en lugares en los que la hegemonía era de la izquierda, como Mequinenza o Sástago, ni en aquellos cuyos índices de abstención son superiores y la vida local está menos politizada. A mayor abundamiento, si la importancia electoral de la derecha en esas comarcas es mayor en la de Belchite, seguida de Pina y Caspe, el impacto relativo de la represión seguirá después precisamente ese mismo orden.⁴⁰ Y, para finalizar, no resulta sencillo pasar por alto la extraordinaria similitud entre los datos absolutos y porcentuales de la represión

³⁸ En estos dos últimos casos entran Caspe, Belchite, Pina, Azuara, Letux, Quinto, Gelsa y Velilla de Ebro. Y en ambos, la excepción es Mediana de Aragón, de la que otras fuentes reiteran la tensa situación social que vivía, pero a la que la represión republicana no pudo apenas llegar pues las fuerzas que la tomaron en el verano de 1937 permitieron a sus vecinos evacuarla hacia Zaragoza sin perseguirlos. Los datos usados en el texto proceden de M. Ardid, «La reacción conservadora», pp. 961-967, 1037-1043 y 1071-1079; M^a P. Salomón, «La crítica moral al orden social», pp. 676-715 y 724-730, y Archivo del IRYDA de Madrid, Registro Expropiable de la Provincia de Zaragoza (1933); mientras que los de la Audiencia de Zaragoza me los ha facilitado E. Moreno como anticipo de su investigación en curso.

³⁹ M. Ardid, ob. cit., pp. 977 y 1085-1086.

⁴⁰ Las elecciones del periodo republicano en Aragón son ampliamente estudiadas por L. Germán en *Aragón en la II República*, pp. 225-349. Para los resultados locales, véase no obstante la tesis doctoral origen de ese libro: «Elecciones y partidos políticos en Aragón durante la II República. Estructura económica y comportamiento político», Universidad de Zaragoza, 1982, vol. VII, pp. 37-51 y 84-98.

republicana y los de la franquista. Datos que se asemejan en los valores globales de estas tres comarcas, pero que también guardan, si descendemos a lo local, una estrecha relación que no puede ser casual y que probablemente aluda a una misma línea de fractura.⁴¹

Es obvio que esos indicios no son suficientes ni conclusivos y que a menudo se refieren a algunas de las localidades de que tratamos, nunca a todas. Existen, además, otras dimensiones de la vida rural de esos años, como la distribución de la tierra que, aunque válidas en el plano provincial y comarcal, no parecen guardar una relación directa con la mayor o menor represión republicana si descendemos a lo local.⁴² Sin embargo, no parece puedan ser ignorados habida cuenta que todas las localidades con mayor represión son alcanzadas por alguno de ellos, normalmente por varios y en algún caso por todos o casi todos —Caspe, Letux, Belchite, Quinto, Lagata o Pina—, mientras que sólo aisladamente se refieren a las menos afectadas. Máxime cuando, además, otras fuentes dan pistas en el mismo sentido. En Maella, por ejemplo, donde una derecha cerril se enfrentaba a un nutrido sindicato de la CNT, éste denunciaba en junio de 1936 a numerosos patronos por incumplimiento de contrato, no pocos de los cuales figurarán

⁴¹ Considerando los partidos de Belchite, Caspe y Pina, la represión de los sublevados sumaría 540 víctimas, frente a las 528 de la republicana. Pero a ello habría que añadir las limitaciones documentales que se ofrecen a los que estudian la primera, de modo que sus datos deben ser tomados como «mínimos»; y habría que añadir también que la represión franquista no se produce en esta zona en el momento más álgido -verano de 1936-, sino desde marzo del 38, con las solas y sangrientas excepciones de Belchite, Mediana y Quinto. Comparando los datos locales, hay un casi completo paralelismo entre las poblaciones con mayor y menor alcance por sendas represiones, e incluso una escasa variación en las cifras de ejecutados por cada bando. Los datos de la represión «fascista» los hemos obtenido a partir de J. Casanova *et al.*, *El pasado oculto*, pp. 232-434, 547-558, 569-577 y 583-589.

⁴² Sólo cuatro de las diez localidades con mayor concentración rústica están entre la veintena de mayor represión. Para esos datos, en los que se sigue el índice de concentración rústica de Gini, L. Germán, «Elecciones y partidos políticos», vol. II, pp. 366-394.

entre los caídos semanas después. Algo similar sucedía no lejos de allí, en Fabara, donde una de las cabezas de la reacción local —muerto asimismo en la represión de verano del 36— era apaleado también antes de iniciarse la guerra, mientras que los jóvenes de uno y otro bando hacían rondas nocturnas armados con navajas y alguna que otra pistola. O en Velilla de Ebro, tercera localidad de toda la provincia en número de revisiones de arrendamientos, en la que, ante las reivindicaciones de la CNT, todos los contrarios a ésta se agruparon en torno al combativo local de la CEDA. Mas no era siempre frente al sindicato cenetista, minoritario en la zona, sino que lo podía ser, como en Azuara, Belchite, Plasas o Luesma, ante la UGT, Izquierda Republicana o, simplemente, ante los «izquierdas». O contra todos a un tiempo, como en Caspe, donde no hubo «alteraciones del orden», pero «con motivo de la revisión de arrendamientos rústicos se fomentó y provocó una lucha de clases que ya se habría de mantener hasta el Alzamiento»; alzamiento, por cierto, cuidadosamente preparado en el Círculo Católico de esa ciudad. Sea como fuese, los testimonios orales de esos pueblos que conocieran después una mayor depuración —frente a lo que indican de forma mayoritaria en los otros— hablan de «unas derechas muy duras, más que en otras partes», de una división política vivida con nitidez a diario y de cafés y casinos diferentes para unos y otros, auténticos lugares de socialización de quejas, temores y esperanzas.⁴³ División que, en todo caso, podía tener una borrosa identificación con «derechas» e «izquierdas», pero que se tornaba evidente ante el criterio definitorio básico que para las comunidades rurales de los años treinta era la cuestión religiosa.

⁴³ Aunque lo hemos podido recoger en muchos otros testimonios semejantes, lo de las derechas «duras» es del de Joaquín Ibáñez, Azuara, 16-5-1999, y lo de Velilla de Ebro, del de Roque Guiu, Zaragoza, 20-4-1999. Las referencias a Maella y Fabara proceden de sus archivos municipales, legs. 1-1 y 42-18: informe personal sobre Francisco Campanales (1940), respectivamente. La de Caspe es de AHN, CG, leg. 1424 (2): rama de Caspe, declaración de F. Morales (1940).

Si bien política, esa división bebía de fuentes diversas y no siempre claras. En su formación podían estar las tensiones surgidas del reparto, en las décadas o años anteriores, de las tierras otrora administradas por absentistas y nobles. Es el caso, por ejemplo, de Fabara o Pina. O podían, incluso, hundirse en el siglo XIX, en las consecuencias de las desamortizaciones y en las viejas identificaciones familiares con carlistas y liberales. No obstante, como se ha señalado para otras regiones de la mitad norte peninsular, su origen no sería necesariamente un fraccionamiento horizontal, ni propiamente ideológico, sino antes bien «pugnas banderizas locales» que, en el complejo marco de las relaciones comunitarias, se asentaban sobre la base de «lealtades fundamentales personales, familiares, de patronazgo [...] antes que horizontales o socioprofesionales» —aunque éstas no estuvieran ausentes a la altura de los años treinta. Esa «realidad banderiza», que siempre había coexistido empero con una cierta «comunidad moral» ante las amenazas exteriores, cristalizaría como «bandería política» por el «plus de socialización política introducido por la República».⁴⁴ Pero, junto al indudable elemento ideológico, tras esa cristalización había cuestiones puntuales de la vida local, como la competencia que representaban las cooperativas de los centro obreros o los intentos de limitar el omnímodo control del agua por las juntas de los sindicatos de riegos. Cuestiones que remitían en última instancia a la posible merma de los que habían detentado siempre el poder local —los «ricos de siempre»— y, también, de los que estaban ligados a ellos por esas lealtades primordiales.⁴⁵

⁴⁴ Javier Ugarte Tellería, *La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998, pp. 11 y 14-15 y pássim. Las alusiones a Fabara y Pina proceden de Víctor Cervera, *Fabara. Memorias incompletas*, Grupo Cultural Caspolino, Caspe, 1986, pp. 34-39, y J. Cuen, *Mis memorias*, pp. 17-18.

⁴⁵ Lo cual no quiere decir evidentemente que esas lealtades excluyan a las solidaridades horizontales o nieguen el conflicto de clases, sino que ambas aparecen como diferentes modos de alineamientos políticos que median en mayor o menor grado en los procesos políticos: cfr. Hamza Alavi, *Las clases campesinas y las lealtades primordiales*, Anagrama, Barcelona, 1977, pp. 119-120. La importancia del conflicto en torno a los sindicatos de regantes la encontramos, por ejemplo, en Caspe o Pina: A. Gambau, «Caspe en la Segunda República», y J. Cuen,

Desde ese punto de vista, toda comunidad rural oscilaría entre dos realidades sociales. Por un lado, los «bandos», divisiones y luchas internas; y, por otro, las solidaridades comunitarias y la tendencia a la unión ante agentes exteriores que amenazarán el modo de vida de siempre en el que todos, bien que considerado injusto, podían reconocerse. Llegada la ruptura que supuso la guerra, cuando predominaba una nítida división local, los milicianos encontrarían, como afirman con insistencia los testimonios orales, simpatizantes y comités que no sólo no negaban la existencia de «fascistas» a los que perseguir, sino que se mostraban dispuestos a colaborar con ellos en la revolución y en esa persecución. Mientras tanto, en otras localidades lo que hallaron fue poblaciones sin fallas insalvables en las que no se denunciaba y comités que aseguraban que allí no había derechistas y que por tanto nadie había de morir. Comunidades, en suma, que pretendían salvaguardar su función de control social y el «espíritu cohesivo» o sentimiento de identidad ante una injerencia externa.⁴⁶ La guerra, la revolución, y con ellas las armas, llegaron a todos los pueblos de la retaguardia. Pero donde no había un caldo de cultivo previo, en forma de eso que hemos llamado frac-

Mis memorias, pp. 18-19. Respecto a las cooperativas, Belchite constituye quizá el mejor ejemplo. Falto de una aguda conflictividad en torno a la propiedad de la tierra, y sin una excesiva afiliación obrerista, la cooperativa organizada alrededor de la Casa del Pueblo (UGT) suponía empero una notable competencia para la sociedad derechista «La Agrícola». Máxime cuando aquélla se benefició de la ocupación de una finca del Ayuntamiento y su principal promotor era el alcalde: Ángela Cenarro, «Violencia, guerra y revolución: la UGT de Aragón ante la quiebra de la democracia (1936-1945)», en E. Bernad, C. Forcadell (eds.), *Historia de la Unión General de Trabajadores en Aragón. Un siglo de cultura sindical y socialista*, Inst. Fernando el Católico, Zaragoza, 2000, p. 150.

⁴⁶ Según expresión de Jerome Blum, «The Internal Structure and Polity of the European Village Community from the Fifteenth to the Nineteenth Century», *Journal of Modern History*, 43, 4 (1971), pp. 569-570. Cfr. también Boguslaw Galeski, *Sociología del campesinado*, Península, Barcelona, 1977, pp. 150-151. Otros casos de resistencias de las comunidades rurales aragonesas a los «desmanes» de las columnas, en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. II, pp. 68-69 y 79.

tura social, el supuesto afán depurador de ese asalto al pasado no derramaba sangre y junto a la revolución no crecía la hidra de la violencia.

El primero es lógicamente el caso de todas esas localidades con mayor represión. Lo vimos ya en Caspe, La Almolda y Pina, pero la historia se repite con el avance de las milicias a otros lugares. Por ejemplo, en Maella y Fabara, al este de la provincia, donde los izquierdistas, que habían debido huir durante el dominio de los sublevados a la vecina Batea (Tarragona), vuelven junto a los milicianos, forman con ellos un comité, proceden a la elaboración de las famosas listas de «fascistas» y deciden uno a uno su suerte en reuniones con los columnistas hasta altas horas de la madrugada. En la segunda de ellas, además, a los conflictos previos se unía la noticia, proporcionada por dos supervivientes que consiguieron llegar heridos a la zona republicana, del fusilamiento de siete segadores fabaroles en Zaragoza, donde les sorprendió el 18 de julio y fueron denunciados. También sucede en Gelsa de Ebro, otra de las mayores afectadas de la provincia durante la República por las revisiones de arrendamientos —aquí por recursos contra los dirigentes tradicionales del sindicato de regantes—, en la que a principios de octubre se disparan las acusaciones y mueren 36 vecinos en sendas «sacas» nocturnas. Por su parte, en Fuendetodos (campo de Belchite), el último pueblo tomado por las fuerzas republicanas en 1936, algunos de los que habían celebrado una tensa manifestación el primero de mayo del 36 y en julio-agosto habían conseguido escapar de la dura persecución militar, colaboraron desde el comité a finales de septiembre en la «saca» de una docena de convecinos que habían disparado contra los milicianos. O, finalmente, es lo que ocurre, entre otros lugares, en Luesma, el lugar más occidental de la «zona roja» zaragozana y el que registra el mayor índice de represión de la provincia, donde tras todas las muertes hay denuncias presentadas por los miembros de dos familias de izquierdas. Está claro que, en un contexto radicalmente nuevo, los conflictos previos se intentaban resolver con métodos

no menos radicales ni novedosos.⁴⁷ Por último, las localidades de la zona insurgente que cuentan con más muertes por la represión republicana —represión sobre prisioneros por denuncias de vecinos huidos— son exactamente aquellas que han aparecido hasta ahora en estas páginas, como Tauste, Gallur, Zuera, Ejea, Uncastillo y, por supuesto Zaragoza, por su agitación social durante los años republicanos. En suma, como en otras latitudes del pasado, las viejas tensiones internas de la sociedad campesina eran reactivadas y legitimadas por las «impulsiones revolucionarias» venidas de fuera y «se engalanaron con los colores de los enfrentamientos políticos nacionales».⁴⁸

En las otras poblaciones, por el contrario, las cosas suceden de forma muy diferente. Al igual que en infinidad de casos a lo ancho de la geografía española, en muchos lugares el pueblo «se mantuvo «tranquilo, seguro y ordenado durante toda la Guerra Civil», la sangre no corre o, cuando lo hace, se debe a las incursiones de grupos y «cuadrillas» provenientes de otras poblaciones mayores. Y los ejemplos son también numerosos. En Villar de los Navarros, Almonacid y Samper del Salz, (partido de Belchite); o en Alforque, Alborge, La Zaida o Monegrillo (Pina), vecinos y comités se muestran unidos y pasivos ante la llegada de los milicianos, no acusan a nadie e incluso esconden y protegen a los «ele-

⁴⁷ Al parecer, en los meses anteriores los afiliados a la UGT «coaccionaron e insultaron a las personas de derechas, impidiendo varias veces fuesen a trabajar» (AHN, CG, leg. 1429 (1): pieza nº 7, fol. 173), y testimonio de M. Pérez y C. Domingo, Zaragoza, 6-3-1999. Las referencias a los otros pueblos proceden de AHN, CG, leg. 1429 (1), fol. 177; *El Noticiero*, 8-9-1938, y testimonios de Pablo Arbona, Maella, 18-3-1998, M. M., Maella, Zaragoza, 15-3-1998; R. Rams, Fabara, 20-5-1999, y J. Cirac, Fabara, 21-5-1999. Las revisiones de arrendamientos de Gelsa, en M. Ardid, «La reacción conservadora», pp. 972, 975 y 984-985.

⁴⁸ Georges Fournier, «La vie politique au village en l'an II», *Annales Hist. Rév. Franç.*, 300 (1995), pp. 271-282. *Cfr.* también Alan Forrest, «The Local Politics of Repression», en K. Baker (ed.), *The Terror*, pp. 81-98; Guy-Robert Ikni, «La République au village en l'an II», en Michel Vovelle (dir.), *Révolution et République. L'exception française*, Kimé, París, 1994, esp. pp. 259-262; J.-C. Martin, *Contre-révolution, Révolution et Nation*, pp. 141-144 y pássim.

mentos significados de las derechas» y a los curas, o les recomiendan y facilitan la huida. En la comarca de Caspe, por su parte, el comité de Nonaspe evitaba la muerte de un reconocido derechista, el de Fayón impedía incluso la quema de la Iglesia y el de Chiprana afirmaba a los milicianos que todos los habitantes eran de izquierdas y que nadie debía morir. Y, cuando hay muertes, éstas son muy contadas y se producen por denuncias de forasteros, por los hábitos religiosos o por cuestiones muy concretas, como que los milicianos les encontraran con armas o intentando pasarse a la zona franquista.⁴⁹ Mas no se crea, además, que esto sucede únicamente en poblaciones pequeñas y con pocos habitantes. Bujaraloz o Lécera son buenos ejemplos. Aunque ninguno tanto como Mequinenza y Sástago.

En la primera, nada más saber por la radio que los militares se habían sublevado, se formó un comité en el que

⁴⁹ O, como la única víctima de Cinco Olivas, fusilado tras gritar «¡Viva Cristo Rey!» ante los milicianos: Fundación Pablo Iglesias, Archivo de la Agrupación Socialista Madrileña (en adelante FPI, AASM), Documentación anarquista, caja 514, carpeta 15, fs. 16 y 24. Algunos casos de protección a religiosos, en Fayón, Nonaspe -aunque ambos párrocos se negaron a irse y acabaron cazados por los milicianos-, o en La Zaida, cuyo sacerdote pudo llegar después a Zaragoza y contar su odisea (*Heraldo de Aragón*, 2-8-1936). Para Alforque, *cfr.* AHN, CG, leg. 1423 (2) y leg. 1426: pieza nº 4; y AGCS, PS Barcelona, carp. 373, leg. 494, informes del PCE (s. f.), donde se afirma que no hubo imposición alguna en esa localidad, como tampoco en La Zaida y Sástago. *Cfr.* G. Woolsey, *Málaga en llamas*, pp. 84 (para el entrecomillado inicial), 119, 156-157 y 173. A título de ejemplo, el alcalde del Frente Popular de Monegrillo, que siguió como presidente del comité, «dijo a los jefes de la milicia que no tocaran a nadie, que no había derechas aquí, e incluso evacuó a las familias de los huidos a Zaragoza, y a los del comité de guerra de la columna los tenía hospedados en casa para tenerlos más controlados, sobre todo por la noche»: testimonio de Julián Gascón, Monegrillo, 17-5-1999. Este mismo lugar ejemplifica el elemento azaroso que también influía en esta coyuntura. Horas después de llegar, los milicianos interceptaban una «expedición» de cinco «fascistas» del vecino Farlete, que al paracer venían a «hacer limpieza»; hay pocas dudas acerca de la oleada de represalias que se habría desencadenado si tal cosa hubiera tenido lugar: J. Borrás, *Aragón*, pp. 113-4 y 140. Para esta localidad monegrina, véase la excelente recreación literaria de José R. Arana, *El cura de Almuniaced*, Turner, Barcelona, 1978.

estaban representadas todas las fuerzas de la izquierda y que pronto tomó a su cargo, entre otras, la tarea de evitar el derramamiento de sangre y aconsejar a los patrones y derechistas «que no se movieran mucho». Más les valía, sobre todo los días —varios desde julio a septiembre— en que llegaban un grupo de milicianos establecidos en Fraga y «un coche negro de Caspe, con fusiles que se salían por las ventanillas», que iban al comité exigiendo se empezara a fusilar a algunos de los ochenta «fascistas» que conformaban una lista con la que se habían hecho en alguna parte. Empezando, por supuesto, por el cura. Tras varios viajes en balde, que finalizaban con un evasivo y nunca cumplido «marchad, que ya lo haremos nosotros», y ante el peligro real de que esos milicianos de fuera se tomaran la justicia por su mano, finalmente serían «entregados» el sacerdote —que en repetidas ocasiones había rechazado la sugerencia del comité respecto a huir— y semanas más tarde una de las cabezas visibles de la derecha local, conocido además por ser el responsable durante la Dictadura de la muerte de un conocido sindicalista. Aprobado y considerado «lógico» e incluso «merecido» en aquellas circunstancias —en lo que era una especie de economía moral justiciera— en el caso del segundo, en el del párroco significaría para siempre una «mácula» en la memoria de la población. «Al final cedieron a la presión, y el comité decidió sacrificarlos para salvar a los ochenta de la lista, y los de Caspe ya no volvieron más».⁵⁰

Algo no muy diferente encontramos, por su parte, en Sástago. Allí, con una economía dominada por la Electro Metalúrgica del Ebro y los propietarios absentistas —el 41% de la tierra—, parecía tener más cabida una cierta unidad de

⁵⁰ AHN, CG, leg. 1424 (2): rama de Mequinenza, y testimonios de Andrés Borbón, Zaragoza, 12-9-1998, y Jacinto Castelló, Mequinenza, 22-5-1999, de los que provienen los entrecomillados. *Vid.* asimismo *Estiu Ardent*, Grupo «Coses del Poble», Mequinenza, 1996, p. 149, y la recreación de esos hechos en la emotiva novela de Jesús Moncada, *Camino de sirga*, Anagrama, Barcelona, 1989, pp. 173-175 y 210.

destino ante esos poderosos de fuera que las divisiones o la polarización interna. Máxime cuando, recién estrenada la República, el mayor de esos absentistas —el Conde de Sástago— cedía gratuitamente 15.000 has. de sus posesiones de monte. Iniciada la sublevación de julio del 36, el alcalde supo contener y luego evacuar a la Guardia Civil, «las derechas de Sástago no se vieron por ningún lado» y, tras las consabidas destrucciones y quemas del patrimonio eclesiástico a la llegada de los milicianos, se formó un comité y «de acuerdo con el jefe de las fuerzas se constituyó un tribunal llamado del pueblo para juzgar a los elementos más destacados de las derechas». Sólo uno resultaría muerto, quedando para todos los demás un tiempo de prisión y, luego, la obligación de trabajar en la reparación de la carretera. Resultado demasiado escueto para algunos, a juzgar por el escrito de varios milicianos sastaguinos desde el frente, en marzo de 1937, en el que denuncian a nueve «fascistas [...] que, si el pueblo hubiera obrado con esa justicia de que han sido juzgados otros elementos, hubieran corrido la misma suerte», y exigen «la más rápida solución, pues de no ser atendidos, no se culpe de las resoluciones que pudiéramos tomar». Lo único que se tomó, empero, fue la decisión de volver a liberarles ante la llegada de informes favorables desde el comité y desde la CNT. Entre los exculpados desde el primer momento, además, figuraba incluso el cura, «al que no asesinaron por la intervención de los elementos del pueblo, que dijeron que se trataba de un hombre bondadoso y que protegía a los humildes». En suma, y como incluso habrán de reconocer las fuentes franquistas, el comité «no permitió grandes desmanes y se propuso evitar ante todo que se consumasen asesinatos, [...] saliendo en defensa del Sr. Cura, evitando una muerte segura de él y de varias personas».⁵¹

⁵¹ AHN, CG, leg. 1429(2): pieza nº 11, fs. 83-84. Lo de la salvación del cura es de *Heraldo de Aragón*, 5-8-1936, y también aparece en José Altaba Escorihuela, *Experiencias, datos, testimonios y consideraciones sobre la trágica guerra civil en España de 1936 a 1939 por un testigo desde los 10 años*, Librería General, Zaragoza, 1996, p. 86. Todos los demás entrecomillados proceden del

Por lo tanto, las conclusiones provisionales apuntan a que, una vez abierta la caja de Pandora de la violencia desde fuera —por sublevados y milicianos—, su alcance concreto dependerá de factores locales heredados. Además, y según lo aquí sugerido, la puesta en relación entre la conflictividad previa y la represión de la guerra no sólo ayudaría a perfilar ésta, sino que arrojaría cierta luz sobre la realidad social y política de los años republicanos en las zonas minifundistas del interior. Zonas en las que el aparente manto de una relativa ausencia de violencia en la acción colectiva no puede hacer obviar que también a ellas habían llegado los cambios y la crisis que afectaban a la formación social española. Las colectividades y la violencia revolucionaria serían coyunturales respuestas locales a esos cambios y a esa crisis, como lo serían, aunque de muy distinto signo, los apoyos al golpe militar, al posterior régimen resultante de la guerra y a la amplia represión de que éstos se sirvieron.

Es evidente que las herencias locales no pueden explicar plenamente el alcance de la persecución en cada lugar, pues intervienen asimismo factores como la distancia respecto al frente, la situación militar u otros más específicos. Empero, influirá sobre todo el propio desarrollo de la contienda y el de las luchas por el poder entre los numerosos «contrapoderes» nacidos al socaire de la derrota de los insurgentes en el Aragón oriental. En efecto, a medida que la guerra avanza, la represión se reduce y se relaciona menos con esa historia

sumario del Tribunal Popular de Caspe (nº 29-1937) a raíz de la citada denuncia, CG, leg. 1427(2): anexo 1/5, aunque también nos ha sido útil el testimonio escrito de Víctor Sariñena, «cronista oficial de Sástago» (30-5-1999), quien señala que la suerte del sacerdote se decidió «en asamblea pública, en la plaza de la iglesia totalmente abarrotada», y que la única víctima no fue denunciada por sastaguinos sino por dos de Quinto. Sobre la situación de la ciudad antes de 1936 y la cesión del Conde, *vid.* los trabajos de José D. Garín Sariñena, «El Señorío de Sástago en el siglo XIX. Conflictos por la propiedad de la tierra», y «Sástago durante la Segunda República. La cesión condal de 1931», ambos en *Cuadernos de Estudios Caspolinos*, XIV (1988), pp. 11-72, y XVIII (1992), pp. 93-116, respectivamente.

reciente y más con esas luchas. Es por ello que, en términos relativos, las represalias son mayores en las zonas cercanas al frente —donde las milicias y sus «comités de guerra» campaban por sus respetos— y que allí no se concentran tanto en el tiempo como retaguardia adentro. Pero ahí entramos evidentemente en otra dimensión, la de las etapas y momentos de esta violencia. Y en el tiempo, tanto o más que en el espacio, su distribución es tan desigual como significativa a la hora de comprenderla.



Milicianos entrando en Osera (8/8/1936): AHN, CG, leg. 1821/3.

III

MOMENTOS Y MECANISMOS DE LA PERSECUCIÓN

Pese a que la historia había comenzado a acelerarse en los años previos, y aun cuando para algunos todas sus esperanzas se depositaban en que aquello pasara lo antes posible, la sonora y cegadora llegada de la guerra y la revolución arrolló la tradicional quietud del campo y lo sumergió en un ritmo radicalmente diferente, difícil de seguir y mucho menos de comprender. No obstante, ese compás del tiempo no se mantuvo por igual a lo largo de la contienda, como tampoco lo hizo la represión, una de las más ruidosas manifestaciones de esa explosión inicial.

El resultado de considerar desde esa perspectiva las muertes en la retaguardia republicana durante la guerra civil es sumamente revelador. Como han resaltado otros estudios sectoriales —regionales, provinciales o locales—, y metáforas hidráulicas al margen, esa persecución sobreviene vigorosa durante las semanas o meses posteriores a la sublevación militar, en los que se concentran la mayor parte de los óbitos, para ir descendiendo progresivamente a lo largo del otoño y desaparecer de forma casi total en el invierno siguiente. Es por ejemplo el caso, por tantas razones significativo, de Cataluña, donde más de la mitad de los 8.360 asesinatos ocurrieron antes de acabar octubre del 36, llegando la cifra a 6.400 (80% del total) al finalizar el año. Pero lo es también de otras zonas como el País Valenciano, La Mancha, Murcia o la Andalucía oriental. En esos primeros meses, los del «terror caliente», la eliminación de los representantes del orden social tenía en el «paseo» la «práctica de justicia expeditiva» que menos parecía desentonar con el estruendo pro-

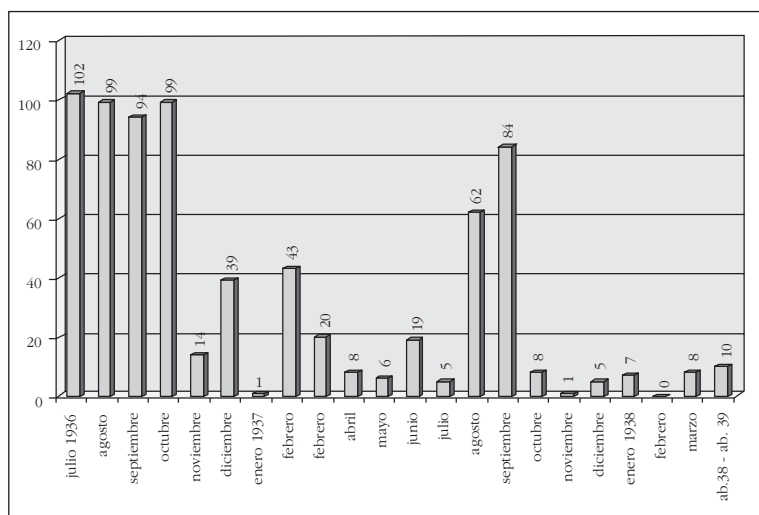
ducido por los combates en el frente y el derrumbe del pasado en la retaguardia. La sublevación militar, en palabras del futuro ministro de Justicia, el anarquista Juan García Oliver, había supuesto «la rotura de todos los frenos sociales», por lo que «el pueblo, en tanto duró la anormalidad, creó y aplicó su ley y procedimiento, que era el ‘paseo’».¹ Luego, antes o después según las condiciones de control político de la retaguardia y la distancia respecto a las trincheras, llegaría un progresivo enfriamiento parejo a la entrada del invierno. El proceso fue aquí por tanto, y bien que nunca definitivo ni completo, el paso desde una gran extensión de la violencia social al margen del poder estatal hacia la reabsorción por éste de su monopolio.

Semejante evolución y parecidos datos encontramos en la zona republicana zaragozana. Y eso que en ella se introducen factores distorsionantes como la lenta configuración de la línea del frente —un frente además cercano, que partía en dos la provincia e incluso la mayoría de las comarcas— o la toma de varias localidades tras la ofensiva del estío de 1937. Pero también aquí habían muerto más de la mitad de las víctimas al acabar octubre del 36; y también aquí, aunque con

¹ Joan García Oliver, *El eco de los pasos*, cit. en J. Casanova, *De la calle al frente*, p. 159. Los datos referidos a Cataluña (J. M^a Solé y J. Villarroja, *La represión a la retaguardia*, pp. 458-460) se repiten sin muchas variantes en otras regiones. Así, 1936 concentra por sí solo porcentajes similares o superiores al 80% de las víctimas en Granada, Toledo o Murcia, e incluso sobrepasa el 90% en Almería y el País Valenciano. Y aun dentro de ese año, sin duda predominan los primeros meses, de modo que esta última región, Cataluña, Jaén y Teruel superan la mitad de víctimas entre julio y septiembre, mientras que Granada y Almería llegan al 65% en esos mismos meses, y Albacete alcanza el 75. Para todos estos datos, Rafael Gil Bracero, *Revolucionarios sin revolución. Marxistas y anarcosindicalistas en guerra: Granada-Baza, 1936-1939*, Universidad de Granada, Granada, 1998, p. 120; Á. D. Martín Rubio, *Paz, piedad, perdón... y verdad*, p. 293; C. González, *Guerra Civil en Murcia*, p. 158; R. Quirosa, *Represión en la retaguardia republicana*, p. 46; V. Gabarda, *La represión en la retaguardia*, p. 163; F. Cobo Romero, *Conflicto rural y violencia política*, p. 281; E. Casanova, «Teruel, 1936-1938», p. 52; y M. Ortiz Heras, *Violencia política en la II República*, p. 81.

las excepciones propias de las peculiaridades de la región, se observa un nítido y progresivo descenso de los índices represivos que no puede ser casual. Algo que es fácilmente perceptible en la distribución de las víctimas por meses y que en todo caso muestra los diversos momentos o fases del hecho represivo e impele a preguntarse por la interpretación de los mismos.

GRÁFICA 1: Distribución por meses de las muertes por represión.



Fuente: Causa General y Registros Civiles. Elaboración propia.

TIEMPO DE VIOLENCIA O EL RUIDOSO VERANO DEL 36 (GUERRA, ATOMIZACIÓN DEL PODER Y «TERROR CALIENTE»)

Como resulta claro al observar la gráfica, la primera de las etapas, meridianamente diferenciada en número de muertes, abarcaría el verano y el primer mes de otoño. A lo largo de ella, los cuatro meses acumulan valores sorprendentemente homogéneos y cercanos al centenar de víctimas, de modo que, al acabar, a los tres meses de llegar la guerra a la

región, la cifra (394) supera la mitad de los muertos por represión durante toda la contienda (53,1%).

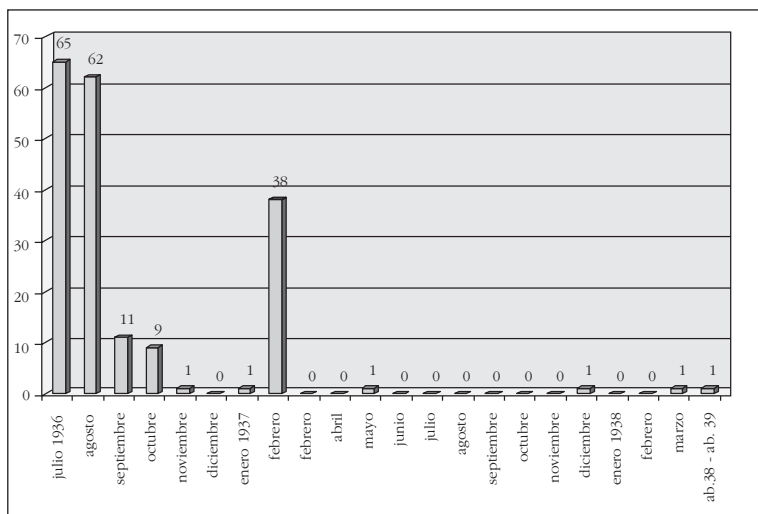
Bajo esa homogeneidad, no obstante, se esconden evidentes diferencias comarcales que subrayan aún más la concentración de la persecución en los primeros momentos. Así, durante los meses de julio y agosto es el partido judicial de Caspe —el situado más al este y por tanto primero al que los milicianos trajeron la guerra— el que lleva de forma destacada el peso de esos valores represivos. Y será allí, única comarca no cruzada por la línea del frente y por tanto única enteramente «de retaguardia», donde la concentración de las muertes resultará más nítida. En efecto, julio —de hecho, su última semana— y agosto del 36 suman por sí solos el 65,6% de las muertes del partido, no dejando ya para el resto de la guerra sino el tercio restante. Pero lo anterior toma tintes aún más rotundos si consideramos que una de cada tres víctimas fallecen en la semana posterior a la derrota de los sublevados, o que incluso una de cada cuatro lo hace en los dos primeros días. Inmediatamente después se inicia un constante y espectacular descenso de la actividad represiva, de modo que, ya a partir de noviembre, los guarismos mensuales oscilan entre 0 y 1 con la importantísima excepción del febrero siguiente.² Pasado este último, apenas a los siete meses de iniciado el conflicto, y a falta de otros trece para que la zona fuera ocupada por las tropas del Gobierno de Burgos, sólo cuatro más engrosarán la cifra de fusilados, tres de ellos, además, lejos de las fronteras zaragozanas.³

Por su parte, en septiembre y octubre el partido de Caspe sería sustituido por los de Belchite, Cariñena, Zaragoza y sobre todo Pina, comarcas de frente cuyos pueblos fueron

² J. L. Ledesma, «Sublevados, milicianos, misioneros y pañuelos rojos», p. 332.

³ De los cuatro, uno es fusilado en Muniesa (Teruel), dos en los frentes extremeños, y sólo uno en la comarca, un maellano ejecutado en la retirada de la zona en marzo de 1938.

GRÁFICA 2: Distribución por meses de las víctimas por represión en el partido judicial de Caspe.



Fuente: Causa General y Registros Civiles. Elaboración propia.

tomados poco a poco hasta finales del verano y donde la línea del frente no quedaría estabilizada hasta entrado el otoño. Algo que, evidentemente, se traduciría en choques, avances y retrocesos, presencia constante de las columnas milicianas y en una inseguridad constante en la retaguardia próxima que se extendería hasta mucho más allá de esta primera etapa. Las consecuencias de todo ello en la persistencia durante ese tiempo de la intensidad represiva son fáciles de discernir, y no puede resultar extraño que septiembre sea el mes más sangriento en el partido de Cariñena, o que lo sea octubre en los de Pina y Zaragoza.⁴

⁴ Las gráficas relativas a la distribución temporal de las muertes en estos partidos judiciales aparecen en el anexo nº 3.

Eran los momentos en los que, en sus esporádicas incursiones en el todavía incierto frente, variopintas patrullas capturaban a derechistas de pueblos de la otra zona, los internaban en la retaguardia propia y, si mediaba la denuncia de algún convecino, los llevaban al amanecer ante un pelotón de jóvenes milicianos llenos de ideales que nunca antes habían visto a sus víctimas y de las que tampoco conocerían jamás sus nombres.⁵ Y lo eran asimismo de las represalias que podían originar avances y retrocesos militares, como sucedió en Pina, o en Leciñena, la única localidad del partido judicial de Zaragoza que llegó a estar, siquiera un par de meses, bajo dominio republicano. Tras unos primeros días de confusión y una corta estancia de sublevados de la capital, a mediados de agosto de 1936 entró un grupo de columnistas del POUM y se formó un comité de guerra con milicianos y vecinos. De su actuación resultarían las muertes de seis derechistas, quizá como respuesta a los cinco detenidos —el alcalde del Frente Popular y cuatro más— que se habían llevado consigo los militares insurgentes. Mas no acabarían ahí las represalias. Primero, estos cinco últimos eran fusilados en Zaragoza al conocerse en ésta la noticia de las muertes de Leciñena. Y después, a mediados de octubre, ante la llegada de un fuerte contingente militar zaragozano, los milicianos dejaban en su precipitado abandono del pueblo los cadáveres de «catorce personas que se encontraban en los calabozos del Ayuntamiento [...], a las que arrojaron bombas de mano y algunas ráfagas de ametralladora» en el patio de la cárcel.⁶ La revolución, y la represión, vivían en el seno de

⁵ Es el desafortunado caso, por ejemplo, de las dos víctimas de Alfajarín, las tres de Perdiguera, las dos de San Mateo de Gállego (partido de Zaragoza) o las únicas de Tosos y Vistabella (partido de Cariñena): AHN, CG, leg. 1423 (1) y 1424 (2). Para una muestra de lo que el frente tenía de coladero en los primeros meses, véase la narración de las expediciones de patrullas y grupos guerrilleros que llegaban hasta Zaragoza para sacar de allí a los cenetistas y sus familias, en Eduardo Pons Prades, *Guerrillas españolas, 1936-1960*, Planeta, Barcelona, 1977, pp. 160-164.

⁶ AHN, CG, leg. 1423(1), rama de Leciñena (de donde proviene la cita); entrevistas concedidas por C. Letosa y A. Arruego, Leciñena, 15-11-1998; *Heraldo*

una guerra fratricida que no hacía distinciones entre combatientes y civiles, y la abundante sangre derramada a su paso así lo atestiguaba.

Pero se trata sobre todo de las semanas en que las columnas entran en los pueblos de esas comarcas, a menudo tras un encuentro armado con retenes sublevados en las inmediaciones, con las consabidas detenciones de los elementos derechistas y, quizá tras unos días o semanas, con las célebres «sacas» y «paseos» de aquéllos. Son por tanto los «días de llamas» descritos en un capítulo precedente, los del asalto al orden social en los que la ansiada nueva sociedad se fundaba simbólicamente sobre la destrucción de los representantes de la pretérita. Entre vientos de cambio, calor y estrépito, la revolución llegaba desde el este y, como muestra y garantía de su llegada, añadía en ocasiones los disparos al ruido de las imágenes religiosas golpeando el pavimento y al crepitar de las llamas. Su eco se oiría por la zona a lo largo del verano e, incluso, al inicio del otoño, como en la «saca» de diez personas de Fuendetodos a fines de septiembre, apenas unos días después de que entraran los milicianos en la que sería su última conquista en su avance hacia Zaragoza y hacia el poniente. La guerra era una dura y cercana realidad, y aprovechándola se ajustaban cuentas con el pasado, viejos litigios y rencillas familiares, en unos pueblos donde todos se conocían y las relaciones personales se unían a las sociales para tejer la urdimbre de los alineamientos políticos. Como se unían, en el origen de ese «terror caliente», los vecinos y miembros de los comités locales que denunciaban, por un lado, con los

de Aragón, 13-10-1936, *El Noticiero*, 13-9-1938 y V. Gracia, *Aragón, baluarte*, pp. 149-150. El abandono de la localidad y su toma por los sublevados, en *El Noticiero*, 13-10-1936; AGMA, arm. 56, leg. 556, carp. 6 bis, doc. 3: «Informe de José del Barrio...» (16-2-1937); y J. Arrarás (dir.), *Historia de la Cruzada Española*, t. xxxii, p. 507. En *El reñidero español* (pp. 83-84), F. Borkenau dejó una descripción de Leciñena y de su caótico frente en los días previos a la toma por las fuerzas militares. Para un episodio similar relacionado con avances y retrocesos, en otra región cercana al frente, véase el dramático caso de Baena en F. Moreno, *La guerra civil en Córdoba*, pp. 214-241.

camiones y coches que traían las armas y los milicianos y forasteros que las dispararían por otro.⁷ Con motivaciones, justificaciones y relaciones diferentes respecto al poder, ambos grupos coincidían en aquella coyuntura en que con la guerra se había abierto una vía inédita, aunque pasajera, de resolución de los conflictos que permeaban la España del momento.

Resulta evidente, para empezar, que esa vía sólo era posible en una sociedad en la que la sublevación —o más bien su fracaso— había provocado el colapso del Estado republicano y desintegrado sus medios coercitivos. De hecho, justamente por ello era inédita y pasajera, y por ello mismo se explica la intensidad de la represión que alimentó, su concentración en los primeros momentos e incluso las diferencias comarcales en la misma. Situado entre un ejército rebelado y unas masas armadas, y con un gobierno absolutamente desbordado e impotente para lo que no fuera sancionar a marchas forzadas lo que sucedía en la calle, el Estado había dejado de existir más allá de las sedes ministeriales de Madrid e incluso «había saltado por los aires». Pero ello no conllevó la anarquía generalizada, la falta de todo poder —supuestamente desaparecido durante unas semanas en manos del espontáneo «pueblo en armas»— ni por supuesto tampoco la sustitución de las estructuras de preguerra por otras de origen revolucionario. Se trataba más bien de la atomización del poder en mil fragmentos y micropoderes de carácter local, del todo autónomos, solapados entre sí y, a la postre, mutuamente contradictorios. Todo un «hervidero de poderes» armados, de difícil control y caracterización, y que trataban de llenar el vacío dejado por la derrota de los insurgentes en ciudades, pueblos y áreas rurales. Era la «etapa bohemia de la revolución», la hora del gobierno del «pueblo», o más bien del de comités locales y de «salud pública», comités de guerra de las columnas, patrullas o «grupos de investigación», consejos de las colectividades, etc. «Todos querían

⁷ J. Casanova, «Rebelión y revolución», pp. 138-139.

controlar el descontrol. Por eso se hablaba tanto de incontrolados y no había comité o patrulla que se preciara que no se llamara ‘de Control’.⁸

Las estrellas de esos «micropoderes» eran con toda seguridad, por su extensión a todos los rincones de la España republicana, los comités revolucionarios locales. Hijos del derrumbe del aparato administrativo, del urgente voluntarismo y del caos inicial, estos órganos se arrogaron todas las funciones políticas, ejecutivas, judiciales, económicas, etc. de la vida pública, creando lo que se ha dado en llamar «el multiforme poder revolucionario de los comités». Más aún, durante la «comitecracia» de las primeras semanas o meses, y con el poder político «diseminado en el localismo feroz que presidía la vida de los comités», éstos hacían de cada lugar «una polis ajena e independiente a otros pueblos». Al igual que en las demás regiones y como tantos otros comités de la retaguardia zaragozana, los de Azuara, Gelsa, Pina o Caspe se constituyeron como auténticos microgobiernos, con departamentos o (sub)comités de Presidencia y Guerra, Justicia y Orden Público, Información y Propaganda, Agricultura, Instrucción, Transporte y Comunicaciones y Economía y Abastos. Y, como la mayoría de ellos, nacían con la pretensión de lo que entonces se llamaba repetidamente «normalizar» la vida social y económica y los servicios.⁹

⁸ *Ibidem*, p. 117, y J. M^a Solé y J. Villarroya, *La repressió a la reraguarda*, pp. 89-93. Acerca de los poderes «revolucionarios», véase Julio Aróstegui, «La república en guerra y el problema del poder», *Studia Histórica*, vol. III, 4 (1985), pp. 7-19, y P. Broué, «Los órganos de poder revolucionario: ensayo metodológico», en *Metodología histórica de la guerra civil*, pp. 25-46. Del mismo Broué, esta vez junto a E. Témime, es lo del salto por los aires del Estado (*La revolución y la guerra de España*, p. 132). Finalmente, la cita de la etapa bohemia de la revolución es de R. Carr, *España 1808-1939*, p. 628.

⁹ *Solidaridad Obrera*, 16-8-1936 (Gelsa), *ibidem*, 13-8-1936 y *El Frente*, 19-9-1936 (Pina), J. Casanova, *Caspe, 1936-1938*, pp. 46-51, y AGCS, PS Aragón, carp. 36: Actas del Comité de Azuara, 7-10-36 y 14-12-36 (de donde hemos extraído los diferentes departamentos). Las citas sobre el multiforme poder de

Pero «normalización», en aquellos días, era un concepto ambiguo, un cajón de sastre en el que cabían muchas cosas. Y, al parecer, la represión y su control estaban al mismo tiempo entre ellas. Uno de los objetivos prioritarios de los comités, y en general de la mayoría de esos «contrapoderes», era precisamente evitar el derramamiento de sangre incontrolado y, por ende, reducir la represión y monopolizar para sí el uso de la violencia pública. Sin embargo, y quizá por ello mismo, es en las primeras semanas, las de la multiplicación y contradicción en el poder y en el ejercicio del orden público —la época trágica de tiranía de los comités—, cuando esa violencia se lleva más vidas. Caído como un castillo de naipes el aparato judicial, y con las fuerzas de seguridad sustituidas *de facto* por milicias y grupos aislados de turbios orígenes, la fragmentación marcaba un ritmo en el que las arbitrariedades podían tener amplia cabida. A pesar de la confianza de algunos militantes en que esos organismos revolucionarios no eran «poderes», todos ellos estaban relacionados por acción u omisión con esas muertes y, como cualquier poder, todos crearían sus propios medios coercitivos. Medios de los que, todavía nacientes y amenazados por doquier, se servirían cuando y donde se vieran más cuestionados o en peligro. Desde ese punto de vista, la eliminación física de los «enemigos de clase», además de un medio de lucha contra el «fascismo», era también una ruidosa manifestación de la llegada de un nuevo poder con dominio sobre la vida y la muerte. Pero además, esa violencia, o su control y freno, eran asimismo un arma en la competencia abierta entre todos ellos por el control político de la retaguardia y por un espacio en la propia revolución.¹⁰

los comités y su feroz localismo, y la de las «polis», en Aurora Bosch Sánchez, *Ugetistas y libertarios. Guerra civil y Revolución en el País Valenciano, 1936-1939*, Alfons el Magnànim, Valencia, 1983, pp. 20 y 22, y F. Moreno, *La guerra civil en Córdoba*, p. 136. El acaparamiento de todos los poderes, en P. Broué y É. Témime, *La revolución y la guerra de España*, vol. I, pp. 139-143.

¹⁰ Julián Casanova, «Anarquismo y guerra civil: del poder popular a la burocracia revolucionaria», en Santos Juliá, coord., *Socialismo y guerra civil*,

Las mencionadas diferencias cronológicas de las muertes en las comarcas republicanas de Zaragoza serían una buena muestra de todo lo anterior. Como vimos, la represión se concentra en las primeras semanas mucho más diáfana—y a la postre es menos intensa en términos relativos— en las zonas «de retaguardia» como el partido judicial de Caspe o el este del de Pina. Es decir, a donde antes llegó de la mano de los milicianos y de donde, tras la «limpieza» de la zona, marchó con ellos hacia el poniente permitiendo que el «ocre amanecer» de la revolución diera pronto paso al inicio de la «ordenación» de esas tierras. Por su parte, la violencia se extiende más en el tiempo en las zonas cercanas al frente o cruzadas por él, donde las columnas llegaron más tarde, se vieron frenadas y debieron instalarse durante veinte meses, y donde por tanto fueron durante buena parte de ese tiempo auténticos «poderes autónomos dentro del territorio aragonés». En esas condiciones, con las trincheras a un paso, y con el olor y sonidos de la guerra invadiendo el curso de los días, nada parecía favorecer el ordenamiento o la «pacificación» de la zona, sino antes bien la inestabilidad, la multiplicación de contrapoderes y los conflictos y resistencias ante las continuas requisas e intromisiones de los mismos en la vida de cada comunidad.¹¹ Por tanto, el colapso del Estado y la disolución de su monopolio de la violencia no sólo eran mayores aquí que en otras zonas, sino que llegaron mucho más lejos en el tiempo. Algo que conviene tener bien presente para comprender lo que sucedió en esas comarcas.

Y lo que sucedió fue que, en esos primeros cien días de guerra, la represión dejó tras de sí un espeso reguero de san-

Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1987, p. 74, y J. M. Solé y J. Villarroya, *La represión a la rerauarda*, pp. 101 y 201-205. La cita del texto procede del AGCS, PS Aragón, carp. 25: «Informe del CR del Frente Popular... Barbastro», y la optimista visión militante sobre los no-poderes, en J. Borrás, *Aragón en la revolución*, p. 145.

¹¹ J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, pp. 106-114 (cita en p. 111), y testimonio de F. Sanclemente, *Cinco Olivas*, 16-5-1999.

gre y oprobio. Los modos y mecanismos fueron variados, pero el final del trayecto era siempre el mismo. Ahora bien, la puesta en relación de esos mecanismos con las diversas comarcas y momentos sería otra muestra de la ligazón entre la represión y los contrapoderes que se repartían la retaguardia. Pues también en ello, aun en esta primera etapa, cabe encontrar algunas diferencias.

Aunque es discutible el carácter «espontáneo» de la represión incluso en esos casos, lo cierto es que si en algún momento se acercó a serlo, sería en los primeros días y allí donde la sublevación había tenido amplio seguimiento. Es lo que vimos en las denuncias masivas, en los juicios «populares» desde el balcón del Ayuntamiento y en los fusilamientos en grupo junto a éste en el Caspe de los primeros días. O lo que vemos, por ejemplo, en la búsqueda de «fascistas» en Fabara y Maella, así como en la ejecución en La Almolda —como los casos anteriores en pleno día— de un guardia civil y un abogado caspolino, todo un acto público que llegó a ser anunciado con un pregón del comité según el cual «el que quiera ver matar dos osos, que acuda a la plaza del pueblo». Era, en esos días y lugares específicos, una «justicia por consenso», la aceptación por muchos de una justicia que algunos se tomaban por su mano, no legal pero «justa», en unos momentos en que había que defenderse de un ataque bélico y no podía confiarse en el aparato judicial institucional. Y en unos momentos, sobre todo, en los que, despojando el poder estatal del uso restrictivo de la violencia, determinados sectores «populares» se sirven de la misma como afirmación simbólica de su recién adquirida «soberanía» y como «acto de representación política» ante el resto. Desde esa óptica, el grupo violento es «investido de una potencia simbólica extraordinaria: es soberano porque puede castigar a sus enemigos y tiene razón al hacerlo, y al mismo tiempo representa a la colectividad que asiste y aprueba su conducta». El propio consenso en esas prácticas, bien que pasajero, tenía además sobre ellas un efecto multiplicador, pues diluía las responsabilidades en el anonimato y eliminaba los tradi-

cionales frenos morales ante el uso de la violencia contra el prójimo. Como ya viera Georges Bernanos en su célebre *Los grandes cementerios bajo la luna*, la gran cantidad de culpables diluía el sentimiento de culpabilidad.¹²

No obstante, aun en esos lugares lo anterior no dejaba de constituir una excepción antes que una norma. De hecho, la tarea depuradora pasó pronto a convertirse en el campo de actuación de esos pocos que estaban en los comités locales o en los de guerra de las columnas. Cuando los hubo, unos u otros o ambos a la vez formaban los «tribunales» que juzgaban sin excesivas delicadezas formales a los «enemigos de la revolución» y que, sin término medio, les absolvían o les condenaban a muerte. En el mismo Caspe, según las fuentes disponibles, las denuncias eran estudiadas por una suerte de tribunal del comité en reuniones muy concurridas en un principio, pero que luego lo serían cada vez menos. Y a él se añadía un «tribunal de Columna» del que «no era la benignidad cualidad característica». En otros, ambos se unían en uno solo, tal es el caso de Azuara, Maella y Pina. O el de Leciñena, donde el 9 de septiembre y a raíz de unas denuncias «se organizó un consejo de guerra en la Iglesia» en el que «actuaba de fiscal el jefe de la columna de ocupación apellidado Grossi [...], siendo el resto de los componentes [ocho] vecinos del pueblo». Las acusaciones del fiscal sobre cinco de los acusados las confirmaría el jurado por mayoría

¹² Es lo que los psicólogos sociales han llamado «desindividuación», un estado de pérdida de la conciencia de uno mismo que reduciría la preocupación por la valoración social y debilitaría las restricciones sobre determinadas conductas prohibidas: E. Aronson, *El animal social*, p. 254, y Gerardo Pastor, *Conducta interpersonal. Ensayo de psicología social sistemática*, Univ. Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1988, pp. 220-221. Lo de justicia por consenso viene de Víctor Alba, «De los Tribunales Populares al Tribunal Especial», en *Justicia en guerra*, pp. 224-225, y la referencia a La Almolda de las ramas de ésta y Caspe en AHN, CG, legs. 1424 (2) y 1425 (2), mientras que los otros entrecomillados están en el ya citado P. Viola, «Violence révolutionnaire ou violence du peuple en révolution?», p. 97. Para una cáustica descripción de esos juicios en la plaza de Caspe, F. Morales, *Caspe combatiente*, pp. 63-65.

simple, y sus cuerpos yacían al amanecer siguiente a la vista de todos en el cementerio.¹³ Porque, y esa es una diferencia fundamental respecto a los primeros momentos, las muertes dejan de producirse de día para pasar a concentrarse, sin excepción, en las horas de noche, oscuridad y silencio.

Aún mayor silencio y ocultamiento se buscaría, sin embargo, allí donde esos «juicios» no eran públicos o simplemente no existían. Es decir, en la mayoría de los lugares. De hecho, y aunque la generalización esconde incontables variantes locales, lo más común era que los miembros de comités, consejos de columna y grupos de investigación forasteros decidieran por sí mismos —sin mediar ningún tipo de juicio ni, en ocasiones, de interrogatorio— la suerte de quienes habían sido detenidos, horas o días antes, por ser denunciados o por figurar en una de esas «listas negras» de «fascistas» que tanto circulaban durante esas semanas. A partir de ahí, las diferencias estriban en el tiempo pasado antes de la fatídica «saca», en si eran llevados a morir a otras partes, o en el papel de los que venían de fuera, desde meros ejecutores llamados por los comités hasta grupos y «checas» que llegaban a exigir a aquéllos la entrega de los «enemigos de clase». Grupos que no podían faltar en aquel contexto, como los mencionados «coches de la muerte» que actuaron en las comarcas de Caspe y Sástago, o la «Banda Negra» que lo hacía alrededor de Pina.¹⁴ Lo que no variaba tanto era lo que esperaba a los considerados culpables. Una noche próxima, quizá esa misma, un

¹³ Testimonio de C. Letosa, Leciñena, 15-11-1998, y AHN, CG, leg. 1423 (1): rama de Leciñena. Lo de Caspe, en *ibidem*, legs. 1424 (2): rama de Caspe, y 1427 (2): anexo 1/5 (solicitud de indulto, 7-11-1937, de donde viene la cita), y testimonios de A. Gambau y J. Sanz, Caspe, 12-12-1998 y 20-3-1999 respectivamente. La referencia a Pina, en el mismo fondo documental, leg. 1429 (2), pieza nº 8, fol. 320. En todo caso, estas y otras fuentes están lejos de permitir concluir que todos esos tribunales aprobaran el fusilamiento de todos los que pasaban ante ellos, tal como afirmaba la propaganda franquista y aún repiten autores como Á. D. Martín Rubio (*La represión roja en Badajoz*, p. 126).

¹⁴ A ésta la encontramos por ejemplo en las muertes de Osera a fines de septiembre, en Farlete o en la misma Pina: AHN, CG, legs. 1425 (2): ramas de

camión o coche de milicianos les «sacaba» de su pueblo con la excusa de ir a declarar a otro, en lo que no era tanto una mentira piadosa cuanto una forma de evitar agónicas resistencias. El viaje acababa en el cementerio o en las afueras de uno de los dos pueblos, donde sus cuerpos caían al suelo al mismo tiempo que varios disparos rasgaban la oscuridad. Después, mientras el vehículo que les había traído se alejaba, el silencio volvía a posarse sobre la tierra y sobre la noche.

Los ejemplos aquí pueden ser numerosos, empezando por Gelsa de Ebro o Fuendetodos —las «sacas» más sangrientas— y acabando por las vividas en Fabara y Plenas a mediados de agosto y finales de septiembre, respectivamente, preparadas con detalle ambas de modo que todas las casas y cafés permanecieran cerrados y nadie pudiera circular por las calles durante toda la noche. Pero el más significativo quizá sea Escatrón, en el partido de Caspe, descrito de primera mano por un testigo en un documento que, sesenta y tres años después, resulta ciertamente revelador.¹⁵ Según su firmante, a la sazón «jefe de las Milicias Aragonesas, 1ª Columna destinada a Escatrón», se encontró a su llegada al pueblo ese mismo día con que cinco derechistas habían sido detenidos el día

Osera y Pina, y 1426, pieza nº 4, fol. 39; testimonio de Evaristo Alfranca, Farlete, 17-5-1999. Por su parte, el grupo de Sástago es el responsable de las muertes de Velilla (testimonio de Roque Guiu, Zaragoza, 20-4-1999, y AHN, CG, leg. 1429 (1), pieza nº 7, ff. 134-138); y el de Caspe, dirigido por un tal Fresquet, protagonizó por ejemplo la saca de trece fabaroles la noche del 15 de agosto, y sembró el pánico en la zona hasta su expulsión por el Consejo de Aragón: AHN, CG, legs. 1423(1), 1424(2): ramas de Caspe, Fabara y Maella; 1426: piezas nº 3 y 4, y 1429(1), pieza nº 7; S. Cirac, *Héroes y mártires*, p. 62, y testimonio de A. Gambau, Caspe, 18-3-1999. Esos grupos distan de ser las «checas» de Madrid y Barcelona y existen en todas las regiones de la retaguardia republicana: *vid.* M. Ors, *La represión de guerra y posguerra en Alicante*, pp. 77-78, 119 y 174-175.

¹⁵ Se trata de un «Informe Milicias en Escatrón al Jefe Investigación Caspe», Escatrón, 23-9-1936, guardado en AHN, CG, leg. 1427 (2), pieza nº 5, anexo 1/5. Su sincera expresividad, y el hecho de que fuera redactado con la sangre de las víctimas aún caliente, nos lleva a reproducirlo ampliamente. Para los casos citados de Plenas y Fabara, véase las ramas respectivas en *ibidem*, legs. 1423 (2) y 1424 (2).

anterior y un sexto fusilado esa misma madrugada a manos de «unas Milicias que dicen ser de Investigación [...] por las causas que ellos creyeron convenientes». Posesionado del mando, el recién llegado solicitaría al comité local informes sobre los detenidos, informes que no dejaban lugar a la duda: «Todos ellos han sido enemigos de la clase trabajadora y de la causa», aunque «peligrosos» sólo serían tres de ellos, «sobre los cuales pesan acusaciones tan concretas que consideramos debe de condenárseles sin excusa ninguna a sufrir la última pena». Mientras tanto, los otros dos «no creemos que de momento puedan ser peligrosos, luego del castigo que en sus bienes hemos realizado, dejándolos en la miseria y obligándoles al cotidiano trabajo. Estimamos deben ser puestos en libertad».

Así las cosas, y probado que los tres primeros habían colaborado con los militares sublevados y en la denuncia de cinco «camaradas» que aquéllos se habían llevado presos a Zaragoza, el jefe miliciano no podía concluir sino que «debía aplicárseles la pena que el Comité Local demandaba». En consecuencia, «a estos tres individuos se les ha aplicado la última pena en el cementerio de esta localidad en el día de hoy, a las dos de la mañana, haciendo resplandecer de esta forma la justicia por la cual estamos luchando y llevando así el ejemplo de nuestra justicia a esas compañeras y niños que lloran la suerte de los cinco camaradas arrancados del pueblo por los fascistas». Respecto a los otros dos, por su parte, «habiendo leído en sus callosas manos el ser trabajadores, no teniendo otro defectillo que el sufragio universal que emitieron [votando a la derecha], han sido puestos en libertad». Mas la cosa no acababa ahí, pues el documento no sólo era un informe, sino que al tiempo pedía instrucciones sobre cómo llevar a cabo estas actuaciones. Instrucciones que, antes de ejecutar la pena, se habían solicitado por telégrafo a Caspe, cuya respuesta había sido suficientemente explícita: «ciertas cosas no se preguntan». Por ello el informe terminaba rogando «que si en este caso no se ha guardado alguna formalidad que no conozcamos quizá por el desconocimiento en que

puedan llevarse estos asuntos en esta oficina que para lo sucesivo, nos envíen normas para seguir para que en ningún momento por desconocimiento involuntario pueda incurrirse en algún defecto de forma».

Por lo tanto, si la represión de esta primera etapa —la que produce la mayoría de las muertes— pudo empezar como violencia popular más o menos «espontánea» en el «ambiente inicial de impunidad», pronto derivaría hacia instrumento de la revolución y de los micropoderes surgidos del derrumbe del aparato estatal. En un marco de radical novedad, esperanzas y temores, esos multiformes poderes exhibirían recursos y acciones violentas, sobre todo en los primeros momentos y donde se veían más cuestionados y menos legitimados, para hacer creíbles futuras amenazas y así asentarse, mientras que no lo hacían —o no tanto— donde lo anterior no era necesario. Sin embargo, ese mismo instrumento podía en última instancia mermar la propia legitimidad de esos organismos y, en suma, provocar descontentos. Tal vez no estemos en condiciones de calibrar ajustadamente el grado de aceptación de la represión en la población, pero sí resulta evidente, en todo caso, que pronto dejó de ser algo masivo y consensuado entre la mayoría. Las muertes de vecinos y conocidos, junto al resto de formas de violencia e imposición que las acompañaban, parecían en esos pueblos demasiadas novedades y demasiados traumas para las concepciones y vivencias de la vida política y comunitaria de muchos de sus habitantes.

EL MUNDO TRASTORNADO: LA VIVENCIA DE LA VIOLENCIA

«La revolución va más allá de la práctica de una vindicta más o menos justificada en los primeros momentos, pero nociva cuando se sistematiza y se prolonga» (D. Abad de Santillán)

Llegada de forma tan rápida como inesperada, la revolución había supuesto una radical sacudida en la vida cotidiana

na de los pueblos del agro aragonés. Desaparecidos los curas y caciques, despojada la Iglesia de sus campanas y utilizada para actividades cívicas y lúdicas, ausentes los jóvenes en el frente, y con nuevos protagonistas de pañuelos rojos al frente de la vida local, nadie podía ignorar que lo que se estaba viviendo poco tenía que ver con lo pretérito y que aquel asalto al pasado iba en serio. Los ricos debían esconder su riqueza, los católicos sus imágenes y objetos de culto, y todos en general, como en Madrid, Bilbao, Málaga o en la Barcelona descrita por Orwell, habían de trocar sus corbatas y sombreros por boinas y ropa de campo por miedo a parecer acomodados.¹⁶

Ese asalto, sin embargo, y pese a lo que se privilegia en este trabajo, no sólo traía consigo miedos, llamas y sangre. Pronto, generalmente tras apenas unos días, se inicia la «normalización» en cada lugar, se toman las primeras decisiones respecto a la organización de la producción, el trabajo, los abastos y la distribución, y los comités se vuelcan en esas tareas, que ocupan la inmensa mayoría de las discusiones en las actas de sus reuniones. Junto a ellas, compartían un lugar preeminente las disposiciones, abundantes y casi obsesivas, relacionadas con la cultura, la educación, la lucha contra el «pertinaz analfabetismo del pueblo trabajador», e incluso contra el «relajamiento moral» que podían suponer prácticas como el alcoholismo —que «no dejaba pensar»— o la prostitución. Porque, a pesar de todo lo que se dijo en los años posteriores, aquello no era ninguna bacanal donde se daban cita «las heces de la sociedad», sino el intento de fundar una

¹⁶ Es lo que, hablando del Aragón del 36, Azaña llamó despectivamente «uniformidad del andrajo» (*La velada en Benicarló*, p. 78). Cfr. G. Jackson, *La República española y la guerra civil*, p. 251; Carlos Bacigalupe, *Pan en la guerra. Crónica de la vida cotidiana en el Bilbao de la guerra civil*, Laga, Bilbao, 1997, pp. 205-211; G. Woolsey, *Málaga en llamas*, p. 79; George Orwell, *Homenaje a Cataluña*, Ariel, Barcelona, 1983, pp. 41-42; o las vívidas descripciones de esos temores en el Madrid de 1936 en la fascinante novela de Juan Iturralde, *Días de llamas*, Ediciones B, Barcelona, 1987 (1ª ed. 1979), que ha ejercido un considerable influjo en este trabajo.

nueva sociedad, tal como la concebían los libertarios, sin los vicios de la anterior. De hecho, «estos anarquistas eran muy puritanos. No tocaron a una sola mujer, no dejaban a los chicos ni jugar a las chapas, ni entrar a los bares, [...] no soportaban a los borrachos y persiguieron a los ladrones». ¹⁷ Como botones de muestra, en Caspe, a los borrachos reincidentes «se les da un baño en la piscina». Por su parte, el comité de Escatrón prohibía a comienzos de 1937 «la venta de botellas de licores en los establecimientos públicos, siendo permitida solamente la venta de una copa por persona»; y, dos meses antes, indicaba al comité de guerra de los milicianos que «veríamos con gusto quedasen clausurados los bares, cafés y tabernas de esta localidad a las diez de la noche, como asimismo prohibiesen en absoluto toda clase de bailes y toda clase de juegos en los establecimientos mencionados.» Las razones estaban claras: «El momento actual requiere seriedad y sacrificio por parte de todos» y, siendo así, había que «evitar frivolidades». ¹⁸

Sin embargo, no parece que las frivolidades fueran en aquellos momentos lo que más abundaba ni la mayor preo-

¹⁷ Testimonio de J. Sanz, Caspe, 20-3-1999, y la cita del alcoholismo en el de Joaquín Monreal, Caspe, 12-12-1998. Sobre estas cuestiones, sigue resultando fundamental el ya clásico trabajo de J. Álvarez Junco, *La ideología política del anarquismo español*, esp. pp. 65-92 y 115-137. Para la citada «normalización» en algunos lugares, puede verse AGCS, PS Aragón, carpeta nº 36, Actas del comité de Azuara, 7-10-36 y ss.; *Solidaridad Obrera*, 28-2-37 (Farlete); *Nuevo Aragón*, 30-3-37 (Moyuela) y 21-7-37, o *Solidaridad Obrera*, 13-8-1936 y *El Frente*, 19-9-1936 (Pina).

¹⁸ AGCS, PS Aragón, serie «R», carpeta 10: Actas del Comité de Defensa de Escatrón, 9-2-1937 y 11-11-1936. En *ibidem* hay una «Circular de la Junta Provincial de la lucha contra el analfabetismo» que ordenaba a los consejos municipales la creación de Juntas locales y brigadas para la lucha contra aquél. Por su parte, la CG dedica una «pieza» en cada provincia a la cultura y educación -caracterizada por «la irreligiosidad y la extranjerización»: (leg. 1429 (2), pieza nº 11). Lo del relajamiento moral y la prostitución, era del AGCS, PS Barcelona, carp. 839: «Junta de Seguridad, Caspe...», 28-1-37, y lo del baño a los borrachos, en *ibidem*: «Informe que da esta Oficina de Investigación...», Caspe, 15-11-36.

cupación. Sobre todo para los más perjudicados por la profunda transformación que se estaba viviendo y los que mayor peligro corrían en el derrumbe del viejo edificio social. Porque, para ellos, el significado de todos esos cambios iba más allá del de los colores, sonidos o usos de la Iglesia, superaba lo simbólico y llegaba no sólo a la pérdida de su poder y *status* en las comunidades locales, sino también a la amenaza sobre su propia vida. Y, al menos allí donde la represión fue más intensa, esa amenaza duró varias semanas o varios meses. Tiempo vivido por las posibles víctimas y sus familias —pues todo el mundo sabía quién podía serlo y quién no— como un auténtico «calvario»: no mostrándose mucho en público, escondiendo insignias y objetos de culto comprometedores y esperando que en cualquier momento se produjera la temida llamada a la puerta en mitad de la noche.¹⁹

Para los beneficiarios de esos cambios, por su parte, lo principal era que había llegado la hora de la soñada revolución y que no había tiempo que perder para el aprovechamiento de esa extraordinaria situación que quizá no durara todo lo que se deseaba. Por ello, y si bien «mucha gente estaba contenta pero participaban muy pocos», durante los primeros momentos existiría un cierto «consenso» en parte de la población que veía la represión, al igual que el jefe miliciano llegado a Escatrón visto poco ha, como algo «lógico» en aquellas circunstancias.²⁰ Aquello era una guerra, y eso callaba a

¹⁹ S. Cirac, *Los héroes y mártires de Caspe*, pp. 62 ss., y testimonio de Pascual S. L. y Valeriana Y. O., Plenas, 16-6-1999, que sufrieron esa llamada, aunque por distintos motivos esquivaron la muerte que probablemente les esperaba. En una versión más optimista de los hechos, José López hablaba de la «falsa campaña sobre el terror. Derechistas acérrimos trabajan y viven sin que nadie les moleste»: *El Aragón que yo he visto*, Guerri-Comité Nacional CNT, Valencia, 1937, p. 4.

²⁰ Porque, en nuestra argumentación, ese consenso obedecería a esas circunstancias especiales, antes que a la supuesta tendencia del pueblo hacia las tiranías, las flagelaciones y «el despotismo de los oprimidos» de la que se ha servido el revisionismo, sobre todo francés, alrededor de la paradigmática fecha de 1989: Guy Hermet, *El pueblo contra la democracia*, Inst. Estudios Económicos,

los indecisos, resolvía dudas y coadyuvaba a que se aceptasen los hechos. Donde las había habido, a la fractura social previa y a la sublevación se añadía la represión para escindir la comunidad, y nadie podía quedar al margen sin tomar partido. De hecho, la represión buscaba quizá precisamente eso, que nadie fuese neutral y que ya no hubiese vuelta atrás.

Y, al menos allí donde fue significativa, parece que lo logró. La situación de «calvario» y persecución, que en todo caso no constituía una «atmósfera omnipresente de angustia» extendida desde el poder central a toda la población durante años —como en los «terrores» nazi o estalinista—, dejó pronto paso a unas mayores garantías parejas al «enfriamiento» de la represión. De la misma manera, y quizá antes, el relativo consenso de los primeros días respecto a la misma se reducía a los pocos que mantendrían los pañuelos rojos en sus cuellos durante toda la guerra. Sin embargo, a esas alturas el derramamiento de sangre de miembros de la comunidad había afianzado ya en algunos lugares las divisiones previas entre sus habitantes, independientemente de que fueran o no alcanzados por él. No en vano, la violencia política en general se relaciona por igual con el daño físico o moral como con las imágenes y reacciones emocionales que suscita y, por tanto, «la manera en que [...] es percibida cuenta tanto como la efectivamente sufrida, ya que su efecto psicológico puede ser tanto o más devastador que su efecto real. De ahí su estrecha vinculación con lo simbólico y lo imaginario».²¹

Madrid, obra editada precisamente ese año. El entrecomillado del texto es del testimonio de E. G. G., Gelsa de Ebro, 9-1-1999.

²¹ E. González Calleja, «¿Qué es y qué no es la violencia en política?», p. 53. Para las referencias hechas a otras formas de terror, Jeremy Noakes, «Orígenes, estructura y funciones del terror nazi», en N. O'Sullivan (comp.), *Terrorismo, ideología y revolución*, pp. 91-114; Seweryn Bialer, *Los primeros sucesores de Stalin. Liderazgo, estabilidad y cambio en la Unión Soviética*, FCE, México D. F., 1987, pp. 24-29 (de donde lo de la atmósfera de angustia) y Nicolas Werth, «Logiques de violence dans l'URSS stalinienne» y Philippe Burrin, «La violence congénitale du nazisme», ambos en Henry Rousso (dir.), *Stalinisme et nazisme. Histoire et mémoire comparées*, Complexe, París, 1999, pp. 99-128 y 129-142.

Con todo, no hacía falta recurrir a lo simbólico para percibir esa violencia. Junto a los ya vistos ataques contra los referentes emblemáticos del orden social —archivos, iglesias, imágenes religiosas, etc.—, otras formas de coacción más directas que aquéllos, y con mayor extensión que las muertes, acompañaban a éstas en la difícil organización de la retaguardia y de la nueva sociedad. Ahí tenía cabida, por ejemplo, la encarcelación de supuestos «enemigos de la causa» —pues, por supuesto, no todos fueron asesinados. En este caso, como en realidad en el de todas estas «otras formas de represión», las fuentes no ofrecen sino datos fragmentarios, a menudo confusos, y desde luego lejos de la exhaustividad con la que se presentan los fusilamientos. No obstante, puede concluirse que esas detenciones estuvieron presentes en casi todas partes, especialmente cuando las ejecuciones eran poco numerosas o ya había sido desterrado su uso. De este modo, incluso pueblos con escasos guarismos de víctimas, como Bujaraloz, Sástago o Lécera envían a algunos de sus vecinos a la cárcel de Caspe, pues en esto, como en otras facetas de la retaguardia y la violencia, el paso de los meses traería una cada vez mayor centralización geográfica. En ese sentido, las autoridades de aquélla, ante la saturación sufrida por la prisión en los primeros meses de 1937 —cuando la represión había remitido sustancialmente—, debían incluso acelerar los trámites judiciales para poder descongestionarla. Los arrestos, por lo demás, afectaban no sólo a los hombres sino, como en la encarcelación de seis esposas de huidos a «zona nacional» en Plenas durante todo el mes de abril del mismo año, también a las mujeres.²²

²² AHN, CG, leg. 1423 (2): rama de Plenas, y testimonio de Valeriana Y. O. Plenas, 16-6-1999. Según las actas del Pleno del Tribunal Popular de Caspe del 18-2-1937, había en la cárcel de Caspe 85 detenidos, «siendo la capacidad de la misma a lo más para unos 30». (AHN, CG, leg. 1426, pieza nº 3, anexo 1/3). En *ibidem* hay informes de las autoridades de posguerra sobre esta y otras cárceles (pieza nº 3), y las declaraciones (1941) de 21 caspolinos que estuvieron en esa cárcel en 1936; de todos ellos, ni uno solo afirma que fuera maltratado ni mucho menos torturado (pieza nº 4). Por poner un ejemplo, nueve vecinos de

A esas detenciones se añadía en ocasiones la obligación de realizar determinados trabajos y actividades para la comunidad o sus nuevos poderes. Y de nuevo aquí no es posible sino mostrar algunos ejemplos que puedan ser significativos. En Leciñena, como en tantos otros lugares, los detenidos —algunos de los cuales, como vimos, serían ejecutados en la precipitada retirada del lugar— eran llevados «a trabajar haciendo trincheras y cortando pinos», mientras sus mujeres, precisamente ellas, debían encargarse de las tareas «domésticas» más ingratas como lavar la ropa de los soldados o darles de comer. Algo que se repetía en muchos pueblos con las mujeres de los detenidos, y sobre todo con las de los huidos al otro lado de las trincheras, sin que pudieran librarse de ello ni las embarazadas.²³ Y en Caspe, en fecha tan tardía como febrero de 1938, la Alcaldía solicitaba al Juzgado el aprovechamiento de 61 presos en la cárcel para la recogida de la oliva «por carecer de brazos suficientes para llevarla a efecto con la premura que se requiere [y] de acuerdo con el Instituto de Reforma Agraria». En otros casos, los trabajos no los llevaban a cabo los detenidos, sino derechistas que gozaban de libertad, pero que así pagaban de alguna manera por ésta. Conocido en su comarca es el caso de la carretera de Monte Oscuro que Durruti ordenó comenzar a derechistas y gitanos del sector de Pina. Pero el más destacable es sin

Bujaraloz eran detenidos y llevados a esa cárcel, de la que saldrían hacia un campo de trabajo en enero del 37. En un valioso estudio sobre *La presó Model de Barcelona. Història d'un centre penitenciari en temps de guerra* (L'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996), Pelai Pagès ha mostrado que el ritmo de ingresos estaba relacionado con las fases de la represión física, de modo que aquéllos son más numerosos cuando ésta descende tras los primeros meses y cuando, tras los sucesos de mayo, la persecución se dirige también contra el POUM y la CNT (pp. 37-61).

²³ Caso de nuestra entrevistada en Plenas citada en la nota anterior. Otros casos de estos trabajos femeninos, en Fuendetodos, Pina de Ebro o Maella (testimonios de Ana Gracia, Belchite, 16-2-1999; Marisa Lagunas, Zaragoza, 29-10-1998, y M^a Luisa Diorrios, Maella, 18-3-1999, respectivamente). Lo de Leciñena viene del de C. Letosa, Leciñena, 15-11-1998, y de AHN, CG, leg. 1423 (1): rama de Leciñena (de donde ha sido sacado el entrecomillado).

duda el de las obras de una carretera entre Moneva y Moyuela en las que debieron participar desde marzo del 37 «personas de orden» de toda la comarca, entre ellos hasta 53 de Azuara ó 65 de Herrera de los Navarros. De ellas, además, en las semanas posteriores serían fusilados allí mismo ocho y trece, respectivamente.²⁴ A todo ello se añadían a menudo otras acciones que sin duda tuvieron una amplia repercusión en la vida cotidiana de los pueblos: continuos registros en busca de objetos religiosos; impedir la celebración de los entierros de algunos fusilados; organizar bolsas de trabajo en las que éste sólo se repartía entre los afiliados a la central sindical hegemónica; multas, sanciones y suscripciones más o menos impuestas a los acomodados; o la entrega de joyas, metales preciosos o divisas extranjeras. Incluso a la privacidad del hogar llegaban esas formas, de modo que los milicianos se repartían por las casas de todo el vecindario, mientras las familias de los fusilados y «pasados» a zona sublevada eran en no pocas ocasiones expulsadas de sus casas, para que éstas se convirtieran en sedes de los grupos armados, domicilio de los del comité, albergues de milicianos e incluso establos.²⁵

No obstante, quizá serían lo que las fuentes franquistas llaman «ataques a la propiedad», más aun que las detenciones y excepción hecha de las muertes, las formas de represión

²⁴ AHN, CG, legs. 1423 (2) y 1424 (2). En esa documentación aparecen casos similares, como los derechistas de Nonaspe y Caspe empleados en la construcción y limpieza de las acequias. La referencia y la cita sobre Caspe en el texto, en *ibidem*, leg. 1426, pieza nº 3, anexo 1/3: «Relación nominal de los detenidos...», 24-2-1938. A todos estos casos hay que añadir los internamientos en campos de trabajos de los condenados por el Tribunal Popular: *vid. infra*.

²⁵ Varios ejemplos, en Archivo Municipal de Fabara, leg. 42-19: «Denuncias (1937-1938)», aunque la mayor parte de los datos sólo pueden encontrarse en las fuentes orales -en las que se han basado las últimas líneas. Es por ello que, pese al indudable interés que guarda el asunto, no se puede pasar sobre él sino de forma provisional y descriptiva. Para un acercamiento al tema en el marco de otra provincia, F. Alía Miranda, *La guerra civil en retaguardia, Ciudad Real*, pp. 249-255.

más extendidas, las de mayor impacto en las conciencias y la vida cotidiana, y desde luego las de una mayor significación histórica. Esas mismas fuentes engloban bajo esa denominación —y confunden— actuaciones que van desde los saqueos de los primeros momentos a las requisas de las milicias, pasando por las incautaciones y expropiaciones más o menos legales de los comités y juntas creadas a tal efecto o por las colectivizaciones. Hechos, en suma, de diferente datación y protagonistas, pero entre los que, en la práctica, resulta difícil establecer claras fronteras.

Teniendo en cuenta esas apreciaciones y limitaciones, parece claro que las principales fuentes de riqueza se vieron afectadas por estas formas de «represión económica». Empezando, por ejemplo, por la banca, cuyas escasas sucursales en la zona se verían «expoliadas» desde el primer momento.²⁶ Y continuando, entre otras, por las casas y por los comercios e industrias, que por su parte sí eran más abundantes. En este punto, pasados los saqueos más o menos incontrolados al inicio de la guerra —en los que nos detuvimos en el primer capítulo—, las nuevas autoridades locales pronto se pusieron al frente de ese proceso, quizá para contenerlo, y en todo caso para dirigirlo. Porque otros «micropoderes», como las columnas o los grupos armados aislados, parecían dispuestos a llevarlo a cabo por sus propios medios. Así, en La Almolda, el comité ordenaba, ya el 31 de julio del 36, la incautación de todos los comercios, talleres y fábricas y, al igual que en Azuara, Escatrón, Fabara y otros muchos, se entregaba todo ello a la colectividad para que ésta se formara. Pero la tipología de situaciones era mayor. En lugares como Maella, la colectividad compartía con el

²⁶ Las sucursales eran las del Banco Hispano Americano, Banco de Aragón y Banco Hispano Colonial en Caspe -con delegaciones del primero en Fabara, Maella, Fayón, Mequinenza y Sástago- y la del Banco Zaragozano en Belchite. Los daños sumados de todas ellas alcanzarían las 224.539 ptas. en metálico «expoliadas de la caja» y 127.050 en valores de los clientes (AHN, CG, leg. 1429 (2), pieza nº 9, ff. 4, 6, 8 y 15, y leg. 1911/2).

propio comité la gestión de lo incautado; en las minas de Mequinenza y Fayón era aquél junto a los propios trabajadores, y en Gelsa, Herrera o Caspe, por su parte, a todos ellos se unían los respectivos comités de guerra de las columnas. Empero, de una u otra forma, el resultado no variaba demasiado. Muchos de los considerados «desafectos a la causa», sobre todo los más acomodados y las familias de los huidos al bando «nacional», y principalmente allí donde la represión habría de ser también mayor, eran despojados de sus productos y negocios y recibían a cambio un vale del comité que a menudo nunca sería pagado. En algunas ocasiones, además, el incautado sería poco después fusilado, aunque de mediar aquí la muerte, en la mayor parte de los casos ésta se había producido ya previamente.²⁷

Ahora bien, en unas comarcas en las que la principal actividad económica era la agricultura, y la primera fuente de poder social la propiedad de la tierra, ésta y sus productos eran lógicamente los principales blancos. También desde muy pronto, los comités locales y de guerra fueron decretando la incautación de las tierras de las «grandes casas», derechistas y huidos, y también en este caso fueron formadas con

²⁷ De las 148 denuncias que la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza había recibido por este tipo de incautaciones hasta finales de 1941 —sólo una parte del total real—, la mayoría provienen de localidades con altos índices represivos (69 de Caspe, 20 de Gelsa, 13 de Fabara, 13 de Belchite, 7 de Maella, 6 de Herrera o 5 de Azuara), y al menos una veintena de los dueños habían sido fusilados, aunque seguramente la cifra es mayor pues muchas de las denuncias aparecen con el nombre del familiar o viuda. Por otro lado, el negocio más repetido es el de tejidos (29), seguido de los «comercios mixtos» (22), las fábricas de aceite o jabón (19) y las tiendas de comestibles (15): AHN, CG, 1429 (2), pieza nº 8, ff. 127-132 y 326. En *ibidem*, ff. 133-339 se recogen todas esas declaraciones, y de ellas nos hemos servido para los datos aportados en el texto, junto con la pieza nº 1 de la misma documentación y los testimonios orales. Para esta «represión económica», en especial para las incautaciones de bienes inmuebles y fincas urbanas, resulta muy útil el trabajo de Glicerio Sánchez Recio, *La República contra los rebeldes y los desafectos*, *op. cit.* Por lo demás, convendrá recordar que también al otro lado de la línea del frente existía una amplia y sistemática represión económica: *cfr.* J. Cifuentes y P. Maluenda, *El asalto a la República*, pp. 114-116 y 126-128.

ellas las colectividades. Con ellas, con sus aperos y con sus cosechas y productos, que en aquella coyuntura, definida por la llegada de unas columnas milicianas sin intendencia ninguna y que por tanto debían vivir de las requisas militares, se hacían agónicamente indispensables para la marcha de la guerra. Porque serían esas circunstancias —el frente cercano, las milicias, la atomización del poder y la completa desaparición del Estado durante meses en la zona—, y no la manida situación de caos y de «arbitrarias incautaciones» del Consejo de Aragón, las que llevaran a los comités y colectividades a decidir las expropiaciones sin seguir las disposiciones del Ministerio de Agricultura, y las que le dieran un alcance tan amplio. Alcance que, aunque menor, llegaba a todas las localidades de la retaguardia, incluidas aquellas, como Cinco Olivas, Chiprana, Fayón o Sástago, en las que la sangre apenas había corrido.²⁸

En este punto, las fuentes consultadas sólo ofrecen datos fragmentarios acerca de la incidencia concreta del fenómeno incautador en cada zona. Sin embargo, y exageraciones reprobatorias de los vencedores de la contienda —y de las organizaciones que se disputaban con la CNT el control de la situación política— al margen, parece evidente que el asunto dependía de factores locales como el peso de las milicias o el

²⁸ En esta última, el comité se incautaba ya en agosto de 1936 de tres «predios rústicos [...] con sus edificaciones anexas, explotaciones industriales, aperos de labranza, ganado, etc, por ser sus antiguos propietarios elementos destacadamente adversos al régimen vigente y a los postulados de la Revolución»; los propietarios de las mismas eran la Compañía Electrometalúrgica del Ebro, el Conde de Sástago y un comandante militar sublevado (AHN, CG, leg. 1429 (1), pieza nº 7, anexo 1/7: actas de las incautaciones, 14-8-1936, y «Ratificación de las incautaciones», 27-1-1937). En la cercana Cinco Olivas el Comité Antifascista se incautaba dos días después de todas las fincas y edificios de otros tres «facciosos», dos de ellos también militares y el otro un «fascista clerical que obligó el 16 de febrero a sus medieros y arrendatarios a votar a las derechas» (FPI, AASM, leg. 514-15, ff. 16 y 24. Lo de las incautaciones arbitrarias, en *ibidem*, leg. 512-7 (22-5-1937), y Amaro del Rosal, «La Caja de Reparaciones (Ministerio de Hacienda). El Tribunal de Responsabilidad Civil (Ministerio de Justicia), 1936-1939», en *Justicia en guerra*, pp. 239-245 (cita en p. 244).

número de propietarios «rebeldes» y huidos, pero quizá sobre todo de las necesidades de ese control de la retaguardia. No en vano, todos los indicios apuntan a que la mayor extensión de esos hechos coincide con los lugares que vivieron la mayor «limpieza» de «fascistas». De este modo, frente a lo que veíamos en la nota anterior, en lugares como Azuara y Fabara, para los que tenemos datos más o menos completos, las cosas sucedían de forma más radical. En la primera, hasta 107 vecinos aparecen en una «Relación de todos los bienes incautados o requisados» elaborada por su Consejo Municipal, 97 de ellos por expropiaciones de tierras y el resto por casas o caballerías. Y en la segunda, según un documento semejante firmado por el consejo de la colectividad, ésta se había formado con los bienes expropiados a 41 vecinos y a 28 propietarios forasteros, conformando un total de 171 «juntas» de tierras de huerta, 272 de secano, además de trece caballerías y 37 casas. De la misma manera, la cifra de incautados de Quinto era 66, la de Lécera 41 o la de Fuendetodos 38, mientras en Velilla se alcanzaba la treintena, en La Almolda y Osera 21 y 12, respectivamente, y en Caspe ascendían a 48. En ésta, por lo demás, como en las otras, no pocos de ellos estaban asimismo entre los que, desde 1939, llenarían las placas de «asesinados durante el dominio marxista».²⁹

²⁹ Si en este caso son hasta 44 de los 48 expropiados, en el resto de las localidades serían trece en Azuara, catorce en Fabara, seis en La Almolda o siete en Fuendetodos, Osera y Velilla: AGCS, PS Aragón, serie R, carp. 29 (Azuara); Archivo Municipal de Fabara, leg. 42-19: «Relación de las tierras y demás bienes expropiados...», 12-1-1937. Los datos sobre las otras localidades son menos completos, pues pertenecen a las propuestas de incautaciones de las juntas calificadoras municipales y provincial, hechas cuando, tras la disolución del Consejo de Aragón, el contexto político había cambiado sustancialmente. No obstante, parece que responden a la «legalización» de incautaciones que ya se habían realizado en 1936. Pueden consultarse en AHN, CG, legs. 1429 (1 y 2), piezas 7 y 8, anexos 1/7, 1/8 y 2/8, y leg. 1852. Además de los mencionados, aparecen también los expropiados de otras localidades con menores índices represivos: Nonaspe (3), Moneva (7), Chiprana (1), Bujaraloz (7) y Cinco Olivas (5). Para un amplio tratamiento de este tipo de acciones en otra provincia, véase F. Cobo Romero, *La guerra civil y la represión*, pp. 157-208.

Finalmente, a todo ello se añadían las famosas requisas de productos y alimentos, efectuadas según lugares y momentos por los comités locales o las colectividades, pero sobre todo por y para las milicias. Pese a las numerosas exageraciones que se vertieron sobre el tema, no se trataba de saqueos, y mucho menos de robos, más bien «era que a veces iban a las casas a coger cosas para las milicias, unos sacos de trigo o aceitunas, algunas ovejas, algunas ropas o aperos para la colectividad...» Pero no por ello dejaban de ser, de nuevo en los mismos lugares, traumáticas y, en ocasiones, intensas. En la misma Azuara, nada más entrar las milicias en agosto del 36, se requisaban doce mil arrobas de aceite, 142.300 kgs. de cereal y casi cuatro mil ovejas, a las que se sumaron otras dos mil de éstas y 41 Tm. de trigo en los tres meses siguientes. Los requisados eran siempre «fascistas huidos», la Sociedad de Labradores y «veintidós ganaderos de la localidad»; y los que requisaban, el comité local y el de guerra, que lo dedicaban, sin compensación alguna para los afectados, al «abastecimiento del pueblo y las columnas».³⁰

Como hemos ido viendo, tras ese abastecimiento, al igual que al final de muchas de esas incautaciones, expropiaciones y requisas, estaban las colectividades. Surgidas de la excepcional coyuntura inaugurada en 1936 por el desmoronamiento del Estado y de las tradicionales relaciones económicas y de subordinación —antes que del empuje revolucionario, la agudización de los conflictos sociales o «los antecedentes étnicos e históricos que caracterizan al pueblo aragonés»—, las

³⁰ AGCS, PS Aragón, serie R, carp. 29: «Pueblo de Azuara: estadística de bienes y productos requisados...», s.d., aunque la frase entrecomillada es del testimonio de Dionisio López, Lécera, 18-7-1999. En Maella, también a mediados de agosto, las requisas sumaban ya 71.500 kgs. de aceite, 120 sacos y diez cahices de trigo y 765 «dobles» de olivas en agua (AHN, CG, leg. 1429 (2), anexo 1/8 (14-8-1936)). En *ibidem* (pieza nº 8), se conservan exhaustivas «declaraciones de daños y perjuicios durante la dominación roja» de individuales, aunque parece que no se limitan sólo a las requisas. Con esas salvedades, cabría estudiar en detalle tales hechos en casos como Lagata (15 declaraciones, ff. 15-32) y sobre todo Plenas (83 decl., ff. 33-117).

colectividades supusieron una de las principales formas inéditas de movilización social inauguradas en España por la guerra civil. Movilización seguida por muchos, nuevos protagonistas y desheredados de siempre, para los que parecía que se abría una puerta a la esperanza. Sin embargo, esa misma coyuntura extraordinaria y esa misma guerra que la había originado resultarían asimismo fuentes inagotables de obstáculos, premuras y exigencias para las mismas. Porque no nacían sólo como un experimento más o menos voluntarista, sino también como «una necesidad» para abastecer a vecinos y milicianos. Y en el Aragón republicano, donde la sustitución del aparato estatal por el poder armado de éstos últimos era total, y con una estructura social y económica poco permeable a las prédicas de los sindicalistas urbanos, el camino quedó salpicado de resistencias, dudas y, en no pocas ocasiones, de imposiciones. Éstas, pese a todas las letanías repetidas desde entonces, no definían un movimiento que, si bien distaba de ser espontáneo, tampoco se basaba en el «terror». Pero en aquellas difíciles circunstancias, carente de tiempo y de una mínima planificación, «la colectivización estuvo siempre acompañada de inseguridad, miedo e incertidumbre».³¹

La propia prensa de los libertarios, al insistir en la necesaria «metamorfosis» de la vida rural —o cuando pedía «despierta campesino, despierta»—, no hacía sino confirmar esas dudas y resistencias.³² Pero éstas tenían, además, otras mani-

³¹ J. Casanova, *De la calle al frente*, pp. 198-209 (cita en p. 207), y *Anarquismo y revolución*, pp. 177-219 (lo de la necesidad, en p. 218). Para una visión amplia del fenómeno, cabe remitir a la obra compilada por el mismo autor *El sueño igualitario: campesinado y colectivizaciones en la España republicana, 1936-1939*, Inst. Fernando el Católico, Zaragoza, 1988, y a Walther Bernecker, *Colectividades y revolución social. El anarquismo en la guerra civil española, 1936-1939*, Crítica, Barcelona, 1982. Lo de los antecedentes étnicos, es de J. Borrás, *Aragón en la revolución*, p. 71. Sobre las teorizaciones previas de los libertarios, resulta obligado acudir a Xavier Paniagua, *La sociedad libertaria. Agrarismo e industrialización en el anarquismo español, 1930-1939*, Crítica, Barcelona, 1982.

³² BOCA, 19-11-1936 y 1-12-1936. O, hablando de Farlete, *Solidaridad Obrera*, 17-11-1936 («los milicianos tenemos la obligación de despertar en esos

festaciones más palpables. Sin detenernos en los muchos ejemplos posibles, ni en los aún más numerosos testimonios —aunque también los hay de signo contrario—, parece que algunas colectivizaciones fueron impuestas forzosamente, sobre todo en lugares donde no existían sindicatos de la CNT como Pina de Ebro o Samper del Salz —en este caso por una «columna que estuvo ocho meses descansando en el pueblo». En la mayoría, sin embargo, las coacciones no eran tan radicales. Había, eso sí, diversas presiones sobre los derechistas, desventajas laborales y de abastecimiento para los «individualistas», así como dificultades para usar las tiendas, almacenes, hornos de pan, barberías, medios de transporte y equipos agrícolas de las granjas colectivas. Y temores, pues «si no entrabas, te llamaban fascista» y, para algunos militantes, los que no querían hacerlo eran «la colectividad de los fascistas emboscados, contra la colectividad de los campesinos revolucionarios». Por lo tanto, más de uno en aquellos pueblos habría compartido las palabras de una vecina de Plenas, quien reconocía ante el Tribunal Popular que pertenecía a la colectividad como la mayoría del pueblo, pero «más bien por temor que por gusto».³³

seres su espíritu, dormido por la tiranía secular»). El de la colectivización había sido «un problema arduo y complicado -señalaba un miembro del Comité de Lécera-. Mejor dicho, continúa siéndolo. Queremos que los hombres se convengan de la bondad y ventaja de nuestras ideas»: A. Souchy y P. Folgare, *Colectivizaciones*, p. 224.

³³ AHN, CG, leg. 1427 (2), anexo 1/5: sumario 38-1937, incoado el 12-5-37, mientras que la cita sobre Samper está en *ibidem*, anexo 1/5: «Informe de la Comisaría de Investigación...», 3-11-37; y las de los «fascistas», en el testimonio de D. López, Lécera, 18-7-1999, y en FPI, AASM, leg. 512-18: «Los presos de la CNT y UGT de Aragón...», septiembre 1937. La referencia a Pina es de J. Cuen, *Mis memorias*, p. 21. Además de los testimonios orales, cabe encontrar bastantes datos sobre el particular en las piezas 5ª y 7ª, y sobre todo en sus anexos, de AHN, CG, incluidas actas de constitución de algunas colectividades. Éstas, por lo demás, sólo existieron en la mitad de los municipios «republicanos» de Zaragoza: Aguilón, Alforque, La Almolda, Almonacid, Bujaraloz, Caspe, Cinco Olivas, Chiprana, Fabara, Farlete, Herrera de los Navarros, Lagata, Lécera, Maella, Moneva, Osera, Pina, Plenas, Samper, Velilla, Villar de los Navarros y La Zaida (AGCS, PS Aragón, carp. 96: «Actas del I Congreso Extraordinario de Colectividades...», Caspe, 14 y 15

En esas condiciones, y aunque no se extendieron a toda la población ni a todos los lugares, todas esas «otras formas de represión» vinieron a sumarse a la «física» y al resto de los cambios en la retina de los a veces atemorizados campesinos, que veían que el viejo orden de siempre estaba siendo minado de veras. Ese ataque, saludado por algunos como el inicio de un mundo más justo avistable en el horizonte, era percibido en estas pequeñas comunidades del interior por otros, por ejemplo ante las llamas que consumían las imágenes religiosas o ante el cuerpo sin vida del cura o de un vecino rico, como algo ajeno, merecedor de animadversión y en suma tan «forastero» o más que esos muertos por muchas «culpas» que éstos debieran purgar. Tan forastero como, a menudo, esos milicianos para los que los campesinos aragoneses «no supusieron ni tan siquiera un objeto de curiosidad», de modo que «un abismo separaba a los hombres armados de la población desarmada, un abismo completamente similar al que separaba a los pobres de los ricos». En todo caso, como denunciara la autorizada pluma de Joan Peiró, todas esas acciones crearían malestares, desconfianzas, críticas más o menos soterradas, y en suma un cierto alejamiento —cuando no franca reacción— ante la causa republicana y la revolución. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sería algo definitivamente perjudicial y negativo para el consenso alrededor de aquélla.³⁴ La ausencia de un terror organizado y de un poderoso aparato estatal-ele-

de febrero de 1937»). A ellos habría que añadir también otros como Farlete, Nonaspe o Gelsa. En esta última, al poco de entrar los milicianos, una proclama indicaba que «las personas que no depositaran los alimentos y ropas de toda clase en los almacenes comunales y los conservaran para enriquecerse con ellos sufrirían las máximas penas» (*Solidaridad Obrera*, 16-8-1936).

³⁴ M. Ortiz Heras, *Violencia política en la II República*, pp. 99-100; J. Peiró, *Perill a la reraguarda*, pp. xvii-xix, 89-95 y 102-103; y S. Weil, «Carta a Georges Bernanos» (entrecomillados en p. 69). Para un sugerente análisis de las reacciones y percepciones de los campesinos aragoneses ante ese tipo de hechos, concluyendo que a menudo eran vistos como algo forastero, S. F. Harding, *Remaking Ibieca*, pp. 74-76. Por su parte, lo de *vencer y convencer* que viene a continuación procede del libro de igual título de Alejandro Mayordomo y J. M. Fernández Soria sobre *Educación y política en España, 1936-1943* (Universitat de València, 1993).

siástico de propaganda, como los que durante muchos años «vencieron» y «convencieron» a los dubitativos en el otro bando, y el uso político de la represión como arma dialéctica entre las diferentes organizaciones antifascistas harían el resto. Eso y, tal vez sobre todo, el desánimo y la carencia de la mayor legitimidad que habrían dado a los nuevos poderes más éxitos bélicos, más logros económicos y sociales y más tiempo...

No obstante, la relación entre la represión y el descontento no parece que pueda ser reducida a una simple secuencia de causa-efecto, sino que podría ser interpretada, como mínimo, en sentido recíproco. Porque, al hacer acto de presencia en sus diversas formas, la violencia no buscaba ese consenso, sino antes bien eliminar obstáculos —reales o simbólicos— donde y cuando el mismo parecía más difícil de alcanzar. Y, por ende, la propia represión señalaría —es decir, sería un *efecto* de ellas— las dificultades, resistencias y tensiones que encontraban ese asalto al pasado y los nuevos poderes que nacieron con él. Resistencias y tensiones que, unidas a la fractura social previa, tendrán un papel cada vez mayor en el mantenimiento de las muertes de retaguardia a medida que transcurre la guerra y que, de todos modos, son ya determinantes pasados los meses del estival sueño igualitario de 1936.

LA REPRESIÓN Y LA LUCHA POR EL CONTROL DEL PODER (OTOÑO 1936-PRIMAVERA 1937)

Como mostraba la gráfica nº 1, a partir del cuarto mes de guerra la represión experimenta un fuerte descenso cuantitativo bajo el que, evidentemente, subyacen profundos cambios cualitativos. Con la progresiva entrada del otoño y el invierno, a la bajada de las temperaturas le acompañaba el enfriamiento de las premuras, de los ánimos de vindicta y, sobre todo, de la dispersión y fragmentación inicial. Y, de la misma manera que a las ropas del verano les sustituyen las cazadoras de cuero negro —menos numerosas en todo caso que los pañuelos rojos y monos de la primera hora—, la multiplicidad de poderes va dejando paso a las primeras llamadas al «orden

revolucionario» y a la «responsabilidad» en la retaguardia. Porque esos poderes, nacidos al calor del estallido bélico, paralelos y divergentes, acabarían resultando contradictorios en el marco de una guerra abierta como aquella. Frenada la ofensiva franquista sobre Madrid, nadie creía ya seriamente en un final próximo del conflicto, los frentes se estabilizaron y todos empezaron a pensar, aunque desde diversas perspectivas e intereses, en cómo derrotar a los sublevados y consolidar —o modificar a su favor— las conquistas logradas en el verano. Enemigos los había todavía muchos, pero la prioritaria atención a la contienda, la concentración del poder y la disciplina en la retaguardia comenzaron a frenar los excesos.³⁵

De concentración, disciplina y de freno a los excesos, comenzó a hablar todo el mundo desde septiembre en la zona republicana. Incluso esos libertarios de los que se decía, y se repetiría hasta mucho después, que estaban inmersos en una borrachera de «anarquía», sangre de curas y alcohol. Ya en verano, J. Peiró abominaba de los «desmanes» y del «reino de violencia» en el que «incontrolados» y ladrones estaban deshonorando la revolución derramando más sangre de la necesaria, y pedía que se actuase según «los principios de la justicia revolucionaria», pues la destrucción de lo viejo debía ir acompañada de la construcción de lo nuevo. No era el único. *Solidaridad Obrera* abogaba por una «disciplina severa, hija de la revolución, [...] elemento imprescindible para organizar la revolución». Y, en noviembre, la CNT afirmaba en un documento interno que, para vencer la guerra, «es necesario un elevado grado de responsabilidad que no puede haberla si no hay la autodisciplina individual y colectiva. Considerar que cada cual puede hacer cuanto le plazca y le dé la gana, conduce obligadamente en la guerra al fracaso»; en consecuencia, se pedía contemporizar y «apechugar con ello por ser producto de la etapa de colaboración a la que nos obligan los hechos».³⁶

³⁵ J. Casanova, «Rebelión y revolución», pp. 160-161.

³⁶ Circular del Comité Nacional de la CNT, 20-11-1936 (en AGCS, PS Aragón, carp. 48, y FPI, AASM, caja 513, carp. 4). J. Peiró, *Perill*, pp. xv-xxiv y

Esos hechos y esa colaboración —y en suma el móvil de esa circular— no eran otra cosa que la entrada de la CNT en el gobierno a principios de noviembre de 1936. Con ello se completaba, aunque no sin resistencias, un camino que mostraba como precedente inmediato la incorporación de anarquistas y POUM al gobierno de la Generalitat de Cataluña a finales de septiembre. Y que se había iniciado cuando, a primeros del mismo mes, Largo Caballero sustituía al fantasmal gobierno Giral y formaba otro de mayoría socialista en el que participaban todas las fuerzas antifascistas excepto los anarcosindicalistas. Era el primero de una larga y procelosa serie de pasos hacia el restablecimiento del poder estatal frente a la confusa dispersión inicial, y suponía la primera aceptación por las organizaciones revolucionarias de la necesidad de una cierta unidad en el esfuerzo bélico y de una legislación ordenada. Legislación que, si bien no podía impedirles, sí al menos institucionalizara algunas de las realizaciones del verano, incluidas por supuesto las importantes cuestiones de la justicia y el orden público. Como se empezaba a constatar, dichas cuestiones, como la economía, lo militar, etc., remitían en última instancia al problema del poder político, su titularidad y su legitimación. La revolución, desde ese punto de vista, «era en primer lugar una lucha por el poder político», y esa lucha no podía realizarse sin contar con la reconstrucción del Estado.³⁷ Porque de reconstruirlo se trata-

45-51, y *Solidaridad Obrera*, 2-12-1936. Para un conocido testimonio reprobatorio de los anarquistas, Ernest Hemingway, *Por quién doblan las campanas*, 1940 (Planeta, Barcelona, 1994).

³⁷ J. Casanova, «Anarquismo y guerra civil», cita en p. 73; J. Aróstegui, «La república en guerra y el problema del poder», pp. 8-19. Para la formación del primer gobierno de Largo Caballero, Santos Juliá, «De la división orgánica al gobierno de unidad nacional», en *Socialismo y Guerra Civil*, pp. 227-245; y sobre su proyecto e implicaciones políticas, aunque desde ópticas diferentes, B. Bolloten, *La Guerra Civil española. Revolución y contrarrevolución*, Alianza, Madrid, 1989, pp. 215-227 y pássim, y J. Aróstegui, «Los componentes sociales», pp. 67-75. Acerca de la entrada de los cenetistas en el gobierno, y los debates y dudas previas, César M. Lorenzo, *Les anarchistes espagnols et le pouvoir, 1868-1969*, Seuil, París, 1969 (ed. cast. en Ruedo Ibérico, París, 1972), pp. 218-252; y

ba, y no de construir un «Nuevo Estado» como hacían ya en el otro lado, diferencia de amplias consecuencias. Y a la postre, pese a que allí las armas de las milicias determinaban la hegemonía de la CNT y favorecían el mantenimiento de la dinámica centrífuga del poder, Aragón no podía en absoluto ser ajeno a todo ello.

Consejo de Aragón, orden público y justicia popular

Entrados en el otoño, el paso del tiempo se dejó sentir en la moderación del frenético ritmo inicial. Era el momento, tras el cegador destello de las primeras semanas, de aclarar y perfilar los contornos de la revolución en marcha. Muchos comités se habían lanzado a tareas constructivas y de abastecimiento, el empuje militar del estío era ya poco más que un recuerdo, y a finales de octubre la línea del frente se había fijado y estabilizado tal como quedaría básicamente hasta el verano siguiente.³⁸ Ya un mes antes, los principales jefes políticos y militares de las columnas —incluido el «pistolero» Durruti— coincidían, al menos en teoría, en acabar con las luchas y la abundancia de fusiles lejos de los frentes y en establecer un «mando único» que en la práctica tardaría en llegar. Aunque la reiteración de esa consigna hasta bien entrado 1937 indica que no siempre se cumplía en la medida de lo deseado, también aquí muchos se habían convencido de la necesidad de «disciplina», de «ordenación» de la retaguardia. Y entre otras cosas, eso significaba acabar con el terror para mejorar la maltrecha economía y el propio abas-

J. Casanova, *De la calle al frente*, pp. 177-193. La reacción favorable de la CNT aragonesa, en *Cultura y Acción*, 4-11-1936.

³⁸ *Historia de la Cruzada Española*, t. xxxii, p. 508, y J. M. Martínez Bande, *La invasión de Aragón*, pp. 138-142. De hecho, a no tardar comenzarían las discusiones sobre la famosa «pasividad del frente de Aragón» (v. gr. *Solidaridad Obrera*, 29 y 30-1-1937). Datos sobre la disposición y efectivos de ese frente, en AGCS, PS Aragón, carps. 12-22, y Vicenç Guarner, *El front d'Aragó*, Gaia Ciència-Edicions 62, Barcelona, 1977, pp. 3 ss.

tecimiento de las milicias; y, para los famosos «grupos de investigación», significaba la «contemporización» y que «atemperemos nuestra impaciencia y nuestra inviolabilidad doctrinal». Como anotaba uno de los muchos extranjeros atraídos por el exótico aroma de la revolución refiriéndose a la zona de Pina de Ebro, los anarquistas «ya no hablan más de la 'organización de la antidisciplina'. La sugestión mutua, como un martillazo, es 'disciplina!'³⁹

Desmantelado el Estado republicano por la división de la región en dos partes, y con el poder de las armas —y por ende político— en unas manos poco interesadas en restaurarlo, la tarea «ordenadora» y superadora de la disgregación recayó en el Consejo Regional de Defensa de Aragón. Con él, concebido en Bujaraloz a principios de octubre de 1936 en un Pleno Extraordinario de Sindicatos de Aragón, se iniciaba una nueva fase en la revolución que vivía la región, además de una experiencia inédita en la historia española y europea. Este Consejo, verdadero órgano de poder controlado por los anarquistas, venía a asentar la particular vía revolucionaria y el poder —de la CNT y sus columnas— que se habían inaugurado en el estío precedente. Se trataba, en otras palabras, de «institucionalizar la revolución, crear un nuevo orden político que fuera la expresión de esos cambios revolucionarios». Bajo ese manto general, las metas eran acabar con los excesos y atropellos de las milicias, y asimismo ordenar el caos inicial, controlar el orden público y «darle una uniformidad a cuanto se realiza y al propio tiempo orga-

³⁹ Ilya Ehrenburg, *Corresponsal en la Guerra Civil Española*, Júcar, Gijón, 1979, p. 24, mientras que lo anterior es de una circular del consejero de Orden Público del Consejo de Aragón a los grupos de investigación (AGCS, PS Barcelona, carp. 821). Las conclusiones de los dirigentes columnistas proceden de un interesante «Informe textual del encuentro de Jefes Políticos y Militares del frente de Aragón en septiembre de 1936», recogido en los apéndices de la tesis doctoral de Julián Casanova, «Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa durante la guerra civil (julio 1936-marzo 1938)», Universidad de Zaragoza, 1983. Dos ejemplos de petición de disciplina y ordenación, en *BOCA*, 30-10-1936 y *Nuevo Aragón*, 2-4-1937.

nizar según sus teorías la economía aragonesa a la deriva». El primer objetivo nunca lo consiguió, habida cuenta que las columnas no se desprendieron nunca del control de lo militar, de modo que el Consejo «se hizo autoridad, pero siempre bajo consentimiento de las milicias». Respecto a los otros, en cambio, y aunque con límites, sus actuaciones alcanzaron al orden público, las requisas, el control de la economía, la promoción de la cultura o la puesta en marcha de la justicia popular, y en todo caso van seguramente más allá de lo que sus muchos críticos han aceptado.⁴⁰

Es posible, por lo demás, que durante sus primeros e inseguros pasos, los organismos del Consejo se solaparan con los poderes locales creando situaciones confusas y de doble poder. Pero, sobre todo desde su reconstitución a finales de año, esos últimos le cederían la iniciativa. Tras arduas negociaciones, en las que chirriaban contradicciones doctrinales y necesidades políticas, en diciembre el Consejo era reconstituido con la entrada del resto de fuerzas del Frente Popular —ocupando la mitad de los departamentos— y acto seguido era reconocido por el gobierno de Largo Caballero, marcando una importante cesura en la trayectoria política del Aragón republicano. En las semanas y meses siguientes, se intensifican las actuaciones de control político y organización

⁴⁰ J. Casanova, *De la calle al frente*, p. 193 (de donde procede también lo de la institucionalización de la revolución). El más amplio tratamiento del tema está sin embargo en *Anarquismo y revolución*, del mismo autor, pp. 133-297, de donde proviene, si no se dice otra cosa, la información aquí utilizada sobre el Consejo de Aragón; y AGMA, DR, arm. 47, leg. 72, carp. 1: «Informe del CR Frente Popular...», *loc. cit.*, donde se encuentra la cita sobre la uniformidad. La de la tutela de las milicias es por su parte del testimonio de F. Sanclemente, Cinco Olivas, 16-5-1999. Los objetivos, justificación y constitución del Consejo, en las Actas del pleno que lo vio nacer (AGCS, PS Bilbao, carp. 39), además de las «Actas del Pleno Regional de Sindicatos...», Caspe, 11-9-1937» (FPI, AASM, caja 510, carp. 36, ff. 10-20), *Cultura y Acción*, 10-10-1936 o *BOCA*, 28-10-1936. Su composición, consejerías, departamentos, secretarías, etc. pueden encontrarse en AHN, CG, leg. 1429 (1), pieza nº 7: «Informe de la inspección de Caspe», 18-5-1943, ff. 238-260, y en *ibidem*, anexo 1/7: fichas de personal administrativo (1937).

de la retaguardia, se regularizan las incautaciones, los comités locales de la primera hora son sustituidos por consejos municipales —«integrados proporcionalmente por todas las organizaciones sindicales y partidos antifascistas» locales— y tiene lugar, aunque no sin resistencias, la definitiva militarización de las columnas milicianas, llamadas a partir de entonces «divisiones». Todas esas medidas eran pasos en pos de la «normalización de la vida social y económica» y de la «reintegración a la normalidad».⁴¹ Y todas, en especial las dos últimas, coadyuvarían al descenso de las prácticas represivas, por cuanto extendían, o al menos lo intentaban, un poder unificado frente a la fragmentación inicial y los organismos autónomos —en especial las milicias. Como lo harían, quizá más que ninguna otra y también en esas mismas fechas, la regulación del orden público y el surgimiento de los Tribunales Populares.

Aunque las circunstancias no eran las más idóneas, y con las limitaciones dictadas por las mismas, el Consejo de Aragón actuaría como todo poder y, en consecuencia, procuró acaparar el monopolio del uso de la violencia. Y eso, en el lenguaje del momento, se llamaba orden público. Pero en este caso, frente a lo que pasaba al otro lado de las trincheras —donde una poderosa maquinaria militar se servía de ese monopolio para usarla extensamente—, significaría además tratar de reducir esa violencia. Por lo tanto, como indicara su presidente Joaquín Ascaso en un documento entregado a Largo Caballero, o como incluso habrán de reconocer algunos de sus detractores y rivales, la cuestión del orden

⁴¹ BOCA, 19 y 28-1-37, donde aparece la sustitución de los comités por consejos municipales. Las composición de éstos va apareciendo en los meses siguientes en *Nuevo Aragón*, y está recogida en «Relación de los Consejos Municipales...» (AGCS, PS Barcelona, carp. 397, y AHN, CG, leg. 1429 (1), anexo 1/7). Para la reconstitución del Consejo de Aragón, los «Acuerdos tomados en Caspe», 5-12-36 (FPI, AASM, caja 512, carp. 6), y BOCA, 21-12-36. El reconocimiento por las autoridades republicanas, en la *Gaceta de la República*, 25-12-36, y las regulaciones de las incautaciones, en BOCA, 16-3-37.

público y evitar la repetición de actos violentos era, junto a la guerra y la reconstrucción económica, el objetivo principal del Consejo desde su creación.⁴² La pervivencia de la represión y las continuas disposiciones y llamadas del propio Consejo a las milicias, como la que desautorizaba toda requisa o destitución de comités sin su aprobación, mostrarían sin embargo los límites con los que se enfrentó ese objetivo en su trayecto.⁴³

Tras la confusión inicial en la que innumerables grupos aislados se habían arrogado esas funciones, la primera actuación del Consejo de Aragón en este sentido fue la progresiva implantación desde octubre del 36 de varias comisarías y sobre todo de «grupos de investigación». Su sentido era, por tanto, sustituir en cada zona a las brigadas, «checas» y «coches de la muerte» que actuaban al palio de las columnas, y en suma a lo que entonces se llamó «tribus [...] que campaban por sus respetos». Esos organismos, «como si dijéramos la policía que este nuevo Estado necesitaba para su seguridad», no siempre se impusieron a aquéllas, y en ocasiones su actitud no tuvo nada que envidiarles. A mediados de noviembre, la «Oficina de Investigación» de Caspe presentaba como labor prioritaria la de investigar y detener a «aquellos individuos que han eludido hasta ahora la acción justa a nosotros enco-

⁴² Declaración política del Consejo, *BOCA*, 5-11-36. En ella aparece como primera finalidad «la de mantener el Orden Público». Parecidos argumentos en una entrevista a J. Ascaso en *Solidaridad Obrera*, 27-4-37, y en las «Actas del Pleno Extraordinario de Sindicatos de Aragón...», del que salió el Consejo (AGCS, PS Bilbao, carp. 39). Los reconocimientos de otras fuerzas no anarquistas, en el «Informe del CR Frente Popular... Barbastro», 2-8-1937 (AGMA, arm. 47, leg. 72, carpeta 1).

⁴³ «Llamamiento de Joaquín Ascaso a las columnas que operan en los pueblos aragoneses», aparecido en *Solidaridad Obrera*, 3-11-36, *BOCA*, 5-11-36, y *Cultura y Acción*, 7-11-36. Otra disposición similar, en *BOCA*, 28-11-36. Tal objetivo distaba de ser una excepción en la experiencia histórica de las guerras civiles y revolucionarias, en las que las «organizaciones insurgentes» tienden a «penetrar en ámbitos del debilitado o derrumbado Estado oficial... relacionados con el mantenimiento del orden y la seguridad pública»: P. Waldmann, «Sociedades en guerra civil », p. 156.

mendada», individuos sobre los que, caso de quedar demostrado que eran «facciosos», «obramos de una forma expeditiva». Ahora bien, sus atribuciones no se reducían a ello y abarcaban desde las requisas e incautaciones hasta los servicios de escolta y aduanas, pasando por el tráfico, el cuidado de actos públicos o las sanciones a los borrachos. Algo más, por otra parte, había cambiado. Frente al rigor en las condenas de las primeras semanas, ahora se interpretaba «con benevolencia lo que se refiere a los apocados de espíritu o equivocados», es decir los «de origen productor», pese a que hubieran hecho armas durante la sublevación militar. La pena era ahora mandarles «a efectuar trabajos de atrincheramiento, obras de carreteras, etc.», de modo que se podía decir «que no se ha procedido violentamente en ninguno de los casos».⁴⁴

Aquellos eran, además, momentos de gestación de un nuevo y vacilante orden revolucionario a partir de la atomización del verano, y la confusión estaba aún presente. Al menos hasta enero del 37, estos grupos compartían el espacio del «control de la retaguardia» con otros semejantes y con los comités, y junto a su libertad de movimientos les definía el carácter heteróclito de sus funciones. En un informe similar, el grupo de investigación del sector de Letux lo dejaba muy claro: «nuestra labor sería eficaz si supiésemos cuáles son nuestras funciones y nuestra jurisdicción, cosa que evitaría ciertos roces con los comités de guerra y de los pueblos.» Por ello no se recataba en solicitar «se nos indicara de una forma clara y concreta cuál es nuestra misión, de quién dependemos» y qué relación había que guardar con los susodichos comités locales y de columnas. A mayor abundamiento, muchos de ellos provenían de hecho de éstas, a veces con el mismo nombre, o eran parte de esos grupos de la

⁴⁴ «Informe que da esta Oficina de Investigación...», Caspe, 15-11-36 (AGCS, PS Barcelona, carp. 839). En cambio, lo de la «policía» del Consejo es del citado «Informe del Comité Regional... Barbastro», 2-8-1937 (AGMA, arm. 47, leg. 72, carpeta 1), y lo de «tribus», de la carta de «Los presos de la CNT y UGT de Aragón...», septiembre de 1937 (FPI, AASM, caja 512, carp. 18).

primera hora que, ante la presión contra las prácticas sangrientas, se camuflaban ahora en estos organismos. Como explicaba con todo detalle un año después, desde la cárcel, el cenetista y secretario de J. Ascaso, Ezequiel Erla,

«Al producirse el movimiento en España las columnas que procedentes de Cataluña llegaron a Aragón, aparte de luchar con el enemigo de enfrente, también fue necesario luchar con el enemigo de dentro, para esto, fue necesario crear unos grupos de compañeros selectos que se denominaron grupos de investigación y vigilancia, siendo éstos los encargados de limpiar nuestra retaguardia de todos cuantos elementos fascistas y sospechosos se encontraban en ella. Así llegamos al mes de octubre y al constituirse el Consejo de Aragón se hizo cargo al mismo tiempo que de la economía de Aragón del Orden Público, pasando a depender de éste todos los grupos de retaguardia que era la nueva vanguardia del pueblo hija de la revolución. Como el Consejo de Aragón no contaba con medios económicos para satisfacer la nómina que importaban los haberes de estos compañeros y teniendo en cuenta que en su totalidad pertenecían a las diferentes columnas que actuaban en el frente, se convino, en que fuera allí donde percibieran los sueldos que como milicianos les correspondían» (sic).⁴⁵

Tras ese complicado panorama estaba, al menos en principio, la consejería de Orden Público. Dirigida desde el principio por el militante de la CNT catalana Adolfo Ballano, contaba entre sus oficinas con una Delegación General de Orden Público cuyo titular sería el dirigente cenetista zaragozano Francisco Foyos. No siempre está claro que pudieran controlar a todos los grupos de investigación, y de hecho, según algunas fuentes, los de esa Delegación «fusilaban con

⁴⁵ Informe de E. Erla al Comité Regional de la CNT «Sobre el asunto de las milicias de retaguardia con respecto a sus haberes», cárcel de Caspe, 2-10-37: FPI, AASM, caja 512, carp. 2, ff. 22-24. Mientras tanto, el informe sobre el sector de Letux, en AGCS, PS Barcelona, carp. 839. Un posible equivalente a estos grupos, con semejantes inicios, trayectoria y final, y salvando las distancias, serían las «patrullas de control» catalanas: *cfr.* J. M^a Solé y J. Villarroya, *La repressió a la reraguarda*, pp. 93-110.

autonomía propia desentendiéndose del Consejo de Aragón». En palabras del propio Foyos —contestando a unas acusaciones por su labor represiva—, la función de ese organismo estaba, a ese respecto, bastante clara: «limpiar y desplazar del seno de la sociedad a quienes no tenían ningún derecho a convivir con ella». Por lo tanto, y de acuerdo con el consejo Ballano, «se había obrado con arreglo a la justicia revolucionaria de la cual me considero fiel intérprete». Con parecidos argumentos, un posterior editorial del rotativo *Nuevo Aragón* sobre la «labor de los camaradas de Orden Público» alababa

«la obra que vienen realizando las fuerzas a sus órdenes, imponiendo el orden revolucionario donde éste no existía; persiguiendo y sancionando con el más elevado espíritu de justicia a los acaparadores y agiotistas; a los enemigos emboscados que aún quedan en los pueblos, oficiando de espías del fascismo; a los comerciantes sin conciencia que sólo persiguen el propio lucro, en perjuicio del pueblo; a los saboteadores de la revolución: a los infractores de la ley por sistema...»

La conclusión, sirviéndose de una retórica tan cara a todo el mundo en aquellos momentos en todo el país, venía a decir que esa tarea era «doblemente trascendental en los aspectos de sanidad y cirugía, puesto que [...] oficiando de bisturí salvador, extirpan los tumores y rarezas patológicas que amenazan con la gangrena. Podría pues decirse, en justicia, que los camaradas Ballano y Foyos son los dos grandes profilácticos de la revolución social en Aragón».⁴⁶

Sin embargo, nada de ello invalidaba —antes al contrario— lo que había realmente tras esa labor. Pese a todas sus

⁴⁶ *Nuevo Aragón*, 1-4-37. La cita de Foyos, contestando a unas acusaciones vertidas por Antonio Ortiz, jefe de de la columna Sur-Ebro, está en la carta que el primero dirige al secretario gral. del Consejo el 25-12-36: AGCS, PS Barcelona, carp. 839. El primer entrecomillado es por su parte de un «Informe Policía, Inspección de Caspe», 18-5-43 (AHN, CG, leg. 1429 (1), pieza nº 7, ff. 238-260).

limitaciones, se trataba de un primer intento de controlar y dirigir el orden público —y por ende la represión. Con ello, se apartaba de las múltiples manos en que estaba al principio, se mermaba la dispersión del poder y, de paso, se reducían los efectos violentos de la misma. Desde ahora, el orden en la retaguardia había de quedar «encomendado exclusivamente» a la consejería correspondiente del Consejo, «no siendo por tanto necesaria» ya la colaboración de otros organismos locales específicos.⁴⁷ En cualquier caso, por último, no parece que pueda ser ignorado que el inicio de sus actividades coincide con el enfriamiento, claramente perceptible desde noviembre, de la violencia depuradora.

El proceso, una vez reconstituido el Consejo de Aragón, lo subrayaba además la constitución de la llamada Junta o Cuerpo de Seguridad a finales de diciembre de 1936. En ella se debían encuadrar todas las fuerzas y grupos de investigación de la región, que pasarían a estar controlados por una Comisión Permanente presidida por Joaquín Ascaso y que estaría compuesta por representantes de todas las formaciones antifascistas y de la Consejería de Orden Público. La Junta se organizó por comarcas, con un Gabinete Central de Investigación, una Comisaría General, una delegación para cada provincia aragonesa y varias comisarías, nueve de ellas en la provincia de Zaragoza. Debía ser la «Fuerza Ejecutiva Revolucionaria del Consejo de Aragón», una fuerza cuyo campo de actuación se extendía a las detenciones, registros e incautaciones, control de fronteras, transporte de víveres y comunicaciones, los desertores, la censura o la prostitución. Tras su primera reunión, a fines de enero del 37, un bando de la presidencia del Consejo ponía «bajo su control y mando supremo todas las fuerzas de Orden Público de la retaguardia,

⁴⁷ «Disposición presidencial» sobre los consejos municipales, *BOCA*, 19-11-36. En AGCS, PS Barcelona, carp. 839 hay varios informes del «Servicio Técnico Informativo de la Delegación Gral. de OP de Aragón», que sirven como ejemplos de las actuaciones de la misma.

fusionadas ya en el Cuerpo de Seguridad», limitaba taxativamente a sus agentes la facultad de detener o practicar registros y decretaba para aquéllos que se saltaran esas normas su procesamiento por los Tribunales Populares de Urgencia, «que los sancionarán como a facciosos». Bando al que seguiría otro, dos semanas después, según el cual todos los ciudadanos «sin distinción de cualquier sector político o sindical, que no estén controlados por el Estado o Milicias debidamente organizadas y sometidas a la disciplina del Ministerio de la Guerra, están obligados a entregar el arma larga», reservando idéntica suerte para el que no lo cumpliera.⁴⁸

En realidad, este camino también tenía sus límites. Con su poder político respaldado por la presencia de las divisiones confederales, y con los puestos claves de esa consejería asegurados, la creación de la Junta no podía menoscabar demasiado el dominio de la CNT en el Orden Público, un terreno considerado decisivo en una coyuntura como aquélla. Los mismos Ballano y Foyos siguieron teniendo en sus manos esas funciones, la organización del Cuerpo de Seguridad se retrasó y los grupos de investigación tardaron muchos meses en desaparecer; antes al contrario, al menos durante los primeros meses, «en las cuestiones en que intervengan como actuadores los Agentes del gabinete de Investigación, la fuerza de Seguridad deberá mantenerse alejada».⁴⁹ Límites que,

⁴⁸ «Disposiciones de la Presidencia sobre cuestiones de Orden Público» (AHN, CG, leg. 1429 (1), anexo 2/7, y *Nuevo Aragón*, 31-1-37), y «Bando. Presidencia del Consejo Regional de Defensa de Aragón», Caspe, 16-2-37 (AGCS, PS Aragón, carp. 50). Sobre la Junta de Seguridad, y su constitución y composición, véase el informe «Junta de Seguridad. Por una estructuración del Orden Público en Aragón» (AGCS, PS Barcelona, carp. 397), además del «Informe relacionado con la constitución del Consejo de Seguridad de Aragón» de la Federación Socialista Aragonesa, Caspe, 16-5-37 (*ibidem*, carp. 821, y FPI, AH, caja 16, carp. 23, f. 15); y J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, pp. 170-172. La organización de la Junta y las nueve comisarías zaragozanas (Caspe, Pina, Escatrón, Fabara, Bujaraloz, Sástago, Lécera y dos en Maella), en «Relación de comisarías de policía...», 1-4-37, AGCS, PS Barcelona, carp. 839.

⁴⁹ *Íbidem*: «Junta de Seguridad. Por una estructuración...», *loc. cit.*

como veremos, las otras formaciones antifascistas aragonesas no dejaron de denunciar hasta conseguir una solución drástica al problema. Sin embargo, y al margen de lo que había de lucha política por controlar ese proceso, lo más significativo para nosotros debe ser aquí que se estaba creando una fuerza más o menos policial propia del Consejo de Aragón; una fuerza que englobara y sustituyera a los múltiples grupos que, durante los primeros meses de dispersión, se habían servido de la violencia para definir y mantener espacios de poder dentro de la revolución.

La creación del Tribunal Popular de Caspe —el otro gran jalón del itinerario hacia el control de la retaguardia— se enmarca en ese mismo proceso y, de alguna manera, lo concluye y resume. De hecho, supone a un tiempo la legalización de la represión y su dirección, o lo que es lo mismo, el intento de acabar con «paseos», «checas», venganzas personales y muertes llevadas a cabo al margen de las nuevas autoridades. Con ello, además, éstas atenuaban y monopolizaban esa represión y la investían de una función «eminentemente política». Aunque fruto de un contexto muy preciso, ello no era, sin embargo, una excepción histórica propia de situaciones revolucionarias, supuestamente contrapuestas a la justicia de épocas menos convulsas. Como toda institución pública, la justicia no es un ente abstracto situado por encima de la estructura social y del poder, sino antes bien un producto socio-histórico definido por la misma y relacionado de forma estrecha con ella. Desde ese punto de vista, la función de toda justicia sería mantener y defender el orden social establecido mediante la normativización de la violencia, y la justicia popular republicana no podía ser diferente. Como afirmara uno de sus principales valedores, «la justicia revolucionaria es el nuevo Derecho creado por las Revoluciones, una nueva justicia que, como la histórica, tiene sus preceptos legales, tan legítimos como los que más». Los valores e instituciones sociales de cualquier régimen «se apoyan en la fuerza política imperante», y, siendo ésta aquí la revolución, «la justicia revolucionaria, sea el que sea su con-

tenido, es una legalidad y un Derecho instituidos de acuerdo con las características revolucionarias».⁵⁰

Esas características eran, para empezar, las determinadas por el «colapso» de la Administración de la Justicia republicana a raíz de la sublevación del 18 de julio. Donde ésta no triunfó, los juzgados fueron ocupados por los vencedores de aquellas jornadas y suplantados por «tribunales» de comités, sindicatos y «checas», y muchos de sus magistrados y funcionarios se escondieron, huyeron, fueron destituidos o, los menos afortunados, fusilados. En el Aragón oriental, los únicos en correr tal suerte serían algunos jueces municipales y secretarios de juzgado —cuatro y siete, respectivamente, en la retaguardia zaragozana—, pero al colapso general se añadía que las tres sedes de las Audiencias Provinciales habían caído en manos insurgentes. La «justicia histórica» era eso, historia, y entre sus ruinas crecían variopintos tribunales de comités o de columnas, hijos de la imprevisión y de la necesidad de «limpieza de la retaguardia». Tribunales, por poner un ejemplo, como el «Tribunal Militar que actuó en Sástago, de la columna Zamora [...] Su actuación fue pésima, impusieron treinta penas de muerte y ejecutaron dieciocho».⁵¹ Esfumada la justicia ordinaria y trastocado el ordenamiento jurídico y político, todo lo que había en aquellas horas era la famosa «justicia del pueblo» o «justicia expeditiva», administra-

⁵⁰ J. Peiró, *Perill a la reraguarda*, p. xxii, según unos planteamientos que sigue con buenos resultados Pelai Pagès en «La Administración de Justicia en Catalunya durante la guerra civil española (1936-1939)», *Justicia en Guerra*, pp. 47-63. La historicidad de la justicia y su relación con la violencia, en E. Resta, *La certeza y la esperanza*; Walter Benjamin, *Para una crítica de la violencia y otros ensayos*, Taurus, 1998, pp. 23-45, o en M. Foucault, especialmente *Vigilar y castigar*, y *Un diálogo sobre el poder*; Alianza, Madrid, 1988, esp. pp. 20-58: «Sobre la justicia popular. Un debate con los maos», donde, a propósito de los tribunales de las revoluciones francesa y china, encuentra que supusieron el primer paso hacia el estrangulamiento de la espontánea «justicia» del pueblo. Lo de la función política es de G. Sánchez Recio, *Justicia y guerra en España* (cita en p. 17).

⁵¹ AHN, CG, leg. 1426, pieza nº 5: Informe del Juzgado de Velilla de Ebro, 29-11-40, f. 30. Sobre las persecuciones y depuraciones de funcionarios judiciales, R. Salas Larrazábal, «La represión en territorio republicano», p. 54.

da sin criterios normativos, en la que tenían cabida los ajustes de cuentas y los excesos y para la que, entre la absolución y la pena capital, apenas había término medio.

Precisamente frente a ese vacío de la Justicia y esos excesos, los decretos de 23 y 25 de agosto de 1936 —inmediatamente después del célebre y sangriento asalto a la cárcel Modelo de Madrid— daban acta de nacimiento a los Tribunales Populares. Su función resultaba evidente. Se trataba de intentar reducir y mitigar la represión para, al menos en la medida de lo posible, acabar con lo que tenía de indiscriminada, incontrolada y propia de grupos que se extralimitaban en sus funciones y actuaban por cuenta propia. Pero, junto a ello, se trataba también de canalizarla para controlar y dirigir la eliminación de los enemigos y de poner la primera piedra en el proceso de recuperación por el Estado de una de sus atribuciones y poderes principales, relacionada estrechamente además con el perdido monopolio en el uso de la violencia. Desde esa perspectiva, estos tribunales constituirían uno de los mayores logros del primer, y sobre todo del segundo gobierno de Largo Caballero —ya con García Oliver en la cartera de Justicia— en su tarea de reconstrucción del Estado. De hecho, sería paradójicamente el ministerio de ese destacado anarquista, desde el 4 de noviembre, el que los impulsaría de forma definitiva, y durante el mismo se llegó a la «normalidad revolucionaria» en su administración. Completada con nuevos tribunales (Jurados de Urgencia y de Guardia, Tribunales Populares de la Generalitat,...) y convertida en un sistema completo y un nuevo modelo de administración judicial, «la justicia popular adquiriría su categoría esencial de política y se convertiría en uno de los pilares defensivos de la República». Después, tras la crisis de mayo de 1937, con los gobiernos de Negrín llegaría su progresivo «desmoronamiento» y la «vuelta a la normalidad judicial», consecuencias lógicas de su ideada reconstitución definitiva del Estado.⁵²

⁵² El mejor estudio sobre el tema es el de G. Sánchez Recio, *Justicia y guerra en España*, y de él nos hemos servido prioritariamente en el párrafo, aun-

En la retaguardia aragonesa, la «justicia popular» transcurrió, bien que con diferencias y un cierto retraso, por sendas semejantes. Diferencias y retraso que tienen su origen en la completa desaparición del aparato jurídico —que había quedado en la zona de los sublevados—; y, desde luego, en el peculiar marco político de la región, situada en los márgenes del Estado central y con un organismo regional no reconocido oficialmente hasta diciembre que sólo a duras penas conseguía recortar parcelas de poder y atribuciones a los poderes locales y milicianos. Indiferenciada del orden público —el propio Consejo de Aragón tuvo una sola consejería para ambos hasta diciembre de 1936— y ejercida por quienes controlaban aquél, en especial comités locales y de guerra, esa normativización de la justicia habría de esperar a la recomposición y reconocimiento oficial del Consejo, y no es por lo tanto casual que surja, en las semanas posteriores, al mismo tiempo que la Junta de Seguridad o los consejos municipales.⁵³ Por otra parte, tampoco eran ajenas a todo ello las rivalidades y luchas políticas entre las diversas organiza-

que la frase entrecomillada es de su «Justicia popular en la España republicana: caracterización y resultados», en J. Barrull y C. Mir, *Violència política i ruptura social*, p. 85. Las otras fuentes son el libro colectivo *Justicia en guerra*, pp. 17-245; José Rodríguez Olazábal, *La Administración de Justicia en la guerra civil*, Alfons el Magnànim, Valencia, 1996; Joan García Oliver, *Mi gestión al frente del Ministerio de Justicia*, Edics. Propaganda y Prensa CNT, Valencia, 1937, y Niceto Alcalá-Zamora, «Justicia penal de guerra civil», *op. cit.*, pp. 253-294. Para el caso del Tribunal Popular de Lérida —el primero en constituirse—, J. Barrull, *Violència popular i justicia revolucionaria*. Una visión que insiste en las limitaciones formales haciendo abstracción del contexto, en Juan A. Aleandre, *La justicia popular en España. Análisis de una perspectiva histórica: los tribunales de jurados*, Universidad Complutense, Madrid, 1981, pp. 239-244, y, llevado al extremo de la propaganda franquista, Berryer, *Revolutionary Justice in Spain*.

⁵³ Dos meses antes de la creación del Tribunal, Ballano, entonces también consejero de Justicia, señalaba respecto a ésta —problema tan delicado como el del Orden Público— que «está todo organizado; no falta más que darle marcha. Pero hasta que los representantes de los partidos políticos no se hallen en el Consejo, no podemos poner en movimiento esta organización»: *BOCA*, 17-11-36. En otro ejemplo de la relación entre la caída de la capital provincial en manos sublevadas y la tardía creación del Tribunal Popular, en Granada se constituiría en diciembre de 1936: R. Gil Bracero, *Revolucionarios sin revolución*, pp. 114-118.

ciones antifascistas, luchas que no estarán ausentes de esa práctica judicial.⁵⁴

Sin embargo, la función era la misma que en el resto del país. Se trataba de que «nadie, absolutamente nadie, trate de aplicar la justicia por su cuenta», de entregar a los tribunales —y con ellos al Consejo— a todos los detenidos y de «celebrar con toda rapidez los juicios pendientes, a fin de descongestionar las cárceles cuanto antes y dar cumplida satisfacción a la opinión antifascista» con una justicia ni blanda ni vengativa. Función, además, que si alguien olvidaba, otros se encargaban de recordar. En un documento ya citado, un grupo de milicianos de Sástago recurrían al Consejo «para que en lo sucesivo haga justicia antes que vengan los hechos que para todos serían de lamentar» pues, de lo contrario, «no se culpe de las resoluciones que pudiéramos tomar».⁵⁵ En suma, en palabras de las propias autoridades aragonesas, la pretensión era evitar

«que las penas a que se hayan hecho acreedores los enemigos del Pueblo y de la Revolución, les sean aplicadas sin una previa y escrupulosa comprobación. El impulso revolucionario, desatado como una catarata, no ha permitido quizá en algunos casos, que este deseo común de todos los antifascistas, tuviera plena realidad. Preocupa hondamente a

⁵⁴ Todos los partidos y sindicatos analizarán con lupa la participación propia y ajena en los tribunales. Las fuentes consultadas muestran abundantes ejemplos de peticiones de mayor «equidad» en la composición de los jurados (como aquella de la CNT en la que amenaza, de no cumplirse, con «ser nosotros los que hagamos la justicia que nos corresponda»: AGCS, PS Aragón, carp. 48: «Actas del Pleno Regional de Comarcas...», Alcañiz, 15 y 16-3-37); y, sobre todo, de reacciones —incluidas críticas ante posturas blandas— y análisis políticos respecto a la actuación de sus jurados: *v. gr.* «Libro Actas Comité Provincial de UR Zaragoza», 22-3-37; «Libro de Actas del Sindicato de OO. VV. UGT Caspe», 6-2-37, 20-2-37 y 20-3-37; y Carta del Sindicato Único OO. VV. de Caspe de CNT al de UGT, 31-1-37 (las tres en AGCS, PS Aragón, carp. 48).

⁵⁵ AHN, CG, leg. 1427 (2), anexo 1/5: sumario 29-1937 del Tribunal Popular de Caspe. Lo anterior, no obstante, es de una carta de E. Bordonava, representante del Frente Popular de Aragón a Joaquín Ascaso, marzo de 1937 (AGCS, PS Barcelona, carp. 397), y de *Nuevo Aragón*, 3-4-37

todos los integrantes del frente antifascista, acabar con cualquier anomalía en este orden, de la manera más tajante y rápida.»⁵⁶

Con la constitución del Tribunal Popular de Aragón, según decreto del Consejo de Aragón de 15 de enero del 37, llegaba la ocasión de poner en práctica esas buenas intenciones. Fundamentado a su vez en los del Ministerio de Justicia de 25 de agosto y 2 de noviembre del año anterior, el decreto creaba un tribunal para «la normal administración de la Justicia en la retaguardia». Residente en Caspe y «con jurisdicción extensiva al territorio liberado de las tres provincias» —a cualquier lugar de las cuales podía trasladarse—, el Tribunal estaba destinado a «conocer de los delitos de rebelión y sedición y de los cometidos contra la seguridad exterior del Estado, desde el 17 de julio de 1936, cualquiera que sea la Ley Penal en que se hallen previstos y mientras dure el actual movimiento subversivo». De acuerdo con los decretos republicanos en los que se inspiraba, se componía, en primer lugar y como sección de derecho, de tres magistrados de la carrera judicial, o en su defecto abogados, nombrados por el Ministerio de Justicia. Y, junto a ellos, de tres jurados —uno por provincia— de ocho miembros cada uno, «nombrados por los Comités Provinciales de los partidos [...] y organizaciones sindicales obreras que forman el frente antifascista». Tres días después, se decretaba la creación del Jurado de Urgencia de Aragón, concebido, de acuerdo con el decreto ministerial de 10 de octubre de 1936, para entender de los hechos «que, sin revestir carácter de delito son, por sus características y peculiaridad, de hostilidad más o menos ostensible e indudable desafección al Régimen». También tendría jurisdicción para toda la región y residiría en Caspe, y en este caso lo formaban un juez de derecho nombrado por el Gobierno como presidente y dos jueces de hecho que designarían por turno los partidos y sindicatos. Era el com-

⁵⁶ BOCA, 21-12-36.

plemento ideal para el Tribunal Popular, con el que se repararía procesados, delitos y penas.⁵⁷

Por último, el organigrama judicial se completaría con un Juzgado de Primera Instancia que entendería de los sumarios por delitos comunes, un Juzgado Especial de Caspe dedicado a la incoación e instrucción de los sumarios del Tribunal, y una posterior Audiencia Territorial de Aragón «con su correspondiente Sala de lo Civil que no llegó a actuar, y su sala de Gobierno». A lo largo del año 1937, además, «la obra de afianzamiento y normalidad de la retaguardia en el territorio liberado» se consolidaría, en mayo del 37, con la aparición de la «Justicia Municipal Popular» —es decir, la extensión al plano local de la «normalización» judicial—; y, más adelante, con la reconstrucción de los Juzgados de Partido.⁵⁸ Para entonces, la «ordenación» se había llevado consigo no solamente la «justicia instintiva» de los micropoderes, sino también la del propio Consejo de Aragón.

La labor que ésta pudo desarrollar mientras tuvo vigencia es, buenas intenciones y organismos judiciales al margen, el principal asunto a dilucidar. Porque en su actuación, mejor que en ningún otro lugar, se mostrarían el alcance y límites

⁵⁷ Los dos decretos, en *BOCA*, 28-1-37, de donde proceden todos los entrecuillados. Si el Tribunal imponía penas a partir de cinco años de reclusión en cárcel o campos de trabajo, hasta la pena capital, la condena del Jurado de Urgencia no podía pasar del lustro de privación de libertad. Sobre éstos y más datos respecto a estos organismos judiciales, su composición, competencias, etc., AHN, CG, legs. 1423 (1): «Informe de Zaragoza...»; 1426, pieza nº 5: «Informe del Juzgado de Primera Instancia...», Caspe, 18-12-40, ff. 6-8, y declaración de Pascual Guillén, 22-9-43; 1427 (2), anexo 1/5: «Libro-Registro de Títulos del Personal del Jurado de Urgencia»; y 1429 (1), pieza nº 7: Informe de FE, ff. 3-8, e «Informe Policía, Inspección de Caspe...», 18-5-43, ff. 238-260. Para los orígenes, decretos, circunstancias y actuaciones de estos Tribunales y Jurados, *vid.* los trabajos citados *supra*, en especial el detallado estudio de G. Sánchez Recio, *Justicia y guerra en España*.

⁵⁸ El decreto de reconstrucción de los Juzgados Municipales, en AHN, CG, leg. 1427 (1), anexo 2/5 (11-5-37), y en *Nuevo Aragón*, 13-5-37. La reconstitución del Juzgado de Partido de Caspe (29-10-37), en *ibidem*, 1427 (2), anexo 1/5. Para los otros juzgados, véase la documentación de la CG citada en la nota previa.

del proceso que venimos describiendo. Su estudio, no obstante, al menos en el caso de la provincia de Zaragoza, resulta en buena medida dificultado por la ausencia de unas fuentes de las que, por fortuna, se dispone para otras regiones. Esa carencia, amargamente denunciada ya por las autoridades franquistas que instruyeron la «Causa General», tiene unos confusos orígenes y es incluso visible directamente en los cientos de folios rasgados por la mitad, que es lo que queda de muchos de los sumarios conservados en ese fondo documental.⁵⁹ Así las cosas, sin datos sobre la mayor parte de las causas instruidas y carentes de nada parecido a un «Libro-Registro» de éstas, hay que contentarse con una mirada que no puede dejar de ser aproximativa. Sin embargo, los sumarios disponibles, bien que incompletos, pueden servir de muestreo, y en todo caso pueden extraerse de ellos algunas conclusiones que no desentonan con aquellas a las que llegan otros investigadores.

Aunque el número de sumarios incoados por el Tribunal Popular fue con toda seguridad muy superior, los que hemos localizado con datos completos —sobre los encausados, sus delitos, condenas, etc.— y referidos a habitantes de la provincia de Zaragoza no pasan de sesenta, que afectarían a 185 procesados.⁶⁰ Entre éstos, la mayoría estaban acusados de los

⁵⁹ Según los instructores de la CG, «la recogida y clasificación de procesos es muy incompleta, a pesar de tener adscrito a esta Causa General a un agente de Policía que pueblo por pueblo trata de recuperar cuanto de esta Pieza pueda interesar» (AHN, CG, leg. 1913/1: «Estado actual de la Causa General de Zaragoza», 21-9-42). La razón estaría quizá en un confuso episodio en el cual se pierde la mayor parte de una interesante documentación llevada de Caspe a Zaragoza relativa «a los Tribunales rojos». Estaba depositada en la antigua secretaría de Orden Público (Jefatura Superior de Policía) y desde allí sería sacada por alguien y vendida a un trapero «para hacerla desaparecer». Al enterarse, el encargado de recuperación de documentos iniciaría una rápida búsqueda que le llevaría a encontrar sólo una parte de los documentos, ya en fardos y aplastados y muchos de ellos rasgados e «inservibles» (*ibidem*, leg. 1430 (1), carp. 4ª).

⁶⁰ La mayoría están en AHN, CG, leg. 1427 (1 y 2), anexos 1/5 y 2/5, y leg. 1430 (2), aunque hemos encontrado también dos en AGCS, PS Barcelona, carp. 397.

delitos de rebelión (51), auxilio o adhesión a la rebelión (69) y desafección al régimen (51), seguidos muy de lejos por los de «significación derechista» (3), insultos e injurias a la autoridad y hurto (2) y otros como tenencia ilícita de armas, estupro, abandono de la función pública, suicidio, muerte por accidente, incautaciones y detenciones ilegales o «contra la honestidad» (1). El carácter marcadamente «político» de esta justicia queda fuera de toda duda ante ese reparto de los delitos, aunque conviene señalar asimismo que lo es más en los primeros meses, mientras que los escasos delitos «comunes» aparecen juzgados en los posteriores. No es ésa, sin embargo, la única diferencia cualitativa. Si atendemos al origen de los encartados, más de la mitad provienen de Caspe (103) y, si se les añaden los de otras localidades de su partido judicial, la cifra supera los dos tercios del total (130); mientras tanto, 48 provienen del partido de Belchite —la mayoría de su capital (23) y de Codo (17)—, apenas dos del de Pina de Ebro y el resto de otras zonas de la provincia. Surgido para centralizar y normativizar la administración de la justicia y la violencia, el Tribunal Popular actuaba de forma intensa en la ciudad y comarca donde se asentaban él y el Consejo de Aragón y en las que su llegada, además, significaría el final de las muertes por represión. Empero, apenas lograba extenderse al resto de las comarcas, es decir a aquellas donde estaba el frente y con él las divisiones militares; aquellas en las que, no por casualidad, la violencia depuradora tardaría más tiempo en desaparecer. La lucha por el ejercicio de la justicia tenía en cada lugar desiguales resultados dependiendo del poder de sus contendientes.

Las sentencias impuestas en estos sumarios parecen igualmente significativas. De las 120 resoluciones conocidas —pues en 22 casos no se conoce y en 43 la conquista de la zona por las tropas franquistas impidió la finalización de las diligencias—, las más repetidas son la inhibición ante el Jurado de Urgencia (41) y el sobreseimiento o libre absolución (37), seguidas por las condenas de reclusión en campos de trabajo durante 30, 14, 12 y 20 años (13, 9, 6 y 3, res-

pectivamente) y por la pena capital, dictada en once ocasiones aunque, al mediar indultos del Gobierno, ejecutada realmente sólo en siete.⁶¹ Si a ello añadimos las penas impuestas por el Jurado de Urgencia, encontramos que, en total, la mitad de los procesados por ambas instancias (59) fueron absueltos o sobreseídos y otros quince (12,5%) sentenciados a menos de cinco años de reclusión.⁶²

Indudablemente, esos datos contrastan, pese a todo lo que se dijo sobre esta Justicia y sus indudables defectos de forma, con los tópicos sobre el terror del supuestamente anárquico Consejo de Aragón. Máxime si tenemos en cuenta que el reducido porcentaje de castigados con la pena capital (5,8%) se reduciría notablemente caso de conocer el resto de sentencias emitidas por el Tribunal, pues si éstas fueron muchas más, sabemos que esos siete son todos los que sufrieron tal condena en la retaguardia zaragozana. Al igual

⁶¹ A esos siete se añaden los dos vecinos de la localidad turolense de Beceite, condenados por el Tribunal y asimismo ejecutados en Caspe en invierno de 1937. Lo de los campos de trabajo era una idea impulsada por García Oliver, a quien responde el decreto que los creaba el 26-12-36. *Cfr.* sus escritos *Mi gestión al frente del Ministerio de Justicia*, pp. 11-14, y, del mismo, *Dos meses de actuación en el Ministerio de Justicia*, Ministerio de Propaganda, Valencia, 1937, pp. 21 ss y 27-28, y también «Ministerio de Justicia. Dirección Gral. de Prisiones. Legislación de Campos de Trabajo» (AGCS, PS, Barcelona, carp. 839). Una visión laudatoria sobre el principal campo al que fueron llevados los aragoneses (Valmuel), en Agustín Souchy, *Entre los campesinos de Aragón. El comunismo libertario en las comarcas liberadas*, Tusquets, Barcelona, 1937, pp. 26-28, y una más realista, en P. Pagès, *La presó Model de Barcelona*, pp. 79-90.

⁶² Las sentencias del Jurado de Urgencia se repartirían como sigue: diez absoluciones, doce sobreseimientos, cuatro inhibiciones del Jurado, una de destierro, nueve penas inferiores o iguales a un año; dos de tres años, una de cuatro y tres de cinco. En este caso sí parecen datos bastante completos y provienen del «Libro-Registro de Causas del Jurado de Urgencia de Caspe»: AHN, CG, leg. 1427 (2), anexo 1/5, donde también aparecen 134 encausados de la provincia de Teruel y 102 oscenses. Tomando los totales de toda la región, el 47% obtiene sobreseimiento o condena absolutoria y otro 27% recibe penas no superiores a un año. Con sólo dos excepciones, en todos los casos se procesaba por «hostilidad y desafección al Régimen», lo que escondía hechos, para decirlo en términos sencillos, como hablar mal de la República o de la marcha de la guerra.

que en la totalidad de la España republicana, y frente a lo que había ocurrido en el verano del 36 en los tribunales que iniciaron entonces su andadura —como Lérida, Valencia, Jaén, Albacete o Toledo—, a la altura de 1937 las absoluciones primaban sobre las condenas, los indultos sobre las penas capitales ejecutadas, y en suma la sangre ya no manaba junto a la Justicia Popular como lo había hecho antes.⁶³

Ni junto a ella ni junto a nadie, no había corrido una sola gota durante el mes de enero en toda la retaguardia zaragozana cuando, al poco de ser constituido, el Tribunal Popular iniciaba el día 29 su primer juicio. Correspondía al sumario nº 3-1937 por rebelión militar y el procesado era el caspolino Pedro Cirac Estopañán. Hermano de otros tres fusilados en el verano anterior, había tenido la mala suerte de ser detenido en Tortosa, a donde había huído, cuando en su ciudad natal se constituía el citado tribunal. Y pagaría caro ser el primero en pasar por él, en un momento en que todos esperaban tanto del organismo recién creado y en el que éste debía mostrar que lo de una justicia no cruel, pero tampoco blanda, iba de veras. En un ambiente de expectación y «fiebre» que llenaba la sala —lejano trasunto, empero, de la que había invadido la calle en el fulgor estival de 1936—, el jurado también se lo tomó en serio y consideró «hechos probados» que el acusado era «de ideas fascistas» y «enemigo de la clase trabajadora», que «intervino como dirigente [y] activamente en el movimiento fascista con armas en la mano» y que había luchado contra los milicianos en el combate de julio. Siendo considerado, además, «sujeto peligrosísimo para la sociedad», y ante la «enorme trascendencia del delito y el daño que se sigue», le eran aplicados sin atenuantes los

⁶³ Para algunos de los casos citados, véase J. Barrull, *Violència popular i justícia*, pp. 62-69 y 79-86; M. Ortiz Heras, *Violencia política en la II República*, pp. 152-158; F. Sevillano Calero, *La guerra civil en Albacete*, pp. 75-88 y, sobre todo, G. Sánchez Recio, *Justicia y guerra en España*, pp. 125-161. El caso contrario, por ejemplo, en F. Alia, *La guerra civil en retaguardia, Ciudad Real*, pp. 256-264, o E. Casanova, «Teruel, 1936-1938», pp. 104-109.

artículos 237 y 238 del Código Militar y se le condenaba a la última pena ese mismo día. Todo había sido muy rápido, y la ejecución lo sería también. Al día siguiente, a media tarde, esa naciente justicia encontraba en las paredes del cementerio una víctima propiciatoria sobre la que fundar su recuperación del ejercicio de sus funciones y de la violencia. Para que esto fuera aún más claro, acabada la ceremonia «qued[aba] el cadáver en disposición de ser visto por el pueblo antifascista».⁶⁴

No sería, sin embargo, el único. Apenas tres días después, como consecuencia del segundo juicio, el falangista Tomás Cortés seguía semejante camino. También caspolino y partícipe destacado en la sublevación, y miembro asimismo de una familia de la que habían muerto tres hermanos —y en este caso también el padre— en las jornadas de julio, esas coincidencias y el marco de esos primeros juicios firmarían su condena. Como se la firmarían, apenas tres semanas después, al comerciante Antonio Herrero, de Caspe al igual que los anteriores y acusado del mismo delito de rebelión militar «toda vez que tomó parte en él —según el fallo— de una forma activa y directa, voluntaria y libre, prestando servicios al lado de la sublevada Guardia Civil y haciendo armas contra el pueblo». En aquellos momentos, de nada servían sus alegaciones respecto a que tomó esas armas «obligado» por los sublevados, como de poco valieron incluso los «informes políticos» de la UGT y CNT locales, según los cuales «era un elemento al servicio de la reacción pero no una cabeza dirigente» y «es un elemento de derechas [...], mas no le consideramos peligroso». Pero, peligroso o no, y tras diez días esperando la llegada del solicitado indulto, lo que llegó fue

⁶⁴ El sumario, con las actas del juicio, sentencia y acta de ejecución se encuentra en AHN, CG, leg. 1427 (2), anexo 1/5, aunque también hay datos en los informes personales sobre la víctima en la rama de esa localidad en leg. 1424 (2). Véase también la nota que le dedica su hermano Sebastián Cirac en el martirologio de la villa *Los héroes y mártires de Caspe*, J. Casanova, *Caspe, 1936-1938*, p. 82, y A. Camón, *Crónicas del 36*, pp. 51-53.

el temible viaje al cementerio —de día, para diferenciarlo de la represión «ilegal»— y el seco y cortante sonido de los disparos. Los juicios no cesarían, y cada vez con mayor parsimonia, pero ese sonido, tras esa muerte y la de dos vecinos de Beceite (Teruel) condenados en parecidos términos en las dos semanas siguientes, ya no volvería a oírse de día y con acta de ejecución oficial en toda la zona.⁶⁵

Sí volvería a escucharse una vez más —la última— no muy lejos de allí, en Alcañiz (Teruel), casi un año después. Todo había empezado el 6 de septiembre, cuando Belchite era tomada por las tropas republicanas. Ese mismo día, precisamente cuando la violencia «caliente» experimentaba un fugaz despertar sobre los capturados en esa batalla, y ante los encendidos ánimos vindicativos de las familias de los muchos fusilados por los falangistas en 1936, el Juzgado nº 2 de Caspe incoaba un sumario contra 23 vecinos de Belchite por rebelión o adhesión a la misma. La celeridad con la que de nuevo se llevó todo a cabo es reveladora de que se intentaba evitar un desbordamiento de la venganza. Al día siguiente, la instrucción del proceso había acabado, y el 9 tenía lugar el juicio en Alcañiz, donde estaban presos los encausados y a donde se trasladó con toda rapidez el Tribunal Popular de Caspe.

El fallo, leído esa misma tarde, sancionaba esa justicia estricta, pero no desproporcionada, que tanto se promulgaba. Cuatro procesados eran absueltos libremente, siete condenados a penas de entre 12 y 15 años por un delito de auxilio a la rebelión —aunque las denuncias de muchos de sus vecinos apuntaban a hechos de mayor gravedad— y los doce restantes eran considerados culpables del delito de rebelión militar. Entre ellos, no obstante, se introducían variantes importantes. En todos los casos, las acusaciones les imputa-

⁶⁵ Para los dos caspolinos y los dos de Beceite, AHN, CG, leg. 1424 (2): rama de Caspe; y para A. Herrero, además, las actas de su juicio en *ibidem*, leg. 1427 (2), anexo 1/5.

ban una activa participación en la sublevación de julio haciendo guardias armadas con los falangistas y militares, tomando parte en el asalto al centro de la UGT, y en fin deteniendo, apaleando y delatando a los izquierdistas del lugar, más de un centenar de los cuales serían fusilados. No obstante, la condena impuesta a ocho de los juzgados era de «treinta años de apartamiento de la convivencia social», mientras que la pena capital sólo se decretaba en el caso de tres hombres y una mujer. En los cuatro, se consideraba demostrada, junto al delito en sí, una «circunstancia agravante [...], por haber todos ellos ocasionado con sus delaciones el asesinato de personas izquierdistas».⁶⁶ «Ejecutada tan pronto se haya cursado por el Gobierno recibo de esta sentencia», lo que sucedió el 23 de enero del 38 junto al castillo de Alcañiz, la pena era la última dictada en la provincia en lo que quedaba de guerra.

Que fuera la última, sin embargo, y que en total fueran sólo siete los ejecutados no representaba como han sostenido muchos que no quedaran más posibles blancos para esa represión «legal» —agotados, según esa argumentación,

⁶⁶ Según las acusaciones de los testigos, los tres varones -Manuel Benedicto y los hermanos Antonio y Eugenio Ortín- iban siempre armados y participaron en las detenciones de los fusilados de izquierdas. Juliana López, por su parte, incitaba según casi todas las denuncias a «que ninguno de izquierdas debía quedar», «decía a sus hijos que si no tenían c... para fusilar, iría ella», y «unos ciento cincuenta [fusilados] lo fueron por [su] delación»: sumario y actas del juicio, en *ibidem*, anexo 1/5. En la misma fuente hay abundantes datos sobre la represión franquista en Belchite durante 1936: las cifras de fusilados oscilan en ella entre los 157 que afirma haber enterrado el encargado de ello, y los «más de trescientos» que consigna el veredicto del tribunal, incluidas «quince o veinte muchachas, algunas menores de diecisiete años, que formaban en las filas de las Juventudes Socialistas», a las que se llegó a «detener, apalear, escarnecer y fusilar». Pese a todas sus limitaciones, los testimonios orales recogidos se mueven entre esas mismas cifras (unos doscientos según G. P., Belchite, 16-2-99, y alrededor de trescientos para D. P., Belchite y tres testimonios anónimos de Mediana de Aragón, 16-6-99). Luis Granell, en «Los rojos en Belchite», *Andalán*, 143 (dic. 1977), pp. 8-9, recoge la cifra de 319, mientras que el recuento a partir de las inscripciones en el registro civil de J. Cifuentes y P. Maluenda (*El asalto a la república*, y *El pasado oculto*), llega a las 116.

por la «ilegal» de los primeros meses. La pervivencia de ésta última en otras zonas de la provincia o el perfil del resto de los juzgados por el Tribunal aconsejan buscar la interpretación de ese hecho en otra parte. Y en este punto, la fecha de los juicios que acabaron en penas capitales, así como el origen de los condenados, son factores que no pueden ser pasados por alto. Que todos ellos vengan precisamente de las dos localidades con un mayor número de muertes violentas —y a su vez de las dos capitales de la sublevación en estas comarcas—; o el hecho de que sus juicios se produzcan nada más echar a andar el Tribunal Popular —caso de las víctimas de Caspe— o inmediatamente después de ser tomada la ciudad —las de Belchite—, todo ello parece apuntar a una misma realidad y a una misma función. Se trataba de mostrar lo antes posible que, una vez establecidos a tal efecto unos mecanismos oficiales y normativos, éstos podían ser vistos como los depositarios y ejecutores del ejercicio de la violencia para así controlarla y reducir su uso por otras instancias y contrapoderes. Evidenciado ese control con las muertes de los primeros juzgados y entrados casi todos en «esa senda de cordura que se había abierto en la España republicana» tras unos meses de venganzas y «limpieza revolucionaria»,⁶⁷ las sentencias podían alejarse definitivamente del pesado espectro de la sangre.

Y, de hecho, así lo hicieron. La lectura del resto de sumarios conservados muestra que se incoaban por delitos similares a los de los siete anteriores o de los caídos en la tormenta del verano anterior, mas los intereses parecían ya otros. En cuatro sumarios contra un total de 42 vecinos de Caspe, por ejemplo, los procesados estaban acusados de «hacer guardias armadas durante el movimiento faccioso» de 1936, de disparar o huir ante las fuerzas milicianas o en fin de ser «elementos de derechas y extrema derecha». De

⁶⁷ J. Casanova, «Rebelión y revolución», p. 169.

forma más concreta, los informes proporcionados por la UGT y la CNT locales hablaban en algunos casos de «verdadera encarnación del fascismo [y] uno de los que fraguó la sublevación en Caspe actuando en todo como dirigente»; de «señorito de significación francamente fascista que estuvo al servicio incondicional de los sublevados»; o de hombres de confianza del capitán Negrete que habían efectuado detenciones y patrullado «dirigiendo grupos armados». Los encausados de uno de los sumarios, además, eran según el Consejo Municipal «individuos que se supone hicieron armas contra el pueblo, habiendo sido juzgados y sentenciados siete [a muerte] por el Comité y una Delegación de la Comandancia» de la columna, por lo que serían incluidos en el sumario «para revisión de las causas». Iniciada la instrucción de dos de los sumarios en marzo del 37 y la de otro en verano, resulta extremadamente significativo que en marzo de 1938, cuando las tropas franquistas conquistaron la zona, en ninguno de los casos había tenido lugar todavía el juicio.⁶⁸

En otros tres sumarios, esta vez contra 17 vecinos de Codo —tomada como Belchite en la ofensiva de 1937—, las acusaciones eran aún más graves. A las consabidas guardias armadas junto a los sublevados tras el 18 de julio, el fiscal añadía que «se adhirieron a la rebelión militar en el pueblo de Codo, colaborando en la criminal tarea fascista de fusilar a los izquierdistas [...], delatando y deteniendo a los elementos de izquierda e incluso haciendo frente con las armas al Ejército leal». Entre los procesados, la mayoría estaban afiliados a FE y habían participado en algún fusilamiento —uno llega a reconocer haber sido «cazador de rojos»— y varios eran las cabezas visibles de la derecha. Como el jefe local de FE, quien participara en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de Fuendetodos, donde se habían refugiado los repu-

⁶⁸ AHN, CG, leg. 1427 (1), anexo 1/5: sumarios 24 y 47-1937 y 3-1938 por rebelión o auxilio a la rebelión, y AGCS, PS Barcelona, carp. 397.

blicanos, y fuera el «dirigente de los sublevados en Codo». Ni él ni ninguno de los otros morirían.⁶⁹

No obstante, el caso más notable y significativo, además de conocido, es seguramente «la causa por los sucesos de Caspe» seguida a mediados de marzo de 1937. Entre los 24 procesados se encontraban dos concejales del Ayuntamiento nombrado por los insurgentes, uno del designado gubernativamente en octubre de 1934 y varios afiliados al Sindicato Católico. Rostros de la vida política y social, en suma, que en poco se diferenciaban de las víctimas del verano y que en ocasiones habían estado a punto de correr la misma suerte. Como Joaquín Fraguas, encarcelado durante una semana en septiembre del 36; o como el industrial Santiago Albiac, «sacado» junto a otros presos para fusilar en julio del mismo año, pero salvado en el último momento, «tras un breve forcejeo», por un vecino que dijo responder de él. Los hechos que el veredicto consideró probados, aunque en diferentes grados, apuntaban indefectiblemente a la participación de todos ellos en el «movimiento faccioso». Domingo Catalán, por ejemplo, se habría presentado de forma voluntaria en el cuartel de la Guardia Civil para ponerse a disposición de los sublevados y habría colaborado con ellos conformando y distribuyendo patrullas armadas, ordenando hacer fuego o formando parte del grupo que extendió la insurrección militar por los pueblos cercanos. La sentencia, leída en medio de una gran tensión, encontraba a la mitad de los procesados culpables de rebelión militar, y de auxilio a la misma a otros ocho, mientras que ponía a disposición del Jurado de Urgencia a otro y absolvía libremente a los restantes. Entre los del primer grupo, sin embargo, establecía diferencias basadas en «atenuantes» como el «posterior arrepentimiento» o la «escasa edad». Ocho de ellos, por lo tanto, recibían condenas de treinta años de reclusión en campos de trabajo, y sólo cuatro —los tres

⁶⁹ AHN, CG, leg. 1427 (1), anexo 2/5: sumarios nº 6, 11 y 14-1938 por rebelión militar

citados mas el comerciante Teodoro Fuster— veían que se les dictaba pena capital. Pena que, además, el Gobierno conmutaba por otra de reclusión igual a la anterior 18 días después. Indudablemente algo, y quizá no era tanto el procedimiento como el contexto, había cambiado.⁷⁰

Todos esos cambios y procesos vividos en la retaguardia aragonesa se dejarían sentir de forma harto perceptible en los índices represivos de esta segunda etapa, probablemente la más compleja e interesante. Como mostraba la gráfica I, noviembre supone un brusco descenso respecto a las elevadas cifras de víctimas de los meses anteriores e inicia una etapa que, aunque con coyunturales alzas y dientes de sierra de cierta importancia, ya nunca volverá a los niveles represivos de la primera época. No en vano, frente al centenar de muertes mensuales del periodo julio-octubre, la media pasa ahora a ser de 17, y no deja de ser significativo que en un mes como enero, apenas a seis meses del inicio de la guerra, no se registre sino un fusilamiento y que sea precisamente el de Pedro Cirac Estopañán, el primer condenado por el Tribunal Popular. Los pueblos albergaban todavía, en las cárceles y sobre todo en sus casas, muchos «misonos», votantes de la derecha y acomodados como los que el «hartazgo de sangre» inicial se había llevado por delante. Sin embargo, como señalan de forma insistente los testimonios orales, «el ansia de matar fue intensa, pero duró muy poco», y «si te librabas de la primera oleada, te librabas casi seguro de morir».⁷¹ Las denuncias persisten, pero

⁷⁰ Este juicio y su resolución pueden seguirse en *Nuevo Aragón*, 17 a 23 de marzo de 1937; S. Cirac, *Héroes y mártires de Caspe*, pp. 183-184, y J. Casanova, *Caspe, 1936-1938*, pp. 81-88, pero sobre todo en el sumario y sentencia del mismo: AHN, CG, leg. 1427(2), anexo 1/5. Las referencias a J. Fraguas y S. Albiac, por su parte, proceden de sus respectivas declaraciones en *ibidem*, leg. 1426, pieza nº 4. Los condenados por delito de auxilio a la rebelión recibieron penas de 14 años, ocho meses y un día (4) y de 12 años y un día (4) de internamiento en campos de trabajo, mientras que el puesto a disposición del Jurado de Urgencia saldría de éste con una pena similar de cinco años.

⁷¹ Testimonios de D. Gargallo y J. Sanz, Caspe, 24-1-98 y 20-3-99, respectivamente.

su número es muy inferior, y en todo caso su final más habitual ya no es la pared del cementerio sino la prisión, los gabinetes de investigación, los campos de trabajo y la libre vuelta a casa. Era la mejor prueba de que, tras la extremada fragmentación de los primeros meses, la retaguardia comenzaba a «ordenarse» a partir de un nuevo poder revolucionario; poder que, además, parecía tener entre sus prioridades centralizar el ejercicio de la violencia a costa de los múltiples organismos que, como hemos venido viendo, se habían servido de ella durante el alba de la revolución.

Las sombras en el orden de la retaguardia

Sin embargo, los valores de meses como marzo y junio, o sobre todo diciembre y febrero, indican que ese proceso era lento, tenía indudables límites y que, en todo caso, había quienes se resistían a que tuviera lugar. Límites que ya han ido apareciendo en las páginas precedentes. La ubicación de esas muertes, y en suma de todas las de esta segunda etapa, producidas en su mayor parte en las zonas más cercanas al frente, proporciona algunas pistas sobre ello. Según quedó reseñado y tal como mostraba la gráfica nº 2, la represión había desaparecido casi por completo desde noviembre del partido judicial de Caspe, a la sazón el único enteramente situado en la retaguardia y sede del Consejo de Aragón. Mientras tanto, el descenso, aunque incuestionable, no era tan radical en las comarcas de Pina, Belchite o Cariñena, cuyos pueblos mantienen la represión en los meses posteriores. Allí estaban asentadas las columnas y con ellas los múltiples grupos armados y de difícil control, celosos de la independencia que les daban las armas y semejantes a los que en los primeros meses habían sembrado el terror a su paso. Por lo mismo, en ellas encontraba el Consejo las mayores dificultades para extender sus proyectos de disciplina y «orden revolucionario», y ahí era donde se planteaban la mayoría de los conflictos y superposiciones entre poderes característicos del primer trimestre de guerra. En fin, el caso de febrero de

1937 mostraba que, pese a todo, ningún lugar de la retaguardia era enteramente ajeno a esa situación.

Conflictos entre los diferentes poderes que coexistían en un territorio tan reducido y partido por las trincheras los había, y muchos, en aquella excepcional coyuntura. Estaban, en primer lugar, los que atañían a las columnas y divisiones. Pese a la militarización, éstas «continuaron ejerciendo un verdadero dominio sobre muchas poblaciones aragonesas» y sus necesidades de abastecimiento les llevaron a efectuar periódicas requisas en los pueblos próximos, tanto si a sus vecinos les parecía bien como si no. Esto ocasionaría, como se vio, abundantes disposiciones y llamamientos del Consejo de Aragón pidiendo poner fin a esos extremos. Y en los pueblos despertaría descontentos, resistencias y aun denuncias, como la que el Consejo Municipal de Almonacid de la Cuba elevaba al delegado de un grupo de la División Jubert allí instalado, horas después de que fueran asaltados, «según creemos por las fuerzas de Milicianos destacadas en este pueblo, los depósitos de aceite de la colectividad, asalto efectuado por la noche, con ruptura de la puerta, sustracción de la cerraja, y desparramamiento de bastante cantidad por la habitación». Los 150 litros sustraídos, a los que se unían los más de 100 desparramados, no parecían sin embargo suficientes para algunos, de modo que, «hecha la oportuna denuncia al delegado de la fuerza, contestaron en su casa que estaba descansando», y ahí quedaría todo.⁷²

El de las requisas no era, sin embargo, el único campo de esas acciones, como evidenciaba la petición formulada desde el *BOCA* respecto a que «es preciso que se deje en plena libertad al Consejo y a los pueblos para organizar la vida

⁷² Escrito del Consejo Municipal de Almonacid (22-4-37) e informe de agentes de OP (24-4-37): AGCS, PS Barcelona, carp. 839 (donde hay numerosas otras denuncias semejantes), aunque la primera cita textual es de J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, p. 173. Las peticiones del Consejo de Aragón a las columnas, en *Solidaridad Obrera*, 3-11-36, *BOCA*, 5-11-36, *Cultura y Acción*, 7-11-36 o *BOCA*, 28-11-36.

social aragonesa [...]. Deben cesar, por tanto, toda clase de intromisiones...» Aunque quienes lo denunciaron hicieron más tarde lo mismo, parecía evidente que los grupos armados «no limitan su acción a lo puramente guerrero», sino que se empleaban también en los asuntos políticos, en el orden público y en «imponer en la retaguardia una determinada concepción político-social-económica». A Mequinenza, por ejemplo, única localidad importante del Bajo Cinca no colectivizada, llegaría en noviembre de 1936 desde Fraga un contingente de cuarenta hombres armados dispuestos a tomar el lugar e implantar la colectivización, aunque tras varios disparos, y después de haber ocupado los telégrafos y el comité, lograron ser rechazados ese mismo día por los vecinos. Mientras tanto, en Azuara, según la UGT local, un destacamento de la antigua columna de Carod, que al parecer campaba a sus anchas por la zona, ejercía un «cantonalismo» respecto a las disposiciones de Caspe y Madrid y, desde la sede del sindicato de la CNT que había fundado, dominaba la vida local y perseguía a republicanos y ugetistas.⁷³ Los problemas, en suma, eran tan abundantes como diversos, aunque respondían siempre a los inevitables roces entre los grupos que tenían el poder que en una coyuntura bélica daban las armas y el resto de poderes locales y regionales que se disputaban con ellos el control de la retaguardia. El proceloso pero irreversible camino hacia la militarización de esas columnas y su encuadre en divisiones controladas por el Gobierno no quitaba hierro al asunto, más bien lo avivaba.⁷⁴

⁷³ «Escrito del presidente del Sindicato de OO. VV. de UGT de Azuara...», en FPI, AH, caja 16, carpeta 20, fol. 17. Azuara, según el testimonio de A. Souchy, estaba «situado en medio de la zona de guerra, a seis kilómetros del frente. Parece un campamento militar. La columna rojinegra tiene allí establecido su cuartel. Antes no existía ninguna organización de la CNT en el pueblo. Sólo había un Sindicato de la UGT» (*Entre los campesinos de Aragón*, p. 71). Para lo de Mequinenza, *cfr.* U.H.P., órgano del PSUC, 27-11-36, y testimonio de J. Castelló, Mequinenza, 22-5-99. La denuncia citada en el texto es del «Informe del CR...», Barbastro» (AGMA, arm. 47, leg. 72, carp. 1), y la referencia al BOCA es del 19-1-37.

⁷⁴ Según un documento del PCE aragonés, en el mismo sector de Azuara, por ejemplo, los jefes de la 25 División se negaban a obedecer las normativas

Como era previsible, por otra parte, muchos de esos conflictos se situaban en el decisivo terreno del orden público. Y todo lo concerniente a ese campo, como señalaba el comité de guerra de Escatrón al comité local, era «de incumbencia nuestra». Los ejemplos son aquí tan numerosos como variados, pero quizá sea suficientemente ilustrativo tomarlos de una de las zonas que mayores cotas de violencia experimentó en esta etapa. En un informe ya mencionado, el Grupo de Investigación del sector de Letux (partido de Belchite) pedía instrucciones ante «ciertos roces con los comités de guerra y de los pueblos» y sobre la relación a mantener con ellos a fin de evitar males mayores. Ahora bien, los males y los roces continuarían, y a los mencionados se añadían sobre todo los provocados por las resistencias de los comités a las detenciones y requisas de los milicianos y por el empeño de éstos en no perder el dominio en ese terreno. Así en Lagata, uno de los pueblos de ese sector, ante la llegada en fecha tan tardía como otoño de 1937 de varios agentes de Caspe llamados por el Consejo Municipal, un capitán de la División 24 les notificaba sin ambages que «la brigada había acordado declarar zona de guerra al citado pueblo», por lo que allí «la autoridad civil no tenía nada que hacer absolutamente».⁷⁵

Pero si dificultades había para la centralización del orden público en el Consejo de Aragón por parte de comités y

llegadas de Madrid y ponían todo tipo de trabas a los soldados que querían marcharse a las divisiones del Ejército Popular, provocando sucesos como el que llevaría a Carod a desplazar tropas para reducir a todo un batallón que al parecer pretendía irse de Moyuela a finales de julio del 37 para incorporarse a dicho Ejército (AGCS, PS Barcelona, carp. 397).

⁷⁵ AHN, CG, leg. 1426, pieza nº 4: informe de la alcaldía de Lagata, 19-6-41, ff. 3-4; y AGCS, PS Barcelona, carp. 397: informe de los agentes al comisario jefe, Caspe, 15-11-37. Lo del sector de Letux y lo de Escatrón, en *ibidem*, carp. 839, y PS Aragón, carp. 10. Para otra plasmación de las a veces tensas situaciones entre las columnas y el departamento de OP del Consejo de Aragón, véase la acusación de Ortiz, jefe de la 25 División, contra F. Foyos por su aplicación de la «justicia revolucionaria» (*ibidem*, PS Barcelona, carp. 839). Y eso que «es de sobras conocido que la columna de la que fue jefe Ortiz se convirtió en el mayor soporte del propio Consejo»: J. M. Márquez y J. J. Gallardo, *Ortiz, general sin Dios ni amo*, p. 141.

columnas, a ellas se sumaban otras. Unas, numerosas, provenían de la Generalitat catalana, que a través de la brecha abierta por las columnas se había arrogado parte de esas funciones e instalado puestos de policía, como si de territorio conquistado se tratase. Funciones y puestos que, de creer una carta del consejero Ballano, se resistía a abandonar. Por ello, la misiva pedía «el derecho a controlar el Orden Público y la Justicia que en el orden regional nos pertenece [...], conminándoles a la retirada de todos los puestos de policía que la Generalitat tuviese en la región, que sólo nosotros debemos controlar», so pena de tener que «recurrir a la violencia que vuestra terquedad nos impondría». Otras, por su parte, sobre todo desde la primavera del 37, tenían su origen en las fuerzas gubernamentales y las divisiones comunistas enviadas a la retaguardia desde el frente de Madrid. Y otras, en fin, procedían de las diferencias entre los propios organismos del Consejo de Aragón; por ejemplo entre las dos fuerzas que desde fines del invierno se repartían las funciones policiales —la Comisaría de Vigilancia y la anterior de Investigación—; o entre ésta y los Tribunales Populares, de los que Foyos, la cabeza visible de la primera, opinaba que «parece ser no tienen deseos de condenar a quienes con su conducta pasada y presente son merecedores de tal».⁷⁶ Esta macedonia se completaba, por último, con las muchas críticas vertidas sobre el departamento de Orden Público, con las tensiones locales y regionales entre la CNT y el resto de organizaciones antifascistas, o con los frecuentes conflictos entre consejos municipales y colectividades o entre éstas y los «individualistas» que

⁷⁶ FPI, AASM, caja 514, carp. 17: carta del Director Gral. de OP al CR de la CNT aragonesa, 22-4-37. Sobre «los inconvenientes que encuentran los compañeros de este Servicio [de la Comisaría de OP] en sus viajes para la realización de diversos trabajos», véase el informe de dicho Servicio, 23-6-37, en AGCS, PS Barcelona, carp. 839. La carta de Ballano (30-12-36), en *ibidem*. Un ejemplo de que esa tensión con la Generalitat continuó, en el editorial de *Nuevo Aragón* del 24-5-37. La referencia a los roces entre Investigación y Vigilancia procede de un episodio en el que el comisario de Vigilancia acabó detenido por Foyos: Sumario del Tribunal Popular nº 1-1937 contra el comisario (AHN, CG, leg. 1430 (2)).

no querían participar de su concepto de la revolución. Demasiadas dificultades, roces y pugnas para que, en una coyuntura bélica en la que las armas hablaban más alto que nadie, éstas permanecieran calladas.

No siempre lo hicieron y, aunque menos intensa y más esporádicamente, su grito se oyó de forma nítida en algunos lugares y momentos concretos. Según los datos recogidos, de las 150 víctimas que corresponden a estos ocho meses —es decir, el mismo número que en las tres primeras semanas en verano del 36— más de la mitad murieron en cinco días —o mejor noches— y sucesos concretos. Fugaces llamaradas del anterior «terror caliente» en las que pesaban cada vez más las luchas por el control de la retaguardia y menos las herencias del pasado. Las víctimas, no obstante, seguían siendo más o menos las mismas.

El sector de Letux, en el frente de Belchite, viviría en pleno diciembre de 1936 las dos primeras de esas llamaradas. Hasta entonces, las cosas habían transcurrido allí con relativa tranquilidad y apenas se había visto correr la sangre. En otro interesantísimo documento, el Grupo de Investigación del Consejo de Aragón que actuaba en la zona encontraba que, en una comarca dominada tradicionalmente por «la incultura y el analfabetismo», ser de derechas o izquierdas dependía menos del conocimiento de programas e ideas que de las obligaciones respecto a los «amos» y el «odio personal». En suma, «fascistas a decir verdad no existen; los elementos reaccionarios peligrosos por su acción se fueron con los fascistas; aquí quedan hombres pobres, trabajadores que votaban a las derechas; toda su vida inclinados sobre el terruño pasando fatigas y no poseen un céntimo», y que, además, «desde que se han marchado los fascistas han observado una buena conducta, han trabajado y han aceptado el nuevo estado de cosas, tanto los hombres como las mujeres». La conclusión era evidente, «no conviene hacer ninguna actuación hasta que se tome Belchite», porque sería un «craso error».⁷⁷

⁷⁷ AGCS, PS Barcelona, carp. 839.

En el propio pueblo de Letux, quizá el mejor exponente de lo anterior, las primeras semanas sólo se habían llevado por delante dos vidas y, teniendo en cuenta que unas ochenta familias de derechas —incluidas las cuatro «casas ricas»— habían huido a Zaragoza antes de la llegada de las milicias, todo parecía indicar que la cifra no aumentaría. Las fuerzas llegadas a la zona, casi todas desde Tarragona con Martínez Peñalver (milicias de CNT, POUM, PSUC y ER, Regimiento de Almansa nº 15, guardias civiles, carabineros, etc.), habían instalado en la localidad sus cuarteles y constituido un comité de defensa o de guerra conjunto en el que reinaba un cierto equilibrio; equilibrio que, según los testimonios recabados, se reproducía en un comité local dominado por los republicanos. La entrada del invierno, sin embargo, trastocó ese estado de cosas. Integrados todos esos efectivos en la columna de Ortiz, marchados a Tarragona o a otros frentes muchos de los no confederales y con una afiliación a la CNT local que se había disparado, algunos vecinos y milicianos de ésta percibieron que el reparto del poder local no se correspondía con el de fuerzas y pasaron a intentar decantar la situación hacia otro equilibrio más proclive a ellos. La primera manifestación del «giro político que hacia el extremismo se había operado», y del que todos responsabilizan al jefe de las milicias anarquistas, sería la creación de la colectividad en noviembre. La entrada o no en ella era al parecer voluntaria, y de hecho la mayoría no lo hizo, provocando algunas presiones e invocaciones acerca de las ventajas y conveniencia de sumarse a ella y de los perjuicios de una «conducta abstencionista» de la que se acusaba al comité republicano.⁷⁸

El punto de no retorno llegaría la noche del 12 de diciembre. Ese mismo día, el periódico tarraconense *Llibertat* informaba de un duro combate ocurrido días antes a escasos kms. de Letux entre las falanges de Belchite y la columna comandada por el capitán Jubert en el que las bajas milicianas

⁷⁸ M. Plou, *Historia de Letux*, pp. 345-352 (cita en p. 351).

habían sido numerosas, incluida la del propio jefe miliciano. El día 11 el comité local era sustituido por otro, la tarde del 12 tenía lugar una reunión donde se insistía en la conveniencia de integrarse totalmente en el régimen colectivista a unos republicanos poco proclives a ello, y tras ella, según una versión, un jefe miliciano pedía a varios jóvenes «extremistas» una de esas listas calificadas con propiedad como «negras». Negro sería, en todo caso, el destino que esperaba a los diez derechistas detenidos esa noche por una patrulla acompañada de varios vecinos. Buscados en sus casas y campos, fueron llevados al comité de guerra de la columna con la excusa de «ir a hacer leña al monte de Albalate». A donde fueron a medianoche, en cambio, es al cementerio del lugar, donde les fusilaron en dos grupos y remataron, como se dijo, con las ruedas del mismo autobús de Tarragona que les había llevado en ese su último viaje. Al día siguiente, los republicanos moderados manifestaban su repugnancia por esos hechos, pero —cosa harto significativa a la hora de interpretar los móviles del hecho— la mayoría de ellos empezaba a ingresar en la colectividad.⁷⁹

Cuatro días después, y a igual número de kms., algo similar ocurría en Lagata, uno de los pocos pueblos que, como el anterior, habían visto correr la sangre durante la República. En lo que se llevaba de guerra, sin embargo, no lo había vuelto a hacer, y después sólo se repetiría en una ocasión, durante la retirada de los republicanos en marzo de 1938. El 16 de diciembre de 1936, sin embargo, iba a ser muy diferente. Es difícil llegar a la verdad de todo lo que sucedió, pero con toda seguridad influyeron las bajas de milicianos en la batalla citada así como la noticia de que los sublevados acababan de fusilar en Belchite a la madre del presidente del

⁷⁹ *Ibidem*, pp. 352-353 y testimonio del mismo autor en entrevista concedida en Zaragoza el 13-4-1999; delaraciones de familiares de las víctimas e informes de la alcaldía y la Guardia Civil en AHN, CG, legs. 1423 (2), rama de Letux, y 1426: pieza nº 4.

comité. Las represalias y las cuestiones personales se mezclaban con la guerra y la política, y el resultado no podía ser muy conciliador. Esa tarde llegó, probablemente llamada para la ocasión, «una centuria ‘Hijos de la Noche’ de la Columna Durruti»(?) y, hacia las nueve de la noche, el citado dirigente del comité llamó al alguacil y «le entregó una lista y dos guardias milicianos y le dijo que en término de media hora debía de presentar a las personas que iban incluidas» en ella. De este modo, y después de «reducir al silencio al pueblo y colocar vigilantes en las afueras y principio y salida de las calles, fueron de casa en casa deteniendo a 16 individuos de derechas», a los que tuvieron una media hora en las dependencias de la Casa Consistorial, tomaron declaración y, en la sala contigua, sentenciaron. Lo que siguió es fácilmente previsible:

«A las diez, con el pretexto que les llevaban a Lécera, atados de dos en dos, fueron colocados en camión cerrado y al estar a unos tres kilómetros del pueblo, entrando en una finca del monte, pretextando que se había terminado la gasolina les hicieron bajar, colocándoles en línea para fusilarles...»

Dos de ellos, que en aquellos angustiosos momentos lograron librarse de la atadura que les unía, escaparon a todo correr por el monte aprovechando la oscuridad y, detenidos en el vecino pueblo de Samper del Salz, serían posteriormente juzgados por el Tribunal Popular de Caspe. Significativamente, uno sería condenado a una pena menor y el otro absuelto. En su huida, sin embargo, quedaban atrás el resto de los «paseados» —incluido el hijo de uno de ellos— y el terrible sonido de los disparos que estaban acabando con sus vidas.⁸⁰

⁸⁰ A uno de los catorce fusilados también le sonreiría la suerte, puesto que quedó sólo herido y pudo escapar mientras los otros eran enterrados, hasta llegar a campo traviesa a la zona «nacional». Para todo el episodio narrado, *ibidem*, leg. 1423 (2), rama de Lagata: declaraciones de los familiares y del alguacil citado (del que procede la primera cita); leg. 1426, pieza nº 4: Informe de la Alcaldía de Lagata, 19-4-1941, ff. 3-4 (de donde el resto de entrecomillados), y leg. 1427 (1), anexo 2/5: sumario del Tribunal Popular contra los dos huidos (mayo-junio 1937).

Los últimos de esos episodios más sangrientos de la etapa tendrían lugar asimismo en las proximidades de la línea del frente o incluso dentro de la misma, esta vez en la escasa porción del partido de Cariñena a la que llegaron los republicanos. El primero lo viviría Herrera de los Navarros, al parecer coto privado de un destacamento de la columna confederal de Carod en el que un jefe militar y su comisario político decidían las detenciones, los trabajos forzados y las sacas. Una de ellas, a fines de marzo de 1937, dejaba tirados en una cuneta los cuerpos de trece vecinos, diez de ellos mayores de 50 años. Formaban parte de las sesenta y cinco personas detenidas y llevadas allí, como otras muchas de los pueblos cercanos, para trabajar en la construcción de una carretera de Moyuela a Moneva. Tres días después de llegar, en lo que parece era una mezcla de denuncias y represalias ante los ataques iniciados por los franquistas en esos días, once de ellos eran fusilados junto a esas obras por un piquete de milicianos, y a la noche siguiente otros dos, sumándose así a las trece víctimas que Herrera había registrado ya durante el verano del año anterior. En la cercana Aladrén, por su parte, el ataque era de las fuerzas milicianas, que a costa de numerosas bajas ocuparon en junio, durante apenas un día, ese pueblo situado al otro lado de las trincheras. Tiempo suficiente, no obstante, para que esta incursión supusiera la captura de dos mil cabezas de ganado y 72 prisioneros, pero sobre todo la muerte de dieciséis vecinos, en el combate unos y fusilados otros —como el secretario del Ayuntamiento o el maestro—, por figurar en otra de esas fatídicas listas negras o por hallarles armas que, teóricamente, habían usado en la lucha.⁸¹

⁸¹ AHN, CG, 1424 (2), y sobre todo el testimonio escrito de Luis Alegre (Aladrén, 16-5-1999) y la entrevista con el testigo Felipe Lafuente (Zaragoza, 15-11-98), del que nos hemos servido para la a veces casi imposible diferenciación entre las muertes por combate y por fusilamiento. Nuestro balance apunta a nueve ejecuciones, semejante a los «ocho o diez» que menciona J. Altaba Escorihuela en *Experiencias, datos, testimonios*, p. 107. Para Herrera, la rama correspondiente en AHN, CG, leg. 1424 (2), y la tensa situación del frente en esos días, en *Nuevo Aragón*, 26-3-37. En general, los abundantes movimientos

No obstante, para encontrar el caso quizá más significativo habría que internarse retaguardia adentro e ir a parar, una vez más, al partido de Caspe. El día 9 de febrero, cuando en tres meses no se había derramado ya otra sangre en la comarca que la de los dos primeros condenados por el Tribunal Popular, la radio anunciaba la entrada a sangre y fuego de las tropas franquistas en Málaga. La noticia sería el detonante de una ola de represalias que, la noche del diez, iba a recorrer Escatrón, Maella y Nonaspe con un balance de 31 muertos. Hacía tiempo, desde verano, que ninguna de las tres localidades sufría este tipo de episodios, y tampoco los registrarían después. Esa noche, sin embargo, sería una dramática excepción.

Lo que no resultó tan excepcional fueron sus protagonistas. En Escatrón, por ejemplo, todo comenzaría cuando esa tarde llegaron milicianos desde el frente «interesándose por el domicilio de los elementos de investigación u orden público», a los que exigieron una relación de los afiliados a las organizaciones de derechas del pueblo. Ya de noche, cinco de ellos eran detenidos en sus casas por los de investigación y uno del comité, metidos en el vehículo de los milicianos y fusilados por éstos, no lejos de allí, junto a la carretera de Cariñena. En Maella, por su parte, donde estaban «los ánimos algo excitados» entre la mayoritaria CNT y algunos republicanos, el papel desempeñado por los vecinos parece ser mayor —y menor el de los de fuera—, pero el resultado, la muerte de trece «faciosos» en las afueras, no variaba gran cosa. Diferente tampoco era el perfil de las víctimas: entre las de Escatrón, dos habían sido concejales del Ayuntamiento de los sublevados, otro era secretario y todos conocidos derechistas. En Maella, entre los «caídos», dos eran antiguos alcaldes, seis concejales de derecha, uno juez municipal y en todos los casos se trataba de fabricantes de aceite, propietarios o labradores, diez de ellos

bélicos de la primavera de ese año en el frente zaragozano pueden seguirse en detalle en AGMA, DR, arm. 45, legs. 15-16.

con más de cincuenta y cinco años. Y diferente tampoco era, por último, la suerte de sus bienes, incautados poco después por los respectivos comités locales.⁸²

El caso de Nonaspe es tal vez el más revelador. Se trataba de uno de esos pueblos en los que no hubo movimiento alguno en julio de 1936 y la izquierda —republicanos y CNT— había formado un comité y tomado las riendas de la situación antes de la llegada de las columnas catalanas. No cabía esperar, en consecuencia, que la represión fuera intensa y, como en los casos de Letux y Lagata, no lo había sido. No en vano, sólo había hecho acto de presencia a fines de ese último mes, como en otros lugares, en la habitual «caza del cura». En los meses siguientes, sin embargo, se empezó a hablar de fusilamientos, sobre todo por los soldados que regresaban de permiso y narraban las matanzas de los sublevados al otro lado de la línea del frente. El día cinco de febrero habían venido en uno de esos permisos varios de los combatientes del pueblo, quienes al parecer habían hablado del asunto con otros de pueblos cercanos. La caída de Málaga dispararía dudas, decidiría a los menos convencidos y en suma precipitaría la tragedia.

A medianoche del día 10, los rumores de lo que se preparaba se confirmaban con la llegada de un coche y un camión cargados de hombres armados que, divididos en grupos, fueron llamando a las casas de los «derechas más significados» e incluso entraron en algunas por el balcón. A pesar de que, «al abrir la puerta, les fueron enfocados unos potentes reflectores» y de que algunos de los «otros llevaban caretas postizas», los detenidos y sus familiares pudieron reconocer a un par de

⁸² AHN, CG, leg. 1424 (2), ramas de Escatrón y Maella, y testimonio de P. Arbona (Maella, 18-3-99). La participación de vecinos, además, en Archivo Municipal de Maella, leg. 1-5: informes personales (1941), y lo de los ánimos excitados, en AGCS, PS Barcelona, carp. 839: «Consejo de Defensa de Maella. Al Consejero de OP», Maella, 30-1-37. La incautación de los bienes es algo que confirma días después el «Libro de Actas del Consejo Municipal de Defensa de Escatrón», 15-2-37 (*ibidem*, PS Aragón, carp. 10).

representantes del comité acompañando a los «elementos armados» y sobre todo a los «componentes del grupo de Investigación de Fabara». El primer disparo se llevó la vida de uno de los buscados en el corral en el que había tratado de esconderse, mientras que otros catorce eran conducidos al local de la CNT; allí un forastero les tomaba declaración y otro, disfrazado con una barba postiza, les iba condenando a medida que subían al camión camino de las afueras. Uno, que alegó que su yerno había sido ejecutado por los fascistas, sería eximido del viaje. Los otros trece, en cambio, eran fusilados instantes después donde acababan las luces del pueblo. Entre las víctimas, como en los otros casos, un alcalde y juez municipal durante la Monarquía de setenta años, dos ex concejales, los secretarios del Ayuntamiento y del Juzgado Municipal y el veterinario —mientras que otro, el presidente del Sindicato Católico, resultaba sólo herido y se salvaba. Al día siguiente, regresaban los miembros republicanos del comité —que ante los rumores de lo que se avecinaba se habían marchado a la cercana Mequinenza— y venía de Caspe un equipo de Orden Público para elaborar un informe sobre esas muertes e instruir unas diligencias que, sin que nadie quisiera tomar parte, no podían llegar muy lejos. En esa misma semana, aparecían unos letreros en las propiedades rústicas y urbanas de los fallecidos que rezaban «requisado por la CNT». Aumentada con esos bienes y con los de otros «acomodados» atemorizados por lo sucedido, la hasta entonces débil colectividad iniciaba un nuevo rumbo marcado por la abundancia.⁸³

⁸³ AHN, CG, legs. 1424 (2), rama de Nonaspe: declaraciones de familiares, autoridades y del superviviente del fusilamiento; 1427 (1), anexo 2/5: «Informe del Inspector Gral. de OP sobre los sucesos ocurridos en Nonaspe», 11-2-37; y 1429 (2), anexo 2/7: «Casos especiales que se presentan en el pueblo de Nonaspe...», agosto de 1937. AGCS, PS Barcelona, carp. 397: Informe del Secret^o Organización del PCE de su viaje a Nonaspe, 21-8-37, ff. 33-35. «Libro de Actas del Ayuntamiento», sesión del 25-7-39 (Archivo Municipal de Nonaspe). Testimonio de dos informantes anónimos (Nonaspe, 21-5-1999), y las «Memorias» inéditas de Benito Bernús, miembro del Comité revolucionario. La participación de vecinos de Fabara, en su Archivo Municipal, leg. 42-18: «Informes del Jefe

El papel de unos y otros en estos hechos, las circunstancias y sobre todo la relación entre lo sucedido en los tres casos no siempre pueden perfilarse con nitidez. Lo que está claro, sin embargo, es que no se correspondía con una diti-rámica versión del Presidente del Consejo de Aragón, según la cual todo había empezado cuando

«elementos criminales apostados en ventanas, tejados y sitios estratégicos, perpetraron una agresión contra el pueblo, provocando con sus disparos la consiguiente alarma y exacerbando a las masas que, sin inmediato control posible por la rapidez, la obscuridad y lo inesperado del ataque, reaccionaron enérgicamente contra sus agresores y realizaron algunos atentados contra personas de notoria y acentuada historia derechista, a las que el pueblo y las autoridades habían respetado y protegido hasta ese momento».

Más bien parece tratarse de una conjunción coyuntural entre diversas fuerzas y grupos armados de la zona, en un contexto bélico desfavorable en el que no se perdona la persistencia de enemigos interiores, al que llegan noticias de las brutalidades cometidas por el contrario allí donde vence y que vive graves tensiones entre los diferentes poderes con ocasión del progresivo control de la retaguardia. Aunque sin citar ni buscar culpables, es significativo que el propio Consejo de Aragón condenara tres días después «lo ocurrido últimamente en algunos pueblos de Aragón, que sólo acredita torpeza». Más aún, se advertía a los que «se dedican a realizar hechos que, cuando menos, representan abrogarse funciones que sólo son propias de quienes tienen una misión tan elevada como es la de velar por el orden público», que estaba dispuesto «a que estos casos no vuelvan a repetirse».⁸⁴

local Falange sobre vecinos...», abril-mayo de 1940, y en el testimonio de J. Cirac (Fabara, 21-5-99).

⁸⁴ Nota del Delegado de OP del Consejo, F. Foyos, en *Nuevo Aragón*, 13-2-37. La versión de Ascaso, en un «Informe del Delegado del Gobierno de la República y Presidente del Consejo de Aragón al Ministro de Gobernación sobre los incidentes ocurridos en diferentes pueblos comarcanos» firmado ese mismo

Y de hecho en esta comarca ya no se repetirían. Había sido, al igual que en el resto de los casos vistos, una violenta manifestación de fuerza de grupos y poderes locales que intentaban ser controlados desde fuera por las nuevas autoridades y que se veían cuestionados también en el plano interno. Conservaban, eso sí, el control de las armas y cual todo poder cuestionado o amenazado lo emplearían para mantenerse y tratar de no perder su peso y situación política. Sin embargo, y aunque enérgica, esa manifestación será en esta zona un canto de cisne que pronto dará paso a la práctica desaparición de la violencia colectiva. Cuando ésta regresara, en verano del 37, sus orígenes, destinatarios, función y contexto político serían ya muy diferentes.

LOS CAMBIOS DEL VERANO DEL 37 Y SUS CONSECUENCIAS

Con el estío de 1937, y más en concreto en el mes de agosto, llegaban a la retaguardia zaragozana dos cambios decisivos, resultado y cesura a un tiempo respecto a la fase anterior y, aunque remotamente ligados, diferentes el uno del otro. Por un lado, la tan repetida gráfica I muestra un breve y espectacular despunte de la represión en agosto y septiembre relacionado con la ofensiva republicana de esos meses, tras la que los índices de muertes vuelven a descender a niveles iguales o inferiores a los anteriores. Por el otro, desde mediados del primero de esos meses las cárceles de la zona vuelven a llenarse, mas esta vez no por presos como los que las ocupaban desde hacía un año, sino con muchos de los que antes detenían, estaban afiliados a la CNT y eran ahora víctimas de la evolución política en la España republicana. Evolución que, pese al «cantonalismo»

día (AGCS, PS Barcelona, carp. 821). Como ejemplo de represalias similares -por la caída de Málaga, pero también de Badajoz, Irún, etc.-, véase J. M^a Solé y J. Villarroya, *La repressió a la reraguarda de Catalunya*, pp. 187-200, o C. González, *Guerra Civil en Murcia*, pp. 159-161.

que se achacaba a los que habían llevado las riendas del poder en Aragón, acabaría por afectar también a esta región. Ambos, en todo caso, se unían para definir una etapa nítidamente diferenciada de la precedente y que, tras la doble explosión inicial, se arrastra indolente hasta la llegada de las tropas franquistas y resulta, tal vez, la más gris y peor conocida de la guerra civil en las provincias aragonesas.

El cambio de sentido de la violencia

La dinámica política de la España republicana, tendente al menos desde otoño de 1936 hacia la centralización y fortalecimiento del Estado y hacia la recuperación por éste del monopolio en el ejercicio de la violencia, alcanzaría un desarrollo irreversible durante la primavera del año siguiente. No significaba algo excepcional, pues era un proceso que se estaba viviendo también —aunque de forma más acusada y con menos resistencias— en la zona de los insurgentes y al que a la postre han llegado todas las grandes revoluciones de la edad contemporánea. Máxime si, como en este caso, tenían lugar a la vera de una guerra abierta. En ese marco, se trataba de una pugna entre las diferentes formaciones políticas y sindicales por el control de la revolución y del sistema político, pugna tras la que estaba en juego cuál sería la salida a la crisis de los años treinta de entre los «proyectos distintos de organización social» y del poder que había tras cada una de ellas. Pero antes había que ganar la guerra, y en realidad esa cuestión permeaba todas las demás. En ese punto, con la República aislada y enfrentada a un enemigo militarmente mucho más poderoso, algunos tuvieron claro que la única manera de enfrentarse a él con garantías era la reconstrucción de un poder centralizado y de una «coalición antioligárquica» de amplia base social con la que llevar a cabo la necesaria «movilización con vistas a la guerra total». Pero ello implicaba algu-

nos cambios drásticos en el equilibrio del poder existente desde el verano anterior.⁸⁵

Como se sabe, el principal jalón en este proceso había sido la famosa «guerra civil dentro de la guerra civil» o «sucesos de mayo» de Barcelona. En esas jornadas saltaron de forma más que dramática a primer plano las tensiones políticas que cuarteaban la España republicana y se abrieron las puertas al relegamiento de las organizaciones sindicales victoriosas en el verano de 1936. Una y otra cosa eran, en realidad, algo que no había nacido de la noche a la mañana. Sus cimientos estaban puestos desde el inicio de la contienda, por lo que no resulta suficiente resumir el asunto como la brusca cesura entre la revolución y la contrarrevolución. Sin embargo, aunque mero acelerador de las tendencias previas, sus consecuencias no pueden ser pasadas por alto. Una vez cesaron las hostilidades y se cerró la inmediata crisis gubernamental, las posiciones de los republicanos, socialistas moderados y comunistas «ortodoxos» mejoraban sustancialmente, caían en picado las de las organizaciones situadas a su izquierda —incluida la meses atrás todopoderosa CNT— y el Estado central daba un paso más en el camino hacia su completa reestructuración. No deja de ser significativo, en ese sentido, que una de las primeras consecuencias de aquellos hechos fuera precisamente la recuperación por el poder central de las funciones de Orden Público en Cataluña, hasta entonces en manos de la Generalitat. La zona republicana

⁸⁵ Helen Graham, «La movilización con vistas a la guerra total: la experiencia republicana», en Paul Preston, ed., *La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la Guerra Civil*, Península, Barcelona, 1999, pp. 175-199; J. Aróstegui, «La República en guerra», pp. 7-19 (cita en p. 9). La evolución de las grandes revoluciones de nuestro tiempo hacia el fortalecimiento del Estado es, como se sabe, uno de los argumentos fundamentales de la influyente obra de Th. Skocpol, *Los Estados y las revoluciones sociales*. Cfr. asimismo a ese respecto Ch. Tilly, *From Mobilization to Revolution*, pp. 193-200 y 211-222, y para un caso concreto, el provocador texto de Daniel Guérin, *La lucha de clases en el apogeo de la Revolución francesa, 1793-1795*, Alianza, Madrid, 1974.

había entrado, ya sin duda posible, en la fase de «privatización de la violencia» de toda contienda civil.⁸⁶

Más allá de los ecos, disturbios y movimientos de tropas que ello pudo suponer en Aragón,⁸⁷ interesa destacar aquí que, a pesar de las especiales circunstancias de esta región, en ella latían problemas de fondo no demasiado diferentes. Problemas que, poco después, también aflorarían no sin dramatismo y violencia.

Como vimos en el epígrafe anterior, la retaguardia aragonesa vivía, pese a los avances en su «ordenación», roces y

⁸⁶ Fase, según la terminología de P. Waldmann, de empleo de la violencia en la lucha entre las facciones de cada bando: «Sociedades en guerra civil», p. 157. Entre las abundantes páginas que se han dedicado a estos hechos y a la sustitución del gobierno de Largo Caballero por el de Negrín, aquí se han consultado las *Memorias políticas y de guerra* de M. Azaña (Crítica, Barcelona, 1978), pp. 22-56; Julián Zugazagoitia, *Guerra y vicisitudes de los españoles*, Librería Española, París, 1968 (1940), pp. 267-275 y 285-290; J. Peirats, *La CNT en la revolución*, pp. 137-214; C. M. Lorenzo, *Les anarchistes et le pouvoir*, pp. 265-275; Agustín Souchy, *La verdad sobre los sucesos en la retaguardia leal. Los acontecimientos de Cataluña*, FACA, Buenos Aires, 1937; y, como obras más modernas, el texto de Manuel Cruells, *Mayo sangriento. Barcelona, 1937*, Juventud, Barcelona, 1977; y J. Casanova, *De la calle al frente*, pp. 221-228. Véase asimismo el amplio tratamiento del tema en la versión de B. Bolloten, *La Guerra Civil española*, pp. 659-719, aunque resultan más sólidas *La Comintern y la guerra civil española*, de E. H. Carr (Alianza, Madrid, 1986), y sobre todo *Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939*, de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo (Planeta, Barcelona, 1999). Los posicionamientos de la CNT pueden seguirse a través de varias circulares, informes, etc. en FPI, AASM, caja 513, carp. 9. Las consecuencias de los hechos de mayo en la represión en Cataluña, en J. M^a Solé y J. Villarroja, *La repressió a la rera-guarda*, pp. 205-216.

⁸⁷ Para esos movimientos, AGCS, PS Barcelona, carps. 14 (informe del Jefe Militar de la Presidencia del Consejo de Aragón, Caspe, 7-5-37), 397 (comunicado del Comité Prov. del Frente Popular de Huesca..., Barbastro, 11-5-37), 821 («Informe remitido por el Comisariado Gral. de Guerra..., 8-5-37) y sobre todo 1568 («Informe que envía la Asesoría Jurídica del Frente de Aragón..., 15-5-37). Según este último informe, por lo que respecta a la provincia de Zaragoza todo se redujo a «una fuerte subversión en el sector de Azuara, Columna Carod», donde se volarían puentes y obras de carreteras, y a la acogida de unos trescientos fugitivos provenientes de Barcelona. *Cfr.* J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, pp. 253-263.

pugnas entre los distintos órganos de poder que en ella actuaban. Con el paso de los meses, sin embargo, el que pasó a tomar los carices más serios no provenía ya tanto de las resistencias a esa labor ordenadora cuanto, precisamente, de la competencia por su control. Es decir, entre la CNT regional y el Consejo de Aragón, por un lado, y el resto de fuerzas políticas antifascistas por el otro. Ese control, y en suma la hegemonía de uno u otro proyecto político y social era, más allá de la a menudo fútil polémica guerra-revolución / revolución-guerra, lo que estaba realmente en juego. Ocurre, sin embargo, que esos móviles generales eran además vividos en cada pueblo y ciudad como luchas por el poder local y como una disputa en torno al problema de la explotación de la tierra y el respeto o no de la pequeña propiedad. De ahí los conflictos entre colectivistas e individualistas que empezaron a salpicar la retaguardia republicana desde el invierno.⁸⁸ Esos conflictos, junto a la cuestión del Orden Público, serían los principales caballos sobre los que se libró esa batalla.

Sobre todo, tal vez, lo segundo, aunque en la práctica se encontraban a menudo ligados, y para los dirigentes cenetistas de ese departamento «la defensa de las colectividades estaba incluida en sus funciones». Todos querían controlar ese espinoso y crucial terreno ya que, en palabras de Juan Andrade, la cuestión que caracterizaba y definía de una manera más terminante el sentido de una revolución «es la referente al orden público, es decir, a la estructuración de los organismos de vigilancia, control y represión».⁸⁹ Desde marzo

⁸⁸ A. Bosch, *Ugetistas y libertarios*, p. 129.

⁸⁹ Juan Andrade, en *La Batalla*, 20-2-1937, recogido en *La revolución española día a día*, Nueva Era-Trazo, Barcelona, 1979, p. 153, aunque el primer entrecuillado es de J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, pp. 174-175. Otros autores como J. Barrull, Solé y Villarroja o C. González también han constatado que el del OP era «el terreno sin duda más sensible», y que «el ejercicio de la represión y la violencia se tornaba en político y en lucha por el control del poder entre los partidos»: *Violència popular i justícia revolucionaria*, p. 88, *La repressió a la rera-guarda*, pp. 202-205, y *Guerra Civil en Murcia*, p. 175, respectivamente.

de 1937, las formaciones del Frente Popular aragonés habían comenzado a no estar satisfechas con los acuerdos que, dos meses antes, habían llevado a la constitución de la Junta o Cuerpo de Seguridad. En consecuencia, a lo largo de toda la primavera lloverían las críticas a la CNT y al Consejo de Aragón por el retraso en la organización de ese cuerpo y por no cumplir la prometida desaparición de la consejería de Orden Público o, en su defecto, el reparto más equitativo de sus fuerzas. Polémicas sobre si eso se había acordado o no al margen —en el documento de constitución de la Junta no se alude a ello—, resulta evidente que la cuestión clave era ese reparto. Para republicanos, socialistas y comunistas, el problema era que «una sola organización monopoliza el Orden Público», dejándoles a ellos sólo «el 25 por ciento». Así las cosas, no había por qué andarse con rodeos a la hora de plantear sus peticiones: la desaparición de esa consejería y de la Delegación Gral. de Orden Público «con el fin de obviar la desproporción de fuerzas que se produce con este hecho en el Consejo de Aragón», y su sustitución por otras instancias divididas a partes iguales entre la CNT y el Frente Popular. Después del mayo barcelonés, cuando la balanza política del momento se inclinaba hacia su lado, lo que debía sustituirlas era ya, como en Cataluña, los organismos y fuerzas de seguridad de la República. Semanas después, a mediados de junio, esos deseos se hacían realidad.⁹⁰

A esas alturas, sin embargo, aquello ya no parecía suficiente. El Consejo de Aragón dejaba de controlar las funcio-

⁹⁰ *Nuevo Aragón*, 19-6-37. Las críticas y peticiones del Frente Popular están recogidas del Escrito del CR del Frente Popular al CR de la CNT sobre el Consejo de Aragón, Caspe, 28-4-37 (en FPI, AH, caja 16, carp. 23, e *ibidem*, AASM, caja 512, carp. 7), aunque las hay semejantes en documentos parecidos: AGCS, PS Barcelona, carp. 397: Carta de E. Bordonaba... a J. Ascaso, marzo de 1937; *ibidem*, carp. 821: «Informe relacionado con la constitución del Consejo de Seguridad de Aragón» (PSOE al Ministro de Gobernación), Caspe, 16-5-37; y AGMA, arm. 47, leg. 72, carp. 1: «Informe del CR del Frente Popular... Barbastro», 2-8-37. Para un encuadre de la concreta actitud de la UGT, véase Á. Cenarro, «Violencia, guerra y revolución: la UGT», pp. 163-171.

nes policiales, pero continuaba en parecidos términos una ingente campaña de acusaciones contra la «draconiana dictadura faísta» y la «monstruosa racha de saqueos y asesinatos». «Latrocinio», incautaciones aleatorias, «espionaje al servicio de los rebeldes», imposición de las colectividades por la fuerza, «desorden económico y administrativo», «depósitos de armas», «actos de bandidaje», «muertos tendidos en la cuneta de las carreteras» y, en suma, «indisciplina total» y «reino del terror»; esos eran los contornos de un cuadro del que incluso se destacaron por su virulencia algunos republicanos.⁹¹ Polémicas a un lado, lo cierto es que se extrapolaban los indudables episodios de ese tipo, en un evidente esfuerzo por ganarse a los sectores menos conformes con aquella situación. Poco importaba en este punto que esos hechos fueran cada vez menos habituales, que sus responsables no estuvieran tanto en el Consejo cuanto en los grupos aislados y las milicias o que no se confirmaran sus protestas respecto a que «la gran parte de los saqueados, perseguidos y hasta asesinados han sido, y lo siguen siendo, componentes de las organizaciones del Frente Popular». En la provincia de Zaragoza, esto último se reducía a la confusa muerte de dos ugetistas de Moneva a manos de milicianos de la División confederal de Juvert, cuando eran detenidos en abril de 1937 junto a otros seis soldados del Batallón comunista Komsomol que estaban de permiso -¿aplicación de la «ley de fugas»? Mientras tanto, y con la corriente política en contra, la CNT se limitaba a colo-

⁹¹ Por ejemplo UR en reunión de su Comité Nacional, 5-8-37 (AGCS, PS Barcelona, carp. 14, leg. 34). La mayor parte de las citas y acusaciones provienen del escrito del CR del Frente Popular citado en la nota anterior; el resto, de «Tales hechos se producen...», s. f., s. d.; escrito del PCE zaragozano a su CR regional, agosto 1937; «Relación de hechos merecedores de ser conocidos...» (PCE Aragón, julio 1937); y en las cartas del «Comisario Jefe» (PCE) a Madrid, 1 y 8 de agosto, donde se habla de «escenas de verdadero canibalismo», «individuos de Investigación armados hasta los dientes» y «miles de denuncias», se califica a F. Foyos de «asesino cien por cien» y se pide «que el Gobierno concentre todo el OP en mis manos, para de esta forma poder operar a fondo» (todos en AGCS, PS Barcelona, carp. 373, leg. 494). Denuncias sobre casos concretos, en *ibidem*, carp. 397 (Alforque), y FPI, AH, caja 16, carp. 20 (Azuara).

carse a la defensiva y, cuando las denuncias eran fundadas, a echar balones fuera.⁹² Y a prepararse para lo peor. Porque, como quedaba claro tras todas esas denuncias, lo que estaba en juego era la propia existencia del Consejo de Aragón, último obstáculo en el proceso de extensión del poder estatal y de las organizaciones que lo controlaban.

El 11 de agosto ese obstáculo desaparecía. La *Gaceta de la República* publicaba el decreto de disolución de ese «cantón independiente», tan ansiada por Azaña y pedida por el Frente Popular aragonés primero confidencial, y luego públicamente, desde hacía tiempo. Era el jalón más decisivo, tras las jornadas de mayo, en lo que el Presidente de la República llamaba de forma harto elocuente «rescate del Orden Público por el Estado». O, como rezaba el decreto, un paso más frente a la «división y subdivisión del poder» y la «dispersión de la autoridad». El nuevo estado de cosas lo sancionaban esa misma tarde el General Pozas, Lister y el nue-

⁹² En Gelsa de Ebro, el 13 de junio eran fusilados siete vecinos de derechas (cuatro hombres y tres mujeres) en lo que era el último «paseo» colectivo de la zona. Cuando varios republicanos fueron al Comité de Guerra de la columna a preguntar quién había ordenado esas muertes, el jefe miliciano les afirmaba tajante «que si querían saber demasiado correrían la misma suerte, y que se ocupasen tan solo de la administración municipal» (AHN, CG, leg. 1425 (2), rama de Gelsa, f. 43). Un mes después, ante las duras acusaciones de las JSU, las JJLL de Gelsa contestaban que la CNT no sabía nada de esos sucesos, «y no queremos saber más de ellos, puesto que eran elementos fascistas, que por nuestra benevolencia habíamos dejado libres, y en pago hicieron una chocolatada para celebrar la caída de Málaga, y que el otro día, cuando vimos caer un aparato leal incendiado decían: '¿qué os parece, que vais a ganar vosotros?'» (*Cultura y Acción*, 25-7-37). La defensa de todas las acusaciones vertidas sobre el Consejo en materia de Orden Público, culpando además al Frente Popular y al PCE de dificultar y obstruir esa labor, en los informes de J. Ascaso posteriores a su destitución: «Informe para el Pleno de Comarcas de Alcañiz», 11-12-1937, e informe al CR de la CNT de Aragón, 22-11-37 (AGMA, arm. 46, leg. 67, carp. 1, y en FPI, AASM, cajas 511, carp. 2 y 512, carp. 2). Una firme negativa de la CNT ante «la táctica del terrorismo o atentados personales» propuesta por algunos ante la situación crítica que se vivía, en circular del 3-8-37 (*ibidem*, caja 513, carp. 12). Lo de Moneva, en «Sucesos ocurridos en Moneva» (UGT, 24-8-37), y el informe elaborado por la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Caspe y por la División Juvert: AGCS, PS Barcelona, carps. 397 y 839.

vo Gobernador General de Aragón José Ignacio Mantecón —sustituto de Ascaso— en una proclama o mitin desde el balcón del Ayuntamiento de Caspe, el mismo desde el que un año antes se juzgara públicamente a algunos «fascistas». Pese a todas las precauciones tomadas, «el decreto se hizo efectivo con mucho menos ruido de armas del que se temía». En realidad con ninguno, porque, más allá de la marcha-huida de algunos libertarios a las columnas confederales del frente aragonés y de ciertos movimientos nocturnos de hombres y armas, «hubo nula resistencia». De este modo, los «grandes destacamentos de fuerzas» policiales y militares llegadas durante las semanas anteriores para sustituir a las de la disuelta consejería de Orden Público y para la próxima ofensiva en el frente aragonés —sobre todo la XI División de Lister— apenas tuvieron que intervenir. O al menos no más allá de lo requerido por el objetivo de coger a esos «sacripantes del Consejo de Aragón» y «meterlos en la cárcel».⁹³

A llenar las cárceles, en cambio, sí dedicaron tiempo y energías. Ya desde el día 11, las tropas de la XI División iniciaron una oleada de detenciones de los cenetistas que no habían huido ni encontrado un escondite seguro. En Caspe, según los testimonios recabados, «los cogían por la calle, como a conejos, y a la cárcel». Entre los detenidos estaban

⁹³ M. Azaña, *Memorias políticas*, vol. II, pp. 70 y 220, aunque hay también alusiones constantes al tema en pp. 685-688, 710, 733, y pássim. El decreto de disolución aparece en el primer número del *Boletín Oficial de Aragón (BOA)*, 22-8-37. Lo de cantón independiente es de Manuel Tuñón de Lara, *La España del siglo XX. III: La Guerra Civil (1936/1939)*, Laia, Barcelona, 1981, p. 706; y el poco ruido de armas, del Ministro de Gobernación y encargado de preparar el decreto: J. Zugazagoitia, *Guerra y vicisitudes de los españoles*, p. 299, donde hay un buen relato de su preparación. El mitin y la nula resistencia, en los testimonios de A. Gambau y J. G., Caspe, 18 y 19-3-1999, quienes describen la actitud de esas fuerzas como de «toma militar» de Caspe en la que se desplegarían armadas por calles y locales de CNT, JJLL y la Colectividad. Más datos sobre esta disolución, en J. Peirats, *La CNT en la revolución*, vol. II, pp. 271-288; J. Borrás, *Aragón en la revolución*, pp. 191-198; J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, pp. 264-271 y 293-295; y G. Kelsey, *Anarcosindicalismo y Estado en Aragón*, pp. 430-441.

líderes anarcosindicalistas locales, dirigentes de las colectividades —como los presidentes de las de Lagata y Maella— y de los consejos municipales que pertenecían a la CNT —caso, entre otros, del presidente del de Escatrón. Pero estaban también la plantilla del periódico *Nuevo Aragón*, los que habían trabajado en el Consejo de Aragón, sobre todo aquellos que habían tenido responsabilidades en el departamento de Orden Público —Ballano, Foyos o Ezequiel Erla— y, «en cumplimiento a lo dispuesto por el Gobernador General de Aragón, [...] todos los individuos que hayan pertenecido al disuelto Cuerpo de Investigación».⁹⁴ No faltaron tampoco los miembros del Comité Regional de la CNT, tres de los cuales sufrieron, junto a «más de cuarenta compañeros», una «detención y secuestro» en una «cueva a orilla del Ebro, cual piara de cerdos», a las afueras de Caspe. Según los testimonios de algunos de ellos, eran «rehenes» de la citada División, «bajo el yugo y la férula de Lister», para el caso de que hubiera choques con las divisiones confederales, y serían por fin liberados cinco días después por la intercesión de las nuevas autoridades civiles, que al parecer nada sabían del asunto.⁹⁵

⁹⁴ Escrito de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Alcañiz al Comisario de Caspe, 16-8-37: AHN, CG, leg. 1426, anexo 2/3. Ballano y Erla, por ejemplo, habían sido detenidos el 21 de agosto (informes sobre los presos remitidos al Tribunal Popular de Caspe, 6-12-37, en *ibidem*). El resto de los datos, y otros semejantes, en *ibidem*, piezas nº 2 y 3, y en el escrito de los presos de la cárcel de Caspe al Juzgado firmado el 24-11-37 (AGCS, PS Barcelona, carp. 1048), mientras el primer entrecomillado es del testimonio de J. G., Caspe, 19-3-1999. Este asunto, y en suma todos los vistos en este epígrafe, fueron tratados más extensamente en su día por J. Casanova en *Anarquismo y revolución*, pp. 269 ss., y a esas páginas hemos de remitir.

⁹⁵ «Informe de los hechos acaecidos en varios pueblos de Aragón...», 18-8-37 (en AHN, CG, leg. 1426, pieza nº 2, y en FPI, AASM, 512-23 y 513-12). Sobre los mismos hechos, «Acta del Pleno Regional de Sindicatos...» Caspe, 11-9-37 (*ibidem*, 510-36), informe del Sindicato de Caspe al Pleno Regional..., sept. 1937 (*ibidem*, 510-45), y las «Memorias» inéditas de uno de los que lo vivieron, Manuel Agut (copia mecanografiada). Todas esas detenciones tenían para el periódico socialista *Adelante* una clara lógica: en «esta conquista... no hay bajas, aunque sí es indispensable que existan rehenes. Es así como teníamos que

Otros muchos, varios cientos en toda la región, no tendrían esa suerte y permanecieron en las cárceles durante semanas e incluso meses. Parte de ellos, aunque no disponemos de datos precisos, pasaron finalmente por los tribunales de una Justicia que era cada vez menos «popular» y más «normalizada». Independientemente de las sentencias impuestas —cuando éstas llegaban primaban los sobreseimientos—, lo sintomático de los cambios que se estaban viviendo era que, junto a los «fascistas» y «desafectos», ahora pasaban por los mismos juzgados los antifascistas. Como los once cenetistas de Maella a los que se instruyó sumario por desafección a causa de unos disturbios que se habían reducido a gritar vivas a la FAI y mueras al Gobierno con motivo de la movilización de quintas; o como el propio Francisco Foyos, procesado por «delitos conexos de incautaciones, multas, detenciones, registros y requisas ilegales». Otros simplemente siguieron encarcelados, a menudo sin que se les tomara declaración ni conocieran de lo que se les acusaba, y algunos de ellos aún seguían en esa situación cuando, en marzo del 38, los franquistas llegaban a sus puertas.⁹⁶ Peor fue el destino deparado

posesionarnos de Aragón.» (en G. Kelsey (ed.), *El Consejo Regional de Defensa de Aragón. II: su acoso y destrucción*, Fundación Salvador Seguí, Madrid, 1989, p. 154, obra que reproduce algunas de las fuentes principales sobre este tema.

⁹⁶ En las fragmentarias fuentes de que disponemos sobre esos presos, casi siempre cenetistas, se habla de «trescientos y pico» a finales de agosto, «más de cuatrocientos» en septiembre o alrededor del medio millar en octubre, pero se trata de cifras que abarcan toda la región aragonesa (circular de la CNT «a los militantes de Aragón», 31-8-37; «Acta del Pleno Regional de Sindicatos...» Caspe, 11-9-37; e «Informe de la delegación que fue a Aragón...», 17-10-37, todas en FPI, AASM, 512-1, 510-36 y 512-35, respectivamente). Según el documento más fiable, los presos a inicios de septiembre eran 475, 130 de ellos en la cárcel de Caspe, mientras que esas cifras bajaban a 89 y 64, en cada caso, en diciembre (*ibidem*, 513-2: escrito de los presos de CNT en la cárcel de Caspe). En enero quedarían «más de setenta», y en febrero aún había nueve de Caspe y trece de Maella «a disposición del Gobierno Civil» («Relación completa de los individuos...», 16-1-38, y circular del CR de la CNT, 12-2-38: AHN, CG, leg. 1426, pieza nº2 y anexo 1/3). Los datos y sumarios sobre los juzgados, incluidos los de los maellanos y F. Foyos, en AHN, CG, legs. 1427 (1 y 2), anexos 1/5 y 2/5, y 1430 (2).

a dos cenetistas a los que soldados de la División de Líster aplicaron la famosa «ley de fugas», junto a Caspe, en los días inmediatos a la disolución del Consejo de Aragón. Uno era un recluta forastero movilizado en esa misma división que había protestado ante un oficial por el duro trato dispensado a los libertarios; el otro, Ernesto Bosque, había sido el presidente de la colectividad de Maella. Aunque aquello estuvo muy lejos de ser una nueva Kronstadt, como gustaron de decir los anarquistas, la «generosa sangre del pueblo» había vuelto a correr, y eso marcaba un hecho fundamental en la memoria de aquellos años entre sus protagonistas.⁹⁷

Si las cárceles se llenaron de cenetistas, lo contrario sucedió con los locales de sus sindicatos y con colectividades y consejos municipales. Al llegar a Caspe, las tropas de la XI División procedieron «sin la menor comunicación» a «ocupar todos los centros políticos y sindicales, excepción hecha de los del Partido Comunista», destruyendo o llevándose de ellos documentos, pasquines, muebles y todo tipo de enseres. Días después, la Guardia de Asalto entraba en Fabara y Maella «disparando, [...] formados en guerrilla», amenazando a los anarquistas con fusilarles e incautándose de los bienes de la colectividad. Lo que venía después se repitió, según estas mismas fuentes, en buena parte de los pueblos de la retaguardia zaragozana: saqueos y clausuras de los centros libertarios, registros

⁹⁷ Para esas muertes, A. Gambau, «Caspe en la II República y la guerra civil»; M. Agut, «Memorias»; los testimonios de A. Gambau, Caspe, 12-12-98, y P. Arbona, Maella, 18-3-99, y J. Borrás, *Aragón*, pp. 198-205. No habiendo encontrado el dato exacto de estas dos muertes ni en la CG ni en los registros civiles, hemos optado por no incluirlos en el cómputo de víctimas. Aunque hablando de todo Aragón, en las fuentes cenetistas se encuentran alusiones a que «han perdido la vida cuatro compañeros» y «algunos de OP habían sido fusilados» (FPI, AASM, 513-14: carta del CR de la CNT a su Comité Nacional, 1-10-37; y AGMA, arm. 46, leg. 69, carp. 16: carta del compañero Sanclemente al CR de la CNT, 7-9-37). El asunto sería caballo de batalla entre anarquistas y comunistas durante mucho tiempo. Dos negaciones de toda esta violencia por protagonistas del PCE, en Santiago Álvarez, *Memorias*, Do Castro, Coruña, 1986, vol. II, pp. 259-271, y Enrique Líster, *Nuestra guerra*, Librairie du Globe, París, 1966, pp. 151-155.

y hostigamiento a los cenetistas, devolución de lo incautado en 1936 a los derechistas, etc. Lo más significativo era, sin embargo, la sustitución de los consejos municipales dominados por la CNT por comisoras gestoras gubernativas «de dudoso antifascismo» y el desmantelamiento de muchas colectividades, ante la intensidad de lo cual se levantaron incluso algunas voces comunistas. Sólo los lugares más cercanos al frente como Herrera y Sástago, en los que estaban instaladas las columnas confederales, se librarían de esas acciones. Pero eran, en todo caso, excepciones que confirmaban la regla. Las persecuciones, las desventajas económicas y las denuncias —como en Nonaspe, Gelsa de Ebro o Fabara— las sufrían ahora los que se habían servido de ellas al socaire de la gran transformación social vivida desde el verano de 1936. En clara referencia a la CNT, las nuevas autoridades de esa última localidad citada buscaban «perseguir implacablemente a los que traten de hacer imposición por amenazas o actos violentos» y convencer a la población de que saldrían «en todo momento a la salvaguarda de la justicia y el orden, y en particular de los intereses privados particulares.» Un año después, la revolución y la violencia habían cambiado claramente de rumbo.⁹⁸

⁹⁸ Archivo de Fabara, leg. 42-19: acuerdos de la Asamblea del Frente Popular, 20-8-37. La referencia a Caspe procede del citado «Informe de los hechos acaecidos...» (FPI, AASM, caja 512, carp. 23) y, como en las de Fabara, Maella, Herrera y Sástago, de los respectivos informes de esas localidades enviados al Pleno Regional de Sindicatos de septiembre de 1937 (*ibidem*, caja 510, carp. 45). Más datos, en caja 510, carp. 40; caja 512, carp. 2, y caja 513, carp. 13 del mismo fondo documental. A partir de las fuentes manejadas (sobre todo FPI, AASM y AHN, CG), puede citarse a Escatrón, Samper del Salz, Nonaspe, Osera y Moneva como otros ejemplos de desmantelamiento de colectividades, y a Chiprana, Alforque o de nuevo Moneva como casos de destituciones de consejos municipales. Para estos dos importantes temas, véase J. Borrás, *Aragón*, pp. 198-205; Félix Carrasquer, *Las colectividades de Aragón*, Laia, Barcelona, 1986, pp. 205-216; G. Kelsey, *Anarcosindicalismo y Estado*, pp. 441-444; B. Bolloten, *La Guerra Civil española*, pp. 799-807, y sobre todo J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, pp. 280-292. Sobre la pervivencia hasta febrero de 1938 de las gestoras que los sustituían, AGCS, PS Madrid, carp. 624: «La ilegalidad política...», y «Los abusos cometidos en la región». Las denuncias de los pueblos citados, en AHN, CG, leg. 1429 (1), anexo 2/7; AGCS, PS Barcelona, carp. 397, y Archivo Municipal de Fabara, leg. 42-19.

Los que tras esos cambios llevaban ahora el timón se ocuparon prontamente de asentarlos. Relegadas a un segundo plano político y militar la CNT y las divisiones confederales, los nuevos dirigentes aragoneses pudieron quemar varias etapas en el camino hacia la «normalización» o centralización del poder y de sus resortes. Entre ellos los referidos a la regulación de la violencia y de la represión en sus diversas formas. No es pues casualidad que una de las primeras medidas del nuevo Gobernador General se dirija al control de la tenencia de armas, ni que en la primera reunión del «Frente Popular Antifascista» aragonés, en septiembre de ese año, se acuerde el «mantenimiento de una rígida política de Orden Público». Tampoco lo es que, durante ese mismo mes, el propio Gobernador impulse la restauración de la Justicia Municipal, ni que en octubre se reconstituyan los Juzgados de Partido y se cree la Audiencia Territorial de Aragón, pasos todos ellos hacia la recuperación para la Justicia «histórica» de atribuciones que desde hace unos meses desempeñaba la «popular».⁹⁹ Y no lo es, en fin, que también desde septiembre se impulse y se inicie por toda la retaguardia la constitución de las Juntas Calificadoras Municipales, organismos dependientes del IRA —y por tanto del Ministerio de Agricultura— cuya finalidad era sancionar, o en su caso suspender, las incautaciones llevadas a cabo durante el fragor de un año antes. En otras palabras, revisar, dirigir y dar un marchamo legalista a una de las formas de represión más habituales durante el primer año de guerra.¹⁰⁰

⁹⁹ Esas tres medidas en el ámbito judicial, AHN, CG, legs. 1429 (1), anexo 2/7, y 1427 (2), anexo 1/5, y en BOA, 1-10-37, respectivamente. El control de las armas, en bando del Gobernador (*ibidem*, 22-8-37), y la política de OP, en FPI, AASM, caja 512, carp. 17.

¹⁰⁰ Entre los datos conservados, en septiembre se crearon las Juntas en Nonaspe y Alborge, en octubre en Osera de Ebro y Escatrón, en noviembre en Lagata, o en diciembre en Samper del Salz, Villar de los Navarros y Herrera. También hay datos sobre su existencia en Moneva, Fuendetodos, Caspe, Gelsa de Ebro, Lécera, La Almolda, Quinto, Bujaraloz y Cinco Olivas: AHN, CG, leg. 1429 (1 y 2), anexos 1/7, 2/7 y 2/8, y leg. 1852. Las circulares y órdenes del

Sin embargo, esa supuesta «paz social» no se extendió uniforme y automáticamente por estas comarcas, y también encontró sus límites. No cabe establecer, pues, desde ese punto de vista, una drástica solución de continuidad entre esta etapa y la «anarquía» de los meses del Consejo de Aragón. La insistencia de las nuevas autoridades en la necesidad de cumplir las citadas disposiciones indicaba que no siempre eran aceptadas sumisamente. Insistencia que, dado que «existen todavía pueblos en que por las autoridades locales no se da puntual y exacto cumplimiento a las órdenes del Gobierno», se trocaba incluso en amenazas a la altura de 1938. Otra prueba era la reorganización de no pocas colectividades a lo largo del otoño, que, aunque sin el vigor que les daba antes el poder de las armas y la hegemonía política, se mantenían como organismos más o menos autónomos reacios a entrar en la centralización del poder. Según un significativo informe sobre Pina de Ebro, «la Colectividad, hoy en día, funciona autónomamente, sin tener en cuenta para nada absolutamente al Consejo Municipal» y acaparando buena parte de la producción y más de la mitad de la población. Pese a todos los cambios, la explotación colectiva seguía en manos de los cenetistas, «que están apoyados —y ahí estaba una de las claves del asunto— por las fuerzas militares que operan en aquel sector y que como es sabido pertenecen a la 26 División Durruti».¹⁰¹

Gobierno sobre la constitución de esas juntas, en *BOA*, 10-9-37, 16-9-37, 12-11-37 y 10-12-37. Un estudio de las mismas aplicado a otro marco regional, en M^a Luz de Prado *et al.*, «Las expropiaciones a campesinos desafectos a la República: un análisis de las provincias de Albacete y Valencia», en J. Aróstegui (coord.), *Historia y memoria de la Guerra Civil*, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988, vol. II, pp. 343-365.

¹⁰¹ «Informe sobre Pina de Ebro», Caspe, 22-10-37 (AGCS, PS Barcelona, carp. 397). Otras colectividades reorganizadas eran las de Bujaraloz, La Almolida, Lécera, Azuara, Sástago y Gelsa de Ebro. *Cfr.* Frank Mintz, *La autogestión en la España revolucionaria*, La Piqueta, Madrid, 1977, p. 182, y J. Borrás, *Aragón*, pp. 205-207. Las insistencias en cumplir las disposiciones, en *BOA*, 10-9-37, 16-9-37, 12-11-37 y 10-12-37, y la amenaza en el mismo boletín, 17-1-38.

No era fortuito que este caso tuviera lugar en una de las zonas más próximas al frente, únicas donde las armas de las divisiones mantenían algunos de esos contrapoderes del primer año y en las que, por eso mismo, la extensión de las nuevas autoridades podía provocar pugnas y roces entre unos y otras. Por lo demás, el resto de conflictos de que tenemos noticia se producen igualmente en esas zonas. En Velilla, no lejos de Pina, fuerzas policiales del Gobernador General debieron aparecer ante la llamada de medio centenar de antiolektivistas que se creían en peligro de ser fusilados. Y en Lagata, más al sur, cuando agentes de Caspe procedían a detener a diecisiete derechistas denunciados por el Consejo Municipal en noviembre del 37, se encontraron con que un comandante de la División allí instalada —la 25— se lo impedía tajantemente. Sus elocuentes argumentos eran que estaba «harto» de «permitir que los agentes de policía hiciesen detenciones en zona de guerra, y que si funcionaba un Consejo Municipal no tenía atribuciones ninguna en realidad, y que por esto le había dejado funcionar», para acabar preguntando si acaso el Gobernador Mantecón «no sabía que aquello era zona de guerra y dentro de la cual no había más jurisdicción que la militar».¹⁰²

El más grave e ilustrativo de los conflictos, no obstante, se registraba precisamente en Pina, sector en el que, cuentan los testigos, «había dos frentes, uno contra Franco, y otro entre los anarquistas y la República», en otras palabras entre la colectividad y los que se habían salido de ella y organizado como «individualistas». A mediados de septiembre, un delegado del mismo Gobernador había llegado con la orden de sustituir el Consejo Municipal —formado enteramente por cenetistas— por otro repartido a partes iguales entre republicanos y la UGT. Por dos veces llevó a cabo tal sustitución, y

¹⁰² Informe de los agentes al Comisario Jefe de Caspe, 15-11-37 (AGCS, PS Barcelona, carp. 397). La referencia a Velilla de Ebro es del testimonio de R. Guiu, Zaragoza, 20-4-99.

por dos veces el comité de guerra de la 26 División repuso el anterior y forzó al delegado a irse. La tercera, con presencia de guardias de Asalto de Caspe, debió de ser la definitiva, pues el informe arriba citado señalaba que en octubre ya existían las desavenencias entre la colectividad de la CNT y la nueva gestora municipal. En ésta, según la CNT local, figuraban algunos de «los elementos más sospechosos del pueblo y más reaccionarios que ahora se hacen pasar para escurrir el bulto por de Izquierda Republicana.» Para completar el panorama, entre las fuerzas militares a disposición del comité de guerra se mantenía la ya citada «Banda Negra» que practicaba ocasionales registros y detenciones, «con el único fin de mantener el terror que han conseguido imponer», y que para algunos era «como la ‘Investigación’ que tenía el ex-Consejo de Aragón».¹⁰³ A finales de octubre, esa situación tenía un triste epílogo con la desaparición y asesinato de dos de los republicanos miembros del nuevo consistorio a manos de «fuerzas militares, en turbio contubernio con elementos civiles». Era la estruendosa respuesta de quienes «no reconocían más autoridad que la de la Columna ‘Roja y Negra’» ante la encarcelación en Caspe de varios colectivistas de Pina y, en suma, ante los cambios en el equilibrio de poderes.¹⁰⁴

Aunque no conviene olvidar que venían a confirmar una tendencia iniciada muchos meses antes, esos cambios harían que ésa fuera una de las últimas respuestas de ese tipo. Algunos otros zaragozanos murieron fusilados en otras pro-

¹⁰³ «Informe sobre Pina de Ebro», *loc. cit.*, e informe del Sindicato de OO.VV. de Pina al CR de CNT, septiembre de 1937 (FPI, AASM, caja 514, carp. 15, f. 34), aunque la primera cita es del testimonio de V. Gayán (Pina, 26-7-1999).

¹⁰⁴ Informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia al Gobernador Gral. de Aragón sobre esas muertes, Caspe, 8-11-37: AGCS, PS Barcelona, carp. 397; AHN, CG, leg. 1425 (2): rama de Pina; y la referencia a esas víctimas en el Libro de Defunciones que llevaba el propio Consejo Municipal del que formaban parte, y que es el único documento relevante sobre la guerra que se conserva en el Archivo Municipal de Pina.

vincias, pero la retaguardia de ésta sólo registraría otras dos muertes hasta la retirada republicana de marzo de 1938. Pasado hacía tiempo el estallido inicial, y con la lucha por el poder político meridianamente resuelta en favor del Estado y de unas organizaciones políticas determinadas, la violencia física ya no tenía el «sentido» que se le había visto meses atrás y tendía de forma inexorable a desaparecer. No sin que antes, empero, el nuevo «orden» presenciase su último pero intenso renacer apenas unas semanas después de la disolución del Consejo de Aragón. Aquello era antes que nada una guerra, y en ocasiones todo se subordinaba a ella.

La ofensiva de Belchite y el postrer rebrote de la represión

Después de que el frente zaragozano —y en general el aragonés— no registrara actividades bélicas destacables desde principios del otoño de 1936, con la débil excepción de algunas escaramuzas en primavera, el 24 de agosto se iniciaba una gran ofensiva del Ejército Popular cuyo objetivo teórico era la capital aragonesa. Como dejara anotado Azaña, es probable que nadie, ni siquiera el general Rojo que la había planificado, creyera seriamente en la posibilidad de tomar Zaragoza y que la campaña no tuviera otro objetivo que distraer a Franco en un momento en que estaba a punto de derrumbarse todo el frente Norte. Por lo demás, como repitieron después hasta la saciedad los autores libertarios, había también un móvil político: se justificaba la presencia de unas tropas que, a su vez, efectuarían y controlarían la disolución del Consejo de Aragón.

Como hemos visto, este último objetivo se cumplió como se esperaba y sin excesivos problemas. No sucedería lo mismo, sin embargo, con los otros dos. Preparada con secreto y cuidado, la ofensiva empezó cuando Vizcaya ya había caído y era demasiado tarde para salvar a Santander, que era tomada un día después de que la misma comenzara. En cuanto a la conquista de Zaragoza, que según los

planes previos sería alcanzada al tercer día, no pasó de un sueño apenas rozado. El fuerte ataque inicial rompió el frente y se progresó en territorio enemigo hacia Zuera y entre Belchite y Quinto, pero ese avance se frenó pronto ante la falta de reservas y sobre todo a causa del excesivo tiempo, energías y efectivos dedicados a vencer las resistencias de pueblos aislados como Codo o Fuentes de Ebro. Pero sería sobre todo Belchite, que pronto entró en la leyenda y el panteón heroico de los vencedores. Allí las tropas republicanas sólo entraron tras un dramático cerco —día a día más estrecho hasta concentrar a los sitiados en unas pocas calles— en el que se luchaba casa por casa y que duró diez días. Para entonces, la defensa de Zaragoza se había apuntalado y el empuje inicial estaba totalmente agotado. Tras tantas jornadas y muertes, el balance se limitaba a la captura de Belchite, Quinto, Codo, además de otras localidades menores como Mediana de Aragón, Puebla de Albortón y Rodén que habían sido abandonadas en el repliegue franquista. Parco bagaje para una ofensiva que pretendía tomar Zaragoza y que en términos militares no había pasado de un «zarpazo en el aire».¹⁰⁵

¹⁰⁵ Manuel Tuñón de Lara, Gabriel Cardona y José L. Alcófar, *La Guerra Militar*. Vol. 3: *La guerra en el Norte*, Historia 16, Madrid, 1996, pp. 83-86 (cita en p. 86). Hay tratamientos más amplios de esta ofensiva en José M. Martínez Bande, *La gran ofensiva sobre Zaragoza*, Ed. San Martín, Madrid, 1973, pp. 77-153; R. Salas Larrazábal, *Historia del Ejército Popular de la República*, vol. II, pp. 1304-1339; Ricardo Sanz, *Los que fuimos a Madrid*, Petronio, Barcelona, 1977, pp. 145-158; Vicente Rojo, *España heroica*, Ariel, Barcelona, 1975, pp. 103-116; S. Álvarez, *Memorias*, pp. 272-278; Pablo Uriel, *Mi guerra civil*, Fedsa, Valencia, 1988, pp. 246-273. Algunas visiones laudatorias y contemporáneas de los vencedores, en Capitán De Diego *et al.*, *¡Belchite!*, Edit. Nacional, Zaragoza, 1939 (reed. en TARFE, Oviedo, 1996); José Beltrán, *¡Belchite! La gesta de Belchite*, Tip. M. Serrano, Zaragoza, 1937; V. Gracia, *Aragón, baluarte*, pp. 221-276; Eduardo Fuembuena, *Guerra en Aragón. Belchite-Quinto-Teruel*, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1938; Salvador Nonell, *El laureado tercio de Nuestra señora de Montserrat*, Molograf, Barcelona, 1992 (1956), pp. 145-240 y 349-358; José M^a Resa, *Memorias de un requeté*, Bayer, Barcelona, 1968, pp. 56-94; y El Tibib

Ese zarpazo, sin embargo, provocó hondas heridas en algunos de los lugares tomados. En primer lugar, y aunque en este caso no se trataba de las «tribus» de milicianos, los marcó con los ataques simbólicos tan usuales en las entradas en los pueblos en verano del 36. Así, en Mediana eran destruidas todas las imágenes y altares de la parroquia, mientras que en Quinto y Belchite —la «ciudad sacrificada»— «el furor antirreligioso de la chusma» añadía a lo anterior la rotura de objetos de culto, disparos sobre imágenes y varias profanaciones en la iglesia y el cementerio.¹⁰⁶ Aunque con protagonistas y circunstancias diferentes, se repetía con retraso un asalto al pasado similar al que otros pueblos habían vivido un año antes.

En algunas de las localidades tomadas, ese asalto también alcanzó a las personas. Nada más entrar en ellas, los soldados conquistadores procedieron a detener a toda la población —civiles y militares— y a concentrarla en algún lugar de las afueras donde se organizarían la evacuación y los encarcelamientos. La gran mayoría fueron montados en camiones que les alejarían del frente en previsión de nuevos combates en dirección a pueblos del Bajo Aragón zaragozano y turolense como Fabara, Maella, Caspe, Mequinenza, Beceite, Calaceite, Torre del Compte o Calanda.¹⁰⁷ A otros, en

Arrumi (Víctor Ruiz Albéniz), *Aquello de Belchite fue glorioso*, Ediciones España, Madrid, 1943. Además de en los testimonios orales y la prensa, puede encontrarse datos en AGMA, CGG, arm. 7, leg. 369, carps. 2, 3, 12-13 y 23; *ibidem*, DR, arm. 45, legs. 20-21 (agosto-sept. 1937), y Archivo Municipal de Quinto, leg. 2-06 (1938).

¹⁰⁶ AHN, CG, leg. 1425 (2), rama de Quinto; Archivos Municipales de Quinto (leg. 32-08: «Ayto...», 4-10-1938) y Mediana (leg. 5-6: correspondencia, 1938), y *El Noticiero*, 12, 16 y 22-3-1938.

¹⁰⁷ Cfr. las declaraciones de testigos en AHN, CG, legs. 1423 (2) y 1425 (2), ramas de Belchite, Codo, Quinto y Rodén; testimonios de Gregorio Planas (Belchite, 16-5-99), D. P. e Ismael Beltrán (Belchite, 16-6-99), Pilar Villuendas (Codo, 12-9-98), José Valero (Quinto, 20-3-99) e informante anónima (Puebla de Albornón, 6-5-99); y listados y fichas de evacuados en AGCS, PS Aragón, carps. 10, 72, 123 y 136. En éstas aparecen por ejemplo 112 evacuados de Quinto en Maella, ó 55 de Belchite en Valdetormo.

cambio, los camiones les llevarían a campos de prisioneros en Bujaraloz, Lérida o Castejón de Monegros, desde donde a su vez serían conducidos en las semanas siguientes a campos de trabajo de la retaguardia aragonesa, catalana o valenciana. De acuerdo con las declaraciones de los que lo vivieron, el destino que allí les esperaba estaba teñido de hambre, malos tratos, trabajos agotadores y pésimas condiciones de habitabilidad, algo que se cobraría la vida de algunos en los meses que quedaban de guerra. Decenas y aun cientos de esos prisioneros y de los evacuados, además, figurarían en los listados de «fascistas» denunciados por sus convecinos como partícipes en la sublevación de julio del 36 y en los numerosos fusilamientos de izquierdistas de que vino acompañada. Muchos de ellos serían juzgados, pero, con la excepción de los ya vistos sentenciados por el Tribunal Popular, las denuncias no tendrían otras consecuencias que el internamiento en los mencionados campos y, en ocasiones, ni siquiera eso.¹⁰⁸

Otros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte, y su sangre dispararía las cifras de represaliados en agosto (62), y sobre todo en septiembre (84), hasta niveles cercanos a los del verano de un año antes. En total, y sumando otras víctimas

¹⁰⁸ En el AGCS se conservan algunos de esos listados y denuncias contra colaboradores e incluso protagonistas de la rebelión militar y de los fusilamientos en Quinto o Belchite. Por ejemplo, en una «Relación de los individuos vecinos de Quinto...» del Juzgado Especial nº 2 de Caspe, figuraban hasta 155 nombres; en otra de «desafectos a la República» había 148 por haber «prestado apoyo moral, material y personal [durante la sublevación], habiéndose cometido durante este lapso de tiempo sesenta fusilamientos de compañeros antifascistas». En otras hay 52 vecinos acusados de pertenecer a Falange, y diez denunciados por haber «actuado como fusileros de los elementos de izquierda»: *vid.* AGCS, PS Aragón, carps. 10 y 136. Sobre el internamiento en campos de trabajo, remitimos a las declaraciones de los que lo vivieron en AHN, CG, legs. 1423 (2) y 1425 (2), ramas de Belchite, Codo, Quinto; y leg. 1426, pieza nº 4: informe de la Alcaldía de Belchite, 24-7-41, f. 41; y al relato de J. M^a Resa, *Memorias de un requeté*, pp. 95-108. Como quedó apuntado, no hemos incorporado al listado de muertos por represión los fallecidos en esos campos a menos que haya indicios de que lo fueron por asesinato y no por enfermedades ocasionadas por el trabajo y las condiciones de los mismos (caso, este último, de al menos nueve vecinos de Belchite y dos de Quinto).

relacionadas con esta batalla —aunque muertas en los meses sucesivos—, 159 víctimas más de la represión en la provincia, grueso principal de las 190 en toda esta etapa desde verano de 1937 al final de la guerra. Tal como quedó indicado en el epígrafe sobre las cuestiones metodológicas, es en estos casos en los que se plantean los mayores problemas a la hora de establecer el balance de víctimas de la represión republicana en esta provincia. Es seguramente imposible llegar a un número real del total de fusilados, pues no hay datos fiables sobre todos aquellos —la mayoría militares— que provenían de otras regiones. Y aun entre los zaragozanos —que son los que aquí contabilizamos—, en ocasiones no resulta nada sencillo diferenciar a los que murieron en los combates o en los intentos de huida de las poblaciones cercadas de los que fueron ejecutados a la entrada de las tropas republicanas. Esto, que proyecta algunas sombras en los casos de Codo o Quinto, resulta especialmente problemático en el de Belchite.¹⁰⁹

Las dos primeras localidades fueron tomadas —como Mediana, Rodén y Puebla de Albornot— a finales de agosto, pero, al contrario que éstas, tras un día de fuertes combates y centenares de bajas. La misma diferencia se reproduciría en el alcance de la represión. Inexistentes en las dos últimas y reducidos a los de dos víctimas en Mediana —las tropas republicanas habían dejado que sus moradores huyeran hacia Zaragoza antes de entrar—, los fusilamientos añadieron más sangre a la vertida por los combates en los pueblos de Codo y Quinto. En el primero, los principales blancos serían la veintena de requetés catalanes que, heridos por los comba-

¹⁰⁹ Este tema ya lo estudió Ángel D. Martín Rubio, en un trabajo con un notable esfuerzo cuantitativo, aunque meramente descriptivo, que proporcionaba unas cifras mayores de las que aquí se van a manejar. Hemos podido comprobar que en su obituario aparecen algunos muertos en combate y desaparecidos, así como otros que fallecieron en campos de trabajo y cárceles por enfermedades: «Aproximación a la represión republicana en la batalla de Belchite», en Capitán De Diego *et al.*, *¡Belchite!*, TARFE, Oviedo, 1996, pp. 131-187.

tes, no habían podido romper el cerco dirigiéndose hacia Belchite como el resto de los defensores del lugar, y a ellos se les añadirían, según nuestros datos, cuatro vecinos del lugar.¹¹⁰ En el segundo, las fuentes indican que «durante los combates y el 26 de agosto de 1937 murieron un número considerable de militares, algunos de ellos fusilados el citado día», y que «a la entrada de las fuerzas marxistas se fusiló inmediatamente a todos los que tenían graduación de soldado primera por lo menos». Entre ellos, a lo largo de ese día y de los posteriores, diez vecinos de Quinto.¹¹¹

Al igual que en el combate, sería en Belchite donde la represión causara más estragos. Empezaría durante la propia madrugada en la que cayó la ciudad con el fusilamiento —en las propias calles y campos cercanos o en los de otras localidades cercanas— de algunos de los combatientes y civiles capturados cuando intentaban huir en dirección a Zaragoza. Y continuó a lo largo de todo ese 6 de septiembre, en lo que un lúcido testigo llamó «un día largo y decepcionante». Llevada toda la población detenida a los cercanos olivares de Codo y allí dividida en grupos para la evacuación y la detención, a algunos les esperaba otra suerte: «se procedió por las hordas rojas con la intervención de algunos elementos extremistas de la localidad a la selección de prisioneros y en el acto las mismas fuerzas rojas asesinaron sin más procedimiento ni declaraciones a algunos paisanos de la villa, varios

¹¹⁰ El resto de las víctimas del pueblo lo serían en los combates de acuerdo con las propias fuentes franquistas: AHN, CG, leg. 1423 (2), rama de Codo, esp. el informe de la 211 Comandancia de la Guardia Civil, puesto de Belchite (1941). *Cfr.* igualmente Antonio Conill, *Codo. De mi diario de campaña*, s. n., Barcelona, 1954, y S. Nonell, *El laureado tercio*, pp. 223-240, el testimonio de P. Villuendas (12-9-98), y el recogido en Á. Martín Rubio, «Aproximación a la represión», pp. 139-140.

¹¹¹ AHN, CG, leg. 1425 (2), rama de Quinto: estado nº 2, y leg. 1423 (2), rama de Belchite: declaración del sargento de la Guardia Civil M. Segura, 22-9-43, de donde proceden los entrecomillados. Asimismo, el testimonio del testigo José Valero, Quinto, 20-3-99, y sobre todo las relaciones de víctimas de ambos bandos en Archivo Municipal de Quinto, leg. 32-08, *pássim*.

sanitarios y fuerzas excombatientes». ¹¹² Con los ánimos tan calientes como en el verano precedente, y «bajo las bombas de los nacionales cayendo sobre los olivares», era la airada respuesta de algunos al esfuerzo y vidas que había costado el asedio, al fracaso de la ofensiva y a la amplia represión de los sublevados contra la izquierda en 1936. ¹¹³

El mayor número de fusilamientos, sin embargo, aún había de llegar. Ya a finales de agosto, decenas de los presos hechos en Quinto sufrían ese destino —45 de ellos zaragozanos— después de que, llevados a los penales de Bujaraloz, Castejón o Lérida, fueran allí reconocidos y denunciados. Pronto se les añadirían otros capturados en Belchite. El procedimiento parece que fue siempre el mismo: los cientos de hombres albergados en esos campos de prisioneros eran organizados por su lugar de origen y allí eran juzgados o lle-

¹¹² Informe del Ayuntamiento de Belchite, 24-7-41, en AHN, CG, leg. 1426, pieza nº 4, f. 41. Según otro testimonio similar, «Inmediatamente de entrar los rojos en Codo y Belchite fusilaron a todos los defensores que ostentaban alguna graduación, de sargento para arriba, en el olivar de Codo, realizando estos asesinatos un jefecillo rojo en presencia de Líster hasta que un comandante del ejército marxista le impidió continuar con los cabos, sacerdotes y demás personas de derechas que ya estaban separadas, imitando el ejemplo seguido en Quinto. [...] Que el declarante oía, como el resto de los prisioneros, los disparos de estas ejecuciones»: declaración de Manuel Segura, en *ibidem*, leg. 1423 (2), rama de Belchite, f. 75. Véase el testimonio de otro testigo en César Vidal, *Recuerdo mil novecientos treinta y seis... Una historia oral de la guerra civil española*, Anaya & Muchnik, Barcelona, 1996, pp. 190-194.

¹¹³ El enorme número de prisioneros indica no obstante que esos fusilamientos distaron de ser la norma, como también el que «el párroco y los dos coadjutores de Belchite, así como las religiosas que durante toda la campaña estuvieron en los hospitales como enfermeras no fueron maltratados en zona roja y volvieron todos ellos a zona nacional» (AHN, CG, leg. 1426, pieza nº 4: decl. Á. García, fol. 74). Hay asimismo noticias acerca de las «constantes disputas entre los elementos rojos sobre la suerte a dar a los prisioneros» (*ibidem*, f. 75) y sobre el hecho de que los mandos impedirían que los izquierdistas de Belchite -muchos de ellos con muertes que vengar- se acercaran a los detenidos o que la mayoría de las denuncias las realizara un individuo que todos los testimonios orales califican de falangista: G. Planas y V. Ortín (Belchite, 16-5-99), y D. P. e I. Beltrán (Belchite, 16-6-99). Cfr. Pablo Uriel, *Mi guerra civil*, pp. 274-299, de donde procede lo de día decepcionante (p. 274).

vados ante «convecinos rojos huidos desde el principio de la guerra» que les conocieran y, en su caso, les denunciaran. Si esto sucedía y la acusación era grave, eran sacados y llevados en grupos numerosos a fusilar en lugares próximos, como los Monegros, los montes de Pina o algún paraje en las afueras de Bujaraloz. Así acabaron sus vidas, por ejemplo, 24 belchitanos ejecutados junto a Castejón de Monegros (Huesca) el 14 de septiembre de 1937. Pero también otros muchos vecinos de zonas de la retaguardia franquista, a menudo jóvenes voluntarios de Falange, como los trece de Tauste y los doce de Gallur apresados en Quinto, los nueve de Zaragoza, los seis de Zuera, etc.; así hasta llegar a casi la mitad de los zaragozanos que resultaron fusilados tras ser capturados en esta ofensiva.¹¹⁴ En su mayor parte, y no puede ser casual, provenían de lugares donde más izquierdistas habían muerto en la otra zona. La venganza, en suma, estaba servida.

Pasado el mes de septiembre, como indicaba la gráfica I, las cifras de fusilados vuelven a descender a valores semejantes o inferiores a los anteriores y ya no volverán a experimentar alzas considerables. De las 39 víctimas registradas hasta el final de la guerra, una treintena mueren fuera de la provincia en campos de prisioneros, cárceles o frentes en los que son denunciadas. Quince de ellas provenían de las capturas de presos en la ofensiva de Belchite, y otras seis de la

¹¹⁴ Las fuentes franquistas hablan de más víctimas, aunque con toda probabilidad se trata de soldados de otras regiones. Según ellas, 80 prisioneros hechos en Quinto fueron sacados de la cárcel de Lérida y asesinados «en varias noches y lugares entre ellos en la carretera de Lérida a Zaragoza cerca de Bujaraloz y en el cruce con la carretera de Gelsa». Y parecida suerte parece que corrieron, por ejemplo, 26 guardias civiles capturados en Belchite que estaban recluidos en el Castillo de Gardeny de la capital ilerdense. Para todos esos datos, AHN, CG, leg. 1423 (2), rama de Belchite (ff. 66-80). Las mismas fuentes insisten en la responsabilidad de convecinos de las víctimas, como en el caso de todas las de Tauste, Gallur, Remolinos, Borja, etc.: *vid.* las ramas respectivas en *ibidem*, legs. 1423-1426, o la comparecencia de siete familiares de las víctimas de Gallur en la rama de Quinto (leg. 1425 (2), f. 11).

batalla que culminaría con la toma de Teruel. Poco después, marzo de 1938 se cobraba la vida de seis hombres en los precipitados y angustiosos momentos de la retirada del Aragón oriental ante la llegada de las tropas franquistas.¹¹⁵ Eran los últimos ajustes de cuentas, las últimas llamas antes de que el sueño republicano se extinguiera y exiliara de estas tierras; el último y breve germinar de una violencia cuyo testigo recogerían desde entonces en estas comarcas sus nuevos conquistadores.

Las conclusiones que se imponen tras un largo viaje a través de un año y medio no pueden resultar ya extrañas. El estudio cuantitativo y cualitativo de las diferentes etapas de la represión en la retaguardia republicana zaragozana muestra que no se trata de una violencia «inundatoria», homogénea, «perfectamente orquestada y dirigida» desde arriba por el poder revolucionario. Al contrario, surge en primer lugar no tanto de la *violencia revolucionaria* supuestamente consustancial a todo movimiento emancipatorio, sino antes bien de una *violencia en revolución* que ésta no pretendería explícitamente y que acabaría controlando, pero que «desencadenó al trastocar los equilibrios inconscientes y frágiles que rigen la relación con lo sagrado». Y, sobre todo, surge del colapso del Estado y del fraccionamiento del poder, y la historia de su progresiva e indudable reducción es paralela a la gradual superación de esa dispersión. Desde ese punto de vista, sería

¹¹⁵ La ofensiva franquista que derrumbó el frente aragonés se inició el 9 de marzo, y las tropas republicanas no pudieron hacer otra cosa que retroceder. Al día siguiente habían reconquistado Belchite, el 17 entraban en Caspe y el 1 de abril ya habían completado la ocupación de los últimos pueblos de la provincia, quedando en manos republicanas apenas unas hectáreas o «bolsa de Mequinenza». Véase para el desarrollo de esta ofensiva AGMA, DR, arm. 45, legs. 29-30, y arm. 62, leg. 768, carp. 1, doc. 5: «El derrumbamiento del Frente del Este...», 2-4-38; S. Álvarez, *Memorias*, pp. 337-355; R. Sanz, *Los que fuimos a Madrid*, pp. 163-217; R. Salas Larrazábal, *Historia del Ejército Popular*, vol. II, pp. 1711-1827; y G. Cardona *et. al.*, *La Guerra Militar*, vol. 4: *El frente de Aragón*, pp. 7-52. Para la última acción bélica en territorio zaragozano, *Estiu Ardent*, *op. cit.* Un frustrado intento de represalias en la retirada, en F. Gálvez, *En los Monegros La Almolda*, p. 142.

abusivo equiparar esa represión con la ejercida por regímenes como el estalinista, el nazi o incluso el jacobino del año II. Como lo sería calificarla con propiedad como *terror*, por cuanto no se definía por su «uso sistemático» ni por haber servido «no para derrocar, sino para mantener, consolidar y estabilizar» la revolución en su etapa de afianzamiento. Pero, sobre todo, porque no era una violencia «oficializada», no formaba parte de una estrategia predeterminada, de un «sistema» o «método normal de guía y gobierno», transitorio o no, al servicio de un aparato estatal poderoso y «pedagógico» que monopolizara sus mecanismos coercitivos. En suma, porque no provenía de un Estado totalitario —como sucedía al otro lado de los frentes—, sino precisamente de la falta y carencias del mismo.¹¹⁶

Sin embargo, tampoco sería —o no principalmente— una violencia «espontánea» surgida del «pueblo en armas» frente a los que le atacaban. Aunque marginal respecto al Estado y carente de una planificación y un objetivo global, la represión estaba inextricablemente unida a los conflictos políticos que, con las armas en la calle, seguían normas de juego no con-

¹¹⁶ Para la definición del «terror» se ha usado aquí P. Calvert, «El terror en la teoría de la revolución», pp. 47-67 (citas en pp. 47 y 53); S. Bialer, *Los primeros sucesores de Stalin*, pp. 24-29; Annie Kriegel, *Los grandes procesos en los sistemas comunistas*, Alianza, Madrid, 1973, pássim; M. Vovelle, *La Mentalité révolutionnaire*, pp. 83-95, que diferencia con toda claridad la «violencia popular» de 1789-1792 del «terror» de los dos años siguientes; y Raymond Aron, *Démocratie et totalitarisme*, Gallimard, París, 1965, esp. 265-284, donde a partir del caso soviético se establece una «clasificación de tres formas de terror», en ninguna de las cuales parece encajar la represión republicana, habida cuenta que en todas aparece un Estado fuerte dominado por un grupo político único. Para una visión radicalmente diferente, Maurice Merleau-Ponty, *Humanisme et terreur*, Gallimard, París, 1980 (1947). Véase asimismo Hannah Arendt, *Sobre la violencia*, Cuadernos de Joaquín Moritz, México, 1970, en cuya p. 52 la autora encuentra que el terror aparece cuando el gobierno se mantiene pero está perdiendo su poder-autoridad. Lo de la represión inundatoria, homogénea y dirigida forma parte de los argumentos de R. Salas Larrazábal, *Pérdidas de guerra*, pp. 381-382, y el entrecomillado sobre el desencadenamiento de la violencia «en revolución» es de P. Viola, «Violence révolutionnaire ou violence du peuple en révolution?», p. 100.

vencionales. En esa lucha, el ejercicio de la violencia se mostró como uno de los campos de batalla básicos y pronto se hizo cosa de unos pocos, de esos nuevos protagonistas que se habían encaramado a los comités locales y de columna, grupos de investigación, etc., y que desde allí, aunque en mayor o menor medida, se servirían de su uso simbólico o real para hacerse un espacio en la revolución. Eran los frutos de la dispersión inicial del poder, y la represión tuvo cabida donde y mientras aquélla persistió, y con ella todos esos grupos o contrapoderes; y, del mismo modo, fue disminuyendo a medida que la autoridad de esos organismos se reducía y por tanto remitían —aunque no sin resistencias— los conflictos entre ellos. Ahora bien, y frente a una interpretación ampliamente extendida, ello no significaba que fuese meramente la reconstrucción estatal lo que acabase con la violencia depuradora, por más que fuera un paso decisivo. Por un lado, y de nuevo aquí lo sucedido en la otra zona era el mejor ejemplo, la existencia de un Estado poderoso y centralizado no era una garantía suficiente para que no se diesen ese tipo de prácticas. Por otro, el sustancial descenso de la actividad represiva desde la creación del Consejo de Aragón mostraba que la clave no era necesariamente tanto el renacimiento de «Leviatán», cuanto la concentración del poder y del ejercicio de la violencia —diseminados en aquel contexto bélico— fuera o no el Estado su protagonista. En suma, como vieran los pioneros en los estudios sobre el tema, la represión estaba «ligada al conflicto fratricida que vivía el país en la lucha por el poder y el control de la retaguardia».¹¹⁷

¹¹⁷ J. Ma Solé i Sabaté y J. Villarroya, *La repressió a la reraguarda de Catalunya*, p. 78. Por lo mismo, es un lugar común que tras la centralización de la represión y de la justicia revolucionaria primero en la Convención girondina y luego en el núcleo robespierrista de París, entre 1792 y 1794, había una dura lucha política en la que «se combinaron el ejercicio del terror y la búsqueda de una posición de poder»: Claude Lefort, «La Terreur révolutionnaire», *Passé Présent*, 2 (1983), cita en p. 40, y Ph. Goujard, «La violence et la terreur», esp. pp. 90-91. Lo de que la represión no había sido algo enteramente «espontánea»,

Sin embargo, no todo sería luchas políticas y por el poder. Junto a ellas, o por detrás, aparecían esperanzas y miedos ante los cambios que se vivían, sinceros convencimientos ideológicos, relaciones personales de la vida comunitaria y rostros. Rostros concretos que a la postre son los que protagonizaron y sufrieron la violencia, los actores de esta historia.



Instrucción de los milicianos del Frente de Aragón (22/8/1936):
AHN, CG, leg. 1834/1

es algo que ya avanzaron P. Broué y É. Témime, *La revolución y la guerra de España*, vol. I, pp. 166-170, y que ha seguido J. Barrull, *Violència popular i justícia revolucionaria*, pp. 29 y 107-113. La tesis de la reconstrucción del Estado como causa del descenso de la represión, en A. Reig Tapia, *Violencia y terror*, v. gr. pp. 120-123.

IV

LOS ROSTROS DE LA REPRESIÓN

Aunque ya han ido apareciendo a lo largo de este trabajo, los protagonistas de este drama deben constituir el objeto final de análisis de la represión. Huelga decir que no se trata de buscar mártires ni culpables, sino antes bien de intentar hacer más nítido ese análisis y contribuir a la caracterización del fenómeno. Porque, pese a los variados mitos que han oscurecido durante mucho tiempo el asunto, rostros concretos fueron los que utilizaron esta violencia en aquella particular coyuntura y, en suma, rostros determinados fueron igualmente sus víctimas.

MILICIANOS Y PAÑUELOS ROJOS

Los primeros protagonistas, y los depositarios de la mayor parte de los mitos vertidos sobre la represión, son sus responsables directos y ejecutores. Ya los hemos visto actuar en los capítulos precedentes, por lo que estas páginas no serían sino un somero balance. Un balance que atienda a una primera identificación de los mismos e intente superar algunas de las imágenes que se han vertido tradicionalmente sobre estos hechos.¹

Respecto a una de ellas, si la represión estuvo lejos de ser «inundatoria» o «universal» en el tiempo y en el espacio, es

¹ Fuerza es reconocer que las fuentes no permiten ir mucho más allá de este primer balance, forzosamente provisional y que hace del asunto un tema pendiente. Ni las fuentes franquistas, ni tan siquiera las orales, escuetas siempre y mudas a menudo a la hora de hablar de los «culpables».

evidente que tampoco lo fue en lo tocante a los que se sirvieron de ella. En otras palabras, no fue un arma de toda esa «chusma roja» revolucionaria, de esas «turbas extremistas» en su asalto al orden establecido. Como tampoco fue, según una lectura «romántica» de muy distinto origen, algo de «naturaleza espontánea» y entusiasta, masivo y propio de un «pueblo en la calle» que aprovechaba la situación para aplicar sin obstáculos su sueño igualitario.² Íntimamente ligado a lo anterior, a menudo se ha insistido también en lo que esta represión tenía de «incontrolada», obra de esos grupos armados de «exaltados», y en ocasiones delincuentes y ex-presidarios, que al principio de la guerra campaban a sus anchas por la retaguardia y las zonas cercanas al frente. Sin embargo, aunque la situación aragonesa pudiera favorecer en los primeros y caóticos días la llegada de esos individuos, unas comarcas rurales como éstas no eran el mejor terreno de actuación para unos grupos nacidos al socaire de la quiebra de las fuerzas de seguridad en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Desde ese punto de vista, durante los primeros momentos se contemplaron con toda seguridad algunas acciones de violencia «espontánea» y otras propias de ese «elemento incontrolado», pero no parece que se les pueda achacar ni la mayor ni siquiera una considerable parte de la represión vivida en la zona. En primer lugar porque, al hacerlo, como quedó apuntado, remitiríamos en última instancia a una violencia de inciertos orígenes —«espontánea»— y desconocidos protagonistas —«incontrolados». Y en segundo término porque, al menos en estas tierras, tras la mayoría de episodios de represión encontramos unos rostros bastante definidos: grupos de milicianos de un lado y vecinos de los pueblos afectados del otro; ambos relacionados a menudo con organizaciones anti-

² M. Ortiz Heras, *Violencia política en la II República*, p. 100 y 109, siguiendo una interpretación con especial audiencia desde que la usara Gerald Brenan, *El laberinto español*, Ruedo Ibérico, París, 1977, p. 381. Aunque los ejemplos similares abundan, lo de las turbas es de *La dominación roja en España*, p. 55.

fascistas y comités locales o de columna y, en cualquier caso, difícilmente calificables de incontrolados.³ En otras palabras, si indudable es que no se trata de una represión estatal ni «oficial», bastante menos lo es inferir de ello que la defina —sin posible término medio— la absoluta falta de «control» y el espontáneo «desbordamiento de los intereses seculares» de clase. Máxime cuando, como hemos visto, lo que pretendían todos los micropoderes surgidos de la revolución era precisamente «controlarla».

Como ya argumentamos al tratar de los orígenes de la represión o en las referencias a los mecanismos de la misma en sus diversas fases, el protagonismo de los milicianos en estas prácticas es indudable. Con el poder que les daban las armas —que ellos trajeron y controlaron— y el haber acabado con la rebelión, pronto asumieron un papel protagonista en el nuevo orden político y, por supuesto, en el asalto al pretérito. Al entrar en cada pueblo, fueron ellos los que prendían las llamas en iglesias, archivos y plazas —como al parecer hizo el propio jefe de una de las columnas, Carod, en Plenas—, preguntaban por los sublevados, ricos y curas y, armas en mano, los buscaban. Del mismo modo, las columnas serían las causantes de la inmensa mayoría de las requisas y abusos, y de sus filas salían los integrantes de los comi-

³ M. Ors, *La represión de guerra y posguerra en Alicante*, pp. 22-23; J. Casanova, «Rebelión y revolución», pp. 120-123; y J. M^a Solé y J. Villarroya, *La represión a la reraguarda*, pp. 59-66, donde se restringe el fenómeno de los incontrolados a grandes ciudades como Barcelona (p. 60). La visión opuesta, en C. González, *Guerra Civil en Murcia*, pp. 153-154, y F. Sevillano Calero, *La guerra civil en Albacete*: «la represión [...] tuvo un carácter espontáneo e incontrolado, obedeciendo a la anarquía...» (pp. 66-67). Esos argumentos ya eran utilizados en la época en Aragón: así, a la CNT le servían para justificar el Consejo de Aragón (FPI, AASM, caja 510, carp. 36: Actas del Pleno Regional de Sindicatos..., 11-9-37), y al Frente Popular para pedir su disolución (AGMA, arm. 47, leg. 72, carp. 1: Informe del CR Frente Popular..., Barbastro, 2-8-37). En la versión franquista, eran los «delincuentes comunes» que había entre las «turbas» o «las huestes de los presidios catalanes [que] se dedicaron al pillaje, al asesinato y a cuantos desmanes les sugiere el furor satánico que los domina»: *La dominación roja en España*, p. 55, y V. Gracia, *Aragón, baluarte*, p. 109.

tés de guerra o de columna, «checas», «coches de la muerte», grupos de investigación, etc. que en los meses siguientes detenían y juzgaban a los derechistas denunciados, recorrían los pueblos en fatídicas expediciones punitivas y llevaban a término las «sacas» y «paseos» nocturnos. Y por último, en ellos tuvieron su origen todos esos últimos episodios de violencia que salpicaron de sangre el «orden de la retaguardia» que se intentaba extender desde Caspe; episodios que, con una sola excepción, tuvieron siempre lugar en las zonas más cercanas al frente donde se instalaban las columnas, mientras que retaguardia adentro la represión se había concentrado en las primeras semanas, precisamente cuando pasaron por allí las mismas. En fin, y de acuerdo con todas las fuentes documentales y orales, de sus filas partieron de forma casi universal las balas que acabaron con los «fascistas». Venían de fuera, estaban armados, eran ajenos a las lealtades intracomunitarias y para ellos era más fácil disparar puesto que no sufrirían represalias por lo que hicieran aunque aquello acabara mal. Su violencia buscaba seguramente provocar, definir campos y, en todo caso, se servían de ella para extender, junto a la revolución, un informe poder supralocal.⁴

La responsabilidad, ya lo sabemos, la compartían con vecinos de los pueblos, esos que conocían quiénes eran los derechistas, quiénes habían colaborado con los rebeldes y dónde se escondían los curas. Sindicalistas e «izquierdas» de los pueblos en general que, rotos los tradicionales vínculos sociales y exacerbados los ánimos por la sublevación y la presencia de

⁴ Por lo demás, la mayoría eran catalanes, aunque en sectores como Azuara y Fuendetodos, bajo mando del citado Carod, fueran aragoneses, en su mayor parte cenetistas de Zaragoza y del Bajo Aragón. También podía haberlos extranjeros, como el grupo del italiano Grossi establecido en el sector de Leciñena, al cual iría después George Orwell. Algunos datos y relatos sobre esos milicianos, en M. García, *Miguel García's Story*; J. M^a Aroca, *Las tribus*; J. M. Márquez y J. J. Gallardo, *Ortiz*, pp. 107-126, o M. Jesús Arnal Peña, *Yo fui secretario de Durruti. Memoria de un cura aragonés en las filas anarquistas*, Mira, Zaragoza, 1995, pássim.

grupos armados, creían sinceramente que tras la denuncia —y por tanto previsible eliminación— de los «facciosos» estaba la ansiada revolución. Y sobre todo, máxime a medida que nos alejamos de los primeros momentos, esos pocos que estaban en los comités locales, dirigían las juntas de las colectividades, se relacionaban con los jefes de las columnas y, algo que iba más allá de lo decorativo, mantuvieron durante toda la guerra los pañuelos rojos en sus cuellos.

Improvisados detentadores de los nuevos poderes locales surgidos con el inicio de la guerra, allí donde no había una nítida falla interna acometieron la tarea de evitar el derramamiento de sangre y de intentar mantener el pueblo como una isla ante la marea que venía de fuera; se trataba, en suma, de reducir el uso de las armas en la arena de lo político, algo perfectamente lógico cuando eran sus principales competidores en la articulación del poder local, los milicianos, quienes las acaparaban. En otros lugares, por el contrario, donde los conflictos previos, los acontecimientos de julio o la división política hacían previsible un proceso depurador, se pusieron a la cabeza del mismo, una vez iniciado, para encauzarlo, controlarlo y, si se quiere, dirigirlo. Eran la nueva minoría dirigente, una minoría formada por nuevos protagonistas, tradicionalmente apartados del poder, que ahora tenían su primera ocasión histórica de acceder al mismo. Y en aquella coyuntura, una de las dimensiones básicas del poder era precisamente la «limpieza de la retaguardia» y su control; o, al menos, que no se fuera del todo de sus manos. De otro modo, otros vecinos, «incontrolados» y sobre todo milicianos recogerían gustosos el testigo y, a buen seguro, con efectos más sangrientos. De ahí que invariablemente les encontremos, convencidos de que así caminaban hacia un orden más justo, colaborando con milicianos y comités de guerra en las denuncias, elaboración de listas negras y detenciones, pidiéndoles la desaparición de «los elementos más significados», decidiendo muertes o, como en Fabara, Plenas o Nonaspe, cerrando cafés y asegurándose de que nadie saliera de sus

casas durante las noches de «sacas» y «paseos» colectivos. Ajustadas esas cuentas con el pasado, ellos mismos serían también los mayores interesados en que esas armas venidas de fuera no volvieran a convulsionar con su estrépito el precario orden local de la retaguardia.⁵

Al margen de lo anterior, resulta enormemente complicado avanzar más allá en el perfilado de esos «responsables». Difícil lo es en el caso de los milicianos venidos de fuera, cuyo heteróclito mundo resulta un enigma, faltos como estamos de datos sobre su composición, movimientos, tiempo de estancia en cada lugar, etc. Y lo es asimismo en el de los vecinos denunciante e incluso en el de los miembros de esa nueva «minoría». Las fuentes manejadas no proporcionan otra cosa que relaciones de «personas sospechosas de participación en el crimen» elaboradas por las autoridades franquistas y cuya utilidad es muy dudosa. En unos casos, los sospechosos son «milicianos rojos» o «desconocidos»; en otros, aparecen interminables listados que recogen a todos los izquierdistas y/o colectivistas del pueblo; y, por fin, en la mayoría se achaca sin más distingos a todos «los del comité rojo que actuó en la localidad», sin otros datos —cuando los hay— que sus nombres. En este punto, las fuentes orales, determinadas por las suspicacias lógicas ante preguntas sobre los «culpables» de hechos tan luctuosos y por la relación —política, personal, etc.— con los mismos, resultan a menudo confusas y contradictorias entre sí. Por lo demás, este no puede ser el lugar para abordar en detalle el estudio de los que componían esos comités y participaron activamente en la revolución. Quizá sólo sea oportuno señalar aquí que, frente a las tesis franquistas sobre el papel en estos hechos de las

⁵ Es evidente que al hablar de minorías no nos referimos a los «activistas» que engañan al «populacho» según las tesis «conspirativas» del revisionismo: G. Hermet, *El pueblo contra la democracia*, pp. 150-173 en general, y pp. 158-160 para el caso de la guerra civil; o F. Bluche, *Septembre 1792, logiques d'un massacre*, p. 188. Cfr., para una visión más rigurosa de ese mismo marco histórico, M. Vovelle, *La mentalité révolutionnaire*, pp. 109-111.

«heces de la sociedad» y los «elementos de los bajos fondos», varios indicios apuntan al hecho que, junto a los individuos provenientes de las más bajas categorías económicas y sociales —jornaleros, campesinos pobres, obreros,...— había también entre esos nuevos protagonistas tenderos, artesanos, labradores autónomos y, en suma, miembros de la mesocracia rural. Una vez más en la historia, la revolución tenía otros orígenes que la mera «revuelta del estómago» o la rebelión de los más oprimidos.⁶

Variados eran también los orígenes o adscripción política de esos protagonistas, puesto que, frente a otro mito de amplia resonancia en la bibliografía sobre la guerra civil, no eran sólo ni siempre «anarquistas». Tampoco, para ser más exactos, cenetistas. Parece en efecto rentable e incluso tranquilizador, desde el punto de vista literario —y desde el político—, descargar toda la responsabilidad por aquellos dramáticos sucesos en esos exóticos, puristas y «exaltados» libertarios, supuestamente dispuestos a todo para acelerar la llegada de la revolución y cuyos herederos ideológicos tienen hoy, además, tan escaso peso político. No obstante, y aunque ciertamente estuvieron tras miles de muertes, saqueos e incendios, esa imagen no se ajusta a la realidad de los hechos. Casi todos los sectores de la coalición antifascista se

⁶ A parecidas conclusiones se ha llegado, por ejemplo, en el análisis de la Revolución francesa: *ibidem*, pp. 119-126, y sobre todo A. Soboul, *Los sans-culottes*, pp. 41-62. Valga como botón de muestra el caso de Benito Roca. Secretario de la UGT de Caspe, afiliado al PCE y presidente del comité revolucionario y del consejo municipal, aparece en varias fuentes como uno de los principales instigadores de la persecución. En las reuniones de la UGT local, protesta por las declaraciones exculpatorias en los juicios del Tribunal Popular (AGCS, PS Aragón, carp. 48, actas de la reunión del 20-3-37) e incluso «tuvo algunas desavenencias con los jefes marxistas de columnas armadas, Ortiz y Ascaso, los cuales no estaban conformes con la forma brutal en que actuaba.» Además, «con cruel sadismo, se complacía en atormentar a las familias de los asesinados.» Su profesión era agente comercial (AHN, CG, leg. 1429 (1), pieza nº 7: «Informe Policía, Inspección de Caspe...», 18-5-43; AGCS, Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC), caja 57, expediente 8; y *El Noticiero*, 20-3-1938).

sirvieron de la violencia, antes de que el «control» de la misma se hiciera arma dialéctica en la lucha por el poder, en el alba de la revolución. Y todas las provincias y comarcas de la España republicana experimentaron este tipo de violencia, hubiera o no en ellas una significativa presencia de los anarcosindicalistas. De hecho, el grado en el que la sufrieron no guarda además relación con la importancia de esa presencia, como muestran el caso de Madrid o su comparación con Cataluña.⁷

A escala inferior, la provincia de Zaragoza es también un buen ejemplo. Ejemplo, en primer lugar, de ese mito sobre la violencia de los anarquistas, sublimado hasta la exasperación en el caso de la columna de Durruti, personaje tantas veces subido a los altares como anatemizado y acusado de mil horribles crímenes.⁸ En efecto, la mayoría de los disparos

⁷ En la capital, con cifras de víctimas que superan las de toda Cataluña, la presencia de la CNT era mucho menor y, aunque probada la participación de sus militantes en los «paseos» de las primeras semanas, fue nimio su papel en las famosas «sacas» de noviembre de 1936, las que más vidas se cobraron: Javier Cervera, *Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939*, Alianza, Madrid, 1998, pp. 70-71 y 91 ss. G. Sánchez Recio ya advirtió que la prensa cenetista fue la primera en pedir la creación de los tribunales populares para salir del terror: *Justicia y guerra en España*, pp. 48-53. Véanse parecidas conclusiones en M. Ors, *La represión de guerra*, pp. 49 y 298; R. Quirosa, *Represión en la retaguardia*, pp. 34-35; J. M^a Solé y J. Villarroya, *La repressió a la reraguarda*, p. 101; Miquel Térmens, *Revolució i guerra civil a Igualada (1936-1939)*, L'Abadía de Montserrat, Barcelona, 1991, p. 75; y G. Woolsey, *Málaga en llamas*, pp. 85-86 y 122. Una muestra de la tesis contraria, en A. Reig Tapia, *Violencia y terror*, p. 116; y un argumento similar al empleado en el texto, en Marcel Dorigny, «Violence et révolution. Les girondins et les massacres de septembre», A. Soboul (dir.), *Girondins et Montagnards*, Soc. d'Études Robespierriestres, París, 1980, pp. 103-120.

⁸ Y con los que a menudo no tuvo nada que ver. Las propias fuentes franquistas (CG) muestran varios casos en los que Durruti ordenaba frenar la represión (Gelsa, La Almolda) o liberaba a supuestos derechos (dos de Alfajarín y uno de Tauste) a los que luego fusilarían sus convecinos. Algo que ratifican las fuentes orales de los lugares que sufrieron el supuesto «azote» de este personaje (p. ej. en Pina). Sucede además que la represión no fue mayor en la comarca donde actuó que en el resto, y que incluso fue mínima o inexistente en lugares como Monegrillo y Bujaraloz donde se instaló su Cuartel

provinieron de milicianos con los pañuelos rojinegros de la CNT, y de este sindicato eran muchos de los componentes de los «coches de la muerte», grupos de investigación y comités revolucionarios. Pero ello no dejaba de ser lógico cuando eran las milicias confederales, y no otras, las que habían derrotado a los sublevados y estaban instaladas en la línea del frente. Ocurre, sin embargo, que en algunos lugares los milicianos eran del POUM —Leciñena— o de ER y el PSUC —Letux—, y pese a ello resultaron dos de las localidades con mayores índices represivos. En otros, por su parte, si los milicianos pertenecían a la CNT, no era ése el caso de los dirigentes de sus comités locales, necesarios colaboradores como hemos visto para que la represión tuviera lugar. Republicanos, ugetistas, comunistas o simplemente izquierdistas de los pueblos obraban de manera similar a como lo hacían sus compañeros de viaje cenetistas en otros lugares vecinos.⁹ Y por último, tampoco se caracterizaron por su benignidad las tropas del Ejército Popular —divisiones comunistas, Brigadas Internacionales, etc.— que, en verano de 1937, tomaron Belchite, Quinto o Codo. No parece mal con-

General. El mito aparece ya en F. Borkenau, *El reñidero español*, pp. 75 y 86-87 y G. Brenan, *El laberinto español*, p. 381, y lo continuaron H. Thomas, *Historia de la Guerra Civil*, pp. 295 y 299, y G. Jackson, *La República española y la guerra civil*, p. 262. Una defensa en alguien poco sospechoso de filoanarquismo, en J. Arnal, *Yo fui secretario de Durruti*.

⁹ A partir de los incompletos datos disponibles sobre la composición de los comités de los primeros meses, sólo cabe concluir que, entre los pueblos donde la CNT es la fuerza hegemónica, los hay tanto con altos índices represivos como con bajos y nulos, lo mismo que donde cede ese lugar o hay reparto de poder municipal con la UGT o los republicanos. Como en Gelsa, Azuara, Nonaspe y Caspe, donde la represión vivida es intensa. En la última, las fuentes y testimonios —incluido el de una familiar— coinciden en que el principal promotor, y en ocasiones ejecutor, de la «limpieza» en Caspe era J. Centol, miembro en 1937 del Comité Provincial del PCE y vocal de la UGT en el Tribunal Popular, «en cuyo cargo se creó una triste reputación, ya que en todas las causas que intervenía su petición era la de muerte». Es necesario añadir que su hermana había sido una de las víctimas del corto dominio de los sublevados en julio del 36 (AHN, CG, leg. 1429 (1), pieza nº 7: «Informe Policía...», 18-5-43; y AGCS, TERMC, caja 52, expediente 5, y PS Barcelona, legs. 494 y 499).

sejo, en consecuencia, buscar las razones de estas actitudes en otros lugares más significativos que las siglas del carnet político o sindical de los que las mantuvieron.

RAZONES Y BLANCOS DE LA PERSECUCIÓN. LA VIOLENCIA ANTICLERICAL

Algunas de esas razones y, en todo caso, uno de los principales elementos de análisis de esta represión están sin duda en los blancos de la misma. Eran los otros protagonistas de este proceso, los rostros concretos que pagaron su participación en él con sus tierras, su posición social y, en no pocas ocasiones, con su vida.

Tal vez más que ninguna otra dimensión de este tema, el perfil de las víctimas constituye un punto complejo, insatisfactoriamente abordado por buena parte de los que lo han estudiado y, por ello mismo, doblemente interesante. De ahí que sea, además, uno de los más vulnerables a los tópicos: el de los propios revolucionarios y sus herederos, que ven entre las víctimas únicamente a «fascistas», «enemigos del pueblo», «señoritos» y burgueses. Y el de los vencedores de 1939, de amplio arraigo en la memoria colectiva de las generaciones crecidas durante la dictadura subsiguiente, según el cual lo «inundatorio» y «universal» de esta represión se extendía también a los que la sufrieron; así, de acuerdo con ese argumento, todos —pobres y ricos, hombres y mujeres, jóvenes o mayores— estaban igualmente amenazados, pues no primaban tanto los aspectos políticos, sociales o económicos cuanto las cuestiones y rencillas personales y los «bajos instintos de las turbas».¹⁰ No obstante, como en tantas otras ocasiones,

¹⁰ *La dominación roja en España*, p. 8 y pássim, y Daniel Fárfolas, *Síntesis de la Causa General para desmemoriados*, Vassallo de Mumbert ed., Madrid, 1978, pp. 11-12. De nuevo aquí cabe establecer similitudes con las interpretaciones del reciente revisionismo, que se refiere a lo mismo cuando habla del «carácter multidireccional de la opresión revolucionaria»: G. Hermet, *El pueblo contra la democracia*, p. 165.

la realidad no parece estar en ninguno de esos extremos, sino más bien en algún punto intermedio. El problema principal a dilucidar es precisamente, y sin perder de vista las implicaciones que ello conlleva, encontrarlo o ubicarlo.

En principio, resulta evidente y generalmente admitido por la mayoría de los historiadores que la han abordado que la represión era ante todo un ataque a los pilares básicos del orden social que el golpe militar de julio quería preservar. Y esos pilares, esos «enemigos del progreso» que la literatura libertaria identificaba con el capital, el Estado y la religión, parecían fácilmente discernibles en el mundo rural: el amopropietario, el poder político local y la Iglesia. No por casualidad, los que se habían sublevado contra la República. De acuerdo con el esquema avanzado en un capítulo precedente, ellos constituían los primeros blancos de esa violencia, y ellos representaban mejor que nadie el asalto al pasado que se estaba haciendo realidad. Eran los principales símbolos de lo que se quería derruir y, en aquel momento de venganzas, esperanzas y signos, quizá más que por sus perfiles personales concretos, era precisamente por esa representatividad simbólica por lo que se les atacaba.¹¹

Es indudable, en primer lugar, que algunos de los mayores propietarios de estas comarcas cayeron bajo las balas revolucionarias, y que ser un potentado no era el mejor aval en las primeras semanas de guerra. Aunque en esta zona no abundaban los grandes terratenientes —y los que lo eran vivían en las ciudades—, en todos los pueblos había varias «casas» ricas que acaparaban las mejores tierras, los molinos de trigo, las «fábricas» de aceite, la dirección de los sindicatos de regantes y el poder local. Todos los testimonios orales,

¹¹ Los tres pilares según los anarquistas, en J. Casanova, *Anarquismo y revolución*, p. 161, y una aplicación de este esquema a un concreto marco comarcal zaragozano, en J. L. Ledesma, «Sublevados, milicianos, misioneros y pañuelos rojos», pp. 336-337. «Enemigos del progreso» es una expresión del BOCA, 7-11-36.

confirmando los datos sobre los bajos índices de concentración rústica, insisten en la paradoja de que a muchas de esas «casas» ricas en realidad no se les podía aplicar con propiedad tal adjetivo. Pocas vivían sin trabajar, apenas había verdaderos ricos y, en todo caso, «tenían más orgullo que dineros». A menudo, lo que las diferenciaba del resto no era sino poseer unas pocas tierras más, caballerías, algún molino o paridera, una casa mejor amueblada y, con suerte, radio y coche, así como poder llevar a sus hijos a la escuela con regularidad hasta los catorce años o emplear a algunos medieros, jornaleros o «criados». Suficiente en esas comunidades rurales, sin embargo, para tener una posición —un *status*— respetable, para diferenciarse social y jerárquicamente de los demás. Y suficiente, también, para poder imponer votos, asistencia a misa e incluso relaciones vecinales a aquellos cuyas escasas tierras obligaban a completar sus ingresos trabajando para ellos «a medias» o a jornal. Por lo demás, la posición del resto de familias o casas de los pueblos estaba plenamente determinada por su relación —económica, laboral y por ende política y social— con esas otras más ricas y con las redes de relaciones y arrendamientos urdidas a su alrededor.¹²

Dinamitados con la guerra los tradicionales vínculos de dominio y subordinación, la presencia pública de las armas llevó a dirimir por otros medios viejas luchas y odios seculares contra esos poderosos de siempre. En algunos de ellos, además, a la tradicional dependencia en que tenían a

¹² Para un tratamiento de estas cuestiones aplicado a una localidad concreta, véase B. Antorán, *Escatrón en el Señorío*, pp. 99-104. Algunos de los posibles conflictos que podía originar el uso de los molinos, en V. Cervera, *Fabara. Memorias incompletas*, p. 159, donde se menciona un caso con las «casas» propietarias de dos de tales molinos: de una de esas familias serían fusilados dos miembros. Por lo demás, las fuentes principales para este párrafo han sido las orales, por ejemplo G. Planas y V. Ortín (Belchite, 16-5-99), A. Vicente y R. Maza (Caspe, 24-1-98 y 20-3-99), J. Cirac (Fabara, 22-5-99), E. Alfranca (Farlete, 17-5-99), E. G. (Gelsa, 9-7-99), F. Sanclemente (Cinco Olivas, 16-5-99), y J. Ibáñez (Azua, 16-5-99).

muchos campesinos se añadía que se habían opuesto cerrilmente a los progresos sociales de la República y que ahora, al unirse a la sublevación, pretendían acabar con esos progresos y, en fin, con toda esperanza. Los que derramaban la revolución por la retaguardia lo tenían claro: junto a las sotanas, «los propietarios eran el principio activo» de la rebelión. Así, durante unas semanas, tener aparceros en condiciones severas, coaccionar a los medieros y obligarles a ir a misa y votar a la derecha, o procurar «la explotación de los obreros en contra de los progresos a que tenían derecho en jornales y horas de trabajo» podía ser suficiente para acabar con los brazos en alto en las tapias de un cementerio.¹³

Los ejemplos podrían multiplicarse. La «lista negra» de los que entraron en Aladrén iba encabezada por el más rico; una de las primeras víctimas de Pina de Ebro era el mayor propietario oriundo de la zona y uno de los mayores de la comarca; y, según los testimonios orales, entre las víctimas de Luesma estaba el de más tierras, y lo mismo algunas de las familias más ricas en casos como Plenas o Velilla de Ebro. En ésta última, seis de los siete fusilados de los que tenemos noticias fiables «llevaban» medieros, arrendatarios o jornaleros; en Osera de Ebro sucedía lo mismo con seis de los ocho de los que conocemos esos datos, y en Caspe eso ocurría al menos con otros veintitrés. El caso de uno de ellos, Teodoro Albareda, parece ilustrativo de los perfiles perseguidos por esta represión. No sólo era uno de los principales propietarios agrarios, sino también farmacéutico y el mayor contribu-

¹³ Explicaciones procedentes de las «Propuestas de incautaciones...» contra facciosos suscritas por las Juntas Calificadoras Municipales de localidades como Caspe, Escatrón, Herrera, Moneva, Nonaspe, Osera, Quinto o Velilla, fechadas en otoño de 1937 y principios de 1938, y conservadas en AHN, CG, legs. 1429 (1 y 2), anexos 1/7, 1/8 y 2/8, y AGCS, PS Aragón, carps. 9 y 10. Se trata de una fuente excepcional por cuanto, respondiendo a la pregunta sobre los «Antecedentes políticos y actividades prestadas» de cada incautado, cuando éste había sido ejecutado supone un insólito reconocimiento explícito y la justificación del fusilamiento en un documento oficial y desde las propias filas republicanas. Lo del «principio activo» es del *BOCA*, 17-11-36.

yente industrial caspolino, además de haber presidido el Sindicato Agrícola Católico y la Comunidad de Regantes. Según un documento republicano de principios del 38, «era el cacique de derechas más destacado de la población» y, «tanto a los medieros como a los jornaleros que empleaba, los tenía subyugados, obligándoles a ir a misa e imponiéndoles la obligación de emitir votos a favor de las derechas». El día 26 de julio de 1936 moría junto a su hijo de 38 años en una de las sacas colectivas que Caspe vivió aquella trágica mañana.¹⁴

En esa misma saca, como en otros varios momentos y lugares de la provincia, intenso sería también el impacto sufrido por la élite local, por quienes habían acaparado siempre el poder político y social en los pueblos. A menudo coincidían, además, con los que detentaban el económico.¹⁵ Eran otro de los símbolos de la vieja sociedad con la que se intentaba acabar y, en un medio rural al que la política de masas llegaba determinada por las relaciones y rostros comunitarios, la represión les alcanzó quizá menos por sus adscripciones políticas concretas que por su tradicional control de ese poder local. Fueron sin duda uno de los blancos más fácilmente discernibles y prontamente denunciables y, en todo caso, los datos no dejan lugar a dudas sobre el alcance de esa persecución. Al menos 120 de las 742 víctimas de la provincia habían representado en el inmediato pasado algún cargo en la vida política y administrativa local, algunas

¹⁴ Propuesta de incautación de los bienes de T. Albareda por la Junta Calificadora Municipal de Caspe (enero 1938), *loc. cit.*; AHN, CG, leg. 1424 (2), rama de Caspe; Archivo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza: «Censo de Comerciantes e Industriales. Lista cobratoria para 1936. Grupo industrial»; y S. Cirac, *Los héroes y mártires de Caspe*. Los datos sobre Osera y Velilla proceden de las propuestas de incautaciones de sus respectivas Juntas Calificadoras, y el resto, de los testimonios de M. Pérez, Zaragoza, 6-3-99; P. Sancho, Plasas, 16-6-99, y R. Guiu, Zaragoza, 20-4-99.

¹⁵ En Nonaspe (partido de Caspe), según las Actas de su Ayuntamiento, los siete mayores contribuyentes de la localidad estaban en el equipo consistorial en 1930 (Archivo Municipal de Nonaspe, sesión del 1-11-1930).

de ellas varios. Se trataba de jueces municipales (14), secretarios de Ayuntamiento —figura de enorme poder mediador en la vida política local— (10), secretarios de Juzgado (4), notarios (2) o registradores de la propiedad (1). Pero eran, sobre todo, alcaldes (24) y concejales de derechas (77); miembros, en suma, de los consistorios de la Dictadura de Primo de Rivera, de los impuestos gubernativamente tras los sucesos de octubre de 1934 y de los designados en julio de 1936 por los guardias civiles, falangistas y militares sublevados, de los que sólo en la comarca de Caspe morirán 14 ediles —entre ellos 6 de la capital comarcal—, así como los alcaldes de ésta, Fabara y Escatrón.¹⁷

En algunos casos, esa persecución devino en la práctica en una auténtica depuración del personal político de las etapas anteriores. En la última localidad citada, por ejemplo, tres de sus once víctimas habían sido concejales en el «Ayuntamiento faccioso», otras tres alcaldes —durante la Dictadura, el «Bienio Negro» y la sublevación de julio—, uno secretario y otro juez municipal. No era el único caso. Entre los fusilados de Caspe sumaban 16 cargos semejantes, y en Maella la cifra alcanzaba los 18. Datos reveladores que, no puede ser casual, se dan invariablemente en el partido de Caspe y en la zona más oriental del de Pina —es decir, a los que la revolución llegó antes desde Cataluña y donde estaba más lejos la salvación que para muchos fue la huida hacia la otra zona— mientras que son cada vez menos significativos a medida que avanzamos hacia el poniente.¹⁸ La concentra-

¹⁷ Hemos elaborado esos datos principalmente a partir de la CG, completada cuando ha sido posible con documentación de los consistorios (Azuara, Caspe, Fabara, Maella, Mediana, Nonaspe, Pina y Quinto). La cifra total (120) es menor que la suma de los diversos cargos concretos puesto que una quincena de víctimas habían tenido más de uno de ellos. Para un caso de intensa persecución de estos cargos fuera de Aragón, Juan Martínez Leal, *República y guerra civil en Cartagena (1931-1939)*, Universidad de Murcia, 1993, p. 202.

¹⁸ El partido de Caspe es sin duda el que acapara la mayoría de estos cargos entre sus víctimas: 54 (entre ellos 33 concejales y 11 alcaldes), lo que representa el 28% de los que allí murieron. Por su parte, el de Pina se queda en 29

ción de esas muertes, sin embargo, no era sólo geográfica, sino también temporal. A menudo se trata de las primeras víctimas, los primeros buscados y denunciados. Ya quedó dicho que el primer fusilado de la comarca de Caspe había sido el alcalde «faccioso» de su capital, y que dos de las primeras víctimas de Pina de Ebro eran el registrador de la propiedad y un antiguo alcalde de derechas —uno de los mayores contribuyentes de la zona. En Maella estaban también entre las primeras el notario y el secretario del Ayuntamiento, y en La Almolida, además de los cinco miembros del ayuntamiento designado por la Guardia Civil sublevada, había dos anteriores alcaldes, uno de los cuales —Emilio Villagrasa Samper— había sido también juez municipal y diputado provincial por Renovación Española. Eran, sin duda alguna, la élite, la derecha y el poder locales, y así lo entendieron sus represores.¹⁹

Pero si de persecución intensa y de víctimas simbólicas buscadas desde los primeros momentos se trata, la palma es para la violencia anticlerical. En toda la España republicana, el clero y las cosas sagradas fueron el primer blanco de esta persecución y, de este modo, son innumerables los ejemplos de pueblos y ciudades donde quemar una iglesia y matar a un sacerdote fue lo primero que se hizo, el medio de mostrar que el asalto al pasado había comenzado. En Andalucía

y el de Belchite no pasa de 22. Al respecto de los citados casos de Caspe y Maella, las 16 víctimas de la primera se reparten entre 13 concejales, un alcalde y dos secretarios de Ayuntamiento, mientras que las 18 de la segunda resultan de la suma de nueve concejales, tres alcaldes, tres jueces municipales, un notario, un secretario municipal y otro del Juzgado. En Osera de Ebro y Escatrón, la cifra de víctimas con esos cargos (7) representa casi 2/3 del total.

¹⁹ Para La Almolida, F. Gálvez, *En los Monegros La Almolida*, pp. 135-137. Un amplio tratamiento del crucial papel desempeñado por los jueces municipales y su ligazón con el orden social en su elección, actuaciones, etc., lo que les convertiría en uno de los pilares del caciquismo local junto al Ayuntamiento, en Salvador Cruz Artacho, *Caciques y campesinos. Poder político, modernización agraria y conflictividad rural en Granada, 1890-1923*, Edics. Libertarias-Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 1994, pp. 303-380.

y Cataluña, en Gijón y el País Valenciano o en Madrid, los religiosos encabezaban las listas negras y, a menudo, lo hacían sin que figurase siquiera su nombre. Y es que no importaban tanto sus rostros y actitudes concretas: bastaba su mera condición sacerdotal, bastaba con que fuera un «tonsurado» para que se le considerara un enemigo potencial, un símbolo del orden social que se quería hacer desaparecer. No sólo se trataba de no dejar en pie a «ningún escarabajo ensotonado», sino que había además que «arrancar de cuajo todo germen incubado por ellos, hay que destruir sin titubeos». A muchos, lo que se les arrancó fue la vida, casi siempre sin pasar por tribunal, cárcel o juicio alguno y en la mayor parte de los casos durante las primeras semanas de la guerra. Para ellos no hubo tregua y, si hay una persecución generalizada, un «terror caliente» y «espontáneo», ese fue el que se aplicó al clero.²⁰

Aunque en la provincia de Zaragoza esa represión fue cuantitativamente muy inferior a la sufrida en otras regiones, merece la pena destacar que tras las cifras se esconden similitudes que no pueden ser desdeñadas. Como vimos en el capítulo primero, el verano de 1936 llevó a todos los pueblos una inmediata y sistemática destrucción de símbolos religiosos y un ataque a las representaciones y espacios referenciales del poder de la Iglesia. A medida que los milicianos entraban en los pueblos, las imágenes y objetos de culto ardían, las caballerías invadían las iglesias para derribar altares y convertirlas en almacenes, establos, etc., las cam-

²⁰ Como casos extremos, en la Diócesis de Barbastro murió el 87,8% del clero incardinado y en la de Lérida el 65,8%, según los datos de A. Montero Moreno, *Historia de la persecución religiosa en España*. Y en Madrid, más de la mitad del millar de eclesiásticos asesinados lo fueron entre julio y agosto del 36, y esa cifra rondaba ya el 90% antes de comenzar las trágicas «sacas» de noviembre. Cfr. J. Casanova, «Rebelión y revolución», pp. 127 y 153-155; F. Alia Miranda, *La guerra civil en retaguardia*, Ciudad Real, pp. 229 ss; J. Barrull, *Violència popular*, pp. 36 ss; M. Ors, *La represión de guerra y posguerra*, p. 118; y J. M^a Solé y J. Villarroya, *La represió a la reraguarda*, pp. 81-85 y 169 ss. La frase entrecomillada, en *Solidaridad Obrera*, 18-10-36.

panas eran fundidas e incluso se entraba en los cementerios para exhumar cadáveres que —en lugares como Monegrillo, Moyuela y Velilla de Ebro— pertenecían a antiguos eclesiásticos del lugar. Se trataba de mostrar la vulnerabilidad de los «sagrados atributos, convertidos en simples copas de beber vino», de los símbolos religiosos, y con ellos la del supuestamente «todopoderoso» Dios, «emperador de la necesidad cristiana» que «en esta sin par batalla [...] ha perdido su existencia».²⁰

Los que sí la perdieron, en todo caso, fueron algunos de los principales referentes de ese «poder temporal», es decir los sacerdotes. Fueron sólo 19 los fusilados, lo que representa apenas el 2,5% del total de víctimas de la provincia, pero no por ello dejó de tener el mismo sentido, y trascendencia, que en otras zonas. Hubiera habido sublevación o no, y sin que en este caso se requirieran las denuncias, en todos los pueblos los milicianos preguntaban antes que nada por el paradero del cura, y había pocas dudas sobre el destino que le esperaba si lo encontraban. Dos de los hallados, el de Sástago y el de La Zaida, pudieron salvarse gracias a la mediación de sus respectivos comités locales e incluso alcanzaron en los días sucesivos la «zona nacional». A los que no huyeron, sin embargo, les fue bastante peor. Así, los tres sacerdotes cogidos en Maella estaban entre las primeras seis víctimas de esa localidad, como lo estaba en Pina el coadjutor de la parroquia. Y también era coadjutor el sacerdote de La Almolda fusilado en Bujaraloz el 24 de julio, que se convertía de este modo en la primera víctima de su localidad y

²⁰ BOCA, 4-12-36. Véase, a propósito de esa violencia contra los símbolos de la Iglesia como medio de desautorización de su poder sobrenatural -y con él de su control social y moral sobre la sociedad-, las miradas antropológicas de B. Lincoln, «Revolutionary exhumations», pp. 241-260, y Manuel Delgado, *La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antiritualismo en la España contemporánea*, Humanidades, Barcelona, 1992. Para los datos anteriores, AHN, CG, pieza nº 10, leg. 1429 (2): Informe del Arzobispado de Zaragoza, 20-5-1941, ff. 19-61, y M^a P. Salomón, «La crítica moral al orden social», pp. 429-436.

de toda la zona republicana de la provincia. La mayoría de los que corrieron la misma suerte fallecieron en las semanas siguientes. Siete días después de esa primera muerte, al acabar el mes de julio, ya estaban bajo tierra más de la mitad de esos 19 religiosos asesinados a lo largo de toda la guerra (10), un mes más tarde ascendían a 14 (73,7%) y al acabar la que definimos como primera etapa de la represión (julio-octubre) ya sumaban 17.²¹

Mas no se trata sólo de que fueran los primeros blancos; al parecer, en ese ardoroso inicio de la guerra eran a menudo, además, los más importantes. Igual que en todos los pueblos había una iglesia, todos tenían también al menos un cura, y para los milicianos y algunos vecinos estaba claro que la llegada de la revolución se debía fundar, como mínimo, sobre su sangre. En ese punto, podían aceptar que algunos comités afirmaran que allí no había «fascistas» y que por tanto nadie había de morir, pero otra cosa era saltarse el rito de paso hacia el mañana que representaba para ellos el fusilamiento del sacerdote. Desde esa óptica, y según los testimonios orales, la amenaza de los grupos columnistas a los comités de Mequinenza y de la vecina Fayón fue tajante: «que si no querían matar a sus fascistas, allá ellos, pero que

²¹ Es decir, el 89,5%. Los dos restantes, hechos prisioneros en los asedios de Belchite y Teruel, morirían en Híjar (Teruel) y en Hospitalet del Infante (Tarragona), respectivamente. Ninguno de los dos, por tanto, en la provincia de Zaragoza. Todos los datos han sido obtenidos a partir de la CG (AHN), legs. 1423-1426: pieza nº 1, y leg. 1429 (2): pieza nº 10 («persecución religiosa»), y *Boletín Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza*, 1-9-1938. En un breve trabajo que apenas supera el recuento de víctimas, A. D. Martín Rubio llega a partir de las mismas fuentes a la cifra de 23, aunque para ello recoge a religiosos de otras provincias muertos en la zaragozana («La persecución religiosa en la provincia de Zaragoza», *op. cit.*). Lo de los curas salvados de La Zaida y Sástago, en *Heraldo de Aragón*, 2-8-1936 y 5-8-1936, y J. Altaba, *Experiencias, datos, testimonios*, p. 86. Otro caso cercano en el que la primera muerte era la del cura, en E. y R. Simoni, *Cretas*, p. 198. Por último, una descripción de ese clima de persecución en el Aragón oriental, escrita por uno de los que se libró de ella, en J. Arnal. *Yo fui secretario de Durruti*, pp. 17-76, y para una detallada narración de la muerte de uno de los 19 sacerdotes, *El Noticiero*, 9-8-1938.

al menos se matara al cura o vendrían ellos mismos a hacer justicia y sería peor». Y lo cierto es que acabaron haciéndoles caso, de modo que las amenazas no se llevaron a efecto. Lo significativo del asunto, sin embargo, es que se trataba de una persecución incluso más obsesiva que la desencadenada contra derechistas, sublevados o ricos, y que ante esa obsesión ninguna consideración se interponía: ni que el párroco de Fabara llevara apenas un mes en el lugar, por lo que «no había lugar a resentimientos personales de ningún género», ni que más de la mitad de los represaliados (11) superaran los cincuenta años o que el de Mequinenza llegara a los 83. De esa persecución no se salvaban ni los pueblos con menores índices represivos, y así uno de los dos muertos de esta última localidad, de Alforque y de Chiprana era el respectivo cura párroco, y lo mismo sucede con la única víctima de Fayón. Son los primeros buscados y, en ocasiones, como en Nonaspe —donde también sería la única víctima hasta los sucesos de febrero del 37—, con tal vehemencia que son fusilados en la puerta misma de la casa parroquial. Más que ningún otro blanco de la represión, el sacerdote podía ser la «víctima propiciatoria» ideal descrita por la antropología, «una *víctima* no sólo incapaz de defenderse, sino totalmente incapaz de suscitar la venganza» y cuyo sacrificio-*katharsis* haría «que se supere la crisis» de la comunidad y que ésta se auto-exonere de toda culpa por la misma.²²

Por último, los casos citados, casi siempre referidos a la comarca de Caspe, y en suma la geografía de la represión anticlerical en esta provincia, suponen un nuevo elemento de

²² René Girard, *La violencia y lo sagrado*, y *El misterio de nuestro mundo*, Salamanca, 1982 (citas en p. 36). Los otros datos, en AHN, CG, legs. 1424 (2) y 1425 (2): ramas de las localidades citadas, y leg. 1429 (2): pieza nº 10 (la cita sobre Fabara, en ff. 79-80). El primer entrecomillado es de una entrañable entrevista mantenida con cuatro vecinos de Fayón de entre 79 y 82 años en esa misma localidad el 22-5-1999, aunque el testimonio de J. Castelló da parecida noticia respecto a Mequinenza. En Alforque encontramos otro caso de sacerdote al que el comité aconseja huir, pero que muere por resistirse a marchar.

juicio que confirma su carácter «obsesivo». Trece de las 19 víctimas proceden de esa comarca, cuatro de la de Pina y las dos restantes de poblaciones de la zona controlada por los sublevados. Mientras tanto, es altamente revelador que una zona como el Campo de Belchite, la de mayor presencia clerical y mayor índice relativo de represión republicana, no registre ni un solo eclesiástico fusilado. El descenso al plano local de esa geografía, junto a los testimonios orales, proporciona algunas claves. Ninguna de las siete localidades más orientales del partido de Caspe —a las que antes llegaron los milicianos— se libraron de esta violencia, cuando son precisamente las tres más occidentales las que no la experimentaron. Por lo mismo, las cuatro del partido de Pina a las que alcanzó son también en las que antes entraron las columnas. En el resto, como en todas las del partido de Belchite y Cariñena a las que llegaron las fuerzas milicianas, el impulso anticlerical era igualmente intenso, como demuestra el hecho de que las destrucciones, quemas de imágenes, etc. tuvieron la misma intensidad que más al este. La diferencia era, sencillamente, que Zaragoza estaba más cerca y que tuvieron más tiempo para huir. En Plasas, como en tantos otros lugares, el día anterior a la entrada de los milicianos varios vecinos de pueblos del Bajo Aragón y del norte de la provincia de Teruel que pasaban por allí huyendo hacia Zaragoza indicaron que los «catalanes» estaban a punto de llegar y recomendaron la huida del párroco. Con ello, éste se libró sin duda de la muerte, «ya que al entrar en la localidad los rojos fueron directamente a su casa lamentándose de no encontrarle».²³

²³ Testimonio de A. Cebollada (Zaragoza, 2-1-99) y R. L. G. (Plasas, 16-6-99); A. S. Tomás del Río, *La Guerra Civil en Plasas*, pp. 20-22; y AHN, CG, leg. 1429 (2), pieza nº 10: Informe de la parroquia de Plasas, 10-3-42 (cita en f. 76). La distribución de las víctimas por localidades es la siguiente: 5 en Caspe, 3 en Maella y 1 en Alforque, La Almolza, Bujaraloz, Chiprana, Fabara, Fayón, Mequinenza, Nonaspe, Pina de Ebro, Ricla y Zaragoza. En la primera de ellas, además, otro sacerdote fue también fusilado, pero resultó sólo herido y pudo llegar campo a través hasta la «zona nacional»: *Heraldo de Aragón*, 13-9-1936, A. Camón, *Crónicas del 36*, p. 47.

Es evidente que no se requiere la existencia de casos de mutilaciones, degüellos o castraciones —como los que se han recogido en otras regiones, pero que al parecer no se reprodujeron aquí— para llegar a la conclusión, a partir de lo anterior, de que aquello fue una persecución intensa, en ocasiones implacable y a menudo cruel. Pero también está claro que, más allá de esa constatación, no resulta suficiente limitarse a pintar una «antología de la crueldad» y subrayar lo que aquello tuvo de aberrante y moralmente reprobable. Lo verdaderamente significativo, en este punto, es preguntarse el porqué o porqués de esa virulencia. Cuestión compleja, carente con toda seguridad de una respuesta única y unidireccional, pero que en todo caso no parece que pueda resolverse con las viejas explicaciones surgidas de la propia guerra. Desde luego, no era la mera «reacción defensiva» del «pueblo» ante los disparos recibidos desde conventos y campanarios, como tampoco era una *persecución religiosa* premeditada, aislada del papel político-social de la Iglesia y definida de forma exclusiva por el supuesto odio a la religión de los «ímpios» agresores. Y no era, en fin, un mero epifenómeno tras el que se ocultaran realidades más complejas, fueran éstas luchas de clases, la manipulación burguesa de los instintos populares o la crueldad irracional de las turbas.²⁴

La antropología proporcionó una de las posibles vías de superación de esos esquemas y, por tanto, un camino sus-

²⁴ Sobre estas cuestiones, véase M^a Pilar Salomón, «Poder y ética. Balance historiográfico sobre anticlericalismo», *Historia Social*, 19 (1994), pp. 113-128, y «La protesta anticlerical, la punta del iceberg», en P. Rújula e I. Peiró (coords.), *La Historia Local en la España contemporánea*, pp. 485-500. Lo de la «antología de la crueldad» y la persecución *religiosa* premeditada, es de A. Montero Moreno, *Historia de la persecución religiosa* (pp. 589-626), y V. Cárcel Ortí, *La persecución religiosa* (pp. 29, 35-36 y 235-239), y se repite con tonos semejantes en José Luis Alfaya, *Como un río de fuego. Madrid, 1936*, EIUNSA, Barcelona, 1998, aunque por supuesto pueden encontrarse versiones más burdas en la vasta literatura hagiográfica y martirial de la guerra y la inmediata posguerra: p. ej. Luis Carreras, *Grandeza cristiana de España. Notas sobre la persecución religiosa*, Les Frères Doulaudore Impr., Toulouse, 1938.

ceptible de utilización para explicar la especial saña de la represión anticlerical. No sólo se trataba de que la religión y lo sagrado mantuvieran una secular relación con la violencia, definiéndose como el mantenimiento y trascendentalización de la misma fuera de la comunidad. Esa represión, de acuerdo con estos análisis, se podía interpretar como una violencia contrarritual aplicada al religioso por su especial posición en el universo simbólico de la cultura popular española aprovechando esquemas y gestos disponibles en el mismo e incluidos en multitud de ritos festivos y sagrados. Por otra parte, uno de los elementos que más se han destacado en esa posición cultural del sacerdote, a saber, su supuesta y no sujeta a reglas hiperactividad sexual —una de las principales críticas contra el clero—, nos introduciría no sólo en otra perspectiva de estudio de la obsesiva persecución anticlerical sino asimismo en una necesaria lectura de género de la misma. Por un lado, en el trasfondo del anticlericalismo latía una crítica moral cargada de concepciones cristianas y elementos simbólicos referidos a la ética del cura que explicaría en parte, por ejemplo, el éxito movilizador del primer lerrouxismo. Por otro, uno de los factores más presentes en esa crítica era justamente la oscura relación de los religiosos con las mujeres, simbolizada en el confesionario y que por lo demás despertaría profundos celos en los varones seculares.²⁵ Desde ese punto de vista se explicaría que, según las fuentes, los que prendían fuego a las imágenes religiosas y buscaban a los clérigos eran siempre hom-

²⁵ José Álvarez Junco, «El anticlericalismo en el movimiento obrero», en VV. AA., *Octubre 1934. Cincuenta años para la reflexión*, Siglo XXI, Madrid, 1985, pp. 283-301, y *La ideología política del anarquismo español*, pp. 204-214. La movilización lerrouxista, en su celebrado *El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista*, Alianza, Madrid, 1990. Una interpretación de la hostilidad *sans-culotte* hacia la Iglesia basada asimismo en elementos éticos, en D. Guérin, *La lucha de clases*, p. 27. La visión desde la antropología, en M. Delgado, *La ira sagrada*, esp. pp. 59-72, y del mismo autor, sobre la relación entre la obsesión anticlerical y la sexualidad del clero, *Las palabras de otro hombre. Anticlericalismo y misoginia*, Muchnik, Barcelona, 1993.

bres, mientras que las mujeres se limitaban a esconder relicarios y medallones familiares y a observar pasivas e hipnotizadas el crepitar de las llamas. Y se entendería también que, frente a la intensa búsqueda de los eclesiásticos, ninguna religiosa muriera ni fuera siquiera detenida o maltratada. En Caspe, a las Capuchinas y las Hermanas de Santa Ana «no les hicieron daño, se limitaron a desalojarlas» de sus edificios, para luego ser encargadas del asilo de ancianos y pobres y de los comedores municipales por el comité, uno de cuyos miembros «las protegía y trataba bien, prohibiéndoles tan sólo rezar en público, por entender que se comprometían y lo comprometían». Eso, y el obligado uso de indumentaria seglar, serían para ellas las únicas consecuencias del asalto a la Iglesia y a sus representantes.²⁶

Pese a su valor, esas variables deben no obstante ser complementadas con el enfoque histórico-político para hacer inteligible el asunto, porque si bien coadyuvaban a interpretar la intensidad del anticlericalismo, no explican el desencadenamiento del clericio. Desde tiempo atrás, siempre habían estado ahí, del mismo modo que había existido en muchos una animadversión hacia la Iglesia por su control de los comportamientos individuales y por sus privilegios materiales y sociales. Pero hubo que esperar a que se mezclaran con sucesos de violento enfrentamiento político y social en los que la Iglesia se viera implicada para que la crítica moral y la hostilidad verbal se materializaran en esa persecución. Había ocurrido en el pasado con el Trienio Liberal, con las guerras carlistas o la «Semana Trágica» de 1909; pero sucedería sobre todo en los años treinta, cuando a ese conflicto se añadirían la incorporación de esa crítica a la movilización y

²⁶ Datos de AHN, CG, leg. 1429 (2), pieza nº 10: «Arzobispado de Zaragoza. Informe...»; A. Montero Moreno, *Historia de la persecución*, p. 449; M^a P. Salomón, «La crítica moral al orden social», p. 428, y A. Camón, *Crónicas del 36* (primera cita en p. 41). También *El Noticiero*, 20-3-1938, donde se lee que «les respetaron la vida por egoísmo» pues cuidarían a los ancianos.

politización populares y sobre todo una guerra que sublimaba el uso de la violencia como instrumento de lucha por el modelo de sociedad.²⁷

El anticlericalismo, por lo tanto, no sería una suerte de fenómeno de «larga duración» al margen de la variable temporal, sino antes bien un fenómeno ligado a la nueva cultura política y al papel social y político de la Iglesia en la lucha por la configuración del Estado contemporáneo. Porque era ese intenso papel, y no el poder material de la Iglesia o las presiones rituales, lo que explicaba la persistencia del anticlericalismo en España en el siglo XX y la diferenciaba de otros países de su entorno. Ese papel, y la fuerte presencia de una acción y una tradición clericales identificadas plenamente con los intereses socio-políticos conservadores. Durante la II República, además, esa presencia había aumentado en el marco de una «defensa beligerante de las posiciones de la Iglesia» ante el peligro que corría su influencia y monopolio en la política y el control ideológico de la sociedad.²⁸

²⁷ Demetrio Castro Alfin, «Cultura, política y cultura política en la violencia anticlerical», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.), *Cultura y movilización en la España contemporánea*, Alianza, Madrid, 1997, pp. 69-97, con una certera revisión de los planteamientos de M. Delgado. A ese respecto resulta interesante la polémica entre Gabriele Ranzato («*Dies Irae*. La persecuzione religiosa nella zona repubblicana durante la guerra civile spagnola (1936-1939)») y Enrique Ucelay Da Cal («Gabriele Ranzato: 'Ira di Dio', ma rabbia di chi?») en la revista *Movimento Operaio e Socialista*, XI (1988), pp. 195-220, y XII (1989), pp. 163-171, respectivamente. Para estas cuestiones y los fenómenos de violencia anticlerical anteriores a los años treinta, *vid.* el citado R. Cruz (ed.), «El anticlericalismo», y Emilio de la Parra y Manuel Suárez Cortina (eds.), *El anticlericalismo español contemporáneo*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998.

²⁸ *Ibidem*, y M^a P. Salomón, «La crítica moral al orden social», pp. 275 ss. En el mismo lugar puede encontrarse una descripción de esa acción clerical en el marco aragonés (pp. 534-600) y un repaso de las manifestaciones de protesta y violencia anticlerical (pp. 321-437), de donde «se desprende la existencia de un sustrato anticlerical ampliamente extendido entre la población» de esta región (pp. 648 y también en p. 533 y 629). Aunque desde posturas diferentes, véase sobre la integración de la Iglesia en los valores políticos y grupos sociales más conservadores y sobre la hostilidad de la Iglesia a la II República, los trabajos de Hilari Ragner, *La espada y la cruz. (La Iglesia 1936-1939)*, Bruguera,

Llegada la guerra, y al margen de que se adhiriera a la sublevación antes o después, la postura ante la Iglesia se había convertido en uno de los factores principales en los posicionamientos políticos y en la fractura social y, en todo caso, para muchos estaba claro que era uno de los principales aliados de la reacción y que «la pistola se ha asociado a la Cruz para sacrificar al pueblo». El ataque iniciado contra ella, bajo esa perspectiva, no iba dirigido por tanto a la religión en cuanto tal sino a una institución específica, tradicional aliada de los poderosos y que había pasado de religión del «statu quo» a religión de la contrarrevolución. O dicho con palabras de la época, se producía porque «el pueblo veía en ella el mayor obstáculo a su liberación y el símbolo secular de su opresión». Su plasma-ción más dramática fue la persecución de los clérigos, hombres fácilmente identificables, a menudo indefensos y cuyo castigo no sólo no planteaba dudas morales a sus represores sino que les resultaba «un acto de moralidad». En las comunidades campesinas, además, contaban con un gran poder de mediación y eran una de las representaciones básicas de la continuidad con el tiempo y de la estabilidad del orden social. Hoy está claro que muchos fueron simbólicas cabezas de turco de una persecución a todas luces desproporcionada. Pero en aquellos días de llamas estaba extendida la creencia de que «ellos se lo buscaron» puesto que el clero, «promotor decisivo de la exhibición fascista, [...] no sólo provocó la erupción de los galones, sino que los pagó, la bendijo y la difundió». Se habían dedicado como corporación a hablar mal del régimen, auguraban la muerte de sus responsables, «amenazaban desde el púlpito» y, en suma, «cayeron en la bajeza política y por eso no pueden salvarse de la ira popular».²⁹

Barcelona, 1977; Frances Lannon, «La cruzada de la Iglesia contra la República», en P. Preston (comp.), *Revolución y guerra en España*, pp. 41-58, y *Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España 1875-1975*, Alianza, Madrid, 1990; y Alfonso Botti, *Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975)*, Alianza, Madrid, 1992.

²⁹ *Tierra y Libertad*, 2-VIII-36, aunque lo de las amenazas desde el púlpito viene de los testimonios de D. Gargallo, Caspe, 24-I-98 y María Montañés

Tampoco se salvaron, sin embargo, otros muchos que no pertenecían a ninguno de estos tres pilares básicos del mundo rural que acabamos de tratar. Otras razones, por tanto, debían sumarse a la tarea depuradora. Razones de tipo político, social, pero también personal, que se entremezclaban entre sí y con los perfiles anteriores y que encontraban en aquella coyuntura una ocasión única para dirimirse por medios más radicales y definitivos que los habituales.

La primera de ellas era, según todas las fuentes, el haber participado en la rebelión contra la República. Aquello se estaba convirtiendo en un radical asalto al orden social, pero había empezado antes que nada como una guerra contra los «fascistas» sublevados. Y ello significaba, en primer término, represaliar a los que habían dirigido y apoyado la sublevación militar donde ésta había tenido lugar. Nada más entrar en cada población, los milicianos preguntan si los había, van a sus casas y escondites y comienzan los desfiles de detenidos. Como en Caspe, donde antes que a nadie buscaron y ejecutaron al alcalde impuesto por el capitán de la Guardia Civil Negrete una semana antes. Después, en las semanas y meses siguientes, la de haber «hecho armas contra el pueblo» se convertiría en la acusación principal de las denuncias contra los que acabarían en cunetas y cementerios, sobre todo —huelga decirlo— allí donde el «glorioso movimiento nacional» había contado con más apoyos. No es extraño, por tan-

(Escatrón), Zaragoza, 16-2-98. La represión como un acto moral, en D. Castro, «Cultura, política», p. 96; y la asociación de la cruz y la espada es algo que denunciaba en abril de 1936 J. Peiró, uno de los dirigentes cenetistas más críticos con la represión (*Perill a la reraguarda*, pp. 1-8). Lo del obstáculo a la liberación del pueblo, en Hans E. Kaminski, *Ceux de Barcelone*, Demoël, París, 1937, p. 192 (edic. cast. en Edics. del Cotal, Barcelona, 1977), siguiendo un esquema ampliamente repetido por la prensa libertaria (v. gr. *CNT*, 5-8-36 y *Solidaridad Obrera*, 15-8-36). La referencia a la religión del «statu quo» y al ataque a la Iglesia como institución es de B. Lincoln, «Revolutionary exhumations», pp. 247-248, aunque esto último aparecía ya en *La Batalla*, 19-7-1936. Por último, la primera adhesión oficial de la Iglesia a la «cruzada nacional», precisamente debida al Arzobispo de Zaragoza R. Doménech (29-8-36), está en R. de la Cierva, *España en guerra. Persecución, represión y cruzada*, p. 54.

to, que Caspe encabece esta lista y que, de acuerdo con las fuentes franquistas, hasta 84 de sus 91 víctimas hubieran participado en el mismo, fuera en los combates, haciendo guardias o formando parte del ayuntamiento «faccioso». En todo ese partido judicial, al menos 53 de los 66 asesinados en la primera semana habían participado directamente en la rebelión, cifra que aumenta a 116 a lo largo de toda la guerra, y que llega a 139 en el caso de toda la provincia.³⁰

Es evidente, por último, que a ellos habría que sumar los 174 zaragozanos combatientes en el bando franquista que encuentran la muerte tras ser hechos prisioneros en diferentes batallas como Belchite, Quinto o Teruel. Por supuesto, en este punto entrarían la mayor parte de las víctimas de Belchite, Codo o Quinto; pero también la práctica totalidad de las que provenían de localidades que, como Tauste (14), Gallur (12) o Fuentes de Ebro (9), estaban en la otra retaguardia. La suma de ambos apartados arrojaría el resultado de 313 víctimas (42%) que habían tomado parte en el levantamiento militar o en su posterior defensa armada. Entre ellas estaban, por supuesto, las 22 de las que las fuentes nos indican que pertenecían a las fuerzas armadas y de seguridad del Estado.³¹

Las fuentes proporcionan sin embargo otras muchas y variadas razones que tejen una urdimbre tan compleja como

³⁰ En el resto de partidos las cifras son muy inferiores, porque en ningún caso hubo una participación y un combate comparables a los de Caspe. No obstante cabe encontrar también ahí casos harto significativos como el de Letux, 14 de cuyas 15 víctimas habían «hecho armas» según la CG, que es de donde hemos extraído estos datos. Los testimonios orales insisten a menudo en que la mayoría de los denunciados lo eran por haberles visto con armas durante los días de dominio de la sublevación: testimonios de D. Gargallo, Caspe, 24-1-98, y de R. Rams, Fabara, 20-5-99, localidad en la que muchas víctimas habían tomado parte en un intento de extender la rebelión a Mequinenza; de 19 de ellas, la CG señala que habían participado en la misma.

³¹ Incluimos aquí a los 8 militares de la provincia -seis de ellos de la capital- fusilados tras ser capturados en el frente aragonés, o los 14 guardias civiles de puestos de la zona (Caspe, Fabara, Maella, Bujaraloz, Quinto, Mediana de Aragón y Pina) que sufrieron parecida suerte tras ser detenidos en la toma de Caspe (8), Quinto (4) o en otras acciones.

las relaciones personales y comunitarias en las que a menudo se basan. Es evidente que sería inagotable relatar todos los casos. En Leciñena, por ejemplo, una de las víctimas había sido denunciada por negarse durante la República a trabajar sólo ocho horas como estipulaba la legislación, y otra moría porque en un registro le encontraron un arma que le había suministrado la Guardia Civil en los días de dominio de los sublevados. Se las hubieran dado éstos o no, eso último se repetía en lugares como Almonacid, Letux y Gelsa. O en Aladrén, donde incluso se penó con la muerte instantánea no ya sólo la posesión de un arma de fuego, sino incluso la de una navaja «de pastor». En otros casos, lo encontrado en el registro era bastante menos peligroso, como un retrato de Alfonso XIII y una bandera monárquica en la casa del cura de Alforque, o unas cartas comprometidas halladas a tres hombres de Almonacid, Azuara y Farlete. Pero la suerte que les esperaba era la misma. Siendo así, apenas puede extrañar que, en aquella vorágine, murieran del mismo modo los que —como otro de Azuara y dos de Plenas— eran sorprendidos intentando «pasarse» al otro bando; los dos hermanos de La Codoñera (Teruel) fusilados en Caspe junto a su también hermano y sacerdote por esconderle, o algunos de los que no aceptaban el régimen colectivista o se salían de él.³²

Por otra parte, el de esos hermanos no era un caso aislado, sino que encontramos muchos otros en los que varios miembros de una misma familia caían, a menudo juntos, bajo las mismas balas. En unas comunidades rurales pequeñas, en las que la política se identificaba con rostros conocidos por todos y donde el individuo aislado era inconcebible al margen de su «casa» en sentido amplio —la unidad básica y el

³² Estos dos últimos serían de acuerdo con la CG los casos de C. Martín (Plenas) y del maellano F. Viver Aguilar. Véase para estos y los otros ejemplos, además de los testimonios orales, las ramas correspondientes a cada localidad en la pieza nº 1 de ese mismo fondo documental. Los de La Codoñera eran hermanos del cura de Caspe, mencionado unas notas más arriba, que fue sólo herido en el fusilamiento y pudo escapar a «zona nacional».

vehículo de integración en la vecindad»—, los alineamientos sociopolíticos venían dados por la adscripción a cada una de ellas. La represión así lo refleja en innumerables casos. En La Almolda (partido de Pina), cinco familias sumarían dos hermanos fusilados cada una, otra familia tenía a tres y una más había visto desaparecer a cuatro; en total 17 de las 25 víctimas. En Gelsa, una «casa» sufría siete muertes, mientras que una segunda perdía a otras seis: tres hermanos, el padre y dos yernos —a su vez hermanos entre sí. Y en Caspe, además de cuatro casos en que mueren padre e hijo, cuatro con dos hermanos y uno con un matrimonio, la familia Cortés Albesa perdía a cuatro hermanos y a su padre, y la de Cirac Estopañán a otros cuatro hermanos y a cinco primos. En todos los casos, las fuentes coinciden en una clara apreciación: eran «familias de derechas muy significadas».³³

Por último, familiares —y personales— eran también otras de las razones que intervinieron, y en ello están de acuerdo todos los testimonios orales, en las denuncias y, en suma, en la represión. Rencillas familiares, rivalidades o viejos litigios —riegos, linderos, caminos, deudas económicas— se cuelan a través de la brecha abierta por los más altos móviles del conflicto y, en esa coyuntura, también se resuelven por las armas. Una denuncia, un llamamiento a un «coche de la

³³ En Velilla de Ebro, por su parte, entre sus 15 víctimas había tres casos de muerte del padre y el hijo, uno de madre e hijo y otro de suegro y yerno. En Luesma, siete de los fusilados provenían de dos familias. Y en Osera de Ebro, donde las víctimas fueron 11, una familia aportaba al obituario marido, mujer e hijo, y otra matrimonio, dos hijos y el hermano de la madre, al parecer porque eran parientes de un militar que había huído a Zaragoza para incorporarse a la sublevación. Para todos esos datos, AHN, CG, legs. 1423-1425, y los testimonios de E. G. G. (Gelsa, 9-1-99), A. Vicente (Caspe, 24-1-98), R. Guiu (Velilla; Zaragoza, 20-4-99), y M. Pérez y C. Domingo (Luesma; Zaragoza, 6-3-99). Para las dos familias de Caspe, además, V. Gracia, *Los héroes de Aragón*, p. 32, y por supuesto el martirologio caspolino del canónigo y hermano de cuatro víctimas S. Cirac Estopañán, *Los héroes y mártires de Caspe*. Casos semejantes en otras regiones, en F. Alía Miranda, *La guerra civil en retaguardia, Ciudad Real*, p. 217, y M. Ortiz Heras, *Violencia política*, p. 97. La referencia a las «casas» como unidad central de socialización procede de J. Ugarte, *La nueva Covadonga insurgente*, pássim (cita en p. 36).

muerte» que actuara en la zona o un discreto comentario a los milicianos podían acabar para siempre con una querrela del día a día rural y con un competidor en el reparto de los escasos recursos del agro aragonés. Una de las víctimas de Moyuela, por ejemplo, tenía un pleito con el presidente del comité y no se hablaban, y a otra le pasaba lo mismo con el líder de la CNT local. En Farlete, la mayoría de las muertes tenían su origen en las denuncias de un barbero, activo izquierdista, que se vengaba así de los derechistas que le habían apaleado y obligado a huir del pueblo durante la II República. En Caspe, al menos una de las denuncias escondía el odio contra un vecino que «le había cortado una noche el riego y le había secado las patatas», y tras otras estaba «el mediero contra el propietario que siempre le había jodido». Y en Fabara, una de las primeras víctimas y su yerno eran acusadas de «fascistas» por un miembro del comité al que habían empleado como mediero y luego despedido, y que tras las elecciones de febrero del 36 había intentado ocupar sus tierras. Los miembros de un grupo de investigación del Consejo de Aragón lo tenían claro: «el odio personal es grande» en estos pueblos; «mientras uno consideraba peligrosísimo a otro, había otros que decían esa es una persona buena por excelencia, lo que dificulta la labor de investigación». Para ellos en aquel momento, y para el historiador en el presente. Como en toda guerra civil, en una situación en la que las probabilidades de impunidad aumentan debido al debilitamiento del poder represivo, «la violencia privada encuentra a menudo una cobertura en la violencia pública», se entremezcla y se confunde con ella.³⁴

³⁴ G. Ranzato, «Évidence et invisibilité des guerres civiles», *op. cit.*, pp. 22-23, y el entrecorrido anterior, en el informe del grupo de investigación del sector de Letux (AGCS, PS Barcelona, carp. 839). Un argumento similar aplicado a otra localidad aragonesa, en S. Harding, *Remaking Ibieca*, pp. 75-76. Los casos relatados proceden de la CG (pieza nº 1), aunque todos los han confirmado testimonios orales y, en el caso de Fabara, un documento depositado en su Archivo Municipal (leg. 42-18). Las citas sobre Caspe, en testimonio de J. Sanz (20-3-99). El citado barbero de Farlete era originario de Alfajarín, a donde vol-

Ahora bien, a pesar de la indudable presencia de este tipo de «razones» en las muertes, no parece que sean suficientes, ni siquiera las más importantes, para explicar un fenómeno en el que coincidían móviles de muy diferente signo y entre los que resulta ímproba tarea el intento de identificar aquél de mayor peso en cada caso. Por otra parte, esas cuestiones personales siempre habían existido en el medio rural, y no por ello corría la sangre. Todo indica, por tanto, que debían sumarse a ellas otras consideraciones, otras razones, otros perfiles. En ningún punto como en éste hay tanta unanimidad en las fuentes franquistas y orales. Bajo todo lo anterior había un trasfondo necesariamente compartido por todas las víctimas: «no les mataban por ser ricos, ni jóvenes o viejos, les mataban por ser de derechas». O, en el lenguaje de los que apoyaban la revolución, *fascistas*, esa categoría política recientemente creada y que no todos sabían qué significaba, más allá de la condena y el odio-miedo, ni a quién se podía aplicar.³⁵

A falta de listados de afiliados a las organizaciones derechistas, resulta difícil calibrar con rigor la filiación política exacta de las víctimas. La «Causa General», tan exhaustiva en otros apartados, resulta en este punto una fuente insuficiente, confusa y aun inexacta. En primer lugar, porque caracteriza a muchas de ellas con un invariable y escueto «de derechas» que no indica gran cosa; en segundo porque, cuando se consigna una filiación concreta —Acción Popular, CEDA,

vió tras la paliza a la que se ha hecho referencia y donde se encontraba al estallar la guerra; fue apresado por los sublevados, pero se libró del fusilamiento sufrido por varias decenas de vecinos al escaparse y poder llegar a Farlete. Allí se enteraría de que, en represalia por su huida, los militares habían fusilado a su esposa. El resultado de ese cóctel de avatares personales sería mortal.

³⁵ G. Woolsey, *Málaga en llamas*, pp. 45 y 134; y la cita anterior, en entrevista: M. Plou, Zaragoza, 13-4-99, aunque las referencias a lo mismo son innumerables en otros entrevistados y en la documentación franquista de la CG; también en fuentes republicanas como las reseñadas «propuestas de incautaciones» de las Juntas Calificadoras Municipales, en las que invariablemente aparece como causa de declaración de «facciosos» el que fueran «derechistas» y «fascistas».

Falange,...—, parece tratarse a menudo de meros simpatizantes y no de militantes, como prueba el hecho de que en no pocas ocasiones las diversas fuentes de la «Causa» les incluyan en varias de esas organizaciones a un tiempo. Hechas estas salvedades, se extrae de esa fuente documental que 357 de los 742 fusilados eran «de derechas», y que a ello se añadía que, entre el resto, 117 eran falangistas, 128 de Acción Popular o la CEDA, 59 «tradicionalistas» y 38 de otras organizaciones derechistas; algunos de varias a la vez. Por lo demás, en 76 casos se trata de «indiferentes» o no hay ningún dato y 9 eran «de izquierdas».³⁶

El caso más significativo del valor y límites de esas cifras es de nuevo Caspe. De todas las declaraciones de autoridades y familiares de las víctimas se desprende que 45 de ellas eran tradicionalistas, 39 de AP, 22 falangistas y que 13 pertenecían a las Juventudes Católicas, y únicamente a 12 no se les asigna filiación política alguna. Pero los datos son discutibles, pues casi una cuarentena de ellos aparecen como afiliados a dos o más de esas organizaciones —por ejemplo 21 a AP y a Comunión Tradicionalista o seis a Falange y AP. Quizá el dato más relevante sea, después de todo, que el 79% de los fallecidos (72) eran miembros del Sindicato Católico. En su local se había planeado desde semanas antes el «alzamiento», en él «se juntaban —como reconocían años después los vencedores de la guerra— cedistas, carlistas, tradicionalistas, falangistas y en general todos los derechistas». No era una excepción. En la cercana Fabara sucedía algo

³⁶ Además de los dos ugetistas de Pina que vimos en el capítulo anterior, los siete restantes son casos extremadamente confusos. En algunos da la sensación de que esa filiación izquierdista no es un dato exacto, y en otros sólo cabe suponer que se trata de republicanos a los que alguien, con o sin razones, juzgó como demasiado «moderados» o incluso «traidores» que ayudaban a los «fascistas». Por lo demás, entre el resto de las organizaciones derechistas citadas, 15 víctimas pertenecerían según la misma fuente a Juventud Católica, 9 al Partido Radical, 7 a Acción Ciudadana, 3 a Acción Católica y a Renovación Española y una al Partido Agrario. La misma constatación de esta carencia de la CG, en R. Quirosa, *Represión en la retaguardia republicana*, p. 70.

similar, y de hecho dos de sus primeras víctimas habían sido presidentes de ese sindicato agrario. Y en Gelsa, de acuerdo con los testimonios orales, muchos de los fusilados pertenecían al Sindicato Agrícola, en el que «se reunían los más pudientes y los derechas», mientras que los republicanos y sindicalistas se juntaban unos metros más allá, en el llamado «Casino Independiente». Surgido en muchos lugares con criterios específicos y locales, el sindicalismo agrario había crecido de forma considerable durante la II República y se había convertido en el principal instrumento de la «reacción conservadora» y de la movilización frente a los retos que planteaban la crisis económica, el proyecto republicano y los sindicatos de clase en el agro zaragozano. Que en otros lugares no hubiera tales sindicatos y que las víctimas provinieran con preferencia de otras formaciones como AP no cambiaba las cosas. Eran los núcleos vertebradores de la derecha local y de los enemigos de la República, y era a éstos a quienes buscaban los que, desde el verano del 36, estaban convencidos de que había llegado la hora de derribar el orden social.³⁷

Por lo tanto, en unas comunidades en las que todo el mundo sabía de qué parte estaba cada cual, resultaba claro para todos quiénes eran los objetivos de la violencia: los «derechas». Decir eso, sin embargo, no es hoy decir gran cosa. Aquella era una sociedad en pleno proceso de trans-

³⁷ En Maella, por ejemplo, 30 de las víctimas pertenecían según la CG a AP, y en Letux eso sucedía con sus 15 fusilados. Era, como señalaba el BOCA el 10-11-36, la necesaria «demolición de todo aquello que huela a organizaciones políticas secularmente acogedoras del feudalismo». Las referencias al sindicalismo agrario, en el completo estudio de M. Ardid Lorés, «La reacción conservadora en la provincia de Zaragoza», pp. 334-471; un aún más amplio estudio de los diversos partidos derechistas, en *ibidem*, pp. 472-776. Para el Sindicato Católico de Caspe como aglutinador de la derecha local, S. Cirac, *Los héroes y mártires* (cita en p. 18); *Historia de la Cruzada Española*, tomo IV, p. 220; y Antonio Peiró Arroyo, «El sindicato católico agrario de Caspe en 1936. (¿Sindicato católico o unión de derechas?)», en *Estado actual de los estudios sobre Aragón (Actas de las III Jornadas, Tarazona, 2-4 de octubre de 1980)*, Zaragoza, vol. II, pp. 1129-1133. Lo de Gelsa, en entrevista con S. Gonzalvo, 9-1-99.

formación no sólo política sino también social y económica, y los contornos de los alineamientos políticos eran necesariamente complejos. Como quedó apuntado, también intervenían en ello factores en principio tan poco inteligibles como la pertenencia a una u otra familia, la postura hacia la Iglesia o las relaciones personales. Como se indicaba en un informe ya citado, «los llamados de derechas no distinguen una república de una monarquía. Ellos creen que todo es ganado o perdido si fulanito o menganito es alcalde o juez. Casi todos votaban para que el ‘amo’ no les quitase las tierras a quien el burgués ordenaba, dándose la paradoja de que los más extremistas eran los que vivían de una forma independiente».³⁸ Por consiguiente, el intento de perfilar los rostros de quienes sufrieron la represión debería por último acercarse a los mismos e inquirir quién había tras cada uno de ellos.

LOS PERFILES DE LAS VÍCTIMAS

Había, en primer lugar, sobre todo hombres. De hecho, dentro del complejo universo de la violencia política desencadenada durante la guerra civil, pocas conclusiones resultan tan incontrovertibles como la que apunta al carácter básicamente *masculino* de la represión física vivida a ambos lados de las líneas del frente. Esa dimensión del fenómeno que nos ocupa, quizá una de las peor interpretadas, establece una diferencia de género que debería ir más allá del análisis de las víctimas femeninas como un mero grupo más del obituario, para incorporarse a la caracterización general de esta violencia en tanto que aspecto nuclear de la misma.³⁹

³⁸ La conclusión era tajante: «cuando votaban no lo hacían conscientemente y no conocían el alcance del voto. Los republicanos de ayer dicen ‘fascistas’ a los que votaban, ya sabemos en qué condiciones» («Grupo de Investigación de Letux...»: AGCS, PS Barcelona, carp. 839).

³⁹ Véase, para una primera e indispensable aproximación al tema, Yannick Ripa, «Armes d'hommes contre femmes désarmées: de la dimension sexuée de la violence dans la guerre civile espagnole», en Cécile Dauphin y Arlette Farge

En efecto, todas las fuentes parecen coincidir en que la de la represión era una historia escrita en masculino. Hombres eran, en primer lugar, la inmensa mayoría de sus *actores* y ejecutantes, esos que apilaban imágenes y objetos religiosos para prenderles fuego, denunciaban, buscaban a las víctimas y protagonizaban «sacas», «paseos» y ejecuciones sumarias junto a alguna cuneta, descampado o cementerio. En una sociedad como la española de los años treinta, el ejercicio de la política en general, y de la violencia en particular, seguía constituyendo un riguroso monopolio de los varones y por tanto un territorio prácticamente vedado al otro sexo. Algo que sólo había podido verse alterado en la historia cuando la irrupción de las voces femeninas en la arena de lo público y de la violencia provenía de su presencia en motines y protestas ligadas a la carestía de las subsistencias y al alimento de la unidad familiar. Es decir, cuando esa irrupción no cuestionaba su secular papel en el orden simbólico patriarcal. De hecho, «la negación de la violencia física por parte de las mujeres es característica del proceso de construcción de la identidad de género», y contra ello ni siquiera pudo suponer una modificación fundamental la presencia de mujeres en las columnas de milicianos al calor de los mensajes emancipatorios y las urgencias movilizadoras de la primera hora. La «miliciana», imagen revolucionaria por excelencia, se vio pronto desvanecida y sustituida por el lema «los hombres al frente, las mujeres a la retaguardia» y por los llamamientos a la «virilidad» de las fuerzas propias frente al «afeminamiento» del contrario. Cuando no por la satanización de esas «mujeres públicas» culpables de llevar el caos y todo tipo de enfermedades venéreas al frente aragonés, castigo simbólico contra las mujeres que se habían saltado las fronteras de los

(dirs.), *De la violence et des femmes*, Albin Michel, París, 1997, pp. 131-145; y, para algunas reflexiones generales aplicadas a la Europa de esos años, François Rouquet, Danièle Voldman (eds.), «Identités féminines et violences politiques (1936-1946)», *Les Cahiers de l'Institut d'Histoire du Temps Présent*, 31 (1995) (pp. 11-15 para las dificultades, tabúes y estereotipos en el estudio de la relación entre violencia y mujeres).

roles sexuales en un terreno tan sensible para los mismos como la violencia. La revolución era en aquella sociedad rural, como a la postre en otras latitudes pasadas de la historia, cosa de hombres, una «aventura masculina» en la que la mujer «es minoritaria, apenas tenida en cuenta, apenas escuchada».⁴⁰

Algo sí se le escuchó —y su eco lo recogen los testimonios contemporáneos— durante los días de llamas del estío del 36, cuando entre el estrépito de las denuncias pudieron distinguirse algunas voces femeninas. O un año después, cuando izquierdistas huidas de las comarcas de la zona «nacional» acudieron a cárceles y campos de prisioneros para firmar denuncias contra convecinos «fascistas» capturados en la toma de Belchite y Quinto. Pero, independientemente de que a menudo las mujeres acusaban a mujeres, conviene tratar con prudencia un asunto exagerado y tergiversado después por el mito franquista de las «feroces rojas». Mito tras el que subyacía un reproche patriarcal ante una de las pocas posibilidades que la revolución daba a la intromisión femenina en el espacio de la violencia en contra del supuesto ideal de mujer «dulce y sensible». De ahí que se repitiera lo que

⁴⁰ M. Vovelle, *La mentalité révolutionnaire*, p. 86 y, para el mismo periodo, Dominique Godineau, «Femmes en citoyenneté: pratiques et politique», *Annales Hist. Révol. Franç.*, 300 (1995), pp. 197-207. Sobre lo tratado en el texto, Vicenç Fisas (ed.), *El sexo de la violencia. Género y cultura de la violencia*, Icaria, Barcelona, 1998 (la cita en M^a Jesús Izquierdo, «Los órdenes de la violencia: especie, sexo y género», p. 77); Helen Graham, «Women and Social Change», en H. Graham, Jo Labanyi (eds.), *Spanish Cultural Studies. An Introduction. The Struggle for Modernity*, Oxford U. P., Oxford, 1995, pp. 99-116; y sobre todo Mary Nash, *Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil*, Taurus, Barcelona, 1999. Sobre el papel «de género» de las mujeres en la protesta popular, Dominique Godineau, *Citoyennes tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française*, Alinea, Aix-en-Provence, 1988; E. P. Thompson, «La economía moral revisada», *Costumbres en común*, Crítica, Barcelona, 1995, pp. 345-379, y Temma Kaplan, «Conciencia femenina y acción colectiva: el caso de Barcelona, 1910-1918», en J. S. Amelang y M. Nash (eds.), *Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea*, Alfons el Magnànim, Valencia, 1990, pp. 267-295. Véase, como muestra de los llamamientos al trabajo en retaguardia, *Nuevo Aragón*, 26-3-1937.

ya había sucedido antes en otros marcos históricos; que, haciendo lo mismo que sus vecinos varones —gritar, denunciar o incluso contemplar los actos simbólicos de caída de la vieja sociedad—, los contemporáneos y la memoria colectiva las juzgaran de manera mucho más inclemente.⁴¹ De hecho, los propios revolucionarios parecían situarse en parámetros culturales similares cuando, por un lado, no ponían traba alguna a las denuncias entre vecinas, «disputas entre mujeres» inofensivas para la ética masculina y el orden patriarcal; mientras que, por el otro, en ocasiones no consideraban las dirigidas contra los varones. Como en Belchite, el día de la entrada en la ciudad de las fuerzas republicanas en verano del 37, cuando los mandos evitaron la presencia de las muchas viudas y familiares de los muertos por la represión franquista para evitar una oleada de denuncias y violencias: «no las dejaron entrar, las mandaron atrás; mejor, porque no habría quedado vivo ni uno».⁴² El resto fue, sin embargo, silencio. Sin voz en los comités que decidían incautaciones, detenciones y condenas en los pueblos, a las mujeres no les restaba sino contemplar las hogueras de símbolos religiosos y archivos con un silencio que impresionó a los testigos, presenciar lo que hacían y deshacían los hombres, y por supuesto seguir con sus calladas tareas de siempre.

Y, sobre todo, hombres eran también, como en toda la geografía de la guerra civil, la mayoría de las *víctimas* de la represión: 717, frente a las 25 mujeres que corrieron parecida suerte. Huelga decir que las razones de ese impacto sustancialmente diferenciado de la represión hacia las mujeres estarían de nuevo en el lugar que ocupaban en la vida social

⁴¹ Dominique Godineau, «Citoyennes, boute-feux et furies de guillotine», en C. Dauphin y A. Farge (dirs.), *De la violence et des femmes*, pp. 33-49. A excepción de las difusas alusiones de las fuentes franquistas, la única referencia que hemos hallado a la concreta participación femenina en una ejecución, está en A. Camón, *Crónicas del 36*, p. 44.

⁴² Entrevistas: Delia Pérez, Belchite, y tres informantes anónimos, Mediana de Aragón, ambas en 16-6-1999.

y política de la *cit  *. La reciente concesión de la ciudadanía política plena durante la II Rep  blica, as   como el aumento de sus expectativas socio-culturales, escasamente hab  an podido penetrar en una sociedad patriarcal en la que la poblaci  n femenina apenas estaba movilizada y desempe  aba un papel p  blico, en el mejor de los casos, secundario. Incluso, pese a los considerables avances y esfuerzos de una minor  a militante, en la zona republicana. E incluso a pesar de la amplia movilizaci  n de la mujeres por la derecha cat  lica, y a pesar de la opini  n de los que afirmaban, desde republicanos moderados a anarquistas, que la Iglesia hab  a influido poderosamente en la pol  tica del sexenio republicano a trav  s del voto femenino y que las mujeres «ha[b  a]n contribuido a crear el ambiente propicio a un golpe de fuerza. Muchas no se recataban para instigar personalmente a los encargados de realizarlo».⁴³

Por lo tanto, la repres  n no habr  a requerido una gran presencia de mujeres en los obituarios, presencia que hubiera supuesto otorgarles una sustantividad pol  tica y un espacio p  blico que no ten  an y que, con toda seguridad, pocos quer  an darles. As  , el conflicto pol  tico que hab  a tras la guerra apenas tendr  a que cruzar la secular frontera de la diferenciaci  n sexual ante la violencia, y en el acto simb  lico de afirmaci  n y construcci  n de una nueva identidad de la colectividad que hab  a tras todo episodio de violencia represora la muerte de mujeres no aparec  a como una prioridad —cuando s   pod  a serlo, en tanto que elementos disgregadores de la tradicional comunidad, en la reconstrucci  n identitaria de la otra retaguardia. Ni los milicianos que llegaban a los pueblos

⁴³ M  s a  n, «el acento de cruzada religiosa que muchos enemigos de la Rep  blica ponen sobre esta guerra se debe a las mujeres. Primero, porque tal es su sentimiento propio. Las m  s de ellas no ven otra cosa en la guerra. Segundo, como un obsequio que se les hace, para tenerlas propicias»: Manuel Aza  a, *La velada en Benicarl  *, p. 97. Vid. Frances Lannon, «Los cuerpos de las mujeres y el cuerpo pol  tico cat  lico: autoridades e identidades en conflicto en Espa  a durante las d  cadas de 1920 y 1930», *Historia Social*, 35 (1999), pp. 65-80.

preguntaban por ellas, ni como norma común los vecinos las denunciaban. Eran al fin y al cabo mujeres y, en este caso para su fortuna, el significado socio-cultural que las presenta como «sexo débil» les confería un papel radicalmente distinto en lo político y en la violencia que vivía la retaguardia; el mismo que las había hecho siempre «más inmunes que los hombres a las represalias» y que reservaba para ellas otras puniciones más ligadas a la humillación corporal y moral que a la agresión física y a la muerte.⁴⁴

La represión republicana, desde ese punto de vista, confirma el carácter netamente masculino de la guerra y de la revolución. Y ello no sólo por el hecho de que las víctimas femeninas apenas significaran el 3,4% del total. Otros indicios apuntan, además, a que la mujer no figuraba de ninguna manera entre los objetivos primordiales de los represores. Ya mencionamos más arriba la radical diferencia entre la suerte que corrieron los religiosos varones y la que se deparó a las religiosas. La cronología, geografía y circunstancias de las 25 muertes de mujeres ahondan en el mismo sentido. En primer lugar, no deja de ser significativo que sólo se produjera una de esas muertes en los meses de julio y agosto, los más sangrientos en términos globales, mientras que esa cifra era superada por otros tan alejados del estallido inicial como marzo, junio y septiembre de 1937 (entre dos y tres cada uno); como también lo es que hubiera que esperar hasta octubre del 36 para encontrar el mayor número de víctimas.

⁴⁴ Según los psicólogos sociales, ese valor social -aún vigente- colocaría a la mujer en una situación de inferioridad que la cultura trataría de compensar mediante una superprotección varonil de tipo paternalista. De ahí que todos sus experimentos reflejen que los hombres son mucho menos agresivos con las mujeres que sobre ellos mismos: G. Pastor, *Conducta interpersonal*, pp. 221-222. Lo de la «inmunidad», en E. P. Thompson, «La economía 'moral' de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII», *Costumbres en común*, p. 265. Similar escasa presencia femenina entre las víctimas de otros fenómenos represivos cercanos en el tiempo a la guerra civil, en F. Rouquet, D. Voldman (eds.), «Identités féminines et violences politiques (1936-1946)», y Henry Rousso, «L'épuration en France, une histoire inachevée», *Vingtième Siècle*, 33 (1992), esp. pp. 84-85.

Por otro lado, quizá todavía más revelador resulta el hecho de que sólo una mujer muriera en todo el partido de Caspe (el único ubicado enteramente en la retaguardia y, como vamos viendo, donde la represión pudo ser más selectiva), cuando la mayoría se concentran en localidades de los partidos de Belchite (4), Cariñena (5) y sobre todo Pina (14), más cercanas al frente y en las que muchos de los previsibles blancos de la «limpieza» revolucionaria habían podido huir hacia el oeste antes de la llegada de las columnas. No obstante, el dato más digno de atención se refiere a las circunstancias que rodearon a varias de esas muertes. Nueve de las fusiladas lo fueron junto a sus maridos, dos junto a sus padres y otras dos con sus hijos, mientras que en dos casos más se trataba de la madre y la hija de uno de los derechistas huidos a la zona insurgente. Varias de ellas, además, no eran denunciadas por ningún hombre sino —y no parece casual— por otras mujeres.⁴⁵

En suma, los datos inducen a pensar que la ejercida sobre las mujeres fue una represión propia de un segundo momento, extendida cuando y donde la violencia fue menos selectiva y a menudo dirigida contra ellas no tanto por sus concretos perfiles y actitudes personales cuanto por los de los varones de su familia. De hecho, todo parece indicar que la violencia física era algo originariamente masculino que sólo se extendía a las mujeres en situaciones excepcionales y nunca de forma sistemática. Para ellas estaban esas otras medidas específicas, castigos y tareas «propias de su sexo»

⁴⁵ Entre las otras víctimas, por ejemplo, una era fusilada después de intentar pasar sin éxito a la zona «nacional», otra lo era al ser descubierta cuando intentaba evadirse del cerco de Belchite (V. Gracia, *Aragón, baluarte*, pp. 237-238). Como se vio, otra de las fallecidas había estado en esa misma batalla y sería condenada a muerte por el Tribunal Popular de Caspe. Por su parte, las mujeres víctimas de la represión franquista fueron al menos 283 en la misma provincia de Zaragoza, y 436 en todo Aragón (aunque como vimos al tratar del caso de Belchite, pudieron ser bastantes más): J. Casanova *et al*, *El pasado oculto*, pp. 50, 101, 137 y 184.

como lavar la ropa, servir comidas o albergar a los milicianos, limpiar y barrer los locales de comités y organizaciones antifascistas, trabajar en la recogida de aceitunas o la prohibición de poseer imaginería religiosa y de llevar luto por los derechistas víctimas de la guerra y de la revolución. Castigos que, según fuentes franquistas poco sospechosas de ocultar tales prácticas, en este marco provincial no vinieron acompañadas ni una sola vez, pese a los recurrentes tópicos sobre los anarquistas de Durruti matando y violando a niñas y monjas, por agresiones sexuales, purgas de aceite de ricino o cabezas rapadas. Es decir, ese tipo de puniciones, profusamente aplicadas en la otra retaguardia, que no buscaban como las anteriores la mera humillación sino el castigo de unos cuerpos «politizados» que habían faltado a su rol sexual, la negación simbólica de su feminidad y, sobre todo, su redención y «purificación». Eso, y que la persecución contra las derechistas acabó con la guerra y no estigmatizó a sus víctimas durante la larga noche de la posguerra, sería lo que diferenciaría lo sucedido en uno y otro bando en esta nueva guerra de los hombres contra y para los hombres.⁴⁶

El más importante de los perfiles de las víctimas, y por ende el de mayor utilidad a la hora de caracterizar esta represión, sería no obstante la categoría socio-profesional de las mismas. Porque es con ellos con los que antes se muestran

⁴⁶ Ni en la documentación ni en la historia oral hemos localizado caso alguno de violencia sexual, ingestas de aceite de ricino o corte del pelo al cero, como los que se daban en la zona dominada por los militares sublevados o se dieron en otros fenómenos de cambio político y social. Cfr. Yannick Ripa, «La tonte purificatrice des républicains pendant la guerre civile espagnole», en F. Rouquet, D. Voldman (eds.), «Identités féminines et violences», pp. 39-51; y para la Francia de la Liberación, Fabrice Virgili, «Les tontes de la Libération en France», en *ibidem*, pp. 53-65, y «Les 'tondues' à la Libération: les corps des femmes, enjeu d'une réappropriation», o Françoise Leclerc y Michèle Weindling, «La répression des femmes coupables de collaboration», los dos últimos en *Clio, Histoire, Femmes et Sociétés*, 1 (1995), pp. 111-127 y 129-150, respectivamente, además de Alain Brossat, *Les tondues. Un carnaval moche*, Manya, París, 1992. Ejemplos en estas comarcas, en lo que respecta al periodo franquista: testimonio de D. López (Lécera), y F. Gálvez, *En los Monegros*, p. 143.

las insuficiencias de los viejos mitos y, seguramente, con los que mejor se ponen a prueba las actuales interpretaciones.

Los datos, desde esa perspectiva, apuntan con una meridiana claridad a los grupos de propietarios —agrarios, comerciales e industriales— como principales blancos de la violencia revolucionaria. Juntos suman el 61% de las víctimas, aunque el porcentaje alcanza el 69 si les añadimos otro grupo de «acomodados» como el de los profesionales liberales y funcionarios, y roza el 75 agregando militares, fuerzas de orden público y religiosos, tradicionales aliados y/o servidores de su orden. Y esas son cifras, además, que se reproducen con notable homogeneidad en las diferentes comarcas de la provincia que estuvieron en la zona republicana. La realidad, como veremos, no es sin embargo tan sencilla.⁴⁷

Distribución socioprofesional de las víctimas

Propietarios y labradores	356 (48%)	Sus labores	25 (3,4%)
Jornaleros	100 (13,5%)	Militares y guardias civiles	22 (3%)
Comerciantes e industriales	95 (12,8%)	Religiosos	19 (2,6%)
Profesionales liberales	60 (8,1%)	Desconocido	5 (0,7%)
Obreros y empleados	58 (7,8%)	Otras	2 (0,3%)

Fuente: «Causa General» y registros civiles. Elaboración propia

⁴⁷ Para la elaboración de esta clasificación socio-profesional hemos seguido la propuesta por M. Ortiz Heras en *Violencia política en la II República*, pp. 85-87 y n., y sólo hemos introducido la variante de unificar los grupos de profesionales liberales y funcionarios. En el anexo nº 4 recogemos estos datos divididos por partidos judiciales.

Como en la mayoría de las regiones de la España republicana, el grupo más afectado por la represión es el de los propietarios agrarios y labradores, que en este caso alcanza prácticamente la mitad de todas las víctimas —aunque con toda seguridad la superaría caso de contabilizar como tales a no pocos comerciantes e industriales que también tenían propiedades rústicas. En unas comunidades con una base económica principalmente agraria, y en las que además los índices de concentración de la propiedad de la tierra eran bajos y la mayoría de las familias contaban con algunas parcelas, resultaba lógico que la persecución apuntara de forma prioritaria a los que poseían el principal medio de producción, el elemento fundamental de diferenciación social y de vertebración de las relaciones de poder.

Esas mismas características socio-económicas de la zona —en especial el considerable reparto de la propiedad— ofrecen no obstante un panorama menos unívoco. Frente a lo que sucedía en las provincias latifundistas del centro y el mediodía peninsular, en estas comarcas los grandes terratenientes eran excepcionales —además de absentistas— y lo que predominaba era el pequeño e ínfimo propietario, a menudo obligado a emplearse para otros como mediero o arrendatario a fin de completar sus escasos ingresos. Y eso se reflejaría en los represaliados. Es indudable, como vimos, que muchos propietarios acomodados y «amos» cayeron bajo los dardos de esta violencia y que incluso estuvieron casi siempre entre sus primeros blancos. No eran los grandes propietarios de otras regiones —en las que eran los grupos más perseguidos—, pero sí se les podía identificar con el secular «enemigo de clase» como los principales beneficiarios y sustentadores del orden social en el agro de la España interior.⁴⁸

⁴⁸ Para un caso referido al sur español como es Jaén, véase F. Cobo Romero, *Conflicto rural y violencia política*, donde los «ricos hacendados rurales y poseedores de capital en general» -a los que se diferencia de los «labradores (medianos y pequeños propietarios agrícolas)- aparecen como el grupo más castigado por la represión (p. 279).

Sin embargo, en los victimarios de la mayoría de los pueblos aparecen junto a ellos otros rostros más humildes, esos pequeños propietarios que no empleaban a nadie, trabajaban directamente sus tierras con la sola ayuda de la unidad familiar y que incluso, en no pocas ocasiones, se empleaban ellos mismos. Las declaraciones e informes recogidos por la «Causa General» en los primeros años de posguerra, al igual que los testimonios orales de los que vivieron aquellos años y conocieron a los fallecidos, son enormemente pródigos en referencias a víctimas que no «llevaban» obreros ni medieros, «nada ricos, aunque bien vestidos y que iban siempre a tomar el café»; en suma, «trabajadores del campo, gente de albarcas y callos en las manos» a los que se extendió el calificativo de «fascista» que, en aquella radical coyuntura, podía significar la muerte.⁴⁹ Quiénes eran esos «propietarios», y sobre todo esos «labradores», se convierte por lo tanto en una de las cuestiones fundamentales en el estudio de esta violencia.

En ese punto, sin embargo, las fuentes utilizadas introducen algunas sombras. Por una parte, los informes y declaraciones de la «Causa General» y las inscripciones de las muertes en los registros civiles —fuentes básicas para la caracterización socioprofesional de las víctimas— utilizan en ocasiones indistintamente los términos «propietario», «labrador» y, bien que con menor frecuencia, «agricultor» y «del campo». Por otra, el propio empleo de esas categorías puede resultar impreciso, porque podían esconder situaciones socioeconómicas de lo más dispares. En rigor, ello ocurría quizá con la primera de ellas, aunque numerosos indicios llevan a considerar que era aplicada usualmente a quienes poseían suficientes tierras como para ser más o menos autónomos y poder emplear, al menos de forma ocasional, a otros campesinos. En los otros tres, sin embargo, es más difícil establecer

⁴⁹ Las dos frases entrecomilladas provienen por este orden de AHN, CG, leg. 1423 (1), rama de Lecifena, y del testimonio oral de E. G. G., Gelsa de Ebro, 9-1-99, aunque son afirmaciones que otras fuentes repiten con insistencia.

regularidades, sobre todo en el caso de los «labradores». Categoría equívoca y heterogénea, los designados por ella iban desde los llamados «labradores acomodados» o ricos hasta los medieros y jornaleros que tenían un pequeño «corrico» de tierra propia, pasando por un amplio abanico de situaciones propias del campesinado de una zona de propiedad repartida que vivía un proceso de transición hacia una agricultura de mercado. Eran sin duda el grupo numéricamente mayoritario y, fuera de la posesión de más o menos tierras y de trabajarlas ellos mismos —aunque los más ricos empleaban al mismo tiempo al resto—, poco más parecía unirles en sus situaciones económicas y sociales.⁵⁰

El estudio de esas situaciones a partir de otras fuentes complementarias confirmaría esa misma heterogeneidad. En la localidad de Fabara —con uno de los mayores índices represivos—, 17 de las 28 víctimas eran propietarios rústicos o labradores; de ellos, cuatro eran «pequeños propietarios», tres «medianos», ninguno «grande», y los otros diez eran «ínfimos» y estaban por debajo de la media de contribución rústica del lugar. Muy cerca de allí, en Nonaspe, apenas ocho de las catorce víctimas aparecían entre los 53 mayores contribuyentes —aunque entre ellos había a lo sumo tres «propietarios medianos» y ninguno «grande». Entre esos ocho, uno era del primer grupo citado (Miquel Franc, el mayor contribuyente de la población), cuatro «pequeños» (el 4º, 11º, 17º y 28º en contribución) y el resto «ínfimos». Por su parte, únicamente tres de las víctimas estaban entre los veinte mayores contribuyentes de Fuendetodos, sólo una entre los cinco de

⁵⁰ Cfr. J. D. Simeón Riera, *Entre la rebel·lia i la tradició*, pp. 21-29, y M. Ardid, «La reacción conservadora», p. 970, donde se define a los labradores como arrendatarios de fincas medias o grandes, al mismo tiempo propietarios de otras y situados por encima de los «propietarios ínfimos» caracterizados por L. Germán en su citado texto *Aragón en la Segunda República*, pp. 51-56. En ese último lugar se especifica una clasificación de los propietarios rústicos a partir de su contribución fiscal —ínfimos, pequeños, medianos y grandes propietarios— que es la seguida en las líneas que siguen.

Escatrón, y ninguna entre la decena de propietarios con mayor contribución en Aladrén y Letux. Por último, y sirviéndonos en este punto de datos globales, entre los 178 propietarios incluidos en 1933 en el Registro de la Propiedad Expropiable del IRA para todo lo que sería la zona republicana de la provincia, apenas cabe encontrar a seis de los fusilados durante la guerra. Y, todavía más significativo, sólo uno los 63 «grandes propietarios» rústicos de la zona —25 de ellos absentistas— figuran en ese victimario.⁵¹

Con los datos disponibles cabe por tanto concluir que, junto a propietarios acomodados, «amos» y agricultores más o menos ricos pero autónomos, la represión se extendió a otros grupos campesinos, también poseedores de algunas tierras pero mucho menos beneficiados por el reparto del poder y los recursos locales. Muchos pertenecían a ese «campesinado familiar» definido por Luebbert como los «estratos medios de la sociedad agraria que poseían suficiente tierra para ocupar a los miembros de la familia a tiempo completo y producir para el mercado, pero no tanta como para dar empleo a un número considerable de trabajadores», y que el mismo autor considera «una fuerza crucial» en el desarrollo de las alianzas de

⁵¹ Se trataba de V. Cebollero, el antiguo alcalde derechista de Pina fusilado junto a su hijo y otros cuatro vecinos al entrar en esa localidad el primer grupo de milicianos el 26 de julio de 1936. Los seis declarados expropiables eran tres de los fusilados de Caspe (V. Fuster, J. Bardavio y J. Miravete), dos de Velilla de Ebro (J. Continente y J. Tella) y el ex-diputado provincial y ex-alcalde de La Almoldea E. Villagrasa, aunque también figuran entre los afectados las hermanas de otros cinco fusilados. El dato de los 63 mayores contribuyentes está extraído de la Tesis Doctoral de Luis Germán, «Elecciones y partidos políticos en Aragón», vol. II, pp. 395-440. Los otros proceden del Archivo del IRYDA de Madrid, Registro Expropiable de la Provincia de Zaragoza (1933), *loc. cit.*; Archivo Municipal de Nonaspe, Libro de Actas del Ayuntamiento, sesión 1-11-1930; y Archivo Municipal de Fabara, leg. 143-2: «Reparto de la contribución por riqueza rústica Fabara (1936)», y Archivo de la Diputación de Zaragoza, Gobernación-Elecciones, leg. 3739: sorteo de mayores contribuyentes (1931). Por desgracia no hemos podido consultar datos semejantes para el resto de los pueblos, al no haber sido localizada la documentación de los repartos de contribución rústica de la Delegación Provincial de Hacienda. Según se nos dijo oficialmente, ha sido lamentablemente destruida.

clases conducentes a los diferentes regímenes del periodo de entreguerras. Algunos otros tenían aún menos terrenos y no sólo no daban ese empleo sino que estaban semiproletarizados y debían buscarlo para sí mismos. En uno y otro caso eran, en suma, sectores de la sociedad campesina difícilmente encuadrables entre los tradicionales «enemigos de clase», pero que al parecer se consideraban más vinculados al orden social defendido por los militares sublevados que a esos «ateos» republicanos y revolucionarios que querían transformarlo. Pese a las profundas diferencias entre ellos, lo que les identificaba era compartir la condición de «labradores» —o lo que en algunos lugares llamaban «rabiadores», «los que querían ser y no eran». Es decir, poseer tierra y trabajarla. Y en una sociedad agraria como ésta, afectada además por la crisis económica y social vivida en toda Europa en esas décadas, el deseo de poseerla —o de conservarla— iba mucho más allá de lo estrictamente económico y condicionaba los comportamientos políticos. Porque era ese «miedo a que se lo quitaran todo, porque decían que iban a repartir todo para todos»; ese «coco de la revolución social manejado por los propagandistas de la dictadura» y por la Iglesia —y no ningún secular e irracional conservadurismo—, lo que les había colocado «con los derechos». Eso, y las solidaridades intracomunitarias y lealtades verticales para con las élites locales basadas en fidelidades personales y familiares, relaciones de dependencia, servicios del sindicalismo agrario, redes clientelares de trabajo y crédito, etc., lealtades «que enturbian las aguas de las clases prácticamente en cualquier comunidad pequeña» y que —junto a los vínculos horizontales, relaciones conflictuales y coacciones con que conviven— explican los componentes del «poder real» local en el mundo rural.⁵² Llegada la guerra, todo ello

⁵² Eric Wolf, «Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas», en M. Banton (comp.), *Antropología de las sociedades complejas*, Alianza, Madrid, 1980, pp. 19-39, y Jim Scott, «Formas cotidianas de protesta campesina», *Historia Social*, 28 (1997), p. 22. Para las implicaciones políticas del anhelo de posesión de la tierra, Teodor Shanin, *Naturaleza y lógi-*

sería también lo que les decantó hacia el bando de los poderosos. Y donde ello se materializó en un apoyo amplio y explícito, las consecuencias serían sangrientas.

También lo fueron, por cuanto se decidieron en el mismo sentido, para un centenar de hombres que, si creemos cómo los identifican las fuentes, eran «jornaleros». El problema terminológico arriba apuntado se reproduce aquí, pues tras esa categoría aparecen de nuevo, a menudo, esos campesinos pobres que tenían algunas parcelas pero que debían completar los escasos ingresos que les proporcionaban trabajando al mismo tiempo para propietarios ricos y labradores acomodados. Eran probablemente los más pobres de ese grupo, y con frecuencia la parte de sus ingresos provenientes de sus pocas tierras era minoritaria. Pero resultaría inexacto establecer una marcada línea divisoria entre ellos y los «labradores» anteriores; y lo sería aún más equipararlos con los braceros de los latifundios andaluces, manchegos y extremeños, categoría social que en estas comarcas, zona de abrumador dominio de la pequeña propiedad, apenas existía. Algunas fuentes, aunque fragmentarias, parecen apoyar este argumento.⁵³

ca de la economía campesina, Anagrama, Barcelona, 1976, v. gr. p. 34, y para la campaña de miedo como factor político clave, P. Preston y E. Sevilla-Guzmán, «Dominación de clase y modos de cooptación del campesinado», pp. 147-165. La cita sobre ese miedo es del testimonio de A. Vicente, Caspe, 24-1-98, y la del «coco» de M. Azaña, *La velada en Benicarló*, p. 100. La referencia a Luebbert, en *Liberalismo, fascismo o socialdemocracia*, pp. 484-499 (cita en p. 484). Cfr. asimismo R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. II, pp. 305-316.

⁵³ Por un lado, hemos buscado siempre en los testimonios orales datos sobre estos «jornaleros», y al menos para una treintena de ellos se nos ha afirmado que «pocas, pero tenía algunas tierras». Por otro lado, hasta 12 de ellos aparecen como «labradores», y otros tres como «del campo», en el censo electoral de 1934 (AHPZ, Estadística, legs. 2436-2437: rectificación del censo electoral...1934), y dos de los cinco «jornaleros» caspolinos fallecidos pagaban contribución por propiedad rústica. Finalmente, hay que señalar que en las diferentes declaraciones, informes, relaciones, etc. de la CG, los mismos que aparecen en unos sitios como jornaleros, en otros son denominados labradores e incluso, en cinco casos, propietarios. M. Ardid, en «La reacción conservadora», recoge una conclusión semejante: «En la mayoría del campo aragonés se considera jornale-

A falta de más datos es preciso concluir, sin embargo, que efectivamente algunas víctimas eran campesinos sin tierras, simples medieros, arrendatarios o «criados» que trabajaban e incluso vivían en «casas» ricas en las que se integraban de una manera que, con toda seguridad, superaba en mucho lo estrictamente laboral. Evidentemente, ellos no podían compartir con los «labradores» el anhelo de preservar sus tierras como factor determinante de la adscripción al bando de los «derechas» que les llevó a la muerte. Pero algunos sí compartían relaciones familiares, de fidelidad o de devoción para con esos «amos» de siempre que les daban trabajo regularmente y con cuyo destino, en cierta manera, se identificaban. Varios de ellos, además, tenían tareas y cargos específicos como encargados, mozos de vaquerías, peones primeros, etc., y ello enaltecía su posición respecto al resto de empleados y les vinculaba doblemente al «amo». Los guardas jurados de las propiedades y los peones primeros o capataces constituían el mejor ejemplo: «defendían a ultranza los intereses del amo, a su total servicio», y la memoria de muchos vecinos guardaba múltiples conflictos con ellos a causa de los robos de leña y de las duras condiciones que imponían en las faenas de recolección.⁵⁴ Por lo demás, es necesario destacar que 25 de esos «jornaleros» fusilados son presentados por las fuentes como falangistas y que hasta 40 de ellos habían sido hechos prisioneros combatiendo en los frentes, principalmente en las tomas de Belchite y Quinto, lo que indica

ro al campesino que trabaja en tierra ajena un determinado número de días. El jornalero, por tanto, posee un medio de producción explotado bajo contrato y completa sus ingresos con los trabajos de temporada» (pp. 968-969).

⁵⁴ M. Borraz, por ejemplo, era mozo vaquero de F. Cervera en Fabara, y según un testimonio oral «se había hecho tan derechos o más que su amo: ambos morirían fusilados en el verano del 36. Como casos de guardas privados que corrieron la misma suerte, H. Arcega (Caspe), F. Usón (Gelsa), I. Rubio (Leciñena), F. Soler (Maella) y Z. Bolea (Zuera). Sobre la persecución de los capataces, en ocasiones más que contra los amos, J. M^a Solé y J. Villarroja, *La repressió a la reraguarda de Catalunya*, p. 456. La cita del texto pertenece al testimonio de A. Gambau, Caspe, 18-3-99.

que pudieran ser estos dos motivos concretos los que les llevarán a morir, independientemente de su posición social. Por último, pero no menos importante, encontramos de nuevo una acusada diferencia comarcal en el impacto de la represión sobre este sector social. Frente al 6,2% del total de víctimas que suponen los «jornaleros» en el partido judicial de Caspe —donde la violencia pudo extenderse a todos los pilares del orden social—, en aquellos donde éstos tuvieron a menudo la ocasión de huir los porcentajes alcanzan el 11,7 en Pina, 15,5 en Cariñena y suben hasta el 22,5% en el de Belchite.

Casi un centenar fueron asimismo los comerciantes e «industriales» que cayeron víctimas del asalto al orden social, y también en este caso se encuentran en su distribución comarcal claras diferencias. Su origen es el mismo que en el caso anterior, pero su signo es justamente el contrario. Más de la mitad de los fallecidos de este grupo murieron en el partido de Caspe —en el que suponen el 25% de las víctimas— e incluso uno de cada cuatro en su capital, mientras que en los otros partidos nunca superan el 10%.

Respecto a los industriales, es evidente que, en rigor, no se podía tratar de un sector profesional cuantitativamente importante en unas comarcas en las que el sector primario era hegemónico y apenas había industrias propiamente dichas, sino antes bien pequeños talleres artesanos que a menudo combinaban sus tareas con las del campo. Las únicas excepciones parecían estar junto a la docena de minas de lignito de Mequinenza y la central hidroeléctrica de Sástago, pero eran industrias que estaban a menudo en manos de capital foráneo. No obstante, existían algunas industrias relacionadas principalmente con el aceite y el azúcar ubicadas en su mayor parte en el Bajo Aragón zaragozano. Varios de sus propietarios, sobre todo en esa comarca, morirían a manos de los milicianos durante los primeros meses de guerra, como los dueños de cuatro de las ocho «fábricas» de aceite de Maella. En total, según nuestros datos, quince titu-

lares de industrias de aceite, jabón, conservas y licores. Junto a ellos, sin embargo, aparecen también los poseedores de pequeños talleres y negocios como carpinteros, pintores, carreteros y herreros, hasta totalizar otros 16 óbitos. Rostros, en suma, más modestos y que, según las fuentes disponibles, eran a menudo los que más sufrieron la represión. De este modo, apenas nueve de las 31 víctimas estaban entre los cinco mayores contribuyentes «industriales» de sus respectivas localidades, y sólo en el caso de Caspe y Escatrón murió el mayor. Como caso contrario extremo, ninguno de los cinco «industriales» muertos en Gelsa figuraba entre los quince más importantes a efectos fiscales de esa localidad.⁵⁵

La mayor parte de los fallecidos de este grupo, no obstante, fueron «comerciantes». Quizá la hostilidad contra el comercio no fue en la España republicana «uno de los rasgos fundamentales de la mentalidad popular» ni hubo en ella «una voluntad constante de represión», como sucedió en otros contextos revolucionarios. Sin embargo, a los ya vistos saqueos e incautaciones de muchos de los comercios se unieron las muertes de 64 de sus dueños, en su mayor parte —de nuevo— en la comarca de Caspe. Entre ellos había carniceros, panaderos, guarnicioneros, zapateros, etc., y sobre todo propietarios de tiendas de comestibles y ultramarinos y de mercerías y negocios de tejidos. Para muchos vecinos, la prensa anarquista tenía razón al afirmar que el comerciante era uno de los mayores «enemigos» de la revolución y que por tanto una de las principales tareas de la misma —o de sus ejecutores— era precisamente castigar «a los comerciantes sin conciencia que sólo persiguen el propio lucro, en perjuicio del pueblo».⁵⁶

⁵⁵ Datos extraídos del Archivo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza: «Censo de Comerciantes e Industriales. Lista Cobratorio para 1936. Grupo industrial». A partir de esa fuente, en los pueblos de la zona republicana zaragozana había antes de comenzar la guerra 688 de esos «industriales».

⁵⁶ *Nuevo Aragón*, 1-4-37. La referencia a otros contextos proviene de A. Soboul, *Los sans-culottes*, pp. 36-41 (citadas en pp. 36-37). El desglose de esos

Cierto que, cuando se escribía eso en abril de 1937, la mayoría de las víctimas de este grupo ya habían pasado a mejor vida, ya habían pagado con creces la situación de «privilegio» de que disfrutaban y los conflictos que la misma había provocado con los campesinos más pobres. En la mayor parte de los casos no eran negocios que movieran capitales considerables, e incluso los fallecidos no siempre eran tan siquiera los comerciantes más prósperos de cada lugar. La diversidad de situaciones, también aquí, es la nota predominante. En Fabara, por ejemplo, tres de los cinco comerciantes fusilados estaban a su vez entre los cinco más prósperos, y en Mequinenza, Moyuela y Plasas el único tendero fusilado era el segundo más rico de los de su profesión. En otros lugares, sin embargo, las cosas eran muy distintas: en Azuara, donde había 40 establecimientos, los dos comerciantes fallecidos ocupaban los puestos 28 y 35 en dividendos, y en Lércera y Osera el único «caído» de este grupo era el de uno de los negocios menos prósperos. En suma, apenas 15 de las víctimas de este sector profesional estaban entre los cinco con negocios más ricos de sus correspondientes localidades, y en bastantes otros casos se trataba de los más modestos.⁵⁷ Ahora bien, a todos parecían unirles unas estrechas relaciones con los ricos y «amos» —cuando no lo eran ellos mismos—, una buena posición social; y, sobre todo, una posición económica autónoma y a veces muy favorable respecto a la mayoría de sus vecinos, muchos de los cuales no tenían más remedio que crear con ellos relaciones

«comerciantes» arroja 7 guarnicioneros, 6 panaderos, 5 carniceros, 3 zapateros, 2 barberos y molineros y un relojero, hotelero, sastre, agente comercial y cafetero, además de 33 que aparecen con un genérico «del comercio». A partir del «Censo de Comerciantes e Industriales. Lista Cobratorio para 1936. Grupo Comercial» (Archivo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza), hemos comprobado que entre esos 33 dominan los dueños de tiendas de ultramarinos y comestibles, seguidas por las fondas-tabernas-cafés, las mercerías y las tiendas de tejidos.

⁵⁷ *Ibidem*. Para los comerciantes y artesanado resulta útil la citada obra de M. Cabrera, *La patronal ante la II República*.

basadas en la deuda y el crédito de las que no siempre resultaba fácil salir. En el marco de una violencia desbordada por la guerra, algunos encontraron una manera de hacerlo para siempre, de saldar de una forma expeditiva las deudas que figuraban en los temibles «libros verdes» de esos comerciantes y de ajustar las cuentas que la memoria popular retenía contra no pocos de los mismos.⁵⁸

Precisamente esas buenas relaciones con los más ricos, la buena posición social y una desahogada situación económica era también lo que definía a los miembros de otro de los grupos represaliados como es el de los profesionales liberales y funcionarios. Abogados, farmacéuticos, maestros o médicos, veterinarios, etc., además de los ya vistos secretarios de Ayuntamiento y de Juzgado, notarios o registradores de la propiedad, constituían un grupo heterogéneo pero unido por un parecido *status* que les situaba en general por encima del común de la población. Tenían «estudios» e independencia económica, iban al café y a las reuniones de los más ricos, colaboraban con la élite del lugar en la administración política y, en ocasiones, aglutinaban en torno a sus tertulias a la derecha local. En Caspe, el médico Fermín Morales era desde años atrás una de las figuras señeras del conservadurismo de la ciudad, alguien que nunca faltaba a las reuniones del Círculo Católico y, cosa significativa, el primero al que se dirigió el capitán de la Guardia Civil que encabezó la sublevación. Alguien lo salvó del fusilamiento, según cuentan en la localidad «porque no había otro médico para certificar las muertes», sorteó varias detenciones y denuncias, y tras la guerra se convirtió en el segundo alcalde del franquismo. Pero otros no tuvieron tanta suerte. No médico sino farmacéutico, aunque también representante de

⁵⁸ Como los dos miembros de la familia Cebollero fusilados el primer día en Pina, que además de acomodados propietarios eran ricos comerciantes a los que, dice la historia oral, numerosos habitantes debían dinero, incluidas las familias de algunos de sus supuestos denunciantes.

la reacción local, había sido como vimos la primera víctima de la represión en toda la provincia, el 21 de julio en Luceni, cuando las columnas milicianas ni siquiera existían todavía. Cuando éstas llegaron, entre los blancos de sus balas figuraron más de cuarenta rostros semejantes. La mayor parte, de nuevo, en la comarca de Caspe.⁵⁹

A ellos habría que añadir los 17 estudiantes que, de acuerdo con otros estudiosos de este tema, también hemos incluido en este grupo. Eran hijos de familias acomodadas, a menudo estudiaban para esos mismos trabajos y hasta doce de ellos eran requetés o falangistas. Por lo demás, más de la mitad de ellos (10) provenían de las comarcas dominadas por los sublevados y habían sido hechos prisioneros durante los combates de 1937 en el frente de Aragón. M. Lapieza, estudiante de farmacia de 21 años, parece ejemplificar a la perfección el perfil de estas víctimas de acuerdo con lo visto. Hijo del farmacéutico de Uncastillo y jefe local de Falange, se había alistado voluntario al Ejército franquista, siendo capturado por los republicanos en la batalla de Teruel. Llevado como otros muchos preso a la retaguardia e internado en el penal catalán de Cardona, sería «sacado» del mismo en un episodio tras el que, según la «Causa General», estaban algunos izquierdistas de su lugar de origen. Era marzo de 1938, el frente aragonés se derrumbaba y la guerra, a punto de abandonar definitivamente Aragón, se cobraba sus últimas vidas.

⁵⁹ En concreto aparecen así en las fuentes 9 secretarios de ayuntamiento, 6 maestros, 4 abogados y veterinarios, 3 médicos y farmacéuticos (aunque de éstos había otros tres que eran también propietarios agrarios o industriales y la CG recoge como tales), 2 notarios y peritos, además de un juez, un «licenciado», un músico, un químico, un registrador de la propiedad y un secretario de juzgado. Sobre F. Morales, *vid.* su cáustica declaración en AHN, CG, leg. 1424 (2), rama de Caspe, o su obra *Caspe combatiente, cautivo*, aunque el entrecomillado proviene del testimonio de J. Sanz, Caspe, 20-3-99. Para un primer acercamiento a la «Depuración del personal docente en la zona republicana durante la Guerra Civil», ver el artículo del mismo título de Rosalía Crego Navarro, en *Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea*, 4 (1991), pp. 41-72.

Casi tantas como en el caso de esos profesionales liberales y estudiantes, también se había cobrado para entonces las vidas de medio centenar de obreros y empleados, el último de los grupos profesionales a tratar aquí —toda vez que se aludió más arriba a militares, religiosos y mujeres. Eran, entre otros muchos casos, mecánicos, albañiles, alguaciles, escribientes, ayudantes de herreros y sobre todo empleados de banca, oficinas y juzgados, y representaban un grupo tan diverso como difícil de conocer. Sabemos que varios trabajaban en talleres de familiares más o menos cercanos así como en los de dueños y propietarios de «casas» con las que estaban relacionados. Por esas mismas relaciones, en la práctica resulta a menudo complicado diferenciarlos nítidamente de trabajadores —carpinteros, herreros, etc.— que trabajaban como y con ellos aunque eran los dueños de los negocios. En todo caso, al igual que sucediera con los «jornaleros», su apoyo a las opciones reaccionarias —y por tanto su muerte— hundía sus raíces en el universo de las redes de trabajo local y de dependencias personales hacia los que proporcionaban el escaso trabajo en las que estaban inmersos. Por lo demás, la cronología y la geografía de sus muertes revelan que no estaban tan concentradas en los primeros meses como las de otros grupos, y que por contra sí se concentran en algunas pocas localidades con una cuantiosa represión como Caspe, Azuara, Belchite, Pina de Ebro o Maella. En otras palabras, no eran los objetivos básicos de esta violencia, esos que invariablemente constituían las primeras víctimas y se buscaban por todas partes, sino más bien personas alcanzadas por la represión cuando y donde ésta, además de a los pilares nucleares del orden social, se extendía también a otros de sus apoyos.

Así las cosas, la caracterización final de los rostros de esta represión —y con ellos de ésta— no parece cuestión diáfana, mas sí cabe avanzar algunas conclusiones. Hubo en esta violencia, por un lado, unos blancos muy determinados que correspondían en la sociedad campesina de los años treinta a los pilares y máximos beneficiarios del orden social por

cuya defensa o radical transformación se estaba dirimiendo aquella contienda. «Amos» y labradores ricos, élite política y notables locales, sacerdotes, industriales, comerciantes adinerados y profesionales liberales, muchos de los cuales formaban además la derecha local y se habían sublevado contra la República, fueron desde ese punto de vista las primeras víctimas buscadas, los más prontamente denunciados, los que en todas partes sancionaron con su sangre la llegada de la revolución. Ahora bien, aquella «santa ira popular», que se había iniciado como un asalto a la sublevación «fascista» y a los puntales del orden «burgués» que la habían propiciado, afectó también a otros de sus apoyos donde ese asalto fue más intenso. De ahí la aparición junto a los anteriores de muchos de esos rostros más modestos, difícilmente equiparables en lo económico y social con las clases propietarias y el «enemigo burgués» contra los que los revolucionarios decían luchar. Miembros heterogéneos de la sociedad campesina a los que, reproduciendo la complejidad de la misma en un momento de rápidos cambios estructurales, se extendió el epíteto «fascista» cuando la fractura social, las circunstancias locales o la huida de los blancos principales de esta persecución llevaron a que ésta fuera más allá de aquéllos.

Por lo tanto, se trataba en principio de una represión *de clase*, aunque *no sólo* de clase. No al menos en un concepto de clase definido por criterios estrictamente económicos y de situación en el sistema productivo; que no englobara lo político en un sentido amplio, la acción de individuos y colectivos, los diferentes instrumentos de clase del medio rural y las «posiciones contradictorias» o «mediatas de clase» —ineludibles al descender al nivel «micro» de análisis. O que, por lo mismo, no fuera compatible con otros tipos de alineamientos político-sociales como las redes y solidaridades verticales de esas comunidades, las «lealtades primordiales» y, sobre todo, las diversas posiciones socio-culturales o de *status* exitosamente instrumentalizadas por la movilización conservadora de entreguerras en sus variantes religiosa, nacionalista y tecnocrática. Posiciones que, aunque menos «objetivas» y más

«gradualistas» y ligadas a lo perceptivo, acaban por resultar imprescindibles para caracterizar este fenómeno. Porque, en realidad, esa violencia se dirige en ese ámbito rural contra aquellos cuyas conductas y relaciones político-sociales les habían situado junto al viejo orden social en la intrincada delimitación de campos de los años treinta, contra quienes lo representaban y sustentaban de formas diversas. Y ahí entrarían los tradicionales «enemigos de clase», pero también funcionarios, regentes de pequeños negocios, propietarios pobres e incluso medieros y asalariados unidos a sus patronos por lazos de parentesco, deferencia o fidelidad. En suma, todos aquellos que se veían o se creían amenazados por las reformas de la República, votaban a las derechas, compartían espacios de sociabilidad en casinos de derechas y sindicatos católicos e iban a misa todos los domingos.

La guerra, desde ese punto de vista, era una compleja contienda en la que, junto al de clase —probablemente el principal—, se dirimían otros conflictos y guerras cruzadas que no siempre seguían líneas de fractura clasistas y que se relacionaban con la nada unívoca práctica social de esa mayoría de rostros que eran a la vez labradores, arrendatarios y jornaleros. Líneas de fractura en las que, por supuesto, tenía cabida lo socio-económico, pero donde entraban también redes de relaciones personales y económicas, mediaciones culturales e institucionales, lealtades religiosas e ideológicas, adscripciones banderizas familiares y percepciones relacionadas con el honor y la posición social de cada cual en estas comunidades rurales.⁶⁰

⁶⁰ J. Casanova, «Rebelión y revolución», pp. 62 y 137-138, y «Guerra civil, ¿lucha de clases?: el difícil ejercicio de reconstruir el pasado», *Historia Social*, 20 (otoño de 1994), pp. 135-150, y la citada visión general de M. Mann, «Orígenes de la diversidad de los movimientos de la clase europea». Se trata de un tema que supera las posibilidades de este estudio, pero no es necesario remitirse a argumentaciones weberianas para interpretar que la posición en la estructura económica no determina absolutamente las prácticas socio-políticas. Algunos de los últimos debates sobre este tema pueden seguirse en J. Carabaña y A. de Francisco (comps.), «Teorías contemporáneas de las clases sociales», *Zona*

De esa misma complejidad de la guerra, y del radical trastocamiento de las realidades sociales y políticas que supuso en estas comarcas, surgirían las condiciones que hicieron tan traumático el alba de la revolución. Tan traumático, tan sangriento y pese a ello —o quizá precisamente por ello— todavía hoy tan cautivador.



Soldados republicanos en la batalla para tomar Belchite (4 de septiembre de 1937): Archivo Fotográfico Agustí Centelles.

Abierta, 59/60 (1992), en especial las participaciones de Val Burris (pp. 127-156) y Erik O. Wright (pp. 17-126), meritorio intento de hacer más complejo el análisis marxista de las clases en el sentido de lo visto en el texto. Una amplia muestra de los debates suscitados por la literatura weberiana, en Reinhard Bendix y Seymour M. Lipset (comps.), *Clase, status y poder*, Euroamérica, Madrid, 1972, 3 vols., en particular las partes I y III. El texto clásico sobre el *status* es *Economía y sociedad*, de Max Weber, FCE, Madrid, 1993 (1922), sobre todo pp. 682-694, del que hay un resumen crítico en Anthony Giddens, *La estructura de clases en las sociedades avanzadas*, Alianza, Madrid, 1989, pp. 44-57. *Cfr.* para un análisis del mundo rural que conjuga ambas estratificaciones, aunque privilegiando la clasista, Rodolfo Stavenhagen, *Las clases sociales en las sociedades agrarias*, Siglo XXI, México, 1970.



Prisioneros hechos en la toma de Belchite por el Ejército Republicano, esperando su suerte junto a la carretera de Codo (6/9/1937): Archivo Fotográfico Agustí Centelles.

EPÍLOGO: AÑOS DE HUMO

«La guerra, el pánico, la miseria y la memoria de los crímenes horribles seguramente van a impedir la libertad por mucho tiempo»¹

Conquistada toda la zona durante la ofensiva franquista de marzo de 1938 y con la línea del frente desplazada hacia Cataluña, la revolución se alejaba para siempre de estas comarcas y con ella lo hacían los que más se habían implicado en la misma. Atrás quedaban unas tierras que no olvidarían fácilmente los sueños, experiencias y frustraciones de que fueron testigos, como tampoco la sangre que sobre ellas corrió allí donde ahora comenzaban a vertirla, también abundante, sus nuevos «conquistadores». Como tampoco podrían olvidarlo los que, cargados de recuerdos, oprobio, rabia y temores, iniciaban la larga retirada, el largo camino de la derrota hacia el Levante —en sentido inverso al de 1936— y en muchos casos hacia el exilio. Con su marcha, los que más habían tenido que perder con el sueño igualitario festejaban el final de la «dominación roja» en tierras aragonesas y se aprestaban a disfrutar, tras la «desinfección y saneamiento» de esos «muladares» en que los vencidos las habían convertido², de la «nueva» España de los vencedores.

Estos últimos, sin embargo, se ocuparon de que retirada, derrota y exilio no significaran final definitivo de la contienda;

¹ José Castillejo, *Wars of Ideas in Spain* (1937), cit. en Paul Preston, *La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX*, Península, Barcelona, 1997, p. 89.

² Enrique Esperabé, *La Guerra de Reconquista Española que ha salvado a Europa y el criminal comunismo*, C Bermejo impr., Madrid, 1940, p. 221.

de que los rescoldos del incendio revolucionario no acabaran de extinguirse en la conciencia de los habitantes de la posguerra. Aupado al poder a través de una sangrienta contienda civil que dividió y proyectó odios y sombras sobre la población de cada pueblo, y a falta durante casi dos décadas de otro tipo de legitimidades, el nuevo régimen se alimentó de su origen bélico, de su momento fundacional-guerra civil. De ahí que desde el comienzo ligara su suerte e identidad al mantenimiento de ese origen, de esa insondable fractura que humillaba y excluía de la vida pública a los vencidos, de esas «mal-ditas raíces del odio» evocadas por Dámaso Alonso. Aquello era una victoria sin compromiso ni perdón y, por tanto, durante mucho tiempo no hubo reconciliación posible, pues tal cosa habría significado una «*contraditio in terminis* con el propio régimen», el comienzo de su fin. Sólo cabían maniqueos binomios vencedores/vencidos, España/«anti-España» y buenos/malos, y en suma una «presencia abrumadora y obsesiva» de la «cruzada». Y precisamente eso, junto a la persistencia de la represión política mucho más allá de 1939, era lo que mantenía la unidad de la coalición vencedora y le permitía edificar el Nuevo Estado franquista en el marco de una cultura política y una ideología definidas por conceptos como la «purificación», la «autosuficiencia» y la exclusión.³

Tras esa guerra inacabada, tras esa legitimidad *de origen* lo que había era una «memoria histórica distorsionada» que el régimen de Franco usó «como arma principal de su arsenal de propaganda». Se trataba de utilizar el pasado reciente para los objetivos de socialización política del régimen, y con ese fin se imponía desde el discurso oficial una determinada memoria colectiva creada para silenciar el sentido de la his-

³ Michael Richards, *Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945*, Crítica, Barcelona, 1999; A. Reig Tapia, *Memoria de la Guerra Civil*; y P. Aguilar, *Memoria y olvido de la Guerra Civil Española*, de cuyas pp. 67 y 64 provienen las frases entrecomilladas. Sobre la radicalización de la diferencia con el otro como base de la identidad política, Jean-François Bayard, *L'illusion identitaire*, Fayard, París, 1996.

toria —y por tanto la identidad— de los vencidos. Que un régimen se sirviera de la memoria histórica para sus necesidades de legitimación distaba de ser algo inédito. Y lo era aún menos tratándose de la evocación de uno de esos acontecimientos, como las guerras, que por su corolario de tragedia y sangre siempre han sido más susceptibles de originar relaciones con el pasado radicales y conflictivas y de ser mitologizados y utilizados para las necesidades presentes del poder. No en vano, «la recuperación de los muertos para las más diversas causas es la tentación más compartida del mundo». Pero cada presente ha abordado su pasado de una manera particular, y desde luego no siempre desde los presupuestos de humillante exclusión y machacona anatemización del vencido con que lo hizo el franquismo.⁴

Pero si de guerra inacabada y de condena del derrotado se trataba, el ya de por sí abrasivo tema del «terror rojo» era quizá el rostro de la contienda que menos debía dejar de crepitar en el frío silencio de la posguerra. No en balde permitía, por un lado, que la sociedad no olvidara a los «mártires de la cruzada», emblemas morales de la España que se quería construir. Y, sobre todo, era el argumento definitivo para reprimir y privar de derechos a los vencidos. Vencidos o «rojos» que quedaban así reducidos a rasgos constitutivos como la crueldad, el salvajismo, el odio y la muerte. Contra

⁴ Dentro de la inagotable bibliografía que genera la memoria histórica, pueden seguirse algunas de sus propuestas y problemáticas en A. Altet (coord.), *Entre el pasado y el presente. Historia y memoria*, U.N.E.D., Madrid, 1995; F. Dosse et al., «Mémoire et histoire», *Raison Présente*, 128 (1998), pp. 5-92; o J. Cuesta, ed., «Memoria e historia», *Ayer*, 32 (1998). Para la memoria de pasados traumáticos, véase J.-C. Martin (coord.), *La guerre civile, entre Histoire et Mémoire*, Ouest éd., Nantes, 1995; J.-P. Bacot (ed.), *Travail de mémoire 1914-1998. Une nécessité dans un siècle de violence*, Autrement, París, 1999, o las monografías de J.-C. Martin, *La Vendée de la mémoire (1800-1980)*, Seuil, París, 1989, y Peter Reichel, *L'Allemagne et sa mémoire*, O. Jacob, París, 1998. Las citas del texto, en P. Preston, *La política de la venganza*, p. 90, y J.-M. Chaumont, *La Concurrence des victimes; génocide, identité, reconnaissance*, La Découverte, París, 1997, p. 14.

eso sólo cabía el silencio, y esa sangrienta mancha llegaba incluso hasta los que vivían la derrota en el destierro, quienes, como los «regicidas» de 1793 durante la Restauración francesa, se esforzaban por alejarse de las facetas más oprobiosas de un pasado imposible de olvidar y no podían sino acaso gritar, en medio del desierto del exilio, que «no fuimos asesinos».⁵

En cuanto tales, la función «inmediata» del recuerdo de la represión «roja» era precisamente justificar la que el franquismo ejercería contra el vencido hasta bien entrados los años cuarenta. Ahora bien, tras ella había además otra más general y de un mayor alcance político. Fermín Morales, segundo alcalde del Caspe franquista, lo expresó con claridad cuando, en el segundo aniversario de la «liberación» de la ciudad, hablaba de «recuerdos que nunca deben dejar de estar presentes en nosotros [...] La memoria humana es frágil, apenas pasan los acontecimientos más relevantes y el olvido empieza a envolver los recuerdos con una neblina que los desdibuja y borra», por lo que «necesita de estas llamadas de atención que vienen a ser el simbolismo de estas fiestas y de aquellas luctuosas listas de mártires que se ordenaron grabar en los muros de las Iglesias, para que sus vibraciones no dejen dormir el recuerdo. [...] Quien se queje con amargura no es buen español, porque olvida a los que dieron su vida que es todo, en beneficio nuestro»...⁶

De hecho, el discurso indicaba ya cuáles son algunos de los instrumentos de rememoración, algunas de esas «llamadas de atención» contra el olvido. No eran sólo los medios de socialización masiva puestos al servicio de un estado autori-

⁵ *Tierra y Libertad* (México D.F.), nº extraord. agosto 1958, p. 9. Cfr. Sergio Luzzatto, *Mémoire de la Terreur. Vieux montagnards et jeunes républicains au XIXe siècle*, P.U. de Lyon, Lyon, 1991, y Eduardo de Guzmán, *Nosotros los asesinos*, G. del Toro, Madrid, 1976.

⁶ *Alocución que el Alcalde de Caspe...*, Imp. La Tipográfica, Caspe, 1940, pp. 3-9.

tario, como la prensa, los noticiarios del No-Do o la depurada e ideologizada educación del franquismo, que sobre todo a través de los libros de texto de Historia mostraba la «España roja» en términos de «matanzas», «partidos sedientos de sangre», «revolución sanguinaria cruelísima [de] horrendos crímenes incomparables» o «mártires de la fe».⁷ O como el alud de publicaciones de «historia» de la guerra que, sin tener nada que envidiar en ese tipo de anatemas a los manuales, coadyuvaron durante lustros a la producción de una memoria de la contienda que la presentaba como cruzada religiosa y patriótica contra la barbarie y el terror «comunistas».⁸

Se trataba asimismo de los *lugares de la memoria* locales, esos espacios y rituales del recuerdo, depositarios y cotidianos recreadores del mismo, de los que el franquismo se sirvió profusamente en estos pueblos y comarcas. Era un arma poderosa a la hora de fijar y recuperar un particular pasado, de cara a estructurarlo, compartirlo y materializarlo «en una

⁷ Por limitarnos a dos de los textos más empleados en la posguerra: Antonio Ballesteros, *Síntesis de Historia de España*, Salvat, Barcelona, 1945 (6ª ed.), pp. 554-556, y Agustín Serrano de Haro, *España es así*, Escuela Española, Madrid, 1962 (21ª ed.), pp. 290-293. Sobre la educación de la posguerra y el papel determinante de la historia en la socialización de la juventud, hemos usado J. Fontana, ed., *España bajo el franquismo*, Crítica, Barcelona, 1986, pp. 215-245; Alejandro Mayordomo (coord.), *Estudios sobre la política educativa durante el franquismo*, Universitat de València, 1999; A. Chopin (dir.), «Manuels scolaires, États et sociétés, XIXe-XXe siècles», *Histoire de l'Éducation*, 58 (1993); y sobre todo Rafael Valls, *La interpretación de la Historia de España, y sus orígenes ideológicos, en el bachillerato franquista (1938-1953)*, ICE-Universidad de Valencia, 1984.

⁸ Caso de S. Cirac, *Héroes y mártires de Caspe*, F. Morales, *Caspe combatiente, cautivo y mutilado*; P. Vicente Gracia, *Los héroes de Aragón*, Uriarte, Zaragoza, 1943 y *Aragón, baluarte* («trescientas personas de derechas fueron bárbaramente sacrificados [en Caspe] por odio a la religión del Crucificado», p. 295); o de obras generales con referencias a nuestra provincia, como J. Arrarás (dir. liter.), *Historia de la Cruzada Española* y E. Esperabé, *La Guerra de Reconquista Española*. O como *La dominación roja en España*; resumen de la «Causa General» y que el Estado remitió expresamente a todas las bibliotecas públicas. De hecho, la «Causa» fue, como vimos, el mayor esfuerzo de propaganda del régimen respecto a divulgar y magnificar el «terror rojo».

forma idiosincrásica de memoria comunitaria».⁹ Y al régimen no le resultó difícil conferirles determinados significados y contenidos que, en tanto que focos emisores de mensajes sociales, debían difundir. Su fuerza estaba en la repetición, en su reiterada presencia que invadía la cotidianeidad y «bloqueaba» la «acción del olvido» de una parte de la guerra. Y su estrépito silenciaba otra, atenazaba aún más a los vencidos y apuntalaba la trágica cesura abierta en cada comunidad entre éstos y sus vencedores.¹⁰

Los primeros y más evidentes de esos «lugares» fueron, sin duda, las múltiples conmemoraciones y actos que salpicaron los pueblos durante años de atribulados recordatorios y homenajes a los «mártires de la Cruzada». La excusa podía ser el traslado de los cadáveres al cementerio local —o luego al Valle de los Caídos— desde el lugar de su «martirio», la restauración y reapertura de iglesias parroquiales al culto o las celebraciones del 18 de julio, el 1 de abril y las fiestas locales. Como en Caspe, cuyos programas de fiestas de 1952 y 1953 se referían todavía a los «caídos» y el de 1958 insistía en seguir llamando «Cruzada» a la guerra civil. Y, sobre todo, eran las misas de réquiem en recuerdo de los vecinos «vilmente asesinados por las hordas marxistas» que, al evocar año tras año sus muertes, constituían actos de «gran manifestación de patriotismo» —es decir de afirmación e identificación con el

⁹ Por parafrasear la noción de memoria colectiva de M^a A. Sanz, *Ojos Negros. La memoria de un pueblo*, p. 49.

¹⁰ Como se sabe, la noción de «lugares de la memoria» proviene de Pierre Nora, quien la define y proporciona una buena aproximación a sus posibilidades, problemática e implicaciones en P. Nora (dir.), *Les lieux de mémoire*, I: *La République*, Gallimard, París, 1984, pp. VII y XV-XLII. Encontramos su aplicación a la guerra civil en José I. Madalena *et al.*, «Los lugares de la Memoria de la guerra civil en un centro de poder: Salamanca, 1936-39», en J. Aróstegui (coord.), *Historia y Memoria de la Guerra Civil*, t. II, pp. 487-549, y «La memoria y el poder: los cambios en la denominación de las calles. Valladolid, Salamanca y León, 1936-1939», en A. Alted (coord.), *Entre el pasado y el presente*, pp. 143-162, así como Cándida Calvo, «Franquismo y política de la memoria en Guipúzcoa. La búsqueda del consenso carlista (1936-1951)», en *ibidem*, pp. 163-182.

régimen— que trascendían con mucho lo estrictamente religioso y prolongaban la tragedia desde la que en esas comunidades era, con seguridad, la tribuna pública más influyente.¹¹

Esos actos y conmemoraciones no eran, sin embargo, los únicos vehículos de la memoria. Eran menester otros más tangibles y perennes que tejieran la espesa telaraña del recuerdo cotidiano sin posible rendija para el olvido. Y los vencedores lo tenían desde el principio muy claro. Como indicara el presidente de la Diputación Provincial al Alcalde en una gran ceremonia fúnebre que tuvo lugar en Caspe semanas después de su «liberación», los nombres de las víctimas, «cuando acabe la guerra, habrán de ser esculpidos en mármoles y bronces». Y sobre mármol, bronce y piedra se hicieron las placas, cruces y rótulos de calles que desde 1938 invadieron el espacio de lo cotidiano de los pueblos para recordar cada día quién había ganado y quién perdido, quiénes eran los «buenos» españoles y quiénes los «malos». Placas y lápidas que, «con el fin de perpetuar la memoria» de los «mártires» y «caídos», arrojaron al tiempo durante décadas sus nombres desde la fachada de las iglesias. Cruces y monumentos a las víctimas que, como pequeños «valles de los caídos», teñían de recuerdo plazas mayores, cementerios y lugares donde se habían producido las muertes, y que a su vez se convertían en espacios de conmemoración en cada aniversario. Y rótulos de calles dedicadas a José Antonio, Calvo Sotelo, a alguna víctima local o simplemente a «los mártires», con los que éstos entraban en el panteón de la comunidad y en el centro de la relación entre los habitantes y su espacio urbano.¹²

¹¹ Especialmente numerosas en los dos años posteriores a la conquista de la zona, la existencia de esas misas, como el resto de conmemoraciones citadas, puede seguirse en la prensa hasta finales de los años cincuenta, aunque los testimonios orales insisten en que llegaron mucho más allá en el tiempo. Véase sobre todo *El Noticiero*, de cuyo número del 8-9-1938 proviene lo de acto de patriotismo. Cfr. para conmemoraciones de sucesos bélicos y trágicos, los textos de P. Nora y otros en J.-P. Bacot (ed.), *Travail de mémoire 1914-1998*, pp. 143-179.

¹² J. I. Madalena *et al.*, «La memoria y el poder»; P. Aguilar, *Memoria y olvido*, pp. 115-135; Antoine Prost, «Les monuments aux morts», en P. Nora (dir.), *Les*

Todos los lugares que habían tenido «la honra de dar [...] víctimas a la santa cruzada nacional» ofrecían esos reconocimientos gráficos y públicos de los «caídos nacionales» que contentaban a sus familiares y sembraban de recuerdo el paisaje de la antigua «zona roja». Los ejemplos, es obvio, podrían multiplicarse. Como Caspe, donde a la «calle de los Mártires» y las dedicadas a los fusilados Guiu Guiral o Emilio Gros se unían una enorme inscripción en la Iglesia que rezaba «Por Dios y por la Patria, el Ayuntamiento a los Mártires de Caspe. 1936-1939» y que se completaba con los nombres de 117 caspolinos, y una «Cruz de los Caídos» inaugurada en 1952 en una céntrica plaza y dedicada «A los Héroes y Mártires de la Cruzada». Pina, también cabecera comarcal, en cuya antigua iglesia una cruz de madera señalaba la pared donde 9 vecinos fueron ejecutados en verano de 1936, mientras que la placa con los nombres de todas las víctimas estaba en la nueva. O como Nonaspe, donde se contaba con un monumento a las víctimas en el cementerio, otro erigido en la entonces Plaza de los Mártires con los nombres de los mismos, una placa de mármol a la puerta de la iglesia también con el obituario completo encabezado por el fundador de Falange, y una «Cruz de los Mártires» emplazada en el lugar de las afueras en que había tenido lugar el fusilamiento colectivo de febrero del 37. Aunque quizá el más significativo fuera, por muchas razones, Belchite, todo un *lugar-memoria* cantado tantas veces en discursos, periódicos y publicaciones como «ciudad sacrificada», «baluarte glorioso regado con sangre de mártires y de héroes». Adoptado simbólicamente por el propio Caudillo y mantenido deliberada-

lieux de mémoire, t. I, pp. 195-225; y, para la importancia de estos monumentos en la formación de la memoria de un periodo como la I Guerra Mundial, Annette Becker, *Oubliés de la Grande Guerre*, Noësis, París, 1998, a completar, desde una perspectiva más amplia, con Jay Winter, *Sites of memory, sites of mourning. The Great War in European Cultural History*, Cambridge U. P., 1995. Las palabras del acto de Caspe, en *El Noticiero*, 4-5-1938, y la cita sobre perpetuar la memoria, en el pleno del Ayuntamiento de Quinto que aprobó su «lápida de los caídos» (Archivo Municipal, leg. 12-1, 14-4-1942).

mente sin reconstruir junto al nuevo pueblo inaugurado en 1954, sus sobrecogedoras ruinas debían ser el santuario viviente de un recuerdo que, confundiendo conscientemente destrucciones y muertes por combates y por represión, mostrara a la historia y al mundo las huellas del paso del vendaval revolucionario.¹³

Ese vendaval, es evidente, fue convirtiéndose con el tiempo en un recuerdo cada vez más lejano. Pasadas las dos primeras décadas de posguerra, nuevas circunstancias político-económicas y nuevas generaciones que no habían vivido la guerra fueron alejando de la sociedad el interés por volver la mirada hacia los horrores y heroicidades de la contienda. De hecho, la anterior omnipresencia de ésta desembocaría ahora en una sensación de «saturación» e hipertrofia de la memoria. Algo que sería después aprovechado para llevar a cabo el consabido «pacto tácito» que «silenciar[a] las voces amargas del pasado», un pacto benéfico para el éxito de la Transición, pero que retrasaría la necesaria mirada serena y colectiva sobre una parte de nuestro ayer siempre conflictiva. Conflictiva en buena medida porque, pese a los cambios, el discurso del franquismo nunca prescindió de la guerra y de la victoria sobre el «rojo». Y porque, cuando aflojó la presión de la memoria, para muchos era ya tarde. Habían sido demasiadas bocanadas de amargo recuerdo, demasiados años —para algunos toda la vida— oyendo hasta la saciedad las virtudes de unos y los crímenes de otros, evocando unos muertos y negando otros, para que no les afectara, para que pudieran olvidar. Parece increíble, pero no lo es, que todavía los «derechas» e «izquierdas» de toda la vida se reúnan en muchos pueblos en diferentes cafés y se dediquen malas

¹³ Pues también las espacios en ruinas tendrían un acusado poder evocador en la construcción de las memorias: Antoine Grumbach, «Figurer par la ruine l'espace de l'absence», en J.-P. Bacot (ed.), *Travail de mémoire 1914-1998*, pp. 105-109. Las citas sobre Belchite, en Tebib Amuni, *Aquello de Belchite fue glorioso*, y *El Noticiero*, 11-3-1938, mientras que el entrecomillado inicial del párrafo es de este mismo rotativo, 9-9-1938.

caras. Que las mismas placas, cruces y peanas —en Aladrén, Azuara, Caspe, Chiprana, Fabara, Gelsa, Moneva, Nonaspe, Plenas, Sástago, Velilla de Ebro...— sigan en pie recordando a los muertos de uno sólo de los bandos. O que —por volver al punto de arranque de este estudio— se aconseje aún a quien pregunta por la represión «mejor no hablar de eso». De ahí que, al evocar la «sangre humana» que corrió en esta zona durante las jornadas del 36, se afirme todavía hoy que «tenemos un *agujero negro* en la memoria que se traga cuanto se acerca a lo que ocurrió en aquellas fechas. Es también un *tabú*, una señal en el camino que aconseja pasar de prisa por el lugar y no volver la vista atrás». El recuerdo está siempre ahí, soterrado o no, en estas comarcas, pues como lamenta un superviviente de aquella pesadilla que fue la guerra, «¿acaso nos han dejado olvidarlo...?»¹⁴

Por lo tanto, si es cierto que «la memoria del poder recuerda, bendice, justifica la perpetuación del privilegio, [...] otorga impunidad a los crímenes de los que mandan y proporciona coartadas»;¹⁵ y si también lo es que las revoluciones, tienen sus *días de llamas* y sus *años de humo*, entonces el continuo recuerdo del «terror rojo» durante y por el franquismo sería una de las mejores coartadas de éste para legitimar su poder; una inmejorable cortina de humo proveniente del pasado, mas avivada cada día durante años hasta en el último pueblo, con la que nublar y perpetuar un presente que era tan poco luminoso como, para muchos, carente de verdadero futuro.

¹⁴ Testimonio de D. Gargallo, Caspe, 24-1-1998, y prólogo de E. Bayo a A. Camón, *Crónicas del 36*, p. 12, de donde lo del «agujero negro» de la memoria. Para el resto de lo tratado, P. Aguilar, *Memoria y olvido* (cita en p. 21), A. Reig Tapia, *Memoria de la Guerra Civil*, y, para una reflexión sobre la relación entre fases de exceso y de falta de memoria, el sólido trabajo de Henry Rousso, *Le syndrome de Vichy*, Seuil, París, 1990 (1987). Por último, una muestra tardía de la insistencia en el recuerdo del «terror rojo» desde sectores franquistas, en D. Fárfolas, *Síntesis de la Causa General para desmemoriados*.

¹⁵ Eduardo Galeano, «Mémoires et malmémoires. Les 'oubliés' de l'histoire officielle», *Le Monde Diplomatique*, agosto de 1997, p. 3.

CONCLUSIONES

«La violencia, que es el rostro temible y misterioso de las revoluciones.»

Victor Hugo. *Quatre-vingt-treize*.

La comprensión de la violencia contra los símbolos y las personas desencadenada donde la guerra civil trajo la revolución, requiere, como la de la violencia del otro bando, la difícil tarea de despojar al tema de tanta contaminación ideológica y tanto mito y anatema. Porque, aunque no debiera ser preciso recordarlo, no se trata de resucitar fantasmas ni de abrir heridas más o menos cauterizadas, sino de conocer una parte terrible y trágica, pero importante, de nuestro pasado más reciente; una parte que, pese a su aparente irracionalidad, no puede estar al margen de explicaciones que la imbriquen con un contexto político y social.

El estallido de la guerra civil y del consiguiente proceso revolucionario allí donde, como en las comarcas orientales de Zaragoza, la sublevación fue abortada, no trajeron de forma inmediata la «nueva era de paz y de trabajo» de la que hablaban sus promotores, ni todos los rostros traslucían «el optimismo y la satisfacción». Junto a la feliz «labor constructiva», o precediéndola, un proceso represivo súbito y violento se había desencadenado en la retaguardia tiñendo de sangre calles, campos y memorias.

Sin embargo, la realidad tampoco parece corresponderse con la imagen cultivada durante décadas por los vencedores de la contienda, la de una represión «inundatoria», homogénea y universal en su alcance, indiscriminada, irracional, algo supuestamente orquestado y dirigido y propio de la violencia congénita del movimiento obrero. Se trataba antes bien de

una violencia menos sencilla que todo eso, determinada por especificidades locales y por un contexto preciso que puso las armas en el centro de la vida pública y desencadenó una multiplicidad de poderes que se disputaban un lugar en la revolución y en el nuevo orden que se estaba implantando. El contexto, en primer lugar, de una violencia política y social desencadenada e iniciada desde arriba, por el Ejército, y que despojó al Estado republicano de sus mecanismos coercitivos y de control social. Contexto, también, de una guerra civil en la que todos estaban forzados a elegir lealtades perentorias y sin matices y la vida no valía lo que en tiempos de paz. Y marco, al fin, de una revolución social que había que defender y cuyos partícipes debían probar su sincero antifascismo.

Ese preciso marco y esas circunstancias, y no una pretendida violencia revolucionaria previa que en estas comarcas no existió, serían los orígenes de la repentina ola depuradora iniciada desde la llegada de los milicianos a finales de julio de 1936. Ellos trajeron a la región las armas y la violencia de la que se sirvió el asalto al orden social. Pero a su vez, su llegada sólo era concebible en el marco de un derrumbe del Estado y de sus aparatos coactivos inducido por la sublevación de los militares y por el fracaso de la misma. Era en fin la «oportunidad» o desencadenante necesario a toda acción colectiva y revolucionaria. Pero esa oportunidad, ese derrumbe generalizado parecía además especialmente acusado en el Aragón oriental, y por ende también lo fue la intensidad de la violencia desencadenada. Esa represión se cobró la vida de 742 zaragozanos, de ellos 590 habitantes de los pueblos a los que llegaron los milicianos, lo que suponía en esa zona un índice de represión (0,87%) muy superior a los de la mayor parte de las otras regiones republicanas.

Pero si la llegada e intensidad de la persecución venían determinadas por circunstancias exteriores, las considerables diferencias que se observan en su extensión concreta a las localidades de la retaguardia zaragozana mostraría, por un lado, que la supuesta marea represiva no inundó toda la

retaguardia; y, por otro, que no era algo meramente exógeno e impuesto desde fuera. Se alimentaba de un fondo de conflictos sociales y políticos locales, del grado en que la fractura social que marcaba la España de los años treinta había llegado a cada comunidad. De este modo, el mayor alcance de la represión se produjo precisamente en las localidades que habían registrado una mayor conflictividad durante los años previos o que reflejaban mayores tensiones internas a la altura de 1936. En ellas, los milicianos encontraban voces denunciantes, listas de «fascistas» y miembros de comités revolucionarios locales dispuestos a colaborar en la persecución. En las otras, por el contrario, lo que hallaban era comités que decían que no había a quién matar, rostros silenciosos y, en suma, un cierto consenso interno de la población ante la amenaza exterior.

Interior o exterior, esa amenaza tampoco fue inundatoria en lo cronológico. Más de la mitad de las víctimas habían muerto ya a fines de octubre, apenas tres meses después de la llegada de la guerra a la provincia. A continuación, las cifras inician un progresivo y patente descenso y, pese a algunas esporádicas alzas relacionadas con las peculiaridades de la zona y el desarrollo de la guerra, ya nunca vuelven a las del verano y principio de otoño. La razón de esa evolución, que llevaría a poder hablar de tres etapas nítidamente diferenciadas, remitía en última instancia a las circunstancias políticas de la retaguardia y a las luchas por el control del poder y de la revolución que se vivían en la misma:

La primera etapa, que abarcaría desde julio hasta octubre, es la que registró el mayor número de muertes, rondando el centenar cada uno de los cuatro meses. En suma, como acaba de reseñarse, acumula más del 50% de las víctimas de toda la guerra, y esa concentración inicial se hace más evidente al ver que la primera semana de guerra cuenta tantos óbitos como cada uno de los tres meses siguientes y que las zonas a las que llega antes la guerra llevan el peso de la represión en los primeros dos meses, mientras que en los

otros dos les sustituyen las incorporadas más tardíamente a la retaguardia republicana. Aquellos fueron «días de llamas» en los que se produjo el asalto al orden social, a sus símbolos —iglesias, archivos, imaginería religiosa, etc.— y a algunos de sus representantes. La sublevación militar y su posterior derrota o retirada ante los milicianos habían supuesto la práctica desaparición del Estado en estas zonas y dejaron un enorme vacío de poder que estaba siendo llenado por una miríada de micropoderes locales y armados —comités revolucionarios y de guerra, grupos de investigación de las columnas o autónomos,...— de tan difícil caracterización como control. Era el comienzo de una guerra de imprevisibles duración y resultados, el inicio de la ansiada revolución y, en ese clima inicial de fragmentación —y de arbitrariedades—, esos poderes emplearon la violencia no sólo en la lucha contra el «fascismo» sino también como simbólica muestra de que un mundo se derrumbaba y como arma —básica en aquella coyuntura— para hacerse con un espacio en la naciente revolución.

A partir de noviembre de 1936, el volumen de la represión descendió considerablemente, inaugurando una segunda etapa que se extendería hasta el verano de 1937. En los orígenes de ese descenso estaban los cambios que experimentó la fragmentación inicial. En octubre se había constituido el Consejo de Aragón, verdadero órgano político controlado por la CNT, y como tal fue llevando a cabo un proceso de concentración de la autoridad, y con ella de la administración de la violencia, frente a los espacios de poder de las columnas y de los grupos de la primera hora. Se trataba por tanto de extender —y controlar políticamente— un nuevo «orden revolucionario». El proceso no estaría exento de sombras, dramáticas luchas entre todos los contrapoderes que se resistían a abandonar sus parcelas de actuación, rivalidades políticas y sonoros estallidos de violencia como los que tuvieron lugar en diciembre del 36 o en febrero del 37. No obstante, no cabe duda que los diferentes pasos dados en ese sentido tuvieron resultados innegables. Primero sería la progresiva sustitución de los «coches de

la muerte» y «grupos de investigación» de las columnas por otros organismos similares pero centralizados y dependientes del Consejo. Y les seguirían, entre otros jalones importantes, la sustitución de los comités revolucionarios por consejos municipales, la estructuración del Departamento de Orden Público o la creación de una Junta de Seguridad. Y, por supuesto, la constitución del Tribunal Popular de Caspe, cuya actuación —saldada con numerosas condenas de reclusión en campos de trabajo y sólo siete ejecutados— distaba de confirmar los mitos vertidos sobre la Justicia Popular y marcaba una diferencia fundamental con los «juicios de cuneta» de la primera época. No parece dato irrelevante, por último, que fuera precisamente en la zona más oriental de la provincia —donde se ubicaba la sede del Consejo— donde esos cambios se hicieran sentir de forma más palpable en los índices de represión; y que, al contrario, esos índices se resistieran más a bajar en las localidades cercanas al frente, en las que el peso de las columnas era mayor y la situación de multiplicidad de poderes se mantuvo durante más tiempo.

La tercera etapa, que abarcaría desde el verano hasta la conquista de la zona por las tropas franquistas en marzo de 1938, supuso al mismo tiempo una continuación y una cesura con respecto a la anterior. Continuación en la medida que la represión acentuó su tendencia a la baja y los conflictos entre los poderes que actuaban en aquella coyuntura siguieron influyendo en la aplicación de la violencia. Y cesura por cuanto el signo de ésta cambió en un aspecto de forma sustantiva como resultado de la resolución por la fuerza de esos mismos conflictos. Dentro del marco general de una guerra contra un enemigo mucho mejor armado, y como en otros fenómenos revolucionarios, se impuso la lógica del Estado y de la concentración del poder frente a los micropoderes locales, pero también frente a ese otro de carácter regional —el Consejo de Aragón— a la postre disuelto en agosto del 37. La consecuencia más perceptible de esos cambios sería un mayor control sobre la retaguardia. Pero antes la violencia se dirigió en forma de numerosos encarcelamientos con-

tra los que habían hegemonizado hasta entonces la revolución —la CNT—; y se vivió en la provincia un último rebrote de la represión, similar en términos cuantitativos a la de un año antes, con ocasión de la toma de varias localidades —Belchite y otras— y de la captura en ellas de centenares de prisioneros. Pasado ese postrer germinar de la violencia, la provincia apenas viviría ya episodios sangrientos y se completaría un proceso de centralización, control y reducción de la violencia que, sin embargo, antes que el Estado, ya había iniciado el Consejo de Aragón.

Desde ese punto de vista, la represión vivida en la retaguardia republicana zaragoza difícilmente podría calificarse con propiedad como «terror» o definirse como una persecución dirigida y sistemática. Al contrario, había surgido del colapso estatal y sobre todo de una radical dispersión del poder, y su reducción fue paralela a la superación de ese fraccionamiento. No por ello, sin embargo, se reduce a la manida «marea espontánea» del «pueblo en armas»; ni deja de definirse, como la mayoría de episodios de violencia política de las sociedades contemporáneas, en el marco de conflictos políticos y luchas por el poder.

Tras esos poderes y tras los blancos de la represión de la que se sirvieron, no sólo había luchas políticas sino también rostros concretos. Porque tampoco en este punto cabe hablar de persecuciones «inundatorias» ni de protagonistas y víctimas surgidos indistintamente de cualquier categoría social. Desconocidos no eran, ni tampoco «incontrolados», los milicianos y los vecinos de los comités que estaban tras las muertes y denuncias. Y sobre todo no lo eran sus víctimas. Al contrario, los datos muestran que desde el primer momento había unos blancos muy específicos que —a nadie se le escapaba— estaban íntimamente unidos a la sublevación que se intentaba derrotar y al orden social que ésta pretendía salvaguardar y los revolucionarios transformar. Sacerdotes, «amos» y propietarios acomodados, dueños de industrias y comercios ricos, cargos políticos y administrativos locales, dirigentes de

la sublevación o líderes derechistas serían desde ese punto de vista los primeros buscados, las primeras víctimas, los primeros objetivos de la persecución. Ellos eran los símbolos de la caduca sociedad que se quería derribar, los famosos «enemigos de clase», y por tanto ellos ocuparon buena parte de este luctuoso obituario.

Junto a ellos, sin embargo, sobre todo cuando y donde la represión fue más amplia y menos selectiva, otros rostros se les añadieron en las «sacas», «paseos» y fusilamientos. Pequeños e ínfimos propietarios, labradores que debían completar los ingresos de sus escasas tierras empleándose para otros, campesinos sin tierras que servían y dependían de los «amos», modestos tenderos y artesanos, empleados y mujeres acabaron también sus vidas fusilados en tanto que «fascistas» y «enemigos de la revolución». En comunidades donde todo el mundo sabía a quién votaban y con quién estaban los demás, y en las que las lealtades personales, familiares y clientelares se insertaban en los posicionamientos políticos, la línea de fractura social —y por ende la identidad de los opuestos al nuevo orden traído por la revolución— no podía ser sino plural y diversa. Seis de cada diez fusilados de la provincia eran propietarios y labradores o comerciantes e industriales, y a ellos se les añadían otros grupos vinculados a la defensa del orden social como profesionales liberales y funcionarios, militares, guardias civiles y religiosos. Pero no resulta sencillo obviar que otros dos de cada diez son jornaleros, obreros y empleados, o que los propietarios, comerciantes e industriales en ocasiones no fueran sino modestos labradores, artesanos o tenderos; pequeños y medianos propietarios, en suma, en ocasiones sin arrendatarios ni empleados, y cuya concreta posición social y económica en sus comunidades habría que estudiar en cada caso. La guerra, en suma, era una dura y cercana realidad, y aprovechándola se ajustaron cuentas con el pasado; cuentas en las que lo político y las luchas «de clase» se mezclaban a menudo con otras líneas de fractura ligadas a relaciones y dependencias personales, alineamientos políticos que no siempre seguían crite-

rios económicos y a los diversos *status* y posiciones de los habitantes de estas comunidades. Algunos de ellos fueron víctimas de esa violencia extendida con la guerra durante veinte meses, una violencia por lo tanto compleja, como compleja era la sociedad española que la vio nacer y ante cuyas múltiples líneas de conflicto tuvo que vérselas en aquella coyuntura de odios, esperanzas, guerra y revolución.

Después, acabada la guerra, la revolución y las esperanzas fueron desterradas por mucho tiempo, quedando sólo los odios y, junto a ellos, tergiversaciones, ocultamientos, condenas hiperbólicas y mitos sobre lo sucedido durante la revolución. A los días de llamas de ésta le seguían unos años de humo de los que la memoria, e incluso la propia historiografía, no siempre se han librado. En ese sentido, y desde la modesta atalaya de la historia local, lo que aquí se ha pretendido es intentar atravesar algunas de esas cortinas de humo legadas por el pasado y acercarse a lo que acaeció en aquellos irrepetibles años en la retaguardia republicana aragonesa.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Histórico Nacional, Madrid

— «Causa General», provincia de Zaragoza. Legs. 1423-1425 (pieza 1ª Principal).

Leg. 1426 (pieza 1ª; pieza 2ª: «Alzamiento Nacional, antecedentes, ejército rojo y liberación»; pieza 3ª: «Cárceles y sacas»; pieza 4ª: «Checas»).

Leg. 1427 (pieza 5ª: «Justicia»).

Leg. 1428 (pieza 6ª: «Prensa»).

Leg. 1429 (pieza 7ª: «Autoridades»; pieza 8ª: «Propiedad»; pieza 9ª: «Banca»; pieza 10ª: «Persecución religiosa»; y pieza 11ª: «Tesoro artístico»).

Leg. 1430 (Asuntos varios. Instrucción de la Causa General de Zaragoza. Tribunal Popular de Caspe).

Legs. 1817, 1821, 1834, 1852, 1857, 1885, 1903, 1905, 1910, 1911 y 1913 (Asuntos varios referidos a la provincia de Zaragoza).

Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca (antiguo Archivo Histórico Nacional - Sección Guerra Civil)

— Sección Político-Social de Aragón, Serie «R». Carpetas 9, 10, 11, 12-14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 36, 45, 46, 48, 50, 52, 72, 84, 85, 87, 95, 96, 107, 109, 110, 123, 136 y 138.

— Sección Político-Social de Barcelona. Carpetas 10, 13, 14, 373, 377, 378, 397, 616, 821, 830, 839, 1048, 1251, 1264, 1436 y 1568.

— Sección Político-Social de Bilbao. Carpeta 39.

— Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Caja 52, expte. 5 (J. Centol) y caja 57, expte. 8 (B. Roca).

Fundación Pablo Iglesias, Madrid

- Archivo Histórico. Caja 16, carpetas 10-23 (correspondencia orgánica: federaciones-agrupaciones).
- Archivo de la Agrupación Socialista Madrileña, Documentación Anarquista (anteriormente en el Servicio Histórico Militar). Cajas 510 (carpetas 36, 38, 40 y 45), 511 (carpetas 2 y 16), 512 (carpetas 1-2, 6-7, 9, 17-18, 20-21, 23 y 35), 513 (carpetas 2, 4-6, 9 y 12-14) y 514 (carpetas 2, 15 y 17).

Archivo General Militar, Ávila (antiguo Servicio Histórico Militar)

- Archivo de la Guerra de Liberación. Cuartel General del Generalísimo: Armario 7, legajo 369, carpetas 2, 3, 12-13 y 23 (ofensiva republicana sobre Belchite de verano de 1937).
- Archivo de la Guerra de Liberación. Documentación Nacional: Armario 31, legajo 4, carpeta 8.
- Archivo de la Guerra de Liberación. Documentación Roja: Armarios 45 (legs. 7, 15-16, 20-21, 29, 30), 46 (legs. 66-69), 47 (legs. 71, 72 y 77), 53 (leg. 461), 56 (leg. 556), 62 (leg. 768) y 71 (leg. 1096).

Santuario Nacional de la Gran Promesa, Valladolid

- Libro «Caídos por Dios y por España 1936-1939» de Zaragoza.

Archivo del Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA), Madrid

- Instituto para la Reforma Agraria. Registro de la Propiedad Expropiable, Provincia de Zaragoza, 1933 (material microfilmado y cedido por Luis Germán Zubero, Facultad de CC. EE. y Empresariales de la Universidad de Zaragoza).

Registros Civiles-Sección Defunciones

de toda la provincia (parte de ellos proporcionados por Julita Cifuentes y M^a Pilar Maluenda).

Archivo de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

- Censo de comerciantes e industriales. Lista cobratoria para el año 1936: grupos comercial e industrial.

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

- Sección Estadística. Censos electorales: rectificación del censo electoral de la provincia de Zaragoza correspondiente al año 1934.

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza

- Gobernación. Elecciones de Senadores: sorteo de mayores contribuyentes (1931).

Archivos Municipales de Azuara, Belchite, Caspe, Fabara, Maella, Mediana de Aragón, Mequinenza, Nonaspe, Pina de Ebro y Quinto.

- Libros de Actas de los Ayuntamientos, 1935-1939; Correspondencia, 1936 y 1938-1939; Memorias de la Secretaría, 1938-1939; Estadística municipal: altas y bajas, 1938; Informes personales de conducta político-social de las Alcaldías o jefaturas locales de Falange, y responsabilidades políticas, 1939; Libros del registro general de enterramientos; Varios.

FUENTES HEMEROGRÁFICAS

A la carga (Portavoz de la Brigada de Caballería nº 4 de Sástago), 1937 (AGCS).

Avance (Semanario de las JSU de Caspe), 1937 (AGCS).

Boletín de Información y orientación orgánica para militantes y comités comarcales (Federación Regional de las JJLL de Aragón, Caspe), 1938 (AGCS).

Boletín de Información, C.N.T.-A.I.T.-F.A.I. (Barcelona-Valencia), 1936-1937 (HMM).

Boletín de la Consejería de Hacienda del Consejo de Defensa de Aragón (Caspe), 1937 (AGCS).

Boletín del Consejo Regional de Defensa de Aragón (Caspe), 1936-1937 (AGCS).

Boletín Oficial de Aragón (Caspe), 1937-1938 (AGCS).

Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (Zaragoza), 1936 (ADPZ).

Cultura y Acción (CNT de Aragón, Zaragoza-Alcañiz), 1936-1937 (AGCS).

Día, El (Portavoz del Frente Popular de Aragón, Caspe), 1937 (AGCS).

Frente, El (Boletín de guerra de la Columna Durruti en campaña, Pina-Bujaraloz), 1936-1937 (AGCS).

Heraldo de Aragón (Zaragoza), 1931-1938 (HMZ).

Noticiero, El (Zaragoza), 1936-1938 (HMZ).

Nuevo Aragón (Caspe), 1937 (AGCS y BN).

Pasaremos (Órgano de la 11ª División de Líster, Madrid-Caspe-Frente del Ebro-Frente de Teruel-...), 1937 (AGCS).

Solidaridad Obrera (CNT de Cataluña, Barcelona), 1936-1938 (HMB y HMM).

Tierra y Libertad (Barcelona-Valencia), 1936 (HMB).

Vanguardia (Órgano del PCE de Aragón, Caspe-Lérida), 1937-1938 (AGCS).

FUENTES ORALES¹

— Agudo, Sixto (PCE, combatiente republicano), Zaragoza, 9-5-1998.

— Alfranca, Evaristo (Farlete, 73 años); Farlete, 17-5-1999.

— Arbona Lacasa, Pablo y Diorrios, M^a Luisa (Maella, republicano y conservadora, 88 y 84 años); Maella, 18-3-1998.

— Aznar, Ramón (Caspe, CNT, 75 años); Caspe, 19-3-1998.

¹ De acuerdo con el deseo expresado por ellos, algunos entrevistados aparecen nombrados únicamente por sus iniciales o simplemente por la fórmula «informante anónimo». La edad reseñada es la del momento en que se realizó la entrevista.

- Beltrán, Ismael (Belchite, combatiente «nacional», 78 años); Belchite, 16-6-1999.
- Borbón, Andrés (Mequinenza, socialista, 68 años); Zaragoza, 12-9-1998.
- Castelló Nicolau, Jacinto (Mequinenza, JSU y combatiente republicano, 81 años); Mequinenza, 22-5-1999.
- Cebollada, Aurora (Plenas, republicana, hija del alcalde republicano, 69 años); Zaragoza, 2-1-1999.
- Cirac, José (Fabara, republicano-socialista, 84 años); Fabara, 21-5-1999.
- G., G., Elena (Gelsa, 81 años); Gelsa, 9-1-1999.
- G., J. (Caspe, conservador, 74 años); Caspe, 19-3-1998.
- Gambau Gil, Antonio (Caspe, JJLL y CNT, 78 años); Caspe, 12-12-1998 y 18-3-1999.
- Gargallo, Domingo (Caspe, combatiente republicano de aviación, 85 años); Caspe, 24-1-1998.
- Gascón, Julián (Monegrillo, combatiente republicano, 76 años); Monegrillo, 17-5-1999.
- Gayán, Valentín (Pina, 72 años), Pina, 26-7-1999.
- Gómez, Mariano (Caspe, PSOE, 60 años); Caspe, 20-3-1999.
- Gonzalvo Sariñena, Santiago (Gelsa, combatiente republicano y socialista, 84 años); Gelsa, 9-1-1999.
- Gracia, Ana (Fuendetodos y Belchite, 70 años); Belchite, 16-2-1999.
- Guiu Guiu, Roque (Velilla de Ebro, conservador, 77 años); Zaragoza, 20-4-1999.
- Ibáñez Pallarés, Joaquín (Azuara, 92 años); Azuara, 16-5-1999.
- Lafuente, Felipe (Aladrén, conservador, 73 años); Zaragoza, 15-11-1998.
- Lagunas, Marisa (Pina, nieta de un fusilado por los republicanos, 57 años); Zaragoza, 29-10-1998.
- Letosa, Carmen y Arruego, Antonio (Leciñena, 74 años); Zaragoza, 15-11-1998.
- López Diestre, Dionisio (Lécera, JJLL, 76 años); Lécera, 18-7-1999.

- López Diestre, Manuel, (Lécera, PCE, 79 años); Lécera, 18-7-1999.
- Luño Gracia, Rafael (Plenas, 71 años); Plenas, 16-6-1999.
- M., Cipriano (Pina, 93 años); Pina, 26-7-1999.
- M., M. (Maella, CNT, 81 años); Zaragoza, 15-3-1998.
- Maza, Rogelio (Caspe, 72 años); Caspe, 20-3-1998.
- Monreal, Joaquín (CNT, miliciano y comisario en sector Osera de Ebro); Caspe, 12-12-1998.
- Montañés Alquézar, María (Escatrón, 73? años); Zaragoza, 16-2-1998.
- Ortín, Víctor (Belchite, 74 años); Belchite, 16-5-1999.
- P. C., D. (Caspe, socialista, 73 años); Zaragoza, 19-5-1998.
- P., D. (Belchite, socialista, 72 años), Belchite, 16-6-1999.
- Pérez Andrés, Manuel y Domingo Calvo, Carmen (Luesma, conservadores, huídos a zona «nacional», cuñado y hermana respectivamente de dos fusilados por los milicianos, 81 y 78 años); Zaragoza, 6-3-1999.
- Pérez, Amalio (Caspe, conservador, 77 años); Caspe, 20-3-1998.
- Planas, Gregorio (Belchite, 72 años); Belchite, 16-2-1999.
- Plou Gascón, Miguel (Letux, 72? años, historiador local); Zaragoza, 13-4-1999.
- Rams, Ramón (Fabara, JJLL, 78 años); Fabara, 20-5-1999.
- Roca, Antonio; Gabriel; José y Sebastián (Fayón, 79, 79, 82 y 82 años); Fayón, 22-5-1999.
- S. L., Pascual y Y. O., Valeriana (Plenas, conservadores, perseguidos por los republicanos, 92 y 91 años); Plenas, 16-6-1999.
- S., Pedro (Fabara, derechas, 88 años); Fabara, 21-5-1999.
- Salillas, Jesús y P., Antonio (Pina, 79 y 81 años); Pina, 26-7-1999.
- Sanclemente, Francisco (CNT de Zaragoza, miliciano en la columna de Carod y empleado del Consejo de Aragón, 80 años); Cinco Olivas, 16-5-1999.
- Sanz, José (Caspe, socialista, 74 años); Caspe, 20-3-1998.
- Valero Gracia, José (Quinto de Ebro, conservador, 69 años); Quinto, 20-3-1999.

- Vicente Calved, Agustín (Caspe, conservador, 74 años), Caspe, 24-1-1998 y 27-2-1998.
- Villuendas, Pilar (Codo, 66 años); Zaragoza, 12-9-1998.
- Zumeta, Luis (Pina, hijo del alcalde republicano fusilado por los sublevados, 74 años); Pina, 26-7-1999.
- 3 informantes anónimos (Codo, 77, 68 y 78 años); Codo, 16-5-1999.
- 2 informantes anónimos (Fabara, 90 y 80 años); Fabara, 21-5-1999.
- 2 informantes anónimos (Nonaspe); Nonaspe, 21-5-1999.
- 3 informantes anónimos (Mediana, 68, 77 y 75 años); Mediana, 16-6-1999.
- Informante anónima (Puebla de Albortón, hija del alcalde fusilado por los sublevados, 78 años); Zaragoza, 6-5-1999.

TESTIMONIOS ESCRITOS

- Alegre Agudo, Luis (Aladrén, 75 años); Zaragoza, 16-5-1999.
- Sariñena Gracia, Víctor («Cronista oficial de Sástago»); Sástago, 30-5-1999.

FUENTES IMPRESAS

Acta del Pleno de Columnas confederales y anarquistas celebrado en Valencia el día 5 de febrero de 1937, «Los Amigos de Durruti», Barcelona, 1937 (BN).

Actas del grandioso Congreso Regional de Juventudes Libertarias del Frente y Retaguardia de Aragón, Caspe, 3 y 4 de julio de 1937, Alcañiz, 1937 (BN)

ASCASO, Joaquín, *Texto taquigráfico del discurso pronunciado el día 27 ante el micrófono de Caspe, por el Presidente del Consejo de Aragón y Delegado del Gobierno de la República*, Editora Nuevo Aragón, Caspe, 1937. (BN)

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA, *Desarrollo industrial y mercantil en la provincia de Zaragoza: ejercicio 1935*, Edit. Herald de Aragón, Zaragoza, 1936.

Censo de la población de España y territorios de su soberanía, según empadronamiento realizado el 31 de diciembre de 1930, Publicaciones del I.N.E., Madrid.

CONFEDERACIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE ARAGÓN, RIOJA Y NAVARRA, *Pleno Regional de Sindicatos de Aragón, Caspe 11 de septiembre de 1937*, Artes Gráficas CNT, Alcañiz, 1937. (BN)

GARCÍA OLIVER, Juan, *Mi gestión al frente del Ministerio de Justicia*, conferencia pronunciada en el Teatro Apolo de Valencia el 30 de mayo de 1937, Ediciones de la Comisión de propaganda y prensa del Comité nacional de la CNT, Valencia, 1937. (BN)

—, *Dos meses de actuación en el Ministerio de Justicia*, Publicaciones del Ministerio de Propaganda, Valencia, 1937. (BN)

LÓPEZ, José, *El Aragón que yo he visto*, Comité Nacional C.N.T.-A.I.T., Valencia, 1937. (BN)

Memoria del Pleno Regional de Grupos Anarquistas de Aragón, Rioja y Navarra celebrado en Alcañiz, el día 20 de septiembre de 1936, Alcañiz, 1936. (BN y AGCS)

Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España formado por el Instituto Nacional de Estadística con referencia al 31 de diciembre de 1950. Provincia de Zaragoza, I.N.E., Madrid.

BIBLIOGRAFÍA SELECTA

Bibliografía General: Violencia, Represión y Guerra Civil

AGUILAR, Paloma, *Memoria y olvido de la Guerra Civil española*, Alianza, Madrid, 1996.

ALFAYA, José Luis, *Como un río de fuego. Madrid, 1936*, Eiunsa, Barcelona, 1998.

ALIA MIRANDA, Francisco, *La guerra civil en retaguardia, Ciudad Real (1936-1939)*, Diputación de Ciudad Real, Ciudad Real, 1994.

ALONSO GARCÍA, Pedro L., *Los comienzos de la guerra en Gijón: de las «sacas» de prisioneros al Tribunal Popular*, Ateneo Obrero, Gijón, 1997.

- ALTAFAYLLA KULTUR TALDEA, *Navarra 1936. De la esperanza al terror*, Altaffaylla Kultur Taldea, Estella, 1986, 2 vols.
- ÁLVAREZ JUNCO, JOSÉ, *La ideología política del anarquismo español (1868-1910)*, Siglo XXI, Madrid, 1991 (1976).
- , «El anticlericalismo en el movimiento obrero», en VV. AA., *Octubre 1984. Cincuenta años para la reflexión*, Siglo XXI, Madrid, 1985, pp. 283-301.
- ARASSE, Daniel, *La guillotina y la figuración del terror*, Labor, Barcelona, 1989.
- ARENDT, Hannah, *Du mensonge à la violence*, Calmann-Lévy, París, 1972.
- ARONSON, Elliot, *El animal social. Introducción a la psicología social*, Alianza, Madrid, 1992.
- ARÓSTEGUI, Julio, «Conflicto social e ideología de la violencia, 1917-1936» en J. L. Delgado (ed.), *España, 1898-1936: Estructuras y cambio*, Universidad Complutense, Madrid, 1984, pp. 309-343.
- , «La República en guerra y el problema del poder», *Studia Historica. Historia Contemporánea*, 4 (1985), pp. 7-19.
- (coord.), *Historia y memoria de la Guerra civil. Encuentro en Castilla y León*, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988, 3 vols.
- , (comp.), «Violencia y política en España», *Ayer*, 13 (1994).
- , *et al.*, «La militarización de la política durante la II República. Teoría y práctica de la violencia política en la España de los años treinta», *Historia Contemporánea*, 11 (1994).
- , «La especificación de lo genérico: la violencia política en perspectiva histórica», *Sistema*, 132-133 (junio 1996), pp. 9-39.
- ARRARÁS, Joaquín (dir. literario), *Historia de la cruzada española*, Eds. Españolas, Madrid, 1939-1944 (8 vols.).
- BAKER, Keith M. (ed.), *The Terror*, Pergamon U. P., N. York, 1994.
- BARNIAL VEGA, JOSÉ A., *La represión republicana en Gijón (julio-octubre de 1936)*, Ateneo Obrero, Gijón, 1992.
- BARRULL, Jaume, MIR, Conxita (coords.), *Violència política i ruptura social a Espanya, 1936-1945*, en *Espai/Temps*, Universitat de Lleida, Lleida, 1994.

- BARRULL, Jaume, *Violència popular i justícia revolucionària. El Tribunal Popular de Lleida (1936-1937)*, Pagès editors, Lleida, 1995.
- BAYNAC, Jacques, *et al.*, *El terror bajo Lenin*, Tusquets, Barcelona, 1978.
- BENDIX, Reinhard, LIPSET, Seymour, *Clase, status y poder*, Euramérica, Madrid, 1972.
- BERMÚDEZ, Antonio, *República y guerra civil. Manzanares (1931-1939)*, Diputación de Ciudad Real, Ciudad Real, 1992, vol. II.
- BERNECKER, Walter, *Colectividades y revolución social. El anarquismo en la guerra civil española, 1936-1939*, Crítica, Barcelona, 1982.
- BERRYER, *Revolutionary Justice in Spain*, Burns Oates & Washbourne Ltd. Londres, 1937 (?).
- BERTRAND, Michel, *et al.* (eds.), *Violences et pouvoirs politiques*, P. U. du Mirail, Toulouse, 1996.
- BETTELHEIM, Ch., *Les luttres de classes en URSS. 1ère période 1917-1923*, Seuil-Maspéro, París, 1974 (Siglo XXI, Madrid, 1976).
- BINABURO, J. M., ETXEBERRÍA, X. (eds.), *Pensando en la violencia: desde Walter Benjamín, Hannah Arendt, René Girard y Paul Ricoeur*, Cyan, Madrid, 1994.
- BOLLOTEN, Burnett, *La Guerra civil española: revolución y contrarrevolución*, Alianza, Madrid, 1989.
- BORKENAU, Franz, *El reñidero español. Relato de un testigo de los conflictos sociales y políticos de la guerra civil española*, Ruedo Ibérico, París, 1971 (1937).
- BOURKE, Joanna, *An intimate history of killing: face to face killing in twentieth century warfare*, Granta Books, Londres, 1999.
- BRENAN, Gerald, *El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil*, Ruedo Ibérico, Barcelona, 1977.
- BROUÉ, Pierre, TÉMINE, Emile, *La revolución y la guerra de España*, F.C.E., México, 1974 ,2 vols.
- BROUÉ, Pierre, VILAR, Pierre, FRASER, Ronald, *Metodología histórica de la guerra y la revolución españolas*, Fontamara, Barcelona, 1980.
- CABRERA, Mercedes, *La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia (1931-1936)*, Siglo XXI, Madrid, 1983.

- CARCEL ORTÍ, Vicente, *La persecución religiosa en España durante la II República (1931-1939)*, Rialp, Madrid, 1990.
- CARR, E. H., *Historia de la Rusia soviética*, Alianza, Madrid, 13 vols., 1973-1984.
- CASANOVA, Julián, (comp.), *El sueño igualitario: campesinado y colectivizaciones en la España republicana, 1936-1939*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1988.
- , «España, 1931-1939: República, protesta social y revolución», en *Revueltas y revoluciones en la Historia*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990, pp. 135-150.
- , «Guerra civil, ¿lucha de clases?: el difícil ejercicio de reconstruir el pasado», *Historia Social*, 20 (otoño 1994), pp. 135-150.
- , *De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939)*, Crítica, Barcelona, 1997.
- CASAS DE LA VEGA, Rafael, *El Terror, Madrid 1936. Investigación histórica y catálogo de víctimas identificadas*, Fénix, Toledo, 1994.
- CERVERA GIL, Javier, *Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939*, Alianza, Madrid, 1998.
- COBO ROMERO, Francisco, *La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950)*, Diputación Provincial de Jaén, Jaén, 1993.
- , *Conflicto rural y violencia política. El largo camino hacia la dictadura: Jaén, 1917-1950*, Universidad de Jaén, Jaén, 1998.
- COURTOIS, Stéphane, et al., *Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression*, R. Laffont, París, 1997 (Planeta-Espasa, Barcelona-Madrid, 1998).
- CRUZ, Rafael, «Crisis de Estado y acción colectiva en el periodo de entreguerras (1917-1939)», *Historia Social*, 15 (1993), pp. 119-136.
- (ed.), «El anticlericalismo», *Ayer*, 27 (1997).
- y PÉREZ LEDESMA, Manuel (eds.), *Cultura y movilización en la España contemporánea*, Alianza, Madrid, 1997.
- CHAVES PALACIOS, Julián, *La represión en la provincia de Cáceres durante la Guerra civil (1936-1939)*, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1995.
- DAUPHIN, Cécile, FARGE, Arlette (dirs.), *De la violence et des femmes*, A. Michel, París, 1997.

- DE LA CIERVA, Ricardo, *España en guerra. Persecución, represión, cruzada*, Arc-Fénix, Madrid, 1997.
- DELGADO, Manuel, *La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España contemporánea*, Edit. Humanidades, Barcelona, 1992.
- ESPINOSA MAESTRE, F., *La guerra civil en Huelva*, Diputación Provincial de Huelva, Huelva, 1996.
- FEHÉR, Ferenc, *La revolución congelada. Ensayo sobre el jacobinismo*, Siglo XXI, Madrid, 1989.
- FRASER, Ronald, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española*, Crítica, Barcelona, 1979, 2 vols.
- FURET, François, RICHET, Dénis, *La revolución francesa*, Rialp, Madrid, 1988.
- GABARDA, Vicent, *La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936-1939*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1996.
- GIDDENS, Anthony, «Estado y violencia», *Debats*, 4 (1982), pp. 81-87.
- , «Estados Nacionales y violencia», *Debats*, 14 (1985), pp. 89-101.
- GIL BRACERO, Rafael, *Revolucionarios sin revolución. Marxistas y anarcosindicalistas en guerra: Granada-Baza, 1936-1939*, Universidad de Granada, 1998.
- GIRARD, René, *La violencia y lo sagrado*, Anagrama, Barcelona, 1995.
- GOLDSTONE, Jack A., «Theories of Revolution: The Third Generation», *World Politics*, 32 (1980), pp. 425-453.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, «Qué es y qué no es la violencia en política. Consideraciones teóricas en torno al conflicto social violento», en Jaime Barrull y Conxita Mir (coords.), *Violència política i ruptura social a Espanya, 1936-1945*, Universitat de Lleida, Lérida, 1994, pp. 29-66.
- , «La definición y la caracterización de la violencia desde el punto de vista de las ciencias sociales», en *Actas del Seminario Internacional «Orígenes, tipos y manifestaciones de la agresividad y la violencia»*, Junta de Extremadura, Cáceres, 1999, pp. 109-128.
- GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen, *Guerra Civil en Murcia. Un análisis sobre el poder y los comportamientos colectivos*, Universidad de Murcia, 1997.

- GUÉRIN, Daniel, *La lucha de clases en el apogeo de la Revolución francesa, 1793-1795*, Alianza, Madrid, 1974.
- GURR, Ted, *Why Men Rebel?*, Princeton U. P., Princeton, 1971.
- HENKE, Klaus-Dietmar y WOLLER, Hans (eds.), *Politische Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg*, Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich, 1991.
- HERMET, Guy, *La guerre d'Espagne*, Seuil, París, 1989.
- , *El pueblo contra la democracia*, Instituto Estudios Económicos, Madrid, 1989.
- JACKSON, Gabriel, *La República española y la guerra civil*, Crítica, Barcelona, 1976.
- JULIÁ, Santos, «El fracaso de la República», *Revista de Occidente*, 7-8 (1981), pp. 196-211.
- (coord.), *Socialismo y guerra civil*, Edit. Pablo Iglesias, Madrid, 1987.
- , «De revolución popular a revolución obrera», *Historia Social*, 1 (1988), pp. 19-43.
- , coord., «La política en la Segunda República», *Ayer*, 20 (1995).
- (coord.) *et al.*, *Víctimas de la guerra civil*, Temas de Hoy, Madrid, 1999.
- Justicia en Guerra. Jornadas sobre la administración de Justicia durante la guerra civil española: instituciones y fuentes documentales*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.
- La Dominación roja en España. La causa general*, Publicaciones Españolas, Madrid, 1961.
- LAPORTA, Francisco J., «Estado y violencia: sugerencias para una toma de posición», *Sistema*, 38-39 (octubre de 1980), pp. 111-123.
- LEFEBVRE, Georges, *La Grande Peur de 1789 (suivi de «Les Foules Révolutionnaires»)*, Armand Colin, París, 1988 (1932).
- LEFORT, Claude, *et al.*, «La Terreur», *Passé Présent*, 2 (1983).
- LINCOLN, Bruce, «Revolutionary Exhumations in Spain, July 1936», *Comparative Studies in Society and History*, 27, 2 (1985), pp. 241-260 (*Historia Social*, 35 (1999), pp. 101-118).

- LORENZO, César M., *Les anarchistes espagnols et le pouvoir, 1868-1969*, Seuil, París, 1969 (Edición española en Ruedo Ibérico, París, 1972).
- LOTTMAN, Herbert, *La depuración, 1943-1953*, Tusquets, Barcelona, 1998.
- LUEBBERT, Gregorg M., *Liberalismo, fascismo o socialdemocracia. Clases sociales y orígenes políticos de los regímenes de la Europa de entreguerras*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997.
- MAFFESOLI, Michel, *Essais sur la violence banale et fondatrice*, Librairie des Méridiens, París, 1984.
- MALEFAKIS, Edward, *Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX*, Ariel, Barcelona, 1971.
- (ed.), *La guerra de España (1936-1939)*, El País, Madrid, 1986/Taurus, Madrid, 1996.
- MARTIN, Jean-Clément, (dir.), *La guerre civile entre Histoire et Mémoire*, Ouest Éditions, Nantes, 1995.
- , *Révolution et Contre-révolution en France 1789-1989. Les rouages de l'histoire*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1996.
- , *Contre-révolution, Révolution et Nation en France. 1789-1799*, Seuil, París, 1998.
- MARTÍN RUBIO, Angel David, *La represión roja en Badajoz*, Barbarroja, Madrid, 1995.
- , *Paz, piedad, perdón... y verdad. La Represión en la Guerra civil: una síntesis definitiva*, Fénix, Madrid, 1997.
- MARTÍNEZ LEAL, Juan, *República y guerra civil en Cartagena (1931-1939)*, Universidad de Murcia, Murcia, 1993.
- MICHAUD, Yves, *Violencia y política*, Ruedo Ibérico, París, 1980.
- MOMMSEN, Wolfgang y HISCHFELD, Gerhard, (eds.), *Social Protest, Violence and Terror in Nineteenth and Twentieth Century Europe*, MacMillan Press Ltd., Londres, 1982.
- MONTERO MORENO, Antonio, *Historia de la Persecución religiosa en España, 1936-1939*, B.A.C., Madrid, 1961.
- MOORE, Barrington, *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia*, Península, Barcelona, 1973.
- MORENO GÓMEZ, Francisco, *La Guerra civil en Córdoba (1936-1939)*, Alpuerto, Madrid, 1986.

- NADAL, Antonio, *Guerra Civil en Málaga*, Argúval, Málaga, 1984.
- NASH, Mary, *Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil*, Taurus, Barcelona, 1999.
- ORS MONTENEGRO, Miguel, *La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1939)*, Instituto de cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1994.
- ORTIZ HERAS, Manuel, *Violencia política en la II República y el primer franquismo. Albacete, 1936-1950*, Siglo XXI, Madrid, 1996.
- ORWELL, George, *Homenaje a Cataluña. Un testimonio sobre la Revolución Española*, Ariel, Barcelona, 1970.
- O'SULLIVAN, Noel (comp.), *Terrorismo, ideología y revolución*, Alianza, Madrid, 1987.
- PAYNE, Stanley G., *The Spanish Revolution*, W. W. Norton & Co., Nueva York, 1970 (edic. en castellano en *La revolución española*, Ariel, Barcelona, 1972).
- PEIRATS, José, *Los anarquistas en la crisis política española*, Alfa, Buenos Aires, 1964.
- , *La CNT en la revolución española*, París, Ruedo Ibérico, 1971.
- PEIRÓ, Joan, *Perill a la reraguarda*, Alta Fulla, Mataró, 1987 (1ª edic. 1936).
- PÉREZ LEDESMA, Manuel, «Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos sociales, teoría e historia)», en *Zona Abierta*, 69 (1994), pp. 51-120.
- PRESTON, Paul (comp.), *Revolución y guerra en España, 1931-1939*, Alianza, Madrid, 1986.
- , ed., *La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la Guerra Civil*, Península, Barcelona, 1999 (1996).
- PRIETO BORREGO, Lucía, *La Guerra Civil en Marbella. Revolución y represión en un pueblo de la costa*, Universidad de Málaga, Málaga, 1998.
- QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael, *Represión en la retaguardia republicana. Almería, 1936-39*, Librería Universitaria, Almería, 1997.
- RAGUER, Hilari, *La espada y la cruz (La Iglesia 1936-1939)*, Bruguera, Barcelona, 1977.

- RANZATO, Gabriele, «*Dies irae*: la persecuzione religiosa nella zona repubblicana durante la Guerra civile spagnola (1936-1939)», *Movimento Operaio e Socialista*, 2, 11 (1988), pp. 195-220.
- (dir.), *Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea*, Bollati Boringhieri, Turín, 1994.
- REIG TAPIA, Alberto, *Ideología e Historia: sobre la represión franquista y la Guerra Civil*, Akal, Madrid, 1986.
- , *Violencia y terror*, Akal, Madrid, 1990.
- , *Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu*, Alianza, Madrid, 1999.
- RESTA, Eligio, *La certeza y la esperanza. Ensayo sobre el derecho y la violencia*, Paidós, Barcelona, 1995.
- RODRÍGUEZ OLAZÁBAL, *La administración de Justicia en la guerra civil*, Ed. Alfons el Magnànim/IVEI, Valencia, 1996.
- ROUQUET, François, VOLDMAN, Danièle (eds.), «Identités féminines et violences politiques (1936-1946)», *Les Cahiers de l'I.H.T.P.*, 31 (1995).
- ROUSSO, Henry, *et al.* «L'épuration en France à la Libération», *Vingtième Siècle*, (janvier-mars 1992).
- RUDÉ, George, *La foule dans la Révolution française*, Maspéro, París, 1982 (1959).
- SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, *Historia del Ejército Popular de la República*, Ed. Nacional, Madrid, 1973, 4 vols.
- , *Pérdidas de guerra*, Planeta, Barcelona, 1977.
- , «La represión en territorio republicano», *Aportes. Revista de Historia Contemporánea*, 8, (1988), pp. 53-64.
- SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, *Justicia y Guerra en España. Los Tribunales Populares (1936-1939)*, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», Alicante, 1991.
- , *La República contra los rebeldes y los desafectos. La represión económica durante la guerra civil*, Universidad de Alicante, Alicante, 1991.
- SERGE, Victor, *El año I de la revolución rusa*, Siglo XXI, Madrid, 1972.
- SEVILLANO CALERO, Francisco, *La Guerra civil en Albacete. Rebelión militar y justicia popular (1936-1939)*, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», Alicante, 1995.

- SIMEÓN RIERA, J. Daniel, *Entre la rebel·lió i la tradició (Lliria durant la República i la Guerra Civil, 1931-1939)*, Diputació de València, València, 1993.
- SKOCPOL, Theda, *Los Estados y las revoluciones sociales: un análisis comparado de Francia, Rusia y China*, F.C.E., México, 1984.
- SOBOUL, Albert, *La Révolution française*, Éditions Sociales, París, 1982.
- , *Los Sans-culottes. Movimiento popular y gobierno revolucionario*, Alianza, Madrid, 1987 (1964).
- SOLÉ I SABATÉ, Josep M., VILLARROYA, Joan, *La repressió a la guerra i la Postguerra a la comarca del Maresme*, L'Abadía de Montserrat, Barcelona, 1983.
- , *La repressió a la rera guarda de Catalunya (1936-1939)*, Publicacions de l'Abadia de Montsserrat, Barcelona, 1989, 2 vols.
- TARROW, Sidney, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, Madrid, 1997.
- TÉMIME, Émile, *La Guerre d'Espagne. Un événement traumatisme*, Complexe, París, 1996.
- THOMAS, Hugh, *La Guerra Civil española, 1936-1939*, Círculo de Lectores, Barcelona 1977, 2 vols.
- TILLY, Charles, «Revolutions and Collective Violence», en Fred I. Greenstein y Nelson Polsby (eds.), *Handbook of Political Science*, Addison-Wesley, Reading (Massachusetts), 1974, pp. 483-555.
- , *From Mobilization to Revolution*, Random House, N. York, 1978.
- , TILLY, Louis, y TILLY, R., *El siglo rebelde, 1830-1930*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997.
- TUÑÓN DE LARA, Manuel, et alii, *La guerra civil española, 50 años después*, Labor, Barcelona, 1985.
- UGARTE, Javier, *La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998.
- VOVELLE, Michel, *La mentalité révolutionnaire*, Messidor, París, 1984 (Crítica, Barcelona, 1989).
- WALDMANN, Peter, «Sociedades en guerra civil: dinámicas innatas de la violencia desatada», *Sistema*, 132-133 (junio 1996), pp. 145-168.
- WEBER, Max, *Economía y sociedad*, FCE, Madrid, 1993.

WOLF, Eric R., *Las luchas campesinas del siglo XX*, Siglo XXI, México, 1979.

WOOLSEY, Gamel, *Málaga en llamas*, Temas de Hoy, Madrid, 1998.

Aragón y Zaragoza

ALBIAC SEBASTIÁN, Gabriel, *Nonaspe, «la vileta regalada»*, Grupo Cultural Caspolino, Caspe, 1991.

ALTABA ESCORIHUELA, José, *Experiencias, datos, testimonios y consideraciones sobre la trágica guerra civil en España de 1936 a 1939*, Autor ed., Zaragoza, 1996.

ANTORÁN ZABAY, Bautista, *Escatrón en el Señorío del Monasterio de Rueda*, Ayuntamiento de Escatrón, Escatrón, 1997.

ARDID LORES, Manuel, «La reacción conservadora en la provincia de Zaragoza bajo la Segunda República. Ideologías, organización y práctica social», tesis doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 1990.

AZPIROZ PASCUAL, José María, *Poder político y conflictividad social en Huesca durante la II República*, Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1993.

BORRÁS, José, *Aragón en la revolución española*, César Vigera editor, Barcelona, 1983

CAMÓN, Agustín, *Crónicas del 36*, Mira, Zaragoza, 2000.

CASANOVA, Julián, *Caspe, 1936-1938. Conflictos políticos y transformaciones sociales durante la guerra civil*, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1984.

—, *Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938*, Siglo XXI, Madrid, 1985.

—, *et al.*, *El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)*, Siglo XXI, Madrid, 1992.

CASANOVA NUEZ, Ester, «Represaliados en el Teruel republicano: justicia o venganza durante la guerra civil», en P. Rújula, I. Peiró (coords.), *La Historia Local en la España Contemporánea. Estudios y reflexiones desde Aragón*, L'Avenç, Barcelona, 1999, pp. 238-251.

—, «Teruel, 1936-1938. La violencia contra el orden social durante la guerra civil», memoria de licenciatura inédita, Universidad de Zaragoza, 1999.

- CENARRO, Ángela, *Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997.
- CIFUENTES, Julita, MALUENDA, Pilar, *El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939)*, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1995.
- CIRAC ESTOPAÑÁN, Sebastián, *Los héroes y mártires de Caspe*, Imprenta Octavio y Félez, Zaragoza, 1939.
- COLAS LAGUÍA, Emilio, PÉREZ RAMÍREZ, Antonio, *La gesta heroica de España. El movimiento patriótico en Aragón*, Ed. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1936.
- CUEN, Juan, *Mis memorias*, Gráficas Minerva, Zaragoza, 1989.
- DE DIEGO, capitán, *et al.*, *¡Belchite!*, T.A.R.F.E., Oviedo, 1996.
- Estiu Ardent*, Grupo «Coses del Poble», Mequinenza, 1996.
- GABRIEL, José, *La vida y muerte en Aragón*, Imán, Buenos Aires, 1938.
- GÁLVEZ SAMPER, Francisco J., *En los Monegros La Almolda*, Grupo Cultural Caspolino-IFC, Caspe, 1998.
- GAULE, Jacques de (Juan Gómez Casas), *El frente de Aragón*, Círculo de Amigos de la Historia, Barcelona, 1973.
- GERMÁN, Luis, *Aragón en la II República. Estructura económica y comportamiento político*, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1984.
- GRACIA, Vicente, *Aragón, baluarte de España*, Librería General, Zaragoza, 1938.
- , *Los héroes de Aragón*, Ind. Gráf. Uriarte, Zaragoza, 1943.
- HARDING, Susan F., *Remaking Ibieca. Rural life in Aragon under Franco*, University of North Carolina Press, Chapel Hill-Londres, 1984 (Inst. Aragonés de Antropología, Zaragoza, 1999).
- KELSEY, Graham, *El Consejo de Aragón. II: Aragón libertario (1936-1937), su acoso y destrucción*, Fundación Salvador Seguí, Madrid, 1989.
- , *Anarcosindicalismo y Estado en Aragón 1930-1938. ¿Orden Público o Paz Pública?*, Fundación Salvador Seguí, Madrid, 1994.
- LEDESMA, José Luis, «Sublevados, milicianos, misiones y pañuelos rojos. La represión en la retaguardia republicana del Bajo Aragón zaragozano durante la Guerra Civil», en P. Rújula, I.

- Peiró (coords.), *La Historia Local en la España Contemporánea. Estudios y reflexiones desde Aragón*, L'Avenç, Barcelona, 1999, pp. 319-340.
- , «Asalto al pasado y revolución. La represión republicana en la provincia de Zaragoza durante la guerra civil», *Rolde. Revista de Cultura Aragonesa*, 88-89 (1999), pp. 5-19.
- , «La represión en el Aragón republicano durante la guerra civil y su estudio: el caso de la provincia de Zaragoza (1936-1938)», en *Actas de las I Jornadas «Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI»*, Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) Universidad de Zaragoza, Zaragoza (en prensa).
- MARTÍN RUBIO, Ángel D., «La represión republicana en Zaragoza», *Razón Española*, 69 (1995), pp. 45-62.
- , «La persecución religiosa en la provincia de Zaragoza durante la Guerra Civil», *Aragonia Sacra*, 9 (1995), pp. 55-64.
- , «Aproximación a la represión republicana en la batalla de Belchite», en Capitán De Diego *et al.*, *¡Belchite!*, T.A.R.F.E., Oviedo, 1996, pp. 131-187.
- MARTÍNEZ BANDE, José M., *La invasión de Aragón y el desembarco de Mallorca*, Librería San Martín, Madrid, 1970.
- MORALES CORTÉS, Fermín, *Caspe, combatiente, cautivo y mutilado. Estampas de la revolución*, La Tipográfica, Caspe, 1940.
- PLOU GASCÓN, Miguel, *Historia de Letux*, Ayuntamiento de Letux, Letux, 1989.
- RESA, José M^a, *Memorias de un requeté*, Edit. Bayer hnos., Barcelona, 1968.
- RODRIGO SÁNCHEZ, Javier, SERRANO SANZ, A., «El anarquismo en Mas de las Matas», *Grupo de Estudios Masinos. Boletín*, 19 (2000), pp. 365-474.
- SALOMÓN, Pilar, «La crítica moral al orden social: la persistencia del anticlericalismo en la sociedad española (1900-1939)», tesis doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 1996.
- SANZ, Ricardo, *Los que fuimos a Madrid. Columna Durruti. 26 División*, Petronio, Barcelona, 1977.
- SIMONI, Encarna y Renato, *Cretas. La colectivización de un pueblo aragonés durante la guerra civil española, 1936-1937*, Centro de Estudios Bajoaragoneses, Alcañiz, 1984.

SOLÉ LLOP, Francisco, *Fayón, imágenes y palabras*, Grupo Cultural Caspolino, Caspe, 1984.

SOUCHY, Agustín, *Entre los campesinos de Aragón. El comunismo libertario en las comarcas liberadas*, Edics. Tierra y Libertad, Barcelona, 1937.

TEBIB AMUNI (Víctor Ruiz Albéniz) *Aquello de Belchite fue glorioso*, Edic. Española, Madrid, 1943.

TOMÁS DEL RÍO, Ángel, *La Guerra Civil en Plenas*, Asociación Cultural «Manuela Sancho», Plenas, 1991.

URIEL, Pablo, *Mi guerra civil*, Fedsa, Valencia, 1988.

ANEXOS

ANEXO N^o 1

Localidades zaragozanas que permanecieron en zona republicana.

Partido de Belchite:

Almochuel (6/8/36 - 12/3/38)
Almonacid de La Cuba (9/8/36- 10/3/38)
Azuara (12/8/36- 10/3/38)
Belchite (6/9/37 - 10/3/38)
Codo (25/8/37 - 10/3/38)
Fuendetodos (21/9/36 - 9/3/38)
Lagata (8/8/36 - 11/3/38)
Lécera (6/8/36 - 11/3/38)
Letux (9/8/36 - 11/3/38)
Moneva (13/8/36 - 10/3/38)
Moyuela (15/8/36 - 10/3/38)
Plenas (12/8/36 - 10/3/38)
Puebla de Albortón (27/8/37 - 9/3/38)
Samper del Salz 7/8/36 - 11/3/38)
Villar de los Navarros (10/9/36 - 10/3/38)

Partido de Cariñena:

Aguilón (17/9/36 - 9/3/38)
Aladrén (10/6/37)
Herrera de Los Navarros (18/8/36 - 9/3/38)
Luesma (26/8/36 - 9/3/38)

Partido de Caspe:

Caspe (25/7/36 - 17/3/38)
Cinco Olivas (31[?]/7/36 - 25/3/38)
Chiprana (26/7/36 - 15[?]/3/38)
Escatrón (29/7/36 - 12/3/38)
Fabara (25/7/36 - 30/3/38)
Fayón (25/7/36 - 1/4/38)
Maella (25/7/36 - 30/3/38)
Mequinenza (18/7/36 - 27/3/38)
Nonaspe (23/7/36 - 31/3/38)
Sástago (30/7/36 - 13/3/38)

Partido de Pina de Ebro:

Alborge (29[?]/7/36 - 25/3/38)
Alforque (29/7/36 - 13/3/38)
Almolda, La (24/7/36 - 25/3/38)
Bujaraloz (23/7/36 - 25/3/38)
Farlete (14/8/36 - 26/3/38)
Gelsa (8/8/1836 - 24/3/38)
Mediana (26/8/37 - 11/3/38)
Monegrillo (29/7/36 - 26/3/38)
Osera (8/8/36 - 25/3/38)
Pina (26/7/36 y 8/8/36 - 24/3/38)
Quinto (26/8/37 - 13/3/38)
Rodén (25/8/37 - 11/3/38)
Velilla (6[?]/8/36- 24/3/38)
Zaida, La (5/8/36 - 13/3/38)

Partido de Zaragoza:

Leciñena (7/8/36 - 12/10/36)

ANEXO Nº 2

Resumen de las víctimas de la represión por partidos judiciales.

Partido Judicial de Ateca (sólo localidades con represaliados)

<i>Localidad</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Indice (‰)</i>
Ariza	1	3.022	0,33
Cervera de la Cañada	1	916	1,09
Total Partido	2	—	—

Partido Judicial de Belchite

<i>Localidad</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Indice (‰)</i>
Belchite	60	3.812	15,74
Azuara	29	2.863	10,13
Fuendetodos	16	674	23,74
Letux	15	1.197	12,53
Lagata	14	608	23,03
Plenas	9	756	11,9
Lécera	8	2.262	3,54
Moyuela	7	1.340	5,22
Almonacid de la Cuba	5	663	7,54
Moneva	5	818	6,11
Codo	4	1.069	3,74
Villar de los Navarros	1	1224	0,82
Almochuel	0	142	0
Jaulín	0	546	0
Puebla de Albortón	0	609	0
Samper del Salz	0	414	0
Valmadrid	0	230	0
Total Partido	173	19.227	8,99

Partido Judicial de Borja (sólo localidades con represaliados)

<i>Localidades</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Indice (‰)</i>
Gallur	12	3.864	3,11
Mallén	3	3.002	1
Borja	2	5.013	0,40
Luceni	2	1.879	1,06
Magallón	2	2.108	0,95
Ambel	1	961	1,04
Fréscano	1	349	2,86
Total Partido	23	—	—

Partido Judicial de Calatayud (sólo localidades con represaliados)

<i>Localidades</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Indice (‰)</i>
Calatayud	1	15.168	0,06
Olvés	1	511	1,96
Santa Cruz de Grío	1	873	1,14
Total Partido	3	—	—

Partido Judicial de Cariñena (sólo localidades con represaliados o que estuvieron en zona republicana)

<i>Localidades</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Indice (‰)</i>
Herrera de los Navarros	27	2.190	12,33
Luesma	18	265	67,92
Aladrén	9	261	34,49
Villanueva de Huerva	2	1.267	1,58
Tosos	1	981	1,02
Vistabella	1	499	2
Aguilón	0	1.160	0
Total Partido	58	—	—

Partido Judicial de Caspe

<i>Localidades</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Índice (‰)</i>
Caspe	91	9.924	9,17
Maella	42	3.455	12,16
Fabara	28	2.144	13,06
Nonaspe	14	1.793	7,81
Escatrón	11	2.128	5,17
Chiprana	2	1.143	1,75
Mequinenza	2	3.139	0,64
Cinco Olivas	1	392	2,55
Fayón	1	1.432	0,7
Sástago	1	2.916	0,34
Total Partido	193	28.466	6,78

Partido Judicial de Ejea (sólo localidades con represaliados)

<i>Localidades</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Índice (‰)</i>
Tauste	16	6.182	2,59
Remolinos	6	1.409	4,26
Biota	5	1.605	3,11
Ejea	5	7.800	0,64
Pradilla de Ebro	2	1.068	1,87
Sierra de Luna	2	820	2,44
Castejón de Valdejasa	1	1.071	0,93
Farasdués	1	1.038	0,96
Malpica Arba	1	287	3,48
Sádaba	1	2.716	0,37
Total Partido	40	—	—

Partido Judicial de La Almunia (sólo localidades con represaliados)

<i>Localidades</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Índice (‰)</i>
Cabañas de Ebro	1	769	1,3
Calatorao	1	3.461	0,29
Ricla	1	2.811	0,35
Rueda de Jalón	1	1.041	0,96
Total Partido	4	—	—

Partido Judicial de Pina de Ebro

<i>Localidades</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Índice (‰)</i>
Gelsa	47	2.120	22,17
Almolda, La	25	1.181	21,17
Pina de Ebro	23	2.379	9,67
Quinto de Ebro	15	2.710	5,53
Velilla de Ebro	15	909	16,5
Osera	11	550	20
Fuentes de Ebro	10	2.692	3,71
Bujaraloz	5	1.274	3,92
Farlete	5	525	9,52
Alforque	2	349	5,73
Mediana de Aragón	2	1.188	1,68
Villafranca de Ebro	2	739	0
Alborge	0	300	0
Monegrillo	0	691	0
Nuez de Ebro	0	559	0
Rodén	0	180	0
Zaida, La	0	563	0
Total Partido	162	18.909	8,57

Partido Judicial de Sos del Rey Católico (sólo localidades con represaliados)

<i>Localidades</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Índice (‰)</i>
Uncastillo	5	3.708	1,35
Luesia	3	1.638	1,83
Castiliscar	2	953	2,1
Ruesta	1	522	1,92
Total Partido	11	—	—

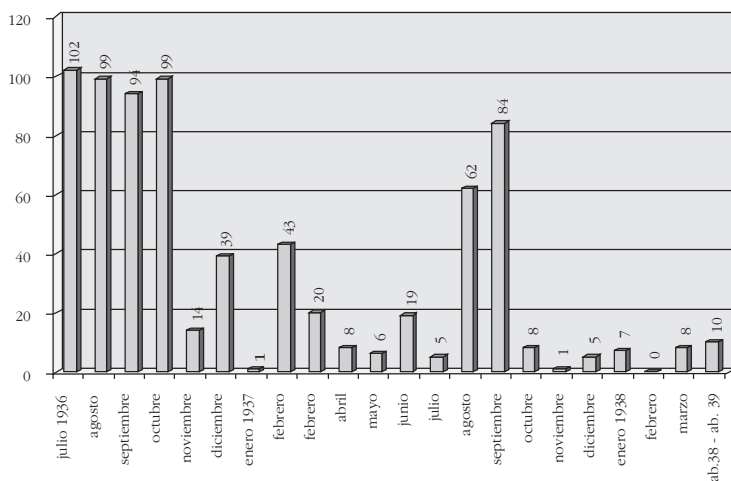
Partido Judicial de Tarazona (sólo localidades con represaliados)

<i>Localidades</i>	<i>Nº de víctimas</i>	<i>Población</i>	<i>Índice (‰)</i>
Tarazona	2	9.605	0,21
Total Partido	2	—	—

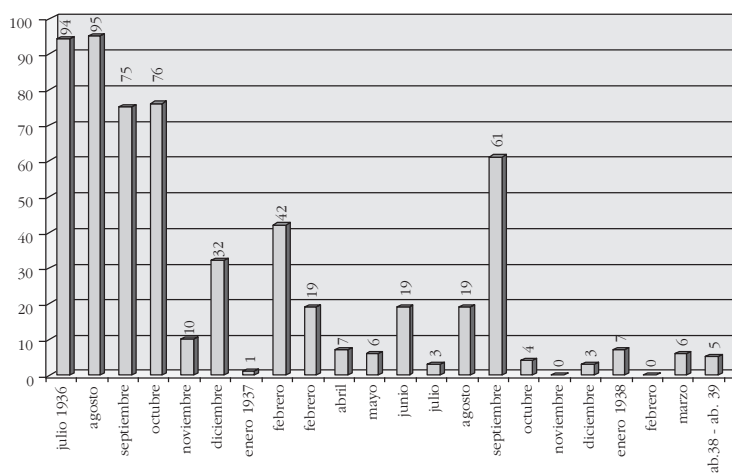
ANEXO Nº 3

Gráficas de la distribución temporal de la represión

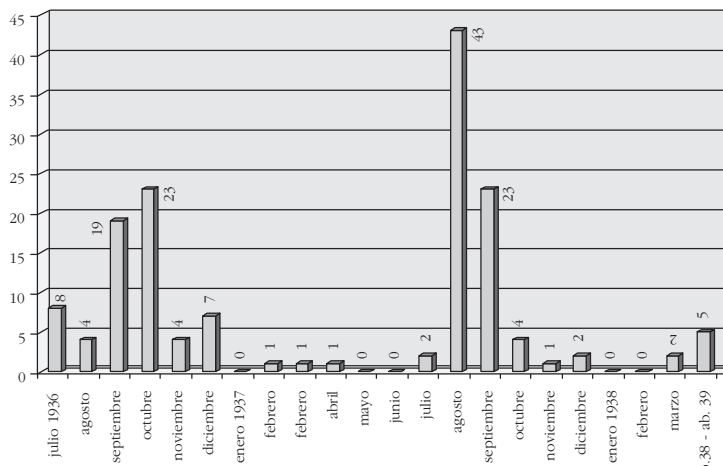
Distribución por meses de la represión en la provincia



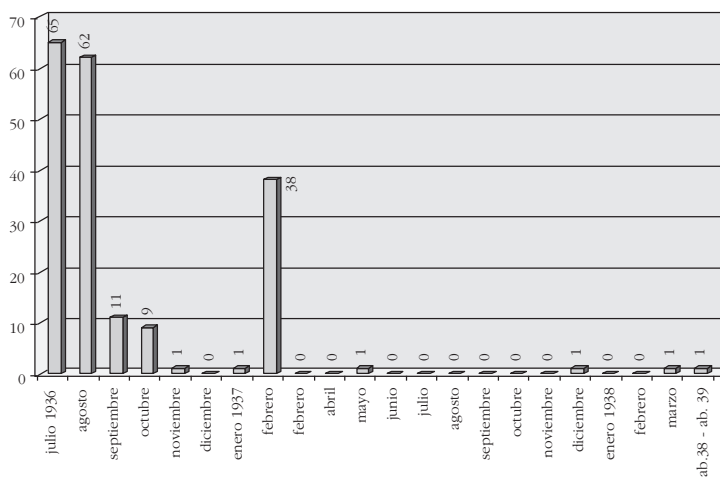
Distribución por meses de las víctimas por represión en los partidos judiciales de la zona republicana (Caspe, Belchite, Pina y Cariñena)



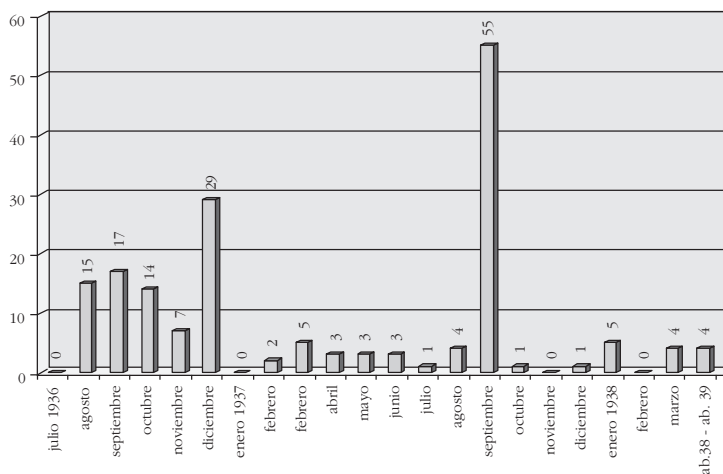
Distribución por meses de las víctimas por represión en los partidos judiciales de la zona "nacional" (Ateca, Borja, Calatayud, Daroca, Ejea, La Almunia, Sos, Tarazona y Zaragoza)



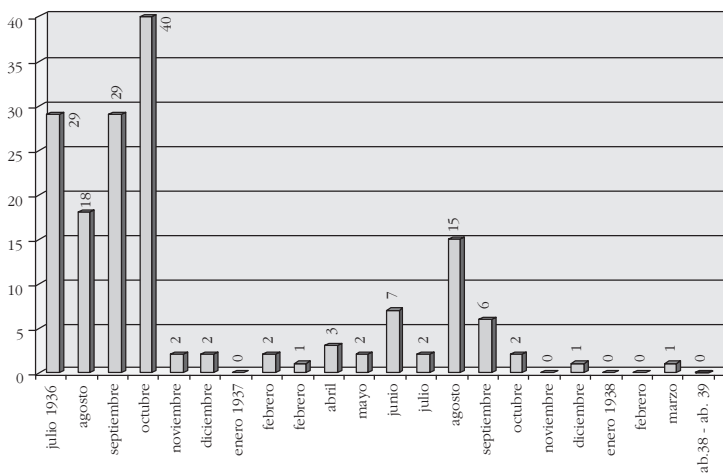
Distribución por meses de las víctimas por represión en el partido judicial de Caspe



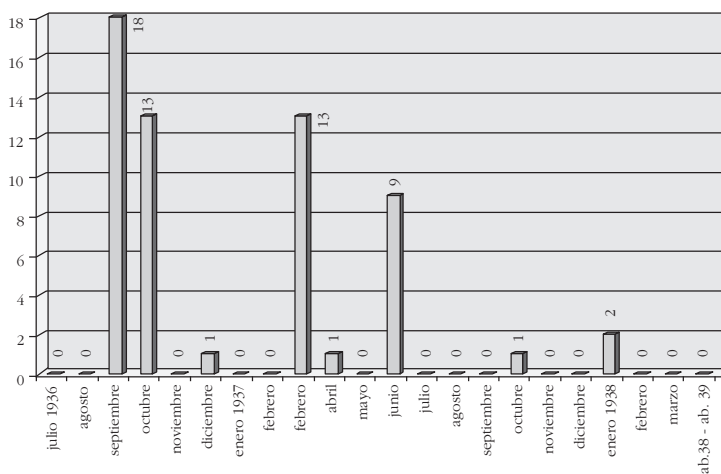
Distribución por meses de las víctimas por represión en el partido judicial de Belchite



Distribución por meses de las víctimas por represión en el partido judicial de Pina de Ebro



Distribución por meses de las víctimas por represión en el partido judicial de Pina de Carriena



ANEXO N.º 4

Perfil socio-profesional de las víctimas de la represión

	Provincia de Zaragoza	Partido de Belchite	Partido de Cariñena	Partido de Caspe	Partido de Pina	Resto de partidos
<i>Propietarios y labradores</i>	356 (47,98%)	96 (55,5%)	35 (60,3%)	69 (35,7%)	83 (51,2%)	73 (46,8%)
<i>Jornaleros y braceros</i>	100 (13,48)	39 (22,5%)	9 (15,5%)	12 (6,2%)	19 (11,7%)	21 (13,5%)
<i>Industriales y comerciantes</i>	95 (12,8%)	15 (8,6%)	1 (1,7%)	49 (25,4%)	16 (9,9%)	14 (9%)
<i>Profesiones liberales</i>	60 (8,1%)	5 (2,9%)	4 (6,8%)	20 (10,4%)	7 (4,3%)	24 (15,4%)
<i>Obreros y empleados</i>	58 (7,82)	13 (7,5%)	3 (5,2%)	19 (9,8%)	13 (8%)	10 (6,4%)
<i>Sus labores</i>	25 (3,37%)	4 (2,3%)	5 (8,6%)	1 (0,5%)	13 (8%)	2 (1,3%)
<i>Militares y ff. orden público</i>	22 (2,96%)	1 (0,6%)	0	7 (3,6%)	7 (4,3%)	7 (4,5%)
<i>Religiosos y sacerdotes</i>	19 (2,56%)	0	0	13 (6,7%)	4 (2,5%)	2 (1,3%)
<i>Otras</i>	2 (0, 27%)	0	1 (1,7%)	0	0	1 (0,6%)
<i>Desconocida</i>	5 (0,67%)	0	0	3 (1,5%)	0	2 (1,3%)

APÉNDICES

APÉNDICE Nº 1

«Estado número 1» de Maella o listado de sus víctimas, con datos sobre las mismas: AHN, CG, leg. 1424 (2), rama 159, 1940

Ayuntamiento de <u>Maella</u>		Partido judicial de <u>Ospe</u>		ESTADO	
RELACION de personas residentes en este término municipal, que durante la dominación					
Nombre y apellidos de la víctima	Años de edad	Profesión	Filial política y cargos públicos que había desempeñado		
José María Soler Molins X	44	Jefe P.	Militante a la L.E.D.A.		
José María Jugueto Mantiver X	42	Notario	L.E.D.A.		
Andrés Lauer Jakiño X	62	Presbítero	Encargado de esta Parroquia		
Esteban Lauer Villalba X	70	id.	En ejercicio en esta Parroquia		
Santiago Pastor Albano X	57	id.	" " " " "		
Ángel Velázquez Cuevas X	50	San froyal	Pertenece a Falange Española		
Francisco Ferrer Ruíz X	56	Propietario	Barricada de Puerta de la...		
Marcelino Ferrer Martínez X	24	Estudiante	Pertenece a Falange Española		
Ángel Villalba Delgado X	60	Comerciante	L.E.D.A. - Juan Martínez y...		
Manuel Embodas Moreno X	45	Propietario	Ninguno		
Elías Domín Pizarro X	45	Comerciante	L.E.D.A.		
Juan Gil Borrás Balaguer X	32	Propietario	L.E.D.A. Encargado del Ayto.		
Luis Ferrer Huarte X	59	San Ayto.	L.E.D.A. Secretario Municipal		
Felipe Bellido Espigosa X	27	Estudiante	Falange Española		
José Antonio Albarracín X	38	Formación	Falange Española		
Bernardo Jakiño Rial X	29	Comerciante	L.E.D.A. - Secretario de este partido		
Guillermo Lauer Perea X	34	id.	L.E.D.A.		
José Miraball Lauer X	60	journalista	Falange Española		
Andrés Muñoz Alb X	34	Religioso	L.E.D.A.		
Leandro Barceló Llaure X	44	Paralelo	L.E.D.A.		
Marcelino Miraball Hernández X	27	Empleado	L.E.D.A. - Portero del Ayuntamiento		
José María Espigosa Hernández X	51	Comerciante	L.E.D.A.		
Guillermo Bellido Vidal X	69	Propietario	L.E.D.A. - Encargado del Ayto.		
Marcelino Ferrer Pallas X	57	Laborador	Falange Española		
Francisco Borrás Balaguer X	35	Propietario	Jefe Local de Falange Española		
José María Borrás Perea X	39	Comerciante	Jefe Centenario de Falange Española		
José María Borrás Pallas X	39	Jefe Civil	Guardia Civil de este Pto.		
Felipe Borrás Rodríguez X	24	"	" " " " "		
Víctor Balaguer Molins X	52	Comerciante	L.E.D.A. - Juan Martínez y...		

APÉNDICE Nº 2

Informe del jefe de las «Milicias Aragonesas» llegadas a Escatron sobre los fusilamientos en esa localidad: 23/9/1936. AHN, CG, leg. 1427 (2), anexo 1/5



...derias Milicias Aragonesas, al jefe Investigación de Caspe, ... Amarada Erla, ... cabe la satisfacción de poner en tu conocimiento, para los ... el siguiente informe, ... la Primera Centuria, compuesta de ciento treinta milicia- nos al pueblo de Escatron, por la superioridad, y constituido como jefes de estas centurias, en Escatron al objeto, de procurar la organización, necesaria. me encuentro conque el día anterior habian sido detenidos: -

Pablo Ramón, José Ramón Amigó, Juan Martín, Tomas Birache y que ese mismo día habia sido fusilado, por unas Milicias que dicen ser de Inves- tigación, el que fué Recaudador de Impuestos Municipales, Pionadio Mones- ma Aguerri, por las causas que ellos creyeron conveniente.

Una vez posesionado del mando, ordené se sepultara el cadaver del tal Monesma, adeshora de la noche y a unos dos o tres kms de este pueblo, cuarenta pasos mas allá del lugar en que habia sido fusilado, segun el Comité de Escatron me informaba.

Hechas investigaciones, y pedida declaración firmada del Comité Anti- fascista de Escatron, que adjunto, resultaba, que el Pablo Ramón era el cacique máximo de ahora y de siempre. Alcalde perpetuo de todos los Ayun- tamientos derechistas posibles, Alcalde de la Gestora del 6 de OCTUBRE, concejal nombrado por los fascistas en el Ayuntamiento subversivo, nombrado por ellos, a su paso por esta. Individuo que habia acuciado a la Guardia Civil, contra las organizaciones proletarias. El Comité lo consi- deraba enemigo de la clase trabajadora y de la causa, elemento peligroso antes, ahora y siempre, y que sobre los cuales pesan acusaciones tan con- cretas, que estimaban ser considerado, ^{firmado} sin excusa alguna, y condenado a su- fir la última pena, por que de esta forma, se interpretaba, el deseo uná- nime de este Comité, y que con ello se hacia justicia a la clase traba- jadora. Interrogado por el que suscribe se encerraña en las mas rotundas negativas, si bien nunca negó, que perteneciera al Ayuntamiento a que he- mos hecho referencia. Respecto al José Ramón Amigó, hijo del anterior ejerció durante el benio radical-cedista, el cargo de Juez, ufandandose el mismo de calificarse de "carlista". Durante las horas en que estuvieron aquí los facciosos, acompañó a estos en sus indagaciones y registros, en

busca de compañeros, así decía la acusación del Comité. Interrogado convenientemente, manifestó: que un tal Justo Sanz Carrillo, que fue el jefe y organizador de la C.E.D.A. en Escatron, fascista declarado, era el que los facciosos habían nombrado Alcalde y que en compañía de él y de su padre, pero que a las órdenes de éste, iban haciendo los registros y formando las listas de los compañeros nuestros que ellos consideraban peligrosos, para que fueren fusilados. Así las cosas, dos milicianos de esta Primera Centuria, tuvieron noticia, de que el tal Justo Sanz Carrillo, al que se creía huido, estaba escondido en su casa (quiero -- hacer constar para los efectos oportunos, que ~~existía~~ la casa de este individuo, y para interesar la captura del mismo, había sido requisada y registrada varias veces, sin que pudiera ser habido el dicho Sanz

Personado el Jefe de estas Centurias, en la casa que nos referimos, acompañado de aquellos dos milicianos, que habían tenido la confianza, un delegado de grupo, y dos miembros del Comité Local, dió por resultado la captura del mismo, que se encontraba dentro de la casa, y que por una ventana, se escapaba al tejado cuando nuestras fuerzas intentaban hacer los registros; de este individuo, nos informa el Comité Local diciendo:

“Jefe u organizador de la C/ E / D A en Escatron. Fascista declarado acompañó con complacencia a los fascistas desde su llegada hasta su marcha. Fue nombrado por ellos Alcalde del Ayuntamiento que constituyeron con las facultades dictatoriales consiguientes. Interrogado convenientemente, negó al principio su participación, confirmandola despues en el hecho de que sí había sido alcalde faccioso, y estrechado a preguntas delante de Delegados de Grupo, que componian el Comité de Guerra, que él junto con Pablo Ramón y José Ramón, fueron los que acusaron como peligrosos a los compañeros Trigidio Velilla, que ocupaba el cargo de Secretario de Ayuntamiento, hombre de grandes ideas izquierdistas e inmegorable compañero; junto con éste acusó ademas a otros cuatro compañeros que lo fueron; Manuel Paricio, Jerónimo Villanova, Ramón Mur y Luis Lizano. -- Estos camaradas fueron hechos prisioneros vilmente por los fascistas, trasladados a Zaragoza y encerrados en el Castillo de la Alfejeria, hecho que el que informa os confirma, compañeros, por haber visto durante su breve permanencia en las filas fascista del ejército forzoso maravillo-

zado, por el vil Cabanellas. De estos infelices, os daría cuenta de la suerte que ya habrán corrido.

Al efecto de informarnos mejor, varios compañeros Delegados y yo por mi parte, hemos podido informarnos de que estos tres individuos, se habían dedicado, no solo durante su vida a la explotación del -- obrero si no que, durante el breve mando fascista, procuraron suministrar a las tropas rebeldes todos cuantos alimentos les fué posible como lo comprueba uno de los vales que adjuntamos, y lo que declara el compañero Francisco Ambroj dueño de una carnicería al que -- le fueron robados doce jamones, por orden de Justo Sanz y con la complacencia de Pablo y José Ramón a pesar de ser este último carnicero y tener por consiguiente ese material. En realidad los informes adquiridos por todos denotaban que a esos individuos debía aplicarseles la pena que el Comité Local demandaba con caracter de urgencia. A estos tres individuos se les ha aplicado la última pena en el Cementerio de esta Localidad en el día de hoy a las dos de la mañana haciendo resplandecer de esta forma la justicia por la cual estamos luchando y llevando así el ejemplo de nuestra justicia a esas compañeras y niños que lloran la suerte de los cinco camaradas arrancados del pueblo por los fascistas. Para ejecutar esta pena se telegrafio al camarada Mongrovejo jefe de servicio, preguntándole que se hacía y pidiendo -- contestación el cual contestaba a los breves instantes con estas frases = "Ciertas cosas no se preguntan"= Cuyo telegrama discutido que fué aprobado por unanimidad en el sentido de que debiera hacerse justicia como se ha hecho. Rogamos a los compañeros que por si en este -- caso no se ha guardado alguna formalidad que no conocamos quizá por el desconocimiento en que pueda llevarse estos asuntos en esa oficina que para lo sucesivo, nos envíen normas a seguir para que en ningún momento por desconocimiento involuntario, pueda incurrirse en algun defecto de forma. Respecto a los vecinos de este pueblo Juan Martín y Tomas Birache por no considerarlos responsables en este movimiento, ni que lo haya protegido directa ni indirectamente, interpretando el recto sentir del Comité local de Escatrón y del pueblo en general, --

y habiendo leído en sus manos callosas, el ser trabajadores no tenía otro defectillo que el sufragio universal que emitieron han sido puestos en libertad, habiendo prometido con lágrimas en los ojos que volverán a la vida honrada por esta noble causa en la que todos ofrecemos nuestras vidas.

Esta es nuestra sentencia que despues de ejecutada creyendo que hemos hecho la justicia verdadera os comunicamos para vuestro superior conocimiento firmada por mi y los delegados de Grupo componente del Comité de Guerra. Esto ha sido aprobado por todos los Milicianos Comité Local. SALUD.

En Escatron para Caspe a 23 de Septiembre de 1936

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

Informe del Comité de Escatron.

Vale que figura Alcalde facioso y

Telegrama recibido.

Telegrama recibido.
Cefe de las Centurias
Angel Guerra

Delegados y comite
General
Honorable Rabinovich

- F. N. del Delegado Alfredo Barceló



Antonio Buser.

Francis A. [unclear]

James M. Smith

(24)
 1 one
 24 1/2

Uromyces Vider

2-8-1900

John L. ...

ESCATI

El Ct
detallado
encubierta
bien los
valor 18
Data.

(1) PABLO RAM
de todos
gestora
en el ca
no acuci
ganizaci
JOSE RAM
bienio r
ta" Dura

a estos
JUAN MAF
SE de pasto
o ent'de
INVible a
TOMAS V
durante
"alcabu

APÉNDICE Nº 3

Informe de la Oficina de Investigación Secreta al Consejero de Orden Público y Justicia del Consejo de Aragón sobre sus actividades: Caspe, 15/11/1936. AGCS, PS Barcelona, carpeta 839.

Informe que da esta Oficina de Investigación, al compañero Adolfo Ballano, Consejero de Orden Público y Justicia, del Consejo Regional de Defensa de Aragón.

PERSONAL QUE ACTUALMENTE TIENE ESTA OFICINA.

Adjunto mandamos la relación de los mismos.

INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA.

Ya sea por denuncias, a nosotros dirigidas, por relación, que en nuestro poder obra, de aquellos individuos que han eludido hasta ahora la acción justa a nosotros encomendada y que se distinguieron en el movimiento contra nosotros dirigido por los facciosos, o bien por nuestro servicio de vigilancia e investigación, el caso es, que venimos realizando detenciones a las cuales damos un sentido de rectitud que más abajo vamos a exponer:

Efectuada la detención de cualquier elemento al que se considere incurso en responsabilidad, se procede a su interrogatorio. Hecho este se busca entre sus conocidos a todos aquellos que puedan hacer cargos, lo mismo que aquellos otros que puedan obrar en descargo del procesado.

Si se considera que el elemento contra el que se procede es faccioso o ha hecho armas en contra de nuestras fuerzas, como así mismo si se dedica al espionaje, obramos de una forma expeditiva.

A todos aquellos que apocados de espíritu y de origen productor al mismo tiempo que productores, ellos, se les castiga mandándoles a efectuar trabajos de atrincheramiento, obras de carreteras etc. etc.

A pesar de que hayan podido hacer guardias, cacheos u otras medidas mandadas por los facciosos que les dirigían, esta oficina, dando cuenta siempre a la Comandancia de sus trabajos, ha interpretado con benevolencia lo que se refiere a los apocados de espíritu o equivocados, que puede decir no se ha procedido violentamente en ninguno de los casos.

Para más detalles y sintetizando la exposición, adjunta a este informe va la lista, tanto de aquellos que han sido mandados a efectuar trabajos, como de aquellos otros que han sido mandados al "frente". Como se ve, la diferencia de los unos a los otros es bastante grande, faltaría esta, que a favor de los primeros. Hay que tener en cuenta que son también bastantes los puestos en libertad por no haber existido cargos contra los mismos.

APÉNDICE Nº 4

Bando del Presidente del Consejo de Aragón sobre la centralización del Orden Público: enero 1937. AHN, CG, leg. 1429 (1),

a

n

e

Disposiciones de la Presidencia sobre cuestiones de Orden Público

Constituida la Junta de Seguridad de Aragón por decreto del 26 del pasado Diciembre, inserto en la «Gaceta de las Repúblicas» del 27 del mismo mes, y en virtud de facultades que en dicho Decreto se la confieren, que bajo su control y mando supremo todas las fuerzas de Orden Público de la retaguardia, fusionadas ya en el Cuerpo de Seguridad.

En mi condición de Presidente de la expresada Junta, Delegado General del Gobierno de la República en el territorio aragonés liberado, dicto, para conocimiento del público y de las citadas fuerzas a mis órdenes, el siguiente:

BANDO

1.º Nadie, fuera de los agentes del Cuerpo de Seguridad, podrá practicar detenciones, efectuar registros, ni llevar a cabo acto alguno que, por su naturaleza, corresponda a los citados agentes.

2.º Estos, al amparo de la Ley del 28 de Julio de 1933, artículo 40, podrán efectuar registros en domicilios de españoles y extranjeros y practicar detenciones en domicilios particulares, pero previstos necesariamente, en cada caso, de la correspondiente orden escrita y firmada por autoridad superior, sin la cual ni el registro ni la detención tendrán fuerza de obligar.

3.º Cualquier ciudadano que sin orden escrita se vea amenazado de detención o de registro, deberá avisar inmediatamente a las autoridades superiores, denunciando el hecho.

Para que los agentes puedan llevar a cabo incautaciones de bienes muebles o efectos, será necesaria orden escrita y firmada por el Presidente de la Junta de Seguridad o por el Vicepresidente de la misma y, en su defecto, por cualquier Comisario, delegado expresamente para ello.

4.º Siendo el cometido de los agentes de Seguridad, al igual que de auxiliares del Gobierno y de los Tribunales de Justicia, dicho se está que sólo les corresponde ejercer sobre los detenidos una acción de vigilancia y custodia.

5.º Todos los detenidos serán puestos a disposición de la Junta de Seguridad en Caspe, o a la de las Comisarias de Seguridad de la Junta en los distintos pueblos liberados. En comprendidos en este último caso, deberán ser puestos a disposición de la Junta, dentro de las 24 horas siguientes a la de su detención.

6.º Los individuos que sin pertenecer al Cuerpo de Seguridad realicen o intentasen realizar actos de la competencia de las autoridades, serán detenidos, procesados y juzgados seguidamente por los Tribunales Populares. Urgencia, que los sancionarán como a facciosos.

7.º Los agentes de seguridad ejercerán activa y difi-

gente vigilancia para impedir la salida de Aragón de toda clase de artículos alimenticios que no vayan autorizados con documentación de la Consejería de Abastos, en la cual conste el visado de la Junta de Seguridad. Los citados agentes procederán al decomiso de cualquier género que no circule en las citadas condiciones, poniendo lo decomisado a disposición de la Junta y tomando la filiación y signos digitales del portador de los géneros para, en caso de reincidencia, detenerlo y ponerlo a disposición del Tribunal Popular.

9.º También los centros y organizaciones antifascistas, primeras en dar ejemplo de acatamiento a las disposiciones de la Junta de Seguridad, deberán tener en cuenta que, para la celebración de cualquier acto público, lo mismo en locales abiertos que cerrados, será a condición indispensable comunicarlo con 24 horas de anticipación a la Consejería de Orden Público o a las Comisarias de los pueblos donde haya de celebrarse el acto, para que a él asista un agente delegado, que ocupará sitio en la mesa presidencial.

Esta Presidencia tiene la seguridad de que el encendido entusiasmo con que todas las fuerzas del actual Cuerpo de Seguridad colaboran en la gloriosa lucha que sostenemos por la liberación de nuestra tierra y por el triunfo de los más altos ideales de Humanidad y de Justicia, se pondrá una vez más de manifiesto interpretando, en su más puro sentido, cuantas disposiciones les sean dictadas. Que nada expresa mejor el entusiasmo, que el cumplimiento del deber, el acatamiento a la disciplina y el celo que se pone en el trabajo que nos toca realizar.

Las distintas fuerzas de retaguardia que hoy aparecen unidas en el Cuerpo de Seguridad han demostrado hasta ahora su alta moral, su inteligencia y su fervor antifascista. Por eso estimo que su labor futura me permitirá estar satisfecho de controlarlas desde la Presidencia de esta Junta y, al rendirles el público homenaje de mi admiración, me complazco en declarar que de ellas — del nuevo Cuerpo de Seguridad — espero la obra más provechosa y más eficaz que puede hacerse en estos momentos, en los pueblos aragoneses de la retaguardia.

En cuanto a la población civil, que con excepcional espíritu de sacrificio viene soportando las terribles consecuencias de la guerra, sólo he de decirle que confío en todos para que entre el pueblo y los agentes, servidores leales de ese mismo pueblo sufrido y heroico, existe una colaboración absoluta, que se traduzca en facilidades para la difícil función de la autoridad. Una función que habrá de desarrollarse siempre — así lo espero — dentro de la cordialidad y confianza entre todos los sectores del frente antifascista.

El Presidente,

J. Ascaso



APÉNDICE Nº 5

Decreto de creación de los Jurados de Urgencia y los Tribunales Populares en Aragón, publicado por el Boletín del Consejo Regional de Defensa de Aragón, 28/1/1937

J U S T I C I A

Decreto

Creado el Tribunal Popular especial que, con residencia en Caspe y jurisdicción en todo el territorio aragonés liberado, ha de conocer de los delitos que determinan los Decretos de 23 y 26 de agosto último, es imprescindible, por ser complemento de aquél, organizar con el carácter de jurisdicción especial y en tanto duren las actuales circunstancias, un Jurado de Urgencia que, con la seriedad de la garantía procesal, extienda de aquellos hechos que, sin revestir los caracteres de delito, son, por sus características y peculiaridad, de hostilidad más o menos ostensible e indudable desafección al Régimen.

Esta jurisdicción, como la del Tribunal Popular, se extenderá al territorio liberado de las tres provincias aragonesas, y también tendrá este Jurado de Urgencia su residencia en Caspe. La especialidad del procesamiento, esencialmente oral, se halla expresada en el Decreto de 10 de octubre de 1936, que crea estos nuevos organismos de justicia popular.

Por lo expuesto, y de acuerdo con el Consejo de Aragón, a propuesta del Consejo de Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Primero. — Se constituye en Caspe (Zaragoza), con jurisdicción exclusiva a todo el territorio aragonés liberado y mientras duren las actuales circunstancias de guerra, un Jurado de urgencia para conocer de los hechos

de hostilidad y desafección al Régimen, que se hallan determinados en el Decreto de 10 de octubre de 1936.

Segundo. — Constituyen el Jurado de Urgencia un Presidente, juez de derecho, designado por el Gobierno, y dos jurados jueces de hecho, que designan por turno las organizaciones políticas y sindicales.

Tercero. — Los juicios se inician por denuncia de las autoridades gubernativas por medio de un Delegado o del Fiscal municipal que sostiene la acusación, ajustándose al procedimiento para las faltas en el título primero del libro sexto de la Ley de Enjuiciamiento criminal.

Cuarto. — Desde la publicación de este Decreto, todos los hechos de hostilidad y desafección al Régimen que no constituyan delito, serán denunciados por comparecencia o por escrito firmado ante el Jurado de Urgencia de Caspe.

Dado en Caspe a 18 de enero de 1937.

V.º B.º

JOAQUÍN ASCASO.

El Consejero de Justicia.
TOMAS PELLICER.

Decreto

La necesidad apremiante que siente la región aragonesa de que sea organizado definitivamente el funcionamiento de los Tribunales populares, encargados de la normal administración de Justicia en la retaguardia y tenida cuenta de la admirable labor depuradora y revolucionaria que vienen realizando en las demás provincias, ha movido a este Departamento de Justicia del Consejo de Aragón a constituirlos sin más dilaciones y siguiendo fielmente las normas legales dictadas por medio de los Decretos del Ministerio de Justicia del Gobierno de la República dictados en 23 de agosto y 2 de noviembre de 1936.

Por lo expuesto y de acuerdo con el Consejo de Aragón y a propuesta del Consejo de Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

1.º Hasta tanto sean liberadas una o todas las capitales de provincia de la región aragonesa, se crea un Tribunal Popular con residencia en Caspe (Zaragoza), con jurisdicción extensiva al territorio liberado en las tres provincias.

2.º La constitución del Tribunal Popular en Caspe se efectúa

de acuerdo con los decretos de Justicia de 23 de agosto y 2 de noviembre de 1936, para conocer de los delitos de rebelión y sedición y de los cometidos contra la seguridad exterior del Estado, desde el 17 de julio de 1936, cualquiera que sea la ley Penal en que se hallen previstos y mientras dure el actual movimiento subversivo.

3.º Este Tribunal funcionará en Caspe y podrá trasladarse, cuando lo crea conveniente, a cualquier otro lugar de la región aragonesa, comunicándolo telegráficamente al Ministro de Justicia.

4.º Los funcionarios judiciales que en dicho Tribunal han de intervenir, serán designados por el Ministro de Justicia, y los Jurados serán ocho, nombrados por los Comités provinciales de los Partidos que forman el Frente Popular y organizaciones sindicales obreras que forman el frente antifascista, y en la proporción que dichas disposiciones indican.

Para su actuación serán hábiles todos los días y horas.

5.º Los Jurados serán tres, uno para cada provincia, de manera que los organismos provinciales de las mismas designarán, como se dispone en el artículo anterior, los respectivos jurados y sus suplentes. De esta manera, cada Jurado funcionará, con la misma y común sección de derecho, en los juicios que afecten a los naturales de cada una de las provincias o con motivo de los hechos delictivos en cada territorio realizados.

6.º El procedimiento se ajustará a lo decretado en las disposiciones del Gobierno antes mencionadas.

Las denuncias que en lo sucesivo se formulen ante las autoridades judiciales y sus agentes, no serán admitidas ni cursadas si no se hacen por escrito, responsabilizándose con su firma y ratificación el denunciante o por medio de comparecencia personal.

Dado en Caspe a 15 de enero de 1937.

El Consejero

APÉNDICE Nº 6

Sentencia del juicio contra Pedro Cirac por el Tribunal Popular de Aragón, Caspe: 29/1/1937. AHN, CG, leg. 1427 (2), anexo 1/5**S E N T E N C I A**

Caspe a veintinueve de Enero de mil novecientos treinta y siete.

ANTONIO GAZOL SANTAPE, Presidente, CARLOS VEGA LOPEZ, Vocal Titular, y Eduardo Serrano Gil-Santibañez, Vocal Suplente, todos del Tribunal Popular especial de Aragón, habiendo visto el rollo número tres-1937, y sumario del mismo número tramitado por el Juzgado especial número dos de este Tribunal Popular, seguido contra el vecino de la presente PEDRO CIRAC ESTOPAÑAN, de cuarenta y dos años, casado, Carpintero, natural de la presente, siendo Fiscal de la causa el del mismo Tribunal ANGEL GURREA LECHA, y Defensor El Letrado JUAN PEDRO CIUDAD SERRANO, en turno de oficio. Siendo el delito perseguido en de rebelion militar, y Magistrado Ponente el citado señor SERRANO, y,

PRIMER RESULTANDO : Que el Jurado que ha intervenido en la causa ha contestado afirmativamente a las preguntas todas del veredicto, por lo cual se consideran hechos probados los siguientes:

- 1º Que Pedro Cirac, ha sido y es de ideas fascistas.
- 2º Que Pedro Cirac, ha sido siempre enemiga de la clase trabajadora.
- 3º Que Pedro Cirac, intervino como dirigente fascista en el movimiento.
- 4º Que Pedro Cirac, intervino activamente en el movimiento fascista con armas en mano.
- 5º Que Pedro Cirac Estopañan, marchó a Zaragoza al efecto de ponerse en contacto con los fascistas para llevar a cabo el movimiento subversivo en Caspe.
- 6º Que Pedro Cirac Estopañan, inter-

vino en la sublevación cortando árboles para impedir la llegada de fuerzas leales. 7º Que Pedro Cirac Estopañan, gritó "Arriba España". 8º Que Pedro Cirac Estopañan ordenó hacer fuego contra las ventanas por los fascistas. 9º Que Pedro Cirac Estopañan, puede ser considerado como sujeto peligrosísimo para la nueva sociedad.

SEGUNDO RESULTANDO: Que el Ministerio Fiscal ha entendido aplicable al caso los artículos 237 número 1º en relación con el 238 número 2º del Código de Justicia Militar, solicitando la pena de muerte.

TERCER RESULTANDO: Que el Letrado defensor del inculpaado, ha entendido comprendido al mismo en un delito de auxilio a la rebelión, y aplicable en su caso la pena de reclusión perpetua.

CUARTO RESULTANDO: Que con la rebelión fascista se han causado daños incalculables, morales y materiales, no solo al Estado si no también a los particulares. Hechos probados.

PRIMER CONSIDERANDO: Que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de rebelión militar previsto en el artículo 237, apartados 1º y 4º del Código de Justicia Militar, y penado en el segundo del siguiente artículo 238.

SEGUNDO CONSIDERANDO: Que Pedro Cirac Estopañan, es responsable en cuanto de autor por participación directa en la ejecución de dichos hechos, a tenor del artículo 14 número 1º del Código Penal común.

TERCER CONSIDERANDO: Que del veredicto del Jurado al afirmar que, el Pedro Cirac Estopañan es sujeto peligrosísimo para la sociedad, es de apreciar como circunstancia cualificativa de la responsabilidad la agravante del artículo 173 del referido Código de Justicia Militar, así como también la enorme transcendencia del delito y el daño que del mismo se sigue para los intereses del pueblo.

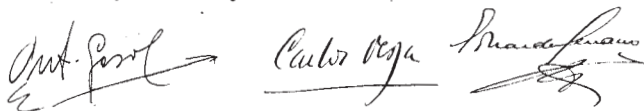
CUARTO CONSIDERANDO: Que según preceptúa el artículo 19 del Código Penal común toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente.

QUINTO CONSIDERANDO: Las disposiciones legales citadas y las demas de aplicacion en el presente caso.

F A L L A M O S

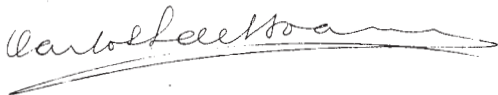
Que dbemos condenar y condenamos a Pedro Cirac Estopafian, como co-
mofo de un delito de rebelion militar, ala pena de muerte; in-
demnizacion al Estado de cincuenta mil pesetas, y a las costas
causadas y que se causen. Dese cuenta cuando haya transcurrido
el plazo de veinticuatro horas a partir de la ultima notifica-
cion de la presente, para acordar lo correspondiente a la eje-
cucion.

Asi por esta muestra sentencia definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.



P U B L I C A C I O N

La anterior sentencia ha sido leida y publicada por el
Ponente de la sentencia en Audiencia publica en el dia del
(suceso), digo de su fecha. Ante mí el Secretario que doy fé.



APÉNDICE N° 7

Declaración de Salvador Puértolas, superviviente de los fusilamientos de Nonaspe en febrero de 1937, para la «Causa General»: 10/12/1940, AHN, CG, leg. 1424 (2), rama 161

DECLARACIÓN DEL TESTIGO

En Barcelona a diez §
de diciento
de mil novecientos cuarenta

Salvador Puértolas Andueza

Ante el Sr. Fiscal, delegado para la Instrucción de la Causa General de Barcelona, compareció el testigo anotado al margen, de cuarenta y un años de edad, de estado casado, natural de Nonaspe (Barcelona), de profesión cartero, que no ha sido procesado, con domicilio en Nonaspe (Barcelona) y después de prestar juramento de decir verdad y enterado de las penas por falso testimonio, fué interrogado y DICE:

Que la noche del 10 al 11 de Febrero de 1937 fué detenido por elementos rojos y en virtud de que era Presidente del Sindicato Católico Agrario de S. Miguel. Fué al mismo tiempo conducido con tres vecinos más a las afueras del pueblo, para ser fusilados en el campo denominado "Plat de la llibre", después de venir disparos a consecuencia de los cuales quedé gravemente herido, consiguiendo alejarme del lugar, en donde tuvo lugar el fusilamiento, después de que los rojos les dejaron abandonados por suponerlos muertos. Los que fueron fusilados han sido: Santiago Vilalta Millán, Andrés Poulet, Emilio Slop, Rafael Andueza, Miguel Fuentebat, Agustín Batetán, Santiago Vidal, Joaquín Altuna, Manuel Slop, Juan Arjona, Miguel Linares, Miguel Mesa, Encarnación Slop. El declarante fué recogido 18 horas después por su familia, siendo trasladado a su domicilio, siendo curado de las heridas provisionalmente y después fué llevado a Barcelona, cinco meses después. Topado con evidencia, porque los vió personalmente, como autores del crimen, de: Eugenio Linares, presidente del Comité; Martín Fabre; Manuel Jover Orta; Indro Linares al "el Pito"; Botigues, que es tío de agosto; - De las personas de quienes sospecha el declarante: Joaquín Fuentebat; Pablo Linares al "el Pito"; José Andueza y en tal Manuel Slop Rafael Andueza Caralt. - Parados de esto: Eugenio Linares, en Francia. - Martín Fabre, detenido pero no sabe dónde. - Manuel Jover, detenido en S. Juan de Moredun. - Indro Linares, en Francia. - Botigues, en

APÉNDICE Nº 8

Extracto del escrito de la Comisión Regional del Frente Popular en Aragón a la CNT aragonesa sobre varias cuestiones, entre ellas el Orden Público: Caspe, 28/4/1937. FPI, AASM, leg. 512-7

para cuestiones concretas, que los serán directamente por el Consejero del Departamento al que compete el asunto.

PROBLEMA MILITAR

EL FRENTE POPULAR propone al Consejo de Aragón que de ahora en adelante esté dispuesto ni un momento más a permitir que en nuestra tierra operen columnas no encuadradas en el Ejército Popular, con mandos que operen ante el Gobierno de la República, dependientes exclusivamente de acciones guerreras del Estado Mayor Central.

Esta declaración puede ser la base de una acción común enérgica en la exigencia al Gobierno de la República de mayor atención, por su parte, al frente de guerra aragonés, a poner en el punto de mayor eficacia las fuerzas que cubren o cubran el frente de batalla.

Nuestro hoy de revolucionarios, de antifascistas y simplemente el de aragoneses exige que esta situación termine rápidamente, y la acción común, leal con el Gobierno de la República es la única forma de llevar a cabo nuestros justísimos deseos.

EL PROBLEMA DE ORDEN PÚBLICO Y DE LA JUSTICIA POPULAR

En la declaración política del Consejo de Aragón se dice:
"Es igualmente su propósito (el del Consejo de Aragón) garantizar la seguridad de todos los antifascistas y luchar contra el impunitismo mediante la creación de los "Tribunales Populares" devolviendo a la colectividad el derecho de juzgar conductas y actuaciones, impidiendo por todos los medios que nadie se crea facultado para tomar resoluciones sobre personas o derechos ajenos."

También dice: "... pero es preciso que se deje en plena libertad al Consejo y a los pueblos para reorganizar la vida civil aragonesa " y aun añade la declaración: "... respetando al pequeño campesino y las actividades individualistas..."

Por otra parte, hay entre la C.N.T. y el FRENTE POPULAR un pacto en virtud del cual el Orden Público había de estar controlado por ambos organismos en igualdad de responsabilidad, armas, mandos y hombres.

Pues bien, habremos de reconocer que ni una cosa ni otra se han cumplido.

El fracaso del Consejo de Aragón en éstos puntos es definitivo. El FRENTE POPULAR no puede en forma alguna seguir responsabilizándose en ésta inactividad que deja en libertad de movimientos a los que un día y otro sostienen la monstruosa racha de saqueos y asesinatos (reiteradamente denunciados por nosotros) que sigue dejando una estela de odio, sangre y lágrimas en nuestra desgraciada tierra.

Es notorio que la gran parte de los saqueados, perseguidos y asesinados han sido, y lo siguen siendo, componentes de las organizaciones del FRENTE POPULAR, por elementos de todos los partidos y por nadie perseguidos ni sancionados con la ejemplaridad que requieren sus vilezas sin nombre.

La colectividad sigue sin "... el derecho de juzgar conductas y actuaciones..." la colectividad sigue siendo vejada, vilipendiada, masacrada por éste bandolerismo de nuevo tipo que es el mejor aliado del fascio, el arma más poderosa y disolvente que el fascismo ha introducido, en cuña, entre nosotros, bandas surgidas del lumpen-proletariat que infecta la guerra y la revolución, con su inmoralidad y el desenfreno bestial que ocultan bajo la máscara de ideales puros y respetabilísimos que en esencia son la negación más rotunda de la contestatura moral de los tales.

Nuestros camaradas de la C.N.T. deben estar tan interesados como nosotros, a que nadie, en nombre de una falsa intransigencia doctrinal

deshonren las banderas de la revolución. Y deshonra es el hecho no permisible por el FRENTE POPULAR, por ejemplo; que se deshonra a compañeros nuestros por estar en contra de "Colectivos" cuya dirección o planteamiento no están conformes, sin que estos compañeros pierdan en nada los citados ensayos; o simplemente por no llevar carnet de nuestras organizaciones, o por mantener dignidad personal, paracidos, elementales derechos de libertad....

Contra este bandolerismo es necesaria la máxima energía en nombre del más elemental instinto revolucionario.

Por salvar hasta la exageración un principio de firmeza en el cumplimiento de pactos y compromisos, por destacar con perfiles visibles, aun para el más miope, nuestra proverbial lealtad, hemos confiado en que los órganos competentes cumplieran sus elementales obligaciones antifascistas y revolucionarias. Desgraciadamente nuestra esperanza ha sido colmadamente burlada.

En lo que respecta a Orden Público, mejor dicho, a la composición de las fuerzas de Orden Público en relación con el solemne compromiso de las fuerzas antifascistas, tampoco es satisfactoria la situación. La C.N.T. declara que nunca se ha opuesto al cumplimiento de tal pacto, pero lo cierto es que ninguna de sus partes ha tenido realidad. No solo no hay igualdad de armas, mandos y hombres, sino que una sola organización monopoliza el Orden Público (?). La sofisticada interpretación que el camarada Joaquín Ascaso, Presidente del Consejo de Aragón y Delegado del Gobierno en todo el territorio aragonés es totalmente insostenible e inaceptable. En virtud de la interpretación del camarada Ascaso los mandos son o serán totalmente cubiertos por compañeros de la C.N.T. y las compañías tendrían menos de la cuarta parte de sus efectivos con elementos del FRENTE POPULAR y no al cinco por ciento que es lo pactado.

Así mismo, en este punto, el FRENTE POPULAR recaba que con urgencia se le haga justicia.

En resumen y concretamente pedimos:

La desaparición de la Consejería de Orden Público (con el fin de obviar la desproporción de fuerzas que se produce con éste hecho en el Consejo de Aragón, proponemos el desglose de una consejería en dos que sería regentada por un camarada de la C.N.T.)

La desaparición de la Delegación General de Orden Público. La desaparición de los Comisariados Provinciales de Orden Público.

En compensación que se creen dos Delegaciones Generales regentadas la una por un compañero de la C.N.T. y por un compañero del FRENTE POPULAR cada una.

Que en mandos, hombres y en todo lo referente a las fuerzas de orden público se cumpla estrictamente el pacto ya citado por el que el cincuenta por ciento pertenecerá al FRENTE POPULAR.

Todo cuanto el FRENTE POPULAR propone respecto a Orden Público, como el resto de las cuestiones, estará supeditado a lo que el Gobierno de la República disponga.

La lealtad insobornable que debe presidir todo pacto nos autoriza a no transigir ni un ápice en la realización de lo expuesto.

APÉNDICE Nº 9

Escrito denuncia de la UGT de la provincia de Zaragoza sobre los «sucesos ocurridos en Moneva»: 24/8/1937. AGCS, PS Barcelona, carpeta 397

SUCESOS OCURRIDOS EN MONEVA (Zaragoza)

El día 21 de abril de 1937, fueron asesinados dos camaradas de la U.G.T.

A los camaradas de la U.G.T. después de sembrar todo cuanto pudieron los han llevado dos meses a trabajar castigados a una Cantera de este término municipal, sin abonarles jornal alguno, amenazándoles continuamente las fuerzas de Carod, Aranda y Castán.

Los camaradas de la U.G.T. recogieron toda la cosecha que abandonaron los fasciosos. Sembraron una dñehesa que tenía el Sindicato en común teniéndolo que abandonar todo por haber tenido que huir del pueblo ante las amenazas continuas. A otros que han ingresado en el Ejército, se les ha requisado todo cuanto tenían.

A las compañeras de Rafael Bueno, José Paracuello y Salvador Gómez, cuando bajaban camino de Caspe para comprar víveres en esta, en vista de que en el pueblo no se les querían vender por no haber ingresado en la colectividad, las detuvieron en Cáceres los ciudadanos Antonio Aranda del pueblo de Segura y un tal Sandalio miliciano de la columna de Carod, del pueblo de Orcajo, haciéndolas regresar al pueblo de Moneva, acompañándolas y a las mujeres y a sus hijos, las amedrantaron con pistola en mano.

Nuestros camaradas fueron desarmados por las fuerzas de Carod, y al que se oponía le amenazaban con fusilarle. Nuestras armas fueron entregadas a los elementos que en el pueblo eran conocidos como derechistas, para que nos vigilaran y obligaran a que trabajáramos.

En aquellos días fueron asesinados nuestros camaradas Benito Duero y Miguel Paracuellos, viejos militantes de la U.G.T.

Se acusa como responsables de estos hechos y otros que no se enumeran por carecer de datos concretos, son los:

Francisco Gracia,
Eusebio Gracia
Juan Lahoz
Pedro Lahoz
Pascual Lahoz
Alberto Lahoz
Santiago Artal
Enrique Guallar
Francisco Carod
Romualdo Carod X
José Carod

Nicolás Lahoz
Federico Artal
Julian Ordoñas
Daniel Ordoñas
Valeriano Ordoñas
Cecilio Artal
Julian Lahoz
Pedro Guallar
José Carod
Domingo Maniesa

*del padre de
Julián de la trilla*

Un camarada recientemente llegado de allí dice que el día 19 de este mes fueron detenidos Antonio Aranda. Que los responsables del pueblo se han ido, abandonando la trilla.

Que el día 21 a primeras horas de la mañana se presentó en la venta del Balenco, Julian Ordoñas armado con una escopeta amenazando a cinco camaradas de la U.G.T. que estaban trillando, pretendiendo además llevarse a Jacinto Lahoz, y al no poderlo conseguir le disparó dos tiros, sin herirlo, ya que consiguió escapar.

Caspe 24 agosto 1937.

APÉNDICE N° 10

Propuesta de incautación de los bienes de Joaquín Continente (Velilla de Ebro), con eufemística mención de su previo fusilamiento, así como de sus «culpas»: 14/9/1937. AHN, CG, leg. 1429 (2), anexo 1/8

A R A G O N

Provincia de Zaragoza

Término Municipal de Velilla de Ebro.

PROPUESTA

La Junta Calificadora Municipal que suscribe, propone que sea incluido en las listas que determina el artículo 2.º del Decreto del Ministerio de Agricultura de fecha 7 de Octubre de 1936, como desafecto al Régimen, y por lo tanto sujeto a expropiación forzosa sin indemnización, de todas las fincas que posee el propietario JOAQUÍN CONTINENTE PUYOLES.

Antecedentes políticos del Interesado y actividades prestadas a pertenecido al partido Gírrroblista, habiendo sido infinidad de años del Somatén, siendo el mayor asento para las masas trabajadoras, por haber desafiado infinidad de veces a los trabajadores que desgraciadamente, se veían obligados a estar bajo su mandato.

Su actuación en los problemas sociales del campo y cumplimiento de las leyes de la República: se a subleado siempre en el incumplimiento de todas aquellas Leyes Ligisladas que pudieran favorecer aquellas sociedades Republicanas, coaccionando a infinidad de personas que pertenecían a las mismas, y desauciandolas, de aquellas vienes miserables que con su sudor se ganaban

Relación con los trabajadores de la tierra: jornaleros, arrendatarios, colonos y sparceros desde el avenimientos de la Republica que sus Colonos querían recoger lo que en justicia les correspondía, a estado siempre inamistado valiendose siempre que le a sido posible para maltratarlos, y perseguirlos.

Declaraciones que hace la Junta y testigos de su actuación: Esta Junta creó que ha sido uno de los mayores berángos, por lo cual desde el tiempo en que se proclamo el moimiento, el pueblo se vio obligado a separarlo, de la umunidad,

Declaración de descargo que hace el propietario:

"D I F U N T O".

Y para su remisión a la Junta Calificadora Provincial, se hace la presente PROPUESTA en Velilla de Ebro a catorce de Septiembre de 1937.

P. A. de la Junta Calificadora

El Secretario,



Si la guerra civil de 1936-1939 continúa despertando agrias polémicas y memorias conflictivas, es en buena medida por la intensidad de la violencia represiva que convulsionó las dos retaguardias y que ha quedado como rasgo definitorio central de la contienda. Y cuando de intensa violencia a ambos lados de la línea del frente se trata, Aragón en general y la provincia de Zaragoza en particular son privilegiados marcos de estudio por cuanto acaso ninguna otra latitud del país se viera tan afectada en términos relativos por esas prácticas represivas. Este trabajo aborda la violencia desencadenada en la «zona republicana» de dicha provincia contra los símbolos y representantes de la sublevación de julio de 1936 y del orden social que ésta trataba de apuntalar –y los revolucionarios derribar y sustituir. Una violencia que, frente a los mitos y tergiversaciones de que siempre ha estado rodeada, debe ser estudiada atendiendo a sus orígenes, protagonistas, etapas, consecuencias y memoria; y atendiendo al concreto marco bélico y político en el que se inscribe: una guerra civil, una insólita fragmentación del poder, una sin par lucha por la configuración del nuevo orden social y, en fin, una revolución.

